

OIGAMOS A GALAN

PRINCIPALES DISCURSOS: 1978-1985

JULIO 1985



DOCUMENTOS
NUEVO LIBERALISMO **8**

OIGAMOS A GALAN

PRINCIPALES DISCURSOS: 1978-1985

Documentos Nuevo Liberalismo 8

JULIO 1985

Documentos Nuevo Liberalismo 8
Julio 1985

OIGAMOS A GALAN
Discursos 1978-1985

Coordinadora del Comité Editorial
GLORIA PACHON DE GALAN

Director Ejecutivo
ALBERTO HERRERA GRISALES

Diseño y carátula
PROCESOS CREATIVOS

Composición:
Marta Gómez de Patiño

Impresión:
EDITORIAL CARRERA 7

Publicación de la FUNDACION
NUEVO LIBERALISMO
PARA UNA COLOMBIA NUEVA

Junta Directiva:
Presidente: Federico Echavarría Olarte
Vicepresidente: Hernando Jaramillo
Revisor Fiscal: Jorge Borda Anzola
Secretario: Eduardo Hernández M.
Tesorera: Beatriz Arango A.

Vocales: Gloria Pachón de Galán, Gloria Parra de
Espinosa, Fernando Sanz Manrique, Jorge Mar-
morek, Rafael Amador, Patricio Samper, Hugo
Restrepo, Juanita Kopp de Sáenz, José Black-
burn, Arturo Motta

Publicidad: Carmen Navarro de Schaefer

Impresión:
Litoformas R.V. Ltda.
282 61 29

Editado y Distribuido por:
FUNDACION NUEVO LIBERALISMO PARA
UNA COLOMBIA NUEVA

Junta Directiva

Presidente: Federico Echavarría Olarte
Vicepresidente: Hernando Jaramillo Upegui
Revisor Fiscal: Jorge Borda Anzola
Secretario: Eduardo Hernández M.
Tesorera: Beatriz Arango A.
Vocales: Gloria Pachón de Galán, Jorge
Marmorek, Rafael Amador, Patricio Samper,
Hugo Restrepo, José Blackburn, Arturo Motta.

Director Ejecutivo
Alberto Herrera Grisales

© FUNDACION LUIS CARLOS GALAN
Segunda Edición
Agosto de 1991
ISBN-958-95372-6-X
Primera Edición
Abril de 1986

Representante de Ventas
Pedro Joaquín López
Tels: 2822280 - 2862038

Fundación Luis Carlos Galán
Dirección: Calle 34 No. 15-77
Tels: 2859574 - 2852108 - 2852201

Licencia Mingobierno No. 00406
del 17 de Febrero de 1986

Tarifa Postal Reducida No. 573

Contenido

A los lectores	4
Agoniza un ciclo histórico	5
Lo primero es Colombia	8
Los diez objetivos	14
La reorganización liberal	26
Llamamiento a la Nación	32
La candidatura presidencial	40
Hacia un nuevo modelo de Sociedad y Estado	43
La lección de los Comuneros	52
El liderazgo moderno	54
La crisis histórica	61
Las prioridades sociales	66
La salud pública	72
Las prioridades económicas	81
La política internacional	87
Crisis económica y orden público	94
Las Fuerzas Armadas	104
La democracia local	113
No más privilegios	120

A los lectores

Durante las intensas jornadas de la campaña política para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1982 "Oigamos a Galán" se convirtió en la consigna de miles y miles de colombianos identificados con el espíritu de renovación del Nuevo Liberalismo, con sus diez puntos fundamentales propuestos a la Nación como programa de gobierno y la meta, más vigente hoy que nunca, de lograr una auténtica democracia en nuestra patria.

Este Documento Número 8 ofrece a los lectores una selección de los discursos de Luis Carlos Galán desde 1978, antes de la fundación del Nuevo Liberalismo, hasta el día de hoy, a través de los cuales se aprecia un pensamiento político claro, referido directamente a los más graves problemas del país y a la preocupación por reivindicar la esencia auténtica del liberalismo.

Temas como la soberanía nacional, la justicia social para los colombianos, la paz, la responsabilidad de las nuevas generaciones ante el reto histórico de nuestro tiempo, y el compromiso ineludible del Nuevo Liberalismo por contribuir a la plena realización de tales ideales, son algunos de los temas enunciados y reiterados en los discursos incluidos en el Documento Número 8.

En esta oportunidad "Oigamos a Galán" significa seguir paso a paso una trayectoria política, un pensamiento ideológico en varios años de lucha y de insistencia en realidades que otros movimientos o partidos tratan tradicionalmente de reducir al ámbito de lo anecdótico o circunstancial.

Dentro de pocas semanas, como culminación de numerosos foros y asambleas regionales celebrados en el último año, el Nuevo Liberalismo presentará al país su plataforma política para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1986. No será ésta fruto de la improvisación o la demagogia y antes por el contrario reflejará tanto el conocimiento de los problemas como la coherencia en las fórmulas propuestas para lograr en Colombia la verdadera democracia, como se planteó en 1981 en el Documento Número 1.

Este Documento Número 8 es el mejor preámbulo del Congreso Nacional del Nuevo Liberalismo y constituye por sí mismo una plataforma política, un programa de gobierno, ampliados a través de los foros regionales, en el Foro Nacional de Paipa y en el documento final elaborado con el concurso de miles de miembros del Nuevo Liberalismo. Ese documento será la propuesta que Luis Carlos Galán y nuestro movimiento presentarán al país para obtener su apoyo en las elecciones de 1986.

La invitación será entonces para toda la Nación: "Oigamos a Galán".

Agoniza un ciclo histórico

Discurso pronunciado por Luis Carlos Galán
el 20 de enero de 1978 en la
Sociedad Económica de Amigos del País.

Los organizadores de la reunión de esta noche, representados por las ilustres personas que me han precedido, en forma excesivamente generosa quisieron darle carácter de homenaje a lo que es sencillamente un acto político. No lo digo por modestia ni en lenguaje convencional. Deseo ser objetivo. Desde mi regreso al país para aceptar la honrosa posición que el doctor Carlos Lleras Restrepo me confiara en el semanario *Nueva Frontera* no he hecho nada verdaderamente digno de un reconocimiento como éste en nuestra comunidad. Simplemente me ocupo de una tarea semejante a la que realizan numerosas personas en Santander y en toda Colombia para conseguir que la Nación elija al mejor gobernante en 1978 y al mismo tiempo el partido liberal se identifique, en forma mayoritaria, con el estilo político, los valores morales, la concepción de la sociedad y los sentimientos patrióticos que caracterizan al doctor Carlos Lleras Restrepo. Estoy cumpliendo con mi deber. Me apasiona hacerlo. No es entonces excepcional mi labor y por eso esta reunión es sencillamente una oportunidad para ratificar nuestra adhesión a los ideales que hemos predicado siempre y con los cuales proseguiremos la lucha en los próximos años.

Una audiencia como la de esta noche, a esta altura de la campaña electoral, no necesita nuevos argumentos ni más explicaciones para entender la trascendencia de la consulta popular del 26 de febrero próximo. La columna vertebral de la democracia colombiana, ciertamente, la constituye el partido liberal. Cuanto en él suceda determinará los caminos que habrá de recorrer la Nación durante la próxima década. En las elecciones vamos a definir qué clase de partido deseamos y por lo mismo qué dimensiones morales, intelectuales y científicas tendrá la política colombiana. Nosotros consideramos que la victoria de nuestra causa y del hombre que la representa es la única vía idónea para buscar la modernización pacífica y plena de nuestra sociedad. En la complejidad de esta hora de crisis e incertidumbre, su conciencia de hombre superior es capaz de unir de nuevo a todos los colombianos hacia verdaderos propósitos colectivos y perdurables.

La Patria ha llegado demasiado cerca del abismo. Creemos que así lo ha comprendido la Nación. A la inteligencia y al sentido de la responsabilidad de los colombianos apelamos desde el primer episodio de nuestro movimiento y no nos sentimos defraudados.

Responsabilidades en Santander

Me he ido a Santander. A mi tierra natal y a la de mis mayores. Desde allá me llaman res-

ponsabilidades que comenzaron hace dos siglos y que generación tras generación los santandereanos tratamos de servir con profundo orgullo por nuestro pueblo y con el interés de asegurar su presencia en las grandes decisiones nacionales. Allí también el liberalismo ha vivido en los últimos tres años una compleja crisis. Un período de transición en el cual, paradójicamente, se han asimilado las consecuencias del Frente Nacional, en un departamento rebelde como ninguno a las instituciones plebiscitarias. Nuestro pueblo ya renunció a esa escaramuza pero no a los ideales que lo movieron a emprenderla y ahora se prepara —debe prepararse—, —es nuestra responsabilidad prepararlo— para reiterar su fe en la justicia social que sigue siendo la inspiración esencial de la rebeldía santandereana. El actual gobierno, presidido por la persona que obtuvo en varias ocasiones el apoyo mayoritario de los santandereanos contra el sistema del Frente Nacional, ha dirigido nuestro departamento como si allí fueran necesarias ahora y todavía las fórmulas de 1958 a 1974, en oposición a las cuales el propio doctor López Michelsen —repito— logró las mayorías en Santander en la década anterior. Nos hizo retrasar un poco el reloj de la historia. Pero todos éstos son capítulos cerrados. Los interpretará la propia historia.

Ha comenzado otra época en la política liberal santandereana. Nos corresponde ahora luchar porque la iniciativa ideológica en el liberalismo no pueda concebirse sin el punto de vista santandereano. Debemos merecer esa posición y esa consideración dentro de nuestro partido siempre que las tesis de modernización social y política en Santander no sean hechos aislados sino convicciones masivamente compartidas que cuenten con la presencia resuelta de los diversos sectores sociales. Casi todos los parlamentarios en nuestro departamento, como en la mayoría de las regiones de Colombia, han tenido poder en estos años, pero rara vez supieron claramente para qué aplicarlo. Algo los intimidó frente a la magnitud de la sociedad contemporánea y no se atrevieron a interpretarla y estudiarla. Se refugiaron en los viejos procedimientos electorales —todavía infortunadamente válidos en algunas pocas regiones— pero desaparecieron de la escena central donde el pueblo quedó solo, sin dirigentes. Llegó entonces la hora de asumir responsabilidades, aun cuando todas las circunstancias pudieran haber parecido inicial-

mente adversas. Allá en las veredas o en los barrios o en las universidades o en las fábricas o en los talleres artesanales o en los sencillos hogares o en los centros creadores de riqueza estaba el mismo pueblo santandereano de siempre, esperando que lo invitaran a defender grandes causas, las únicas que merecen su entusiasmo y por las cuales ha llegado tantas veces a los máximos sacrificios. Fuimos a él y le hablamos de Colombia. Le señalamos los riesgos de estas graves decisiones que se aproximan. Le dijimos que su sentido del honor, su valor personal y civil y su idealismo debían hacerse presentes en estos momentos con poder decisivo. Su respuesta fervorosa y decidida crece día a día y dentro de cinco semanas escasas será perentoria en las urnas, para confiarnos una tarea compleja y ardua de reorganización del liberalismo santandereano.

Fin de un ciclo histórico

La distribución paritaria de mi tiempo entre Santander y las labores en *Nueva Frontera* en Bogotá, durante el último año y medio me ha representado experiencias fundamentales al lado de los compañeros en Santander y los directivos de la Acción Cívica Liberal que en nuestra tierra preside la autoridad patricia de Alejandro Galvis Galvis. Tiene Colombia cuatro dimensiones mentales, culturales, sociales y políticas que se ligan y se necesitan recíprocamente. Son ellas complementarias: la visión central de la capital de la República, la perspectiva del departamento a partir de su principal ciudad, el marco de la provincia con sus pueblos líderes y finalmente la vereda campesina. No es posible entender muchas cosas de la realidad colombiana sin unir esos círculos distintos pero interdependientes. Tampoco cabe, entonces, proponer caminos eficaces a la evolución nacional sin contactos frecuentes y profundos con cada uno de tales escenarios. Quien limite sus elementos de juicio a cualquiera de ellos, corre el riesgo de ser sorprendido. Creo que en la intensidad de esa comunicación está uno de los factores claves del porvenir de Santander y a ello aplicaré todas las energías necesarias. Pero volvamos a la política inmediata.

El ciclo histórico del Frente Nacional después de su importante y fecundo balance en

la transformación de la conciencia de los colombianos se acerca a su fin. El liberalismo sólo puede atender la inmensa responsabilidad que se avecina si se purifica y se despoja de los vicios clientelistas y mezquindades que frustran su capacidad creadora. No es fácil esa purificación. No ha sido fácil y tampoco lo será en las etapas todavía pendientes. Pero es indispensable hacerla y no nos deben temblar ni la voz ni la pluma para ello. No nos han temblado y no por mérito intrínseco nuestro sino porque sabemos que la Nación no sólo nos acompaña y respalda sino que confía en que lograremos corresponder a sus espe-

ranzas. Todo esto multiplica mis responsabilidades. Nunca las he rehuido ni las rehuiré. Tal vez me llegaron demasiado pronto sin haberlas buscado antes en forma premeditada. Ahora sí las procuré intencionalmente y si el pueblo de Santander me confía su honrosa representación, las banderas que me sean entregadas las llevaré a la victoria. Nunca sufrirán traición alguna. Ni mis actos serán motivo de vergüenza para mi pueblo ni mi partido. Como liberal y como santandereano, jamás olvidaré los compromisos que hemos ratificado esta noche.



Los músicos son importantes... Pero serenata sin NECTAR... Mmmm...

Levante la Copa!



Lo primero es Colombia

Palabras de Luis Carlos Galán en el coctel Pro-casa Liberal de Bogotá el 30 de noviembre de 1979 en la Sociedad de Amigos del País.

En el presente año, por diversas circunstancias, he tenido ocasión de ir a un poco más de diez universidades en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Armenia e Ibagué a cambiar ideas sobre cuatro temas distintos pero a mi modo de ver bastante relacionados y complementarios: los derechos humanos en Colombia, la reforma de las universidades, el derecho de información en nuestro país y el futuro del liberalismo. Ha sido ésta una manera de dialogar con las nuevas generaciones y de conocer a centenares de profesores universitarios y profesionales jóvenes. En una de tales ocasiones fui a la Universidad de los Andes. Al término de la conferencia y del foro posterior, se me acercó quien yo creí, inicialmente, un alumno de alguna de las facultades de esa importante institución. Se limitó a decirme que deseaba participar en la tarea que diversas circunstancias me han impuesto en la política nacional. Al otro día supe que se trataba de un distinguido profesor de la Facultad de Administración y luego, durante todos estos meses, he gozado de su inteligente, responsable y eficaz colaboración para preparar varias intervenciones en el Congreso y en múltiples foros, examinar proyectos de ley y discutir acerca de innumerables cuestiones de interés nacional. Hasta aquel día el doctor Eduardo

Robayo no había participado en la política, desde entonces, prácticamente no transcurre una sola semana en la cual a sus labores profesionales y docentes no agregue varias horas dedicadas a pensar en Colombia y a propagar una serie de ideas sobre los caminos idóneos para orientarla e interpretarla en estos momentos de verdadera encrucijada colectiva. Casos similares al del profesor Robayo se están multiplicando todos los días en las más diversas ciudades del país donde poco a poco también he tenido ocasión de entrar en contacto con los múltiples sectores políticos, económicos, técnicos y profesionales que integran la nueva sociedad. Es su generosidad, su desinterés y la forma responsable y seria como han obrado en estos meses él y otros grandes amigos en Bogotá y en las doce capitales de departamento recorridas en este año, lo que me ha confirmado que tenemos sobre nosotros la responsabilidad de crear un cauce a centenares de miles, a millones de compatriotas que reclaman una nueva manera de hacer política porque los antiguos caminos desaparecieron y se volvieron intran-sitables como consecuencia del derrumbe ideológico y moral que repentinamente cerró las vías tradicionales. Por eso me complace que haya sido usted, doctor Robayo, el primer orador de esta noche y que luego, a sus expresiones sólidas, a su diagnóstico certero elaborado en nombre de los amigos que organizaron esta espléndida reunión, hayan seguido las palabras de un ilustre veterano, el Senador Alvaro García Herrera cuya voz se

oyó aquí como se escucha siempre en el Congreso. La voz de una conciencia honrada y llena de carácter que así como hace cerca de treinta años fué a la cárcel porque proclamaba sus convicciones democráticas, hoy no teme denunciar las inconsecuencias de quienes dirigen transitoriamente al liberalismo. El joven profesor se suma al avezado maestro para decirnos esta noche que aquí se reúnen varias generaciones y un sólo espíritu: el de quienes tenemos nostalgia de patria y, por lo mismo, reclamamos el derecho a que la vida de 27 millones de colombianos no se frustre porque buena parte de sus clases dirigentes se niega a interpretar a la nueva Nación y le habla y la gobierna como si la historia de Colombia se hubiese detenido.

Vamos a hablar esta noche de política. Como nosotros la entendemos y como es preciso que se discuta y se haga la política en nuestro país. Hablar de política es analizar cuatro temas fundamentales: Colombia, el Estado Colombiano, la situación de los partidos y, como consecuencia de ello, la naturaleza de la tarea que debemos acometer para dar nuestro testimonio y cumplir nuestra misión.

Colombia

Lo primero es Colombia. Porque nada serio se puede hacer y decir en política si no se proclama una concepción sobre Colombia. ¿Cómo entendemos a Colombia? ¿Cómo quisiéramos que fuese? ¿Cómo interpretamos su evolución para bien de sus propios habitantes y respecto de una América Latina donde ha influido con mayor profundidad de lo que imaginan los observadores superficiales y con menores alcances de lo que quisiéramos quienes conocemos sus potenciales humanos y físicos.

Ubicada en un punto estratégico de la geografía americana, Colombia fue la generadora de la libertad de cinco repúblicas cuando ella misma nacía a la vida independiente. Su propio alumbramiento le impuso una tarea perenne. Ser un escenario de la libertad. Un territorio donde se construye una sociedad democrática y donde los recursos se explotan para que la Nación crezca en lo físico y en lo espiritual. No somos y no podemos ser un pueblo

que ambicione poder para oprimir a otros pueblos. Pero tenemos que ser un pueblo dueño de su destino capaz de ejercer un liderazgo en América Latina. Nuestra Nación puede integrar como ninguna otra todas las vertientes raciales y culturales que estaban en América o llegaron a ella durante los últimos cinco siglos. Somos un pueblo triétnico y nuestra fuerza cultural está en ese mestizaje que como todo mestizaje primero es híbrido hasta que madura la nueva identidad. No nos sucede, como sí les ocurre a otros que en la Nación predomine una raza y con ella una prolongada experiencia cultural relativamente ajena o que en nuestro territorio coexistan dos razas difíciles de reconciliar. En el hombre colombiano están América y Asia, Europa y África y aun cuando durante cierto tiempo esas combinaciones de sangre hayan impedido una expresión colectiva, cuando madure el proceso —y la hora ya no está lejana— seremos realmente una nueva expresión cultural capaz de aproximarse sin dificultad al diálogo con todos los pueblos de la tierra.

El mensaje de libertad que marcó nuestro nacimiento con el preámbulo insurgente de los comuneros —hace dos siglos— está vivo. Y mientras más se observa esta América convulsionada que acaba de recibir el mensaje de dignidad del pueblo de Nicaragua y la rebelión civilista de los bolivianos, más claro resulta que vivimos una hora de efervescencia en la cual América Latina, en los Andes, en el Amazonas, en la Cuenca del Plata y en el Caribe, se apronta para dar un salto cualitativo hacia la democracia y la libertad. En ese proceso Colombia debe estar a la vanguardia y así como hace siglo y medio unos ejércitos improvisados fueron constituidos con base en los labriegos que Bolívar convirtió en guerreros heroicos, ahora debemos preparar legiones de milicianos de la ciencia y la cultura para que América Latina intervenga en el diálogo internacional del siglo XXI no como ese subcontinente subalterno y sumiso que todos creen condenado a depender de las grandes potencias, sino como un conjunto de países que, sin aislarse en esta hora de interrelaciones universales, aporte, además de sus extraordinarios recursos naturales, un tipo de organización social digno del tercer milenio que nos espera a la vuelta de pocos años.

Como es apenas obvio no tendremos ningún derecho a proponer un camino a los de-

más pueblos latinoamericanos mientras, en nuestra propia casa no hayamos demostrado la sinceridad de nuestras convicciones democráticas y de los ideales que proclamamos. Para cambiar a los demás debemos ser capaces de cambiarnos a nosotros mismos. La nueva lucha por la independencia —porque de eso se trata— no será posible mientras no alcancemos la unidad nacional. Colombia está desintegrada en lo físico, en lo cultural, lo social y lo moral. Ponerle fin al sectarismo, tarea sensata e indispensable que se propuso el Frente Nacional, durante los últimos veinte años, no fue suficiente. Porque si bien alcanzamos una relativa paz política pactada por los protagonistas de las luchas de mediados del siglo, no logramos la paz social ni la económica. Las desigualdades han crecido y una Nación cada día más consciente de sus derechos exige que la organización social asegure un mínimo de igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El problema político en los días de la violencia se alimentó de la injusta realidad social y económica, pero, con escasas excepciones, los dirigentes nacionales creyeron y creen que bastaba solucionar la cuestión política mediante la paridad y la milimetría burocráticas para lograr la paz. Naturalmente se han equivocado y problemas que habían podido tener otro manejo, si hubiera existido una sincera voluntad de alcanzar la justicia social, se acumularon y se multiplicaron hasta crear profundas divisiones entre los colombianos ya no por un color político sino por una realidad social que acentúa los privilegios de unos y agudiza la miseria y la angustia de la mayoría.

Colombia no realizará su misión histórica mientras no resuelva esas graves contradicciones internas que le impiden concentrarse en las tareas fundamentales y atomizan un pueblo capaz como el nuestro, lleno de cualidades, pero disperso por la ausencia de una interpretación completa y profunda de su destino.

Nuestra primera tarea —el primer escalón en ese proceso— es la unidad de Colombia en todos los sentidos. Para alcanzarla tenemos que hacer un inventario de cuanto divide a los colombianos y un inventario —también— de los instrumentos que podemos utilizar para la peregrinación hacia la unidad nacional. Esto nos lleva al segundo tema que quiero tratar

esta noche: me refiero al papel del Estado colombiano, es decir, a lo que se supone es la suma de la asociación de todos los colombianos y la expresión de nuestra soberanía. Nuestro Estado vive una crisis que afecta todo su ser, condiciona sus objetivos y desorganiza sus recursos. Sus responsabilidades están cambiando todos los días pero no sólo ya no atiende bien las nuevas tareas que tiene a su cargo sino que cada día cumple peor sus antiguas y clásicas obligaciones.

Nuevas responsabilidades del Estado

La libertad, el orden, la justicia y la soberanía —por ejemplo— eran las principales responsabilidades del Estado cuando lo crearon los progenitores de nuestra República, de acuerdo con los valores políticos de su época. Sin embargo, cada día somos menos libres en la Colombia contemporánea. Cada día tenemos un orden más artificial que no nace del respeto recíproco de los derechos sino de la simple imposición por la fuerza de una autoridad que parece incapaz de comprender al pueblo que gobierna. Cada día la justicia se confía menos a las instituciones que deben impartirla y más a las arbitrarias decisiones individuales de quienes se hacen justicia por sí mismos, gracias a la fuerza física o al poder del dinero. Cada día nuestra nación es menos soberana y su destino está más sometido a lo que deciden otros, ante cuyos ojos, no somos una República, una Patria, sino un mercado para conquistar y explotar.

En este siglo la Constitución le confió a las diversas instituciones estatales innumerables tareas. Casi todas ellas están pendientes. El Estado entre nosotros debe producir bienes y servicios; crear empleo; redistribuir el ingreso entre los colombianos; regular la economía; ejecutar un presupuesto nacional que ya superó los 300.000 millones de pesos al año; dirigir el proceso de urbanización; tomar decisiones sobre la televisión y la radio que influyen fundamentalmente en el derecho de información de nuestro pueblo; en fin, tiene las atribuciones para intervenir en casi todos los aspectos de nuestra existencia. Es el Leviatán que nos anunciaron hace más de tres siglos los pensadores que encabezaba Thomas Hobbes. Pero es un gigante omnipotente en sus atribuciones e impotente ante la realidad.

Se supone que es un Estado concebido de acuerdo con los principios democráticos, o sea, que en él existe un equilibrio entre las ramas del poder público para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo, del Congreso o de la rama jurisdiccional. Sin embargo, en las actuales fórmulas reales de gobierno, en Colombia los miembros del Congreso han renunciado a sus deberes y en vez de ser los personeros de la nación, se han convertido en los dóciles subalternos del Presidente de la República para aprobar reformas constitucionales en las cuales no creen y tramitan un presupuesto nacional que no se estudia pues la lucha por los auxilios electorales no deja tiempo para atender lo que fue la primera obligación histórica del Parlamento.

Nuestro régimen Presidencial está en crisis. Se ha concentrado en el Primer Mandatario tal cantidad de poderes nominales que hasta la democracia formal tiende a desaparecer. El Congreso de hoy no legisla, ni fiscaliza, ni delibera. Los congresistas de ahora obedecen. La descentralización administrativa no ha pasado de ser un estribillo con el cual se guardan las apariencias mientras se acumula el malestar en las regiones. Hemos confundido la unidad de la Nación con la concentración de recursos y poderes en el Presidente de la República y cuando en la Jefatura del Estado no existe una conciencia orientada por un concepto claro sobre el destino de Colombia, el gobierno mismo se desintegra. Cada ministro trabaja por su cuenta en su parcela burocrática y cada gobernador alimenta las porciones clientelistas que debe sostener para que se mantenga la ficción de este Estado colombiano que no logra pasar de las formalidades democráticas. Es decir, en nuestro caso, las elecciones prefabricadas y manipuladas y la información masiva condicionada por los poderes centrales.

Esta seudodemocracia se agota día tras día. Falta poco para que queden en evidencia los poderes reales internos y externos que la controlan e instrumentalizan. Ninguno de ellos generado por la voluntad popular ni sometido a su escrutinio.

Mientras tanto, la evolución mundial nos presenta poderes nuevos y decisivos. La tecnología y las ciencias de la productividad han creado las complejas organizaciones informativas y financieras de las empresas transnacionales, en las cuales se expresa también —a su modo— el nacimiento de la conciencia plane-

taria. Nuestro Estado, nuestro gobierno, es ahora, fuera del responsable de las tradicionales funciones, el encargado de negociar en nombre de todos nosotros con las transnacionales para adquirir las tecnologías que ellas poseen y convenir las condiciones financieras en que nos proporcionarán sus productos. En la cuestión energética, en las comunicaciones, en los servicios de salud, en el sistema vial y de transporte, en la industria y en el comercio, en la organización financiera; en fin, en todas partes, aparecen las transnacionales. Su presencia es buena y conveniente, porque constituyen un instrumento obvio en la internacionalización del mundo. Pero, ellas van hasta donde los gobiernos las dejan llegar. Si no reconstruimos el Estado, si no lo transformamos para que adquiera la capacidad de representarnos a todos los colombianos al negociar con ellas las condiciones de su acceso a nuestro país, lo poco que tenemos de industria nacional desaparecerá sin protección eficaz y responsable y nos convertiremos todos en servidores directos e indirectos de intereses no colombianos. Habrá tal vez apariencias de la soberanía pero no seremos otra cosa que una nación satélite. Un pueblo que obedece y sirve a quienes, en otros países y en otros continentes, deciden los factores reales de nuestra existencia.

Hace pocos días en un escenario de las Naciones Unidas decía un agudo observador: falta un interlocutor en el diálogo entre los seres humanos. Sabemos muy bien quiénes hablan y cómo, por los seres vivos. Sabemos, además, que los muertos nos comunican su pensamiento a través de la religión y la educación. Pero, ¿quién habla por las generaciones futuras? ¿Quién representa a los hombres del próximo siglo que heredarán un planeta desfigurado por lo que nosotros hagamos y saqueado por el uso que le demos a los recursos no renovables? Hasta hace pocos años esta reflexión podía parecer humorística. Hoy no. Vivimos un siglo en el cual hemos adquirido conciencia de lo que sucedió en varios milenios del pasado e inclusive de muchos millones de años en el proceso de evolución de la vida en la tierra. Pero al mismo tiempo poco a poco la conciencia del futuro crece en nosotros. A veces ciertos hechos nos indican que el futuro ya comenzó y el inmediato porvenir en el mundo no puede ser más complejo e incierto. A nivel internacional, todos sabemos que nos esperan las peores horas de la crisis energética y sabemos también que están cambiando los equilibrios del poder en el planeta. Inevitablemente el maremoto mundial llegará a nuestras costas y

el golpe de sus terribles oleadas puede generarnos explosivas situaciones sociales y políticas capaces de precipitarnos en el totalitarismo. En los escenarios locales también surgen amenazantes cúmulos nimbus. El subempleo urbano crece en la medida en que no surge la estrategia que concilie al capital, al trabajo y al Estado. Y esa estrategia no se configurará mientras las voces políticas no se inspiren en el bien común y los colombianos no reconstruyamos al Estado convertido en simple despojo de las clientelas y todos los intereses cómplices de su acción. Después de varias décadas de esfuerzos para crear un sistema de seguridad social, el clientelismo ha destruido lo poco que existía. La inflación sigue derrotando el optimismo del señor Ministro de Hacienda. Las Fuerzas Armadas tienden a llenar el vacío que les deja una clase política profesional oportunista, temerosa e insegura para la cual lo único que importa es refugiarse en su ghetto y creen irresponsablemente que así es como se dirige un Estado moderno. Parece que todo nos llevara a un abismo y que en cualquier momento fuéramos a caer en territorio totalitario o por lo menos no vamos a salir de esta arena movediza generada por el estatuto de seguridad y que movió al Maestro Darío Echandía a decirnos que vivimos en una dictadura militar donde todavía se guardan las apariencias y el Presidente de la República, según las palabras del Maestro, tiene a su cargo funciones subalternas.

Nuestro papel en la Nación de hoy

Por todo esto nos hemos rebelado y consciente, deliberada y firmemente escogimos nuestro propio camino para proponérselo a todos los demócratas colombianos. Con los demás liberales independientes, con los promotores de la Unión Liberal Popular, los amigos de la izquierda democrática y los conservadores no comprometidos con el actual gobierno. No estamos en el desierto como piensan los políticos profesionales que le sucede a quien prescinde del botín burocrático o de la parcela presupuestal. Cuando vimos las decisiones electorales del año pasado nos fuimos a buscar a la Nación donde ya no la buscan los partidos que se suponen los responsables de la tarea de recoger y expresar las principales aspiraciones de la sociedad civil. Nos fuimos a las fábricas grandes, medianas y pequeñas. A los talleres y a las cooperativas. A las parcelas del labrador en el minifundio. A las casas de inquilinato donde sobrevive la angustia de los humildes. A las universidades. A las reuniones de los gremios y las asociaciones profe-

sionales. A los campos deportivos. A los barrios populares y las veredas donde los sacerdotes inspirados por el nuevo espíritu de Puebla quieren trabajar por sus valores religiosos aplicados a un mundo concreto. A los hogares de los transportadores y a las carreteras. A los hospitales y a los colegios. Hemos escuchado al capitalista y al obrero. Al profesional y al artesano. Al ganadero, al avicultor, al comerciante y al jornalero. Al periodista y al político. Al poeta, al pintor y al artista. A la mujer, al anciano y al joven. A todos los hemos querido oír en búsqueda de las ideas y los valores capaces de unificar a los colombianos.

Y aquí estamos de retorno después de este recorrido que repetiremos constantemente porque los protagonistas sociales no son únicamente los políticos. En esta sociedad que empezará a vivir dentro de cuatro semanas las insospechables evoluciones y revoluciones de la década de los ochenta, la escolarización es mayor y la conciencia del pueblo sobre sus propios derechos crece hora tras hora. Los partidos políticos sin excepción, y no me refiero solo al liberalismo y al conservatismo, sino a todos los demás, han sido sorprendidos por esta nueva sociedad y como no saben cómo interpretarla ni guiarla se han refugiado en el clientelismo o en la radicalización política. El clientelismo que denunciamos y denunciaremos sin contemplaciones no es tanto la causa de muchos problemas como la confesión implícita de la impotencia de una clase política para examinar la realidad contemporánea con la Nación contemporánea. No tienen ni las ideas ni el lenguaje para expresarse en esta época. De allí que su primera tentación sea la de revivir pasiones sectarias y, luego, la de comprar al ciudadano a quien no pueden persuadir lealmente o despreciar al abstencionista a quien no logran convencer.

Así llegamos al tercer tema de esta noche. El eclipse es total para los partidos y en el caso del liberalismo, la oscuridad es mayor en la medida en que fue más grande el resplandor de las ideas que movilizó durante tantos años. En el Gobierno de derecha que nos rige, los que pretenden hablar como liberales no tienen voluntad creativa. Vastos sectores en todas las capitales de departamento, a pesar de sus diversos orígenes partidistas, hoy han llegado a la madurez necesaria para no declararse irremediamente comprometidos con las opciones tradicionales. Los criterios y los valores de la generación que hizo alguna parte de sus estudios durante el Frente Nacional son total-

mente distintos de los que se acostumbra manejar en la política rutinaria. Cada vez más Colombia exige otra manera de hacer política. Otra forma convocar a la Nación a discutir sus grandes asuntos. Otros programas, otras ideas, otras plataformas, pero, sobre todo, otro espíritu.

Porque en Colombia han obrado en estos 160 años de independencia dos espíritus que se necesitan recíprocamente pero no se pueden confundir. El de los que quieren conservar la sociedad y se fundan en la tradición para reclamar disciplina y calma. El de los que deseamos transformar la sociedad y para lograr las innovaciones, proponemos la rebelión y la inconformidad. Papini decía que es cosa de niños ponerse a discutir cuál es el primero y el más importante. "Se puede criticar y renovar lo que ya existe; pero todo orden, toda tradición, no son otra cosa que descubrimientos y rebeliones coaguladas, hechas hielo. Sin tradición se perderían las conquistas de la revolución; pero, sin revolución, la tradición conduciría al sueño perpetuo y a la feliz tranquilidad de la muerte. "Hasta aquí Papini.

La prolongación abusiva del Frente Nacional nos condujo a un limbo mental y al infierno de la destrucción de toda ética en política. Entre nosotros, las instituciones cerraron los caminos para el instinto del cambio y yo no creo que los partidarios del instinto de conservación se sientan satisfechos al ver a su propia colectividad asfixiada por la misma farsa. Porque algo les dice que una cosa es la tradición y otra muy distinta el anquilosamiento. Y es eso lo que nos ha movido a formular el llamamiento al cual ustedes han dado generosa respuesta esta noche. Queremos consagrarnos a una tarea de información y educación políticas adicional a la que ya estamos cumpliendo con diversos instrumentos. Queremos promover una mentalidad crítica en todos los sectores de la Nación —liberales, conservadores o socialistas— porque no predicamos un nuevo catecismo para generar un fanatismo más. Pensamos que liberar realmente al hombre es despertar en su conciencia esa mente analítica que recibe y entrega ideas simultáneamente. Somos revolucionarios pero nuestra revolución no es la de la violencia anárquica que pretende legitimarse con mil razones sino la revolución en las conciencias. No hay nada más revolucionario que cambiar los sentimientos humanos y el contenido de los cerebros, en las conciencias. Es allá donde queremos y de-

bemos llegar para unir a Colombia; es eso lo que necesitamos lograr para redimirla. Para nosotros éstos deben ser los criterios liberales necesarios en la renovación política del país, los mismos que nos mueven a respetar a quienes no piensan como nosotros y permanecen en otras áreas políticas de buena fe, es decir, siempre que nadie haya comprado su conciencia.

Nuestra tarea será prolongada y constante. No la reducimos a la conquista del poder, por el poder mismo, para quedar convertidos en esclavos del propio poder. Menos la vamos a reducir a un pleito de curules. Del mismo modo que hace tres meses creamos en Bucaramanga una Casa Liberal para estos propósitos, estableceremos en Bogotá una Casa Liberal donde organizaremos cursos de capacitación política, seminarios y debates sobre los temas de interés público. Les propondremos a las demás ciudades tareas y procedimientos similares con la imaginación necesaria para mejorar los sistemas de comunicación y proselitismo nacional, pero no basta saber qué es lo que sucede. Muchos colombianos lo saben. Es preciso tomar la decisión de actuar y emprender la marcha y llegar hasta el final. Quienes se sienten impotentes bien pueden permanecer al margen, quienes entienden la situación y están decididos a cambiarla: bienvenidos.

Nos inspiran las ideas y el ejemplo de los grandes protagonistas de la vida colombiana. Aquellos hombres que se sintieron responsables de la antorcha encendida por los mártires de la revolución comunera. El fuego que a lo largo de las últimas seis generaciones quienes sintieron a Colombia en lo íntimo de su alma, no dejaron apagar. Ese fuego era el de la patria alimentada por tantos corazones que en ella han creído. Y esa antorcha está aquí presente, porque nosotros tampoco lo dejaremos extinguir.

En esta casa reconstruida por la voluntad creativa de uno de los hombres que más ha defendido ese fuego sagrado, el doctor Carlos Lleras Restrepo, vivió algún tiempo Francisco de Paula Santander, el organizador civil de la República y la figura máxima de nuestra nacionalidad. En nombre de todos los presentes invoco su memoria y su espíritu para que nos asista en lo que queremos hacer: recuperar la Patria desintegrada y rescatarle a Colombia un camino digno del destino que le señaló su nacimiento histórico como pueblo generador de justicia, dignidad y libertad.

Los diez objetivos

**Intervención de Luis Carlos Galán en la
Primera Convocatoria Nacional del
Nuevo Liberalismo el 29 de abril de 1980 en
el Hotel tequendama**

Señoras y Señores:

Quiero ante todo expresarles mis sentimientos de gratitud por su bondad conmigo, por la confianza que han puesto en mí y por su propósito de participar en las difíciles pero fundamentales tareas que nos hemos propuesto cumplir en bien de la Nación.

Esta noche tenemos múltiples razones para reunirnos. Si bien es justo que celebremos con legítimo orgullo los resultados electorales del 9 de marzo, en los cuales nuestras tesis obtuvieron un significativo respaldo de los sectores liberales e independientes de la capital de la República y los municipios de Santander, lo importante hoy es examinar la situación nacional definir los objetivos y los procedimientos del Nuevo Liberalismo cuyas responsabilidades se multiplican hora tras hora.

Tal como lo hemos advertido desde hace algunos años y como lo dijimos durante toda la campaña electoral. Colombia ha llegado a una encrucijada. Hacer en estos momentos un gran examen de la Nación equivale a reali-

zar un estudio de los diversos caminos que se presentan ante los colombianos, uno de los cuales deberá ser escogido por el país en el curso de los próximos años. Naturalmente, para definir bien el rumbo que le aconsejamos a la Nación, es necesario establecer el lugar donde se halla la República y los peligros que la amenazan.

¿Dónde estamos?

Desde hace 22 años y medio, el pueblo colombiano eligió la ruta del Frente Nacional. Lo hizo con dos propósitos: restablecer las instituciones democráticas y realizar una profunda transformación económica y social de los sectores más pobres y desamparados de la población. Se convino, entonces, que habría coaliciones obligatorias entre los dos partidos tradicionales y se le aseguró a la Nación que estas fórmulas políticas serían transitorias.

No han sido fáciles las jornadas cumplidas desde entonces. En 1957 la Nación estaba maltrecha y prácticamente desintegrada. Los odios partidistas agotaban las energías colectivas y en buena parte del territorio imperaban la violencia política y el bandolerismo. Es indudable que el Frente Nacional permitió superar esos niveles de barbarie, sin embargo,

buena parte de sus objetivos no se han cumplido si bien ya estamos próximos a completar un cuarto de siglo dentro del marco histórico frentenacionalista. Vivimos en una democracia restringida donde se limita la participación del pueblo en el manejo de su destino. No hemos logrado superar el estado de sitio crónico.

El sistema electoral tiene múltiples deficiencias. La administración pública no es neutral en las elecciones y los partidos se hallan aprisionados por los sistemas clientelistas, por lo cual han perdido capacidad para debatir y solucionar los problemas nacionales. Las reformas sociales del Frente Nacional, a pesar de los progresos logrados en educación, salud y vivienda, no se llevaron a término. Tenemos un sistema social de vida injusto y en Colombia numerosos compatriotas consideran un privilegio tener oportunidad de comer, de trabajar y de educarse. En la práctica el sistema político no acepta el derecho de la oposición constitucional a existir y para ello apela al parágrafo del artículo 120, al monopolio político de la televisión y a la intervención abusiva del Presidente de la República, los ministros, los gobernadores y los alcaldes en las campañas electorales.

Al cabo de casi 25 años seguimos en las fórmulas de transición hacia la democracia sin restricciones, la cual, por estos caminos se ha vuelto inalcanzable. La Nación está paralizada por el escepticismo y en este momento el descrédito de los dirigentes políticos es alarmante. No se cree en su lealtad con la Nación, porque los ejemplos de servilismo e incondicionalidad con el gobierno omnipotente se han vuelto cosa cotidiana. De buena fe y con inmenso patriotismo algunos de nuestros principales líderes han luchado por el cumplimiento de los ideales del Frente Nacional. Nadie podría negar que Carlos Lleras Restrepo durante toda su vida, especialmente en estos 25 años, ha sido rigurosamente leal con la Nación y que Alberto Lleras Camargo ha intervenido siempre en defensa de los objetivos proclamados en 1957 cuando cayó la dictadura militar, pero, no todo dependía de ellos pues el sistema de coaliciones obligatorias impuso restricciones e instancias que conspiraron siempre contra las metas frentenacionalistas.

Paradójicamente, las dos últimas décadas han significado importantes progresos materiales, sólo que éstos han sido más el fruto

de las innovaciones científicas y tecnológicas contemporáneas y menos el resultado de un sistema político, económico y social verdaderamente democrático. La ciencia es la que ha producido el nuevo y prodigioso avance material de algunos sectores de nuestro pueblo. Una ciencia importada, con escasos ingredientes nacionales, pero que ya está aquí y seguirá llegando. Desde este punto de vista ningún período en la historia puede compararse con los últimos 25 años. Es tal el ritmo de los cambios generados por esas transferencias científicas y tecnológicas que el pasado ya no nos capacita ni a un confusamente para medir o suponer el porvenir. La sociedad real está cambiando aceleradamente, sin que la sociedad política logre evolucionar a un ritmo comparable. En medio de este desconcierto, la inflación crónica y la economía clandestina han generado oportunidades de especulación que sólo favorecen a determinados sectores capaces de aprovecharlas, ante esto, la frustración y la inconformidad crecen en las masas y ya comienzan a multiplicarse los signos de desesperación.

¿Qué ha propuesto y qué ha hecho el Gobierno?

En la presente encrucijada colombiana el primer camino que debemos analizar es el que ha propuesto el actual gobierno. Cuando faltan pocos días para llegar a los 21 meses del actual mandato político, de los cuales el gobierno ha perdido cerca de la mitad por diversas circunstancias, tenemos un balance que no ofrece mayores esperanzas. El gobierno del Presidente Turbay Ayala ha extinguido con la burocratización y el clientelismo el escaso vigor ideológico que les quedaba a los partidos políticos. No hay verdadera libertad política en estos momentos y el estatuto de seguridad, dictado con el ánimo de volver permanente el estado de sitio, creó en el pueblo colombiano un mayor recelo sobre la validez democrática de las fórmulas políticas vigentes. La violación de los derechos humanos y las torturas han desacreditado todavía más el camino propuesto por el actual gobierno. A pesar de todo lo que se diga desde los micrófonos oficiales contra el informe de Amnistía Internacional, la Nación sabe que ni siquiera los crímenes cometidos por los grupos extremistas descargan en modo alguno a un gobierno constitucional de sus obligaciones de humanidad, ni de sus deberes de mandatarios civilizados.

la situación actual de la sociedad apelan a las vías de hecho y conducen al escenario militar lo que en una democracia debe ser definido y debatido en los escenarios políticos.

La opción revolucionaria

El segundo camino es el que proponen los grupos revolucionarios. Es imposible identificar un solo rumbo en esta clase de alternativas pues el M-19, las FARC y las demás siglas de las extremas tienen puntos de vista distintos y hasta contradictorios. Sin embargo, ellos consideran que esta sociedad no se transforma si antes no se logra un relevo violento en los grandes centros de poder para lo cual es necesario multiplicar los frentes guerrilleros en las zonas urbanas y rurales. Buscan destruir física y psicológicamente al ejército e imponer en Colombia una dictadura de izquierda para desencadenar un proceso revolucionario que lógicamente implicaría la confiscación por el Estado de los bienes de producción y la planeación de la vida de los ciudadanos por el gobierno. Todo ello a cambio de una organización social que, según ellos, sí ofrecería educación, salud y empleo lo cual nadie puede garantizarlo. En la opción revolucionaria tampoco habría derecho legítimo a oponerse al gobierno, a vigilar sus actos y a criticarlo. La información sería monopolizada por el Estado y, naturalmente, todo esto conduciría a determinados alinderamientos en la política internacional.

Los liberales no podemos aceptar estos caminos radicales porque implicarían la renuncia a principios fundamentales por los cuales han luchado cinco o seis generaciones en Colombia. Tampoco creemos que esa vía extremista sea posible en nuestro país. En Colombia no existen las condiciones adecuadas para la revolución e insistir en ello significa malgastar energías que pueden ser muy importantes para lograr cambios económicos y sociales por otros caminos. La verdad salta a la vista. Los colombianos estamos obligados a buscar otro rumbo y para ello es indispensable obrar dentro de contextos reales: reconocer que el gobierno es impotente para acabar con la subversión y la subversión es incapaz de derrocar al gobierno. La impotencia del gobierno no proviene de la mayor o menor habilidad de sus cuerpos policivos sino de una situación social

y económica que lo desborda sin que el gobierno tenga una estrategia clara y eficaz para solucionarla ni en vastos sectores de la población exista confianza sobre la voluntad sincera del gobierno de afrontar la cuestión social.

Nuestro camino es la verdadera democracia

No tenemos otra posibilidad los liberales que la de insistir en la construcción de una verdadera democracia política, social y económica. No se trata de un objetivo nuevo, pero sí de una voluntad nueva y auténtica de realizarlo. Colombia no quiere ni la dictadura de derecha ni la de izquierda. No somos una Nación que acepte gobiernos totalitarios y cualquier salida racional es preciso buscarla con el consentimiento de todos los colombianos. Por eso propuse hace un mes, el 31 de marzo, que los grupos guerrilleros y las organizaciones paramilitares entregaran las armas. Lógicamente ello sólo podrá ocurrir con una amnistía condicional y con un entendimiento mínimo sobre la autenticidad y la eficiencia de las instituciones democráticas. No es fácil que esta clase de ideas prospere, pero tampoco es posible descartarlas a priori. Cabe esperar que las palabras del Presidente Turbay el domingo 27 de abril, en un discurso afortunadamente despojado de ingenuos triunfalismos y prepotencias, busque propósitos similares y que cuando el Primer Mandatario invita a los grupos subversivos a entregar las armas tenga en mente nuevas sugerencias e ideas complementarias.

En esta encrucijada nacional no pretendemos ser los dueños de la verdad aun cuando si estamos resueltos a consagrar todas nuestras energías a la realización de nuestros ideales. Reconocemos buena fe y credibilidad a muchos sectores políticos y sociales cuya presencia en los procesos de los próximos años será indispensable. Queremos contribuir a las reflexiones colectivas con una clasificación de nuestros objetivos, no con el ánimo de hacer una lista exhaustiva de nuestras preocupaciones y criterios sino con el deseo de señalar los puntos que para nosotros tienen especial trascendencia. Durante los próximos años, en seminarios y reuniones de trabajo a escala nacional, seguramente profundizaremos en el estudio de estas cuestiones. Deseamos hoy defi-

nir nuestro itinerario y explicar ante nuestros amigos y ante la Nación cuál es nuestra visión de Colombia, cuáles son nuestros instrumentos de trabajo y cuál es nuestra manera de hacer política. No creemos que necesariamente una cosa esté primero que otra y si existe un orden ello no significa forzosamente ni una secuencia cronológica ni una jerarquía rígida o indispensable. Veamos cuáles son los objetivos que el Nuevo Liberalismo le propone a la Nación.

El primer objetivo: la paz interna

Ninguna necesidad es más importante que la de lograr la paz interna. Es ése nuestro primer objetivo. En Colombia mueren cada año más de 400 compatriotas por razones de orden público y la cifra real puede ser mucho más alta si a ella agregamos las múltiples manifestaciones contemporáneas de violencia. Vivimos una nueva época de violencia, distinta de la que hubo en el medio siglo pero suficiente para dividir a los colombianos y para correr el riesgo de caer en procesos de descomposición similares a los de Centroamérica. Lo de hoy no tiene nada que ver con el bandolerismo de la primera parte de los años sesenta ni podemos limitarlo a la violencia formalmente política. Existe violencia social y económica y existe —sobre todo— una violencia cotidiana que surge del marginalismo social que denunciaba hace pocas semanas el doctor Carlos Lleras Restrepo en uno de sus editoriales de *Nueva Frontera*. En estas grandes concentraciones urbanas formadas durante las tres últimas décadas, miles de personas permanecen al margen de la realidad cultural de las urbes y nunca la soledad es más cruel que cuando agobia a seres que viven aglomerados. Las gentes que llegaron de los campos y de las pequeñas poblaciones a los barrios humildes o a los suburbios, han perdido en el trayecto sus valores culturales y han caído en poder de los medios de comunicación masiva, los cuales les destruyen su sencilla pero auténtica estructura moral sin sustituírsela por otra o por alguna jerarquía de valores que los guíe en el mundo urbano. Cuando las gentes creen que han perdido lo fundamental en la vida, no les importa mucho perder la vida misma y es en esos escenarios donde se cultivan los resentimientos y las presiones capaces de generar la violencia actual. Es necesario interpretar la nueva

realidad social y por eso una de nuestras más apremiantes tareas en el Nuevo Liberalismo es la de afrontar el fenómeno urbano en todas sus consecuencias. No reducirlo al fenómeno físico de organizar la vivienda y los servicios públicos de ciudades que tienen ya varios millones de habitantes y que pueden llegar a los 10 ó 12 millones en el curso de los próximos veinte años. Entender el fenómeno urbano es descifrar todos los procesos sociales y económicos que genera, especialmente los de índole cultural y política.

El ingreso de los intelectuales y los profesionales en la política

Para atender esta primera tarea contamos con perspectivas e instrumentos multidisciplinarios y esperamos ser la primera fuerza política nacional capaz de darle cauce de expresión a centenares de miles de profesionales e intelectuales formados en los claustros durante las últimas décadas o capacitados en el ámbito de la educación informal como auténticos autodidactas. Ha llegado el momento de conseguir el ingreso de toda esa generación a la política nacional frente a la cual mis contemporáneos han tenido sentimientos y criterios tan disímiles en estos veinte años porque no se sabía que predominaba entre los estudiantes de los años cincuenta, los sesenta y los setenta, si el apoyo a las opciones radicales de la guerrilla o la indiferencia y el escepticismo frente a todo lo que tuviera relación con el origen, el uso y las responsabilidades del poder político. La realidad del ejercicio profesional, su madurez intelectual, y la evolución de su propia vida les ha demostrado a estas generaciones que deben comprometerse y que nada tiene tanta trascendencia como la organización de una sociedad justa. Escépticos e indiferentes ante los partidos, nuestros contemporáneos han comprendido que no pueden ser también escépticos e indiferentes ante el destino de la Patria y que esa Patria que para muchos sólo tenía un valor retórico no sólo existe sino que nosotros y todos los seres próximos a nuestra sangre y a nuestros afectos pertenecemos a ella y sólo podemos descifrar nuestro propio destino si lo involucramos en ese patrimonio colectivo formado con el sacrificio y la contribución de muchas generaciones.

Todo el conocimiento científico y las tecnologías que estas nuevas generaciones educadas en las últimas décadas han aprendido a manejar, serán fundamentales para interpretar y organizar las relaciones entre las sociedades agrícolas, industriales y de información que coexisten en Colombia. Ya nadie puede dudar que el deber de las actuales generaciones es el cambio económico y social y que los liberales creemos posible conseguirlo por la vía democrática. Ese es el reto que tenemos ante nosotros y que debemos superar durante los últimos veinte años de este siglo extraordinario.

El segundo objetivo: reconstruir el Estado

El segundo objetivo que proponemos en el Nuevo Liberalismo es la reconstrucción del Estado para darle poderes reales y eficaces y a la vez asegurar su origen democrático. En el Estado contemporáneo, en el cual las más audaces revoluciones han sido frustradas por gigantescos aparatos burocráticos, es preciso definir en forma más exacta los derechos del individuo y las relaciones del individuo con la gran estructura del Estado. Salvaguardar los derechos individuales es un problema que se presenta en nuestra época en términos distintos a los que mostraba hace cuarenta, ochenta o cien años porque hoy existen maneras no conocidas en el pasado para regular las vidas y los deseos de los hombres en forma despótica y tiránica. Para el Nuevo Liberalismo es cuestión fundamental conciliar, en los términos contemporáneos, la libertad de cada uno con los amplios intereses de la Comunidad.

El Congreso y las elecciones libres

La reconstrucción del Estado debe comenzar por la recuperación del Congreso como auténtico representante de la Nación. No podemos aceptar que el Congreso se convierta en la irrisión del país porque bien comprendemos lo que le sucedería a Colombia si desapareciera esta institución que expresa y debe garantizar su soberanía. En 1979 no hubo una verdadera reforma del Congreso y al establecer por norma constitucional su derecho a proyectar, aprobar y ejecutar su propio presupuesto, nuestras cámaras han institucionalizado los peores vicios de su funcio-

namiento. En 1979 se cometió un grave error y se engañó a la Nación. Sin embargo, aun cuando se enmendara esta falla el rescate del Congreso hoy secuestrado por la politiquería es una tarea todavía más compleja. No habrá un auténtico Congreso que represente a la Nación mientras los instrumentos democráticos que conducen a su conformación sigan siendo objeto de toda suerte de manipulaciones. ¡Exigimos elecciones libres! Exigimos juego limpio, es decir, que todo el que tenga derecho a votar, disponga de una limpia oportunidad de hacerlo. No puede haber democracia si el pueblo no tiene auténtico derecho de votar. Hoy no se puede votar en muchos lugares de la República sin temor y sin forma alguna de intimidación o de peligro personal. En los micrófonos oficiales se pueden pronunciar muchas frases altisonantes sobre las instituciones republicanas pero todas ellas son una simple burla mientras en las aldeas los políticos deshonestos compran los votos, se apoderan de las cédulas de los campesinos, manipulan las juntas de Acción Comunal, amenazan a las personas que trabajan en la administración pública y coaccionan a los padres cuyos hijos gozan de cualquier modesta beca para sus estudios. Las libertades clásicas de expresión, reunión y asociación no son plenas en Colombia. Y en el caso del derecho de información, casi todo está por hacer. Nuestro pueblo tiene verdadera conciencia de la actualidad política porque no puede actuar con información libre y completa. El señor Ministro de Comunicaciones tiene una idea tan curiosa de la democracia que le parece inconcebible pensar en la igualdad de derechos del gobierno y de la oposición constitucional para hacer conocer a la opinión pública sus puntos de vista, por eso ha convertido la televisión en monopolio político del gobierno.

Los artículos 28 y 121

Reorganizar el Estado en los términos que proponemos esta noche significa también precisar los términos de aplicación del artículo 28 y modifica el artículo 121 de la Constitución. El primero porque la experiencia del último año ha demostrado las arbitrariedades que se pueden cometer en su nombre. Miles de personas han sido retenidas sin el dictamen de los Ministros y se les ha interrogado por personas distintas de los jueces competentes sin dar aviso al Procurador General. En cuanto

al artículo 121, es conveniente introducir en nuestra Carta la diferenciación entre estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio con una distinción clara de las causas que pueden originarlos así como de las libertades que pueden ser suspendidas en cada una de tales situaciones. No es posible predecir con seguridad cuáles serán todos los alcances de la reforma de la justicia aprobada hace un semestre ni el resultado de las innovaciones en el código penal. En principio esperamos que la administración de justicia mejore y el incremento presupuestal ordenado por el Constituyente de 1979 garantice la modernización de la rama jurisdiccional, el progreso técnico de la policía judicial y la transformación del sistema carcelario; en todo caso, es del máximo interés público que los colombianos recuperemos la confianza en la capacidad del Estado para cumplir su obligación fundamental de administrar justicia.

La descentralización: departamentos y municipios

Otra materia fundamental a la que esperamos acercarnos con mayor experiencia y objetividad en el próximo futuro, es la reorganización del régimen departamental y municipal. Sin descartar la necesidad de reformas constitucionales, las cuales sobre este particular nunca han sido planteadas con claridad, es preciso promover el desarrollo legal de los principios establecidos por el constituyente de 1968. Sabemos que la administración del municipio es el mejor medio de interesar al pueblo en el gobierno propio y por eso esperamos que nuestra presencia en cerca de 25 concejos en municipios que tienen diferente tamaño y presupuesto, nos permitirá contribuir a ese debate con criterios objetivos. Defenderemos siempre la descentralización porque corresponde al espíritu democrático y crea controles de la comunidad que son más eficaces para el gasto público y para el manejo racional del bien colectivo. En este punto de la descentralización está uno de los mejores instrumentos para multiplicar los mecanismos de participación popular y ponerle límites al presidencialismo.

Por un ejército profesional

En el Estado verdaderamente democrático por el cual luchamos y lucharemos sin pausa alguna, uno de los puntos centrales es la de-

fensa del carácter profesional del ejército para evitar su vinculación a tareas que no son las suyas, como la represión de la delincuencia común que en los últimos años le ha sido asignada por deficiencias de otros cuerpos del Estado creados específicamente para esa función. El ejército de Colombia no es el ejército ambicioso de poder o el árbitro abusivo de la controversia política que se ha impuesto en otros países de América Latina. No sólo no queremos su descrédito ni su descomposición sino que exigimos la defensa de su carácter profesional para que no se convierta en suplente de la policía y de otros organismos de la seguridad del Estado.

El tercer objetivo: el bienestar del pueblo

Nuestro tercer objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo que no es únicamente una cuestión de democratización de la propiedad sino un problema que debemos afrontar con las nuevas posibilidades científicas y tecnológicas. En cuestiones de nutrición, a pesar de las posibilidades innegables de nuestra agricultura y nuestra ganadería, es evidente que no hemos ganado la primera lucha del hombre por la producción de alimentos. Ni hemos conquistado aún una inmensa posición del territorio, como sucede con buena parte de los Llanos orientales, Arauca, la Orinoquia, la Amazonia y amplias zonas del Magdalena Medio. La tecnología nacional y el valor personal de muchos compatriotas están abriendo una nueva frontera agrícola y todo ello demanda la presencia real y eficaz del Estado.

Desde hace nueve años propuse que Colombia convirtiera en uno de los grandes propósitos nacionales la educación básica gratuita y obligatoria de 9 años para toda la población. Esta tiene que ser una de nuestras tesis fundamentales para conseguir que Colombia siga un camino justo y democrático en su evolución. Si no somos un pueblo bien educado y si ese derecho no se le garantiza a toda la población, no podemos afrontar y utilizar con facilidad e inteligencia, los problemas e inventos de la nueva era científica. Las metas del plebiscito de 1957 sobre el 10% del presupuesto nacional para educación ya resultan ingenuas e inclusive fueron duplicadas desde 1971. Quienes queremos asegurar la organización justa de nuestro sistema social tenemos que

reconocer, primero que todo, que no se puede conducir una sociedad moderna y libre sin un inmenso número de personas cuya educación humanística, técnica y científica lleve el paso de la evolución contemporánea. Y ello sólo será posible si se admite la importancia de un sistema científico nacional basado en Universidades libres, serias y bien respaldadas por el Estado. El mercado mundial de ciencia y tecnología no es un mercado libre y en él los países en desarrollo cada día están en mayor desventaja al adquirir tecnología. La compra de tecnología fue importante desde cuando empezó la sustitución de importaciones en los países en desarrollo; hoy es fundamental, pues sin ella no se tiene capacidad para producir bienes y servicios, o sea, sin potencial tecnológico no es posible el desarrollo aun cuando se disponga de materias primas y recursos energéticos.

La organización de un sistema social justo tiene una extensa agenda en materia de vivienda, salud, recreación, protección de la tercera edad en la que tendremos que concentrar nuestras energías para lograr que los colombianos no juzguemos nuestro desarrollo apenas con tasas econométricas sino con la calidad de la vida que la sociedad pueda asegurar a todos sus miembros. No creo en el igualitarismo absoluto, pero pienso que la igualdad de oportunidades, la igualdad en el punto de partida y la solidaridad consciente en el curso de la vida es lo que debe ofrecer una sociedad democrática.

Cuarto objetivo: la neutralidad electoral de la administración

Nuestro cuarto objetivo es la neutralidad política de la Administración pública para que no interfiera los hechos electorales. Mientras la administración esté comprometida con los intereses electorales de quienes la dirigen, será ineficiente. Hoy tiende a desintegrarse en pequeños grupos que actúan cada uno por su cuenta según la filiación y las aspiraciones del gerente del establecimiento público respectivo. Necesitamos defender el concepto de que a los cargos de la administración se llega para servir el bien público y no para servirse de organismos, presupuestos y nóminas que nos pertenecen a todos los colombianos.

En el campo administrativo, otro problema crítico es el de la administración tributaria.

Nuestra hacienda no es justa ni moderna ni sólida. La experiencia reciente de los reavalúos catastrales en Bogotá es apenas un reflejo de la arbitrariedad, el desorden y la improvisación existentes en ese campo. No es muy distinta —en todo caso— la situación a escala nacional. En esta década habrá sin duda un nuevo debate sobre el régimen tributario y no sólo no debemos ser sorprendidos por el mismo sino inclusive debemos convertirnos en sus promotores.

Del propio modo nos corresponderá promover una nueva reforma del sistema y los instrumentos de control fiscal los cuales han dado lugar a la aparición de un verdadero Estado dentro del Estado. La Contraloría General de la Nación sigue creciendo y todos los políticos interesados en las cuotas burocráticas que allí se dispensan se olvidaron por completo de la inmensa trascendencia de esa institución. La reforma propuesta por la Administración López Michelsen dispuso que allí hubiera una planta de personal que no excediera los 12.000 empleos. Hoy es un misterio decir hasta dónde ha crecido esa cifra. Tal vez, como lo señalan algunos ya se ha elevado a 18.000. Allí existe un mercado burocrático que vulnera la independencia del Congreso y crea centros de poder político muy peligrosos para la democracia. El sector público en Colombia ya maneja directamente algo más de \$300.000 millones al año. Esa es una cifra importante y representa recursos colectivos cuyo manejo eficiente debe permitir transformaciones radicales en la existencia de los colombianos más pobres y desamparados.

Quinto objetivo: controlar la economía de la especulación y defender la producción nacional

Nuestro quinto objetivo es el de controlar la economía de la especulación y defender la producción nacional. El hecho de que exista ya un ancho campo para la propiedad y las empresas del Estado, especialmente en relación a los monopolios vinculados con el interés público, no significa que olvidemos la urgencia de darle un apoyo resuelto a todos los sectores productivos, a la industria nacional, a la agricultura y a la ganadería para crear empleo y asegurar la autosuficiencia en varios productos estratégicos. Después de varios años

en los cuales las oportunidades han sido para la economía de especulación, con sectores financieros interesados apenas en usufructuar la inflación crónica, es urgente reivindicar el papel de quienes contribuyen realmente al incremento de la riqueza social y vinculan sus grandes, medianos o modestos capitales al sostenimiento de industrias nacionales. Cada día los colombianos verificamos con mayor alarma que prospera la tendencia especulativa, los agricultores prefieren vender sus fincas, los industriales no saben cómo controlar la inflación de costos y todos buscan las oportunidades del lucro fácil y de los ocios rentables. En el Nuevo Liberalismo estamos con la industria grande, mediana y pequeña de la Nación cuya protección no entendemos apenas en el orden arancelario, para nosotros sólo es eficaz si implica verdaderos planes sectoriales, estrategias crediticias, respaldo en los mercados internacionales y especialmente mejora constante de la productividad sin la cual todo no pasará de ser un espejismo.

Sexto objetivo: una política exterior con espíritu latinoamericano

Nuestro sexto objetivo es la modernización de la política exterior. Colombia se halla rodeada por numerosos problemas. El conflicto limítrofe con Venezuela parece aproximarse al fin, ojalá en condiciones realmente justas y dignas para los dos países; sin embargo, la situación de los indocumentados y de los compatriotas residentes en Venezuela sigue siendo difícil y en el futuro del Grupo Andino ya existe una agenda colombo-venezolana que reclama mayor atención, así como requiere especial interés la compleja integración de los dos países en una frontera tan extensa y variable en sus factores sociales, económicos y territoriales. Con el Ecuador también tenemos problemas en la frontera. Con Panamá están pendientes importantes definiciones y acuerdos. Ya sabemos que con Nicaragua el conflicto no se puede subestimar con la ligereza en que incurrió inicialmente el señor Canciller. En el Caribe y Centroamérica habrá dolores de cabeza durante toda la próxima década. Colombia debe cumplir importantes responsabilidades en la política latinoamericana pero ello no se puede improvisar como ha sucedido con tanta frecuencia.

Para nosotros la integración latinoamericana no es un problema económico y físico úni-

camente, sino, sobre todo una cuestión cultural. Necesitamos reformas en los planes de estudio de todos los niveles educativos que permitan un mayor conocimiento de nuestra población sobre la historia, la política, la cultura y las realidades geográficas de América Latina para que las afinidades reconocidas por los intelectuales y los líderes políticos se conviertan en hechos comprendidos realmente por todos nuestros pueblos. Sin la unidad de América Latina es imposible esperar que nuestra presencia en el mundo tenga alguna consideración y menos ahora cuando la concepción bipolar de la política mundial tiende a alinear a nuestro país en forma sumisa e incondicional.

Séptimo objetivo: educación política y organización popular

Este inventario de problemas no es nuevo y muchos protagonistas de la política nacional pueden elaborarlo con más detalle aun cuando no les importe mayor cosa si se solucionan o no. En nuestro caso queremos insistir en él, profundizar en su análisis y repetirlo en todos los foros y audiencias que estén a nuestro alcance con las explicaciones y comentarios que merecen estas cuestiones fundamentales para la construcción de una auténtica democracia colombiana. En nuestro caso, la primera condición del cambio rural y perdurable es la formación de una verdadera conciencia democrática entre todos los colombianos. Las defensas reales y permanentes de la democracia no están en los líderes sino en la conciencia del pueblo sobre sus derechos y sus deberes. El auténtico demócrata respeta sus responsabilidades y defiende sus derechos. Pero ello supone una inmensa tarea de educación política que en nuestra sociedad siempre ha estado pendiente. Este es nuestro séptimo objetivo. En el Nuevo Liberalismo queremos promover una mentalidad crítica en todos los sectores de la Nación. Sembrar inconformidad, lo que no significa sembrar anarquía. Por el contrario, en nuestra manera de hacer política tiene especial trascendencia la organización del pueblo, sobre todo de ciertos sectores débiles, que sólo podrán participar con poderes reales si se organizan como sucede con los campesinos, los jubilados, los trabajadores independientes y la multitud de subempleados que escasamente logran sobrevivir como vendedores ambulantes o en oficios igualmente in-

ciertos. Apoyaremos al sindicalismo con el cual nos interesa sostener diálogos estables y prolongados tanto en el sector público como en el privado. Respondremos a la Acción Comunal respetado su carácter suprapartidista y exigiendo de los demás sectores la misma conducta. Estamos con los cooperativistas y las sociedades mutuas, en fin, esperamos servir a quienes luchan por institucionalizar la solidaridad en múltiples escenarios nacionales.

En Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Cali, Cúcuta, Medellín, Villavicencio, Pereira, Barranquilla y en todas las ciudades donde existen núcleos de nuestro movimiento, conciliaremos la labor de los comités de estudio que prepararán información sobre los problemas públicos, con la organización territorial que facilitará la comunicación con todos los sectores sociales. El Nuevo Liberalismo sólo concibe su misión política con el pueblo y para el pueblo. Hemos emprendido una intensa y prolongada jornada para obtener su apoyo porque vamos a lograr la personería del liberalismo en el curso de esta década. Sabemos que el pueblo sólo dedicará toda su energía a respaldarnos si vivimos íntimamente unidos a él, para despertar su entusiasmo, para preocuparnos por sus necesidades y para trabajar con toda sinceridad por sus intereses y resolver sus problemas fundamentales.

Estamos en la arena política porque no podemos aceptar que millones de colombianos consuman su vida en el mantenimiento de una sociedad en la cual, para muchos de ellos los derechos humanos fundamentales son inciertos. Si existe un hombre colombiano, si existe una verdadera nación colombiana, si existe una conciencia de lo colombiano, esta generación tendrá que demostrarlo y para ello debemos conseguir el rescate de millones de compatriotas sin oportunidades ni derechos.

Octavo objetivo: la reorganización del liberalismo

Nuestro octavo objetivo es la reorganización del liberalismo para darle un rumbo a esta gigantesca fuerza popular que hoy se halla a la deriva en manos de intereses hostiles al cambio económico y social y enemigos de la

participación del pueblo en el manejo del Estado. Durante siglo y medio el liberalismo ha sido la primera energía creativa en nuestra sociedad y en cada etapa de la historia nacional existe un hecho generado por el espíritu liberal que resultó decisivo para el progreso de Colombia. Sus ideas civilizadas y su espíritu civilizador han influido en los demás partidos que hoy se disputan, por ejemplo, el honor de ser los defensores de los derechos humanos, los cuales fueron proclamados por el liberalismo durante los dos últimos siglos en todo el mundo. Pero el liberalismo en Colombia se ha convertido en un rótulo y muchos de sus presuntos defensores han aceptado que en su nombre se atropellen sus principios. En el pueblo subsiste la esperanza en el renacimiento del espíritu liberal y aun cuando en el vértice del partido casi todo se reduce a una mezquina batalla por usufructuar y dilapidar una herencia que recibieron e incrementaron varias generaciones. La tarea liberal no ha concluido porque los principios de libertad todavía no están bien establecidos en nuestro país. Es muy fácil que regrese la barbarie y las tentaciones totalitarias son cada día más frecuentes. En el partido liberal no hay en este momento ni objetivos políticos ni organización. El gigantesco ejército popular parece haber perdido sus generales y en cada región de Colombia, con pedazos del botín burocrático, que el gobierno reparte en forma calculada proliferan las fuerzas dispersas sin visión alguna de la realidad nacional. Docenas de jefes y jefecillos regionales no piensan en otra cosa que en defender su cuota de caza en donde, ellos también, han secuestrado fragmentos de la conciencia popular. Todo esto constituye una inmensa irresponsabilidad y una traición histórica al destino y la misión del liberalismo colombiano. Por eso no cederemos en la crítica al estilo político clientelista que ha generado nuevas formas de opresión colectiva.

Noveno objetivo: el diálogo leal y eficaz con todos los sectores democráticos nacionales

El noveno objetivo es el diálogo leal y eficaz con todos los sectores democráticos nacionales. Nuestro fervor liberal, nuestro legítimo orgullo por lo que ha hecho el liberalismo en Colombia a pesar del eclipse en que se halla, no nos impide reconocer el valor intelectual y político de otros sectores interesa-

dos en defender la democracia. Creemos que Colombia evoluciona hacia un nuevo pacto social en el que no puede ser marginado nadie que de buena fe desee construir otras condiciones económicas, sociales y políticas para que vivamos en una auténtica democracia. Respetamos a los sectores progresistas del conservatismo y respetamos también a quienes desean abrirle otras opciones a la izquierda. Las coincidencias y las afinidades no nos obligarán —como cosa inevitable— a realizar coaliciones con tales sectores. Puede ser que las haya, como puede suceder que no sean necesarias. En ningún caso ocurrirán exigiéndoles a los demás que renuncien a sus convicciones y menos vamos a hacerlas en contradicción con las nuestras.

Décimo objetivo: extender el diálogo a los niveles internacionales con los partidos democráticos de América Latina y el resto del mundo

El décimo objetivo del movimiento por el Nuevo Liberalismo debe ser la participación en el diálogo mundial que realizan las diversas fuerzas progresistas. Esto es una consecuencia natural de las realidades contemporáneas las cuales ya no permiten a ninguna fuerza política moderna el aislamiento. Estamos presenciando la alborada de transformaciones mundiales todavía más profundas y aceleradas que todas las que han ocurrido en el reciente pasado. Nuestro deber es servir de instrumento de comunicación entre nuestro pueblo y todos los escenarios en los que se discuta sobre problemas tan importantes como las relaciones Norte-Sur, el control de las empresas transnacionales, etcétera. Por modesto que sea nuestro papel en la política internacional los colombianos tenemos derecho a existir con una posición consciente y una presencia respetable ante el resto del mundo. Todo ello debemos alcanzarlo con una intensa y premeditada participación.

Todos los presentes comprendemos que la lucha por estos diez objetivos no es fácil, pero tenemos motivos para emprender la batalla con mucha confianza en nosotros mismos. En los últimos cien días hemos trabajado intensamente. Hemos luchado hombro con hombro. Nos hemos reunido con más de 20.000 personas en Bogotá, Santander y Cundinamar-

ca. Hemos discutido con muchas de ellas la situación del país. Es el comienzo. No ligamos la realización de nuestros objetivos exclusivamente a una coyuntura política o a una prueba electoral determinada. Con la colaboración de todos los amigos y de quienes ellos representan en el Valle, Antioquia, la Costa Atlántica, Caldas, Meta, Risaralda, Boyacá, Norte de Santander, Nariño, en fin, todo el país, le devolveremos al liberalismo su espíritu y sus responsabilidades nacionales lo que tendrá expresión concreta en las elecciones de 1982. Nos convertiremos en garantes de una decisión seria en materia de sucesión presidencial para Colombia y para el liberalismo. Buscaremos un mandato nacional para una política que no comienza ahora. Viene desde el siglo pasado y nosotros defenderemos su responsable expresión contemporánea.

Emprendí mi presente tarea sobre una desolada y adusta base con cinco o seis amigos en Bucaramanga y otros tantos en Bogotá. No teníamos nada que ofrecer excepto la posibilidad de hacer política con inspiración y trascendencia histórica. Sobre esa base he recibido lealtad y apoyo de centenares de personas hoy convertidas en miles de amigos y compañeros en la larga, compleja y difícil travesía que nos espera. Quiero agradecerle a Helena Páez de Tavera su generosa intervención en esta noche y la forma entusiasta como nos ha prestado el concurso de su inteligencia en esta lucha. Su presencia constituye un definido reconocimiento de la parte fundamental que las mujeres están desempeñando en nuestra lucha por Colombia y la libertad. Necesitamos miles de mujeres en las diversas tareas. En las comisiones de estudio, en los barrios y en la formación de los futuros cuadros administrativos de nuestro movimiento. Con ellas, con su generosidad y abnegación, estamos superando años de convencionalismos políticos y sociales.

Con especial reconocimiento quiero manifestar mi gratitud a Jaime Gutiérrez y a todas las personas y amigos que organizaron la reunión de esta noche, la cual constituye una demostración elocuente de las energías populares que nos acompañan.

También quiero aprovechar esta ocasión para congratular a quienes condujeron nuestra organización en la reciente campaña electoral tanto en Bogotá y Cundinamarca como en

Santander. Todos hemos vivido una intensa experiencia en estos meses y antes de tomar conciencia de lo que nos ha tocado aprender y afrontar, ya nos llegan nuevos deberes que asumimos con fe y entusiasmo.

En estos momentos fundamentales, cuando nos preparamos para iniciar la segunda jornada del Nuevo Liberalismo viene a nuestra memoria el recuerdo de quien cumpliera un papel fundamental en la iniciación de nuestras tareas, el ilustre Senador Alvaro García Herrera, cuyo reciente fallecimiento ha constituido un motivo de profundo dolor para todos nosotros. Sus consejos y su valerosa solidaridad, como la del senador Enrique Pardo Parra que nos acompaña esta noche, fueron decisivos para emprender la marcha hace algunos meses. En su último discurso, en uno de los barrios populares de Bogotá el 6 de febrero, el senador Alvaro García Herrera señaló que probablemente nuestra misión en los comicios de marzo era un saludo a la bandera como el que hiciera Rafael Uribe Uribe en 1911 —también en el mes de abril— al iniciar su exposición sobre el presente y el porvenir del partido liberal en Colombia cuando se cumplían 25 años de persecuciones al nombre liberal. Dijo Uribe Uribe en aquella noche memorable y lo repetimos nosotros esta noche con la misma emoción:

“¡Saludo a la bandera que, vencida y perseguida, nunca se abatió!”. Sin duda, en tan pro-

longada y penosa marcha, nos han sobrecogido lamentables vacilaciones y desfallecimientos; hemos pasado por desfiladeros peligrosos en que hemos perdido a algunos de los nuestros; en no pocas ocasiones los mismos jefes, por error de criterio, nos han extraviado; hemos padecido duras pruebas. ¡Cuántos asaltos se nos han dirigido! A cada caída se nos ha creído muertos; enterradores de buena voluntad corrían para cavarnos la sepultura, pero hemos escuchado con la misma indiferencia las imprecaciones siniestras y las oraciones fúnebres; cada vez se nos ha visto levantarnos y exclamar para nuestros enemigos; ¡Aún estamos en pie! Ya que no habéis podido exterminarnos, fuerza es que os resignéis a que vivamos. Digno es de regir los destinos nacionales el partido que tan incomparable muestra de vitalidad y persistencia ha dado... ¡Saludo a la bandera irremisiblemente destinada a coronar victoriosa las alturas!”.

La bandera de Uribe Uribe, la misma que ha sido la insignia del espíritu libre en Colombia y que siempre llevó con honor Alvaro García Herrera está aquí y es nuestra responsabilidad mantenerla siempre en alto. ¡Lo haremos!

“¡En el nombre de Dios, de nuestros mayores y de la libertad, siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuere menester sea!”.

La reorganización liberal

Discurso de Luis Carlos Galán en la ciudad de Bucaramanga el 10 de junio de 1980

Señoras y Señores:

El doctor Alberto Montoya Puyana ha advertido muy bien que, tal como me permití solicitarlo a los organizadores, esta cena no tiene el carácter de homenaje a una persona sino que se trata de una convocatoria a los liberales santandereanos para que examinemos las realidades políticas y preparemos el testimonio de nuestro pueblo en las importantes decisiones que debe adoptar la Nación en el curso de los próximos años. Hace seis semanas tuvo lugar un acto semejante en Bogotá y con criterios similares nos reuniremos en la mayoría de las capitales de departamento en el curso del presente año para atender las invitaciones que nos han formulado amigos liberales y líderes independientes del Valle, Antioquia, Caldas, Atlántico, Meta, Boyacá, Norte de Santander, Risaralda, Magdalena, Huila, Cundinamarca, Córdoba, Bolívar y Sucre.

Nos hallamos en una tarea difícil pero indispensable. Hemos resuelto proclamar el derecho liberal a inspirar una nueva época histórica en la vida nacional. Para alcanzar este propósito hemos considerado indispensable

denunciar vicios y corruptelas que amenazan destruir la democracia colombiana y exigir que el liberalismo afronte sus nuevas responsabilidades no sólo con ideas claras sino con actitudes coherentes que demuestren la sinceridad de lo que se dice y la voluntad de representar en forma auténtica a quienes nos confiaron su personería en el Congreso Nacional.

Esta tarea comenzó en Santander. Durante dos años, entre 1976 y 1978, recorrimos todas las provincias del departamento y todos los barrios de Bucaramanga. Lo hicimos para respaldar la candidatura presidencial que preferíamos, la del doctor Carlos Lleras Restrepo, pero, también lo hicimos para explicar nuestras tesis sobre la crisis nacional y la urgencia de defender los principios liberales sobre la democracia política, la democracia social y la democracia económica. Los acontecimientos de los dos últimos años nos han confirmado los motivos para mantener nuestra independencia e insistir en la denuncia de la crisis. Poco a poco hemos logrado que nuestras reflexiones tengan resonancia nacional y ya nadie duda que los problemas de la política no se reducen a la escogencia de un candidato presidencial en 1982, sino que resulta indispensable afrontar y resolver tres cuestiones simultáneamente: la reorganización del liberalismo, la recuperación del Congreso Na-

cional y la elección de un Presidente capaz de trazarle nuevos horizontes a nuestra democracia.

Gracias al apoyo de Bucaramanga y Santander pudimos extender nuestros esfuerzos al escenario de Bogotá con el objeto de asegurar la resonancia nacional de nuestros planteamientos. Sin la valerosa colaboración de nuestro pueblo y sin la confianza de todos ustedes no hubiéramos podido lograr los hechos políticos que se produjeron el 9 de marzo último, en virtud de los cuales Colombia consideró que desde Santander se había lanzado un nuevo mensaje político con repercusión clara en la capital de la República. Antes de analizar las tres cuestiones que acabo de plantear permítanme expresar mi gratitud pública a quienes organizaron la campaña electoral, a los numerosos líderes cívicos y a los amigos que sin mayor experiencia política asumieron sin complejos la responsabilidad de movilizar a los sectores del liberalismo que deseaban dar un testimonio creativo en la escena política. Gracias a Santander hemos dado un primer paso. Sabíamos que a las metas que nos dirigimos no se llega en forma inmediata, pero, en un momento fundamental hemos comprobado que en nuestro pueblo se nos comprende y que para las múltiples tareas que nos esperan siempre habrá solidaridad y confianza en Santander.

Como lo dije hace pocos instantes, nos preparamos para movilizar al pueblo en función de tres cuestiones fundamentales: el liberalismo, el Congreso Nacional y la sucesión presidencial. Las tres cuestiones las entendemos dentro del marco de objetivos proclamados por el Nuevo Liberalismo en la convocatoria nacional de nuestro Movimiento el 29 de abril. En estos momentos es importante examinar estas tres cuestiones que definirán muchas cosas en la suerte de la República.

Organización y metas

En el liberalismo ya nadie duda de la necesidad de reorganizar a la que ha sido la primera fuerza popular de Colombia. Desde hace mucho tiempo lo ha propuesto el doctor Carlos Lleras. Nosotros hemos insistido en ello durante los dos últimos años y en la reu-

nión nacional del Nuevo Liberalismo en Bogotá lo señalamos como uno de nuestros objetivos. Ayer decían los periódicos que el doctor Virgilio Barco sostiene que no se puede hablar de candidaturas sin debatir primero la organización liberal. Cada día se agrega otra declaración similar de congresistas y ex ministros sobre la materia, lo que demuestra que éste es uno de los puntos de partida de cualquier acción política seria y eficaz. No puede haber candidato de un partido, si antes no existe ese partido. Tampoco habrá partido mientras no haya una línea ideológica definida ni una organización adecuada para luchar por la ideología y, a la vez, demostrar, en la práctica, la sinceridad de lo que se predica.

¿Qué significa organizar al liberalismo? Para algunos esto equivale a reunir unos cuantos líderes en un directorio, establecer cuáles son las cuotas burocráticas disponibles y distribuir las en forma aritmética. Para otros organizar al liberalismo es hacer convenciones departamentales con el fin de elegir a los futuros candidatos a las corporaciones públicas, de modo que todo aquél que se margine de tales convenciones será un disidente de los nuevos oficialismos. Para el de más allá la organización del partido liberal es el unanimismo en torno del gobierno y la adhesión incondicional a todas sus orientaciones y actuaciones a la espera de lo que se imponga en materia de candidaturas presidenciales. Para nosotros, en el Nuevo Liberalismo, organizar el partido es democratizarlo, es darles información y educación política a todos los colombianos para que el pueblo entienda, conozca y controle al Estado que rige sus destinos y a través del liberalismo se haga justicia en esta sociedad y se garanticen las libertades públicas. Es preciso, entonces, si queremos reorganizar al liberalismo que nos pongamos de acuerdo sobre el verdadero alcance de esa organización pues no pensamos participar en ninguna farsa ni prestarnos a nada que signifique engañar a nuestro pueblo harto ya de falacias y frustraciones.

En un auténtico liberalismo es normal que haya diversas corrientes y tendencias, siempre que exista acuerdo sobre los grandes objetivos liberales y los principales procedimientos para alcanzarlos. Estamos dispuestos a respetar otras tendencias dentro del liberalismo en Santander y Colombia siempre que no convier-

tan la conquista del poder en una retribución burocrática o en el instrumento para hacer negocios y traficar con las influencias en los organismos públicos. Estamos dispuestos a respetar otras tendencias dentro del liberalismo en Santander y Colombia siempre que no renuncien a los principios liberales sobre el carácter civil de nuestras instituciones ni desconozcan la importancia de las garantías procesales y el derecho de defensa en la administración de justicia. Estamos dispuestos a respetar otras tendencias dentro del liberalismo en Santander y Colombia siempre que no acepten expresa o tácitamente la tortura como un sistema legal de investigación. Estamos dispuestos a respetar otras tendencias dentro del liberalismo en Santander y Colombia siempre que ellos, a su turno, estén dispuestos a respetar la verdadera libertad política para todos los hombres y mujeres mayores de 18 años.

Los liberales podemos tener ideas diferentes sobre la política económica; podemos discrepar acerca del régimen departamental y municipal; podemos, inclusive, contemplar con criterios distintos algunos aspectos de la política internacional o las reformas del código laboral o el plan de inversiones públicas o hasta podemos separarnos entre gobiernistas u opositoristas. Lo que no nos puede ocurrir a los liberales es que nos enfrentemos en materia de derechos humanos o sobre la necesidad de superar el estado de sitio crónico e indefinido o sobre la búsqueda de una democracia sin restricciones, pues en ese momento ya no asistiríamos a una controversia entre liberales sino a un pleito entre dos adversarios, uno de los cuales ha abandonado su propio partido y aun cuando conserve el rótulo su ideología ya no es liberal.

La reorganización del liberalismo es un triple problema que comprende: definiciones ideológicas, integración de directivas de auténtico origen democrático y comportamiento honesto y respetable de las personas que lleven la personería de la colectividad en las corporaciones públicas o en el gobierno. Ningún partido político puede hacer por una Nación nada distinto de lo que es capaz de hacer por sí mismo. Ningún partido puede organizar a Colombia, si el propio partido no logra organizarse. Mientras no precisemos la

ideología que guiará al liberalismo en las dos últimas décadas del presente siglo, mal podremos asegurar el rumbo de la Nación en el mismo período. Mientras la organización del liberalismo no sea democrática y el financiamiento de sus campañas no resulta diáfano, tampoco podremos constituir en Colombia una sociedad auténticamente democrática ni un Estado cuya dirección no esté interferida por los grupos económicos más poderosos. Mientras no exijamos en los líderes liberales un comportamiento respetable, sin esguinces morales en sus acciones políticas y administrativas, no podemos esperar que en esta encrucijada moral el Estado pueda ser administrado en términos éticos inobjectables gracias al liderazgo liberal.

En ese proceso de reorganización del liberalismo, en nuestro movimiento estamos listos a cambiar ideas con los demás sectores sin esperar indentificaciones totales ni instantáneas, del mismo modo que hemos cambiado ideas con otros partidos cuyas tesis políticas son muy distintas de las nuestras pero con quienes nos aproxima el interés por defender los derechos humanos. Es evidente que nuestras ideas sobre los problemas sociales y económicos del país son distintas de las que guían diversos grupos de izquierda y a varios sectores progresistas del conservatismo, pero en la búsqueda de la paz, la entrega de las armas por parte de los grupos que se han sublevado, la amnistía para los mismos y el establecimiento de una auténtica democracia sin restricciones, estamos dispuestos a conversar con todos los que de buena fe se acerquen a diálogos de esta naturaleza. Buena parte del territorio de Santander ha sido azotado por la violencia durante los últimos treinta años. Una violencia cuyo origen es diferente ahora de la que vivimos a mediados del siglo, pero una violencia que sólo será eliminada si desaparecen sus causas económicas y sociales. En Bucaramanga, por fortuna, no hemos padecido la violencia urbana y ciertas manifestaciones de patología social que afectan a las cuatro primeras ciudades del país. En la medida en que contribuyamos a una solución valerosa y eficaz a los problemas sociales de Colombia, aún es probable que salvemos a nuestra ciudad de los problemas como los secuestros, el terrorismo, el tráfico de drogas, los atracos y el vandalaje que se registran en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Por eso es

tamos conversando con otros sectores cuya ideología es bien distinta de la nuestra. Porque no creemos en la pacificación primitiva lograda por medio de la fuerza y pensamos que el diálogo franco y leal puede abrir nuevos caminos para evitarle a Colombia otra ola de sangre y barbarie.

El liberalismo en el gobierno tendrá que afrontar estos problemas. Porque estar en el poder no es hacerse al control de la burocracia para prefabricar elecciones, como piensan algunos, sino proponer caminos para la modernización social de Colombia, elaborar programas de transformación económica y social, utilizar los recursos colectivos para crear empleo, intervenir en la economía para controlar la inflación, defender el ingreso de los sectores asalariados y de las clases medias. Necesitamos que el área liberal se organice para estos fines y estas responsabilidades concretas. Ello sólo se puede hacer si el liberalismo reconstruye sus vínculos con los sectores sindicales y la organización campesina; si se hace presente en los claustros universitarios; si lucha por los derechos de las mujeres para asegurarles igualdad de oportunidades en la sociedad; si, en fin, reasume sus obligaciones en materia social con criterios serios y a la vez valerosos, para no caer en tentaciones demagógicas y tampoco convertirse en el instrumento de intereses reaccionarios.

En el Nuevo Liberalismo nos estamos organizando con espíritu, objetivos y procedimientos democráticos. Vamos a realizar inscripciones de liberales; estamos adelantando reuniones periódicas en las sedes y en los barrios; haremos asambleas municipales, regionales y nacionales del movimiento. En tales foros discutiremos democráticamente nuestras estrategias y nuestros programas. Operaremos como queremos que funcione toda el área liberal. Si en los demás sectores liberales se obra en forma similar, no habrá dificultad para coordinar e integrar esfuerzos más adelante. Si por el contrario, no logran salir del clientelismo y el manejo feudal de las provincias, nosotros seguiremos nuestra lucha pues estamos en la arena política no simplemente para obtener unas cuantas curules sino con el propósito de influir en la conciencia política de los liberales para que la Nación avance en el proceso de construcción de la verdadera democracia.

Recuperación del Congreso

La segunda cuestión que deseo examinar esta noche es la urgencia de la recuperación del Congreso Nacional que ha sido secuestrado por la que Alberto Lleras denominó la casta política. Es preciso que en el calendario político de 1982 se considere tan importante la renovación de las Cámaras como la elección del próximo Presidente de la República. Los liberales no podemos aceptar que el Congreso se convierta en motivo de irrisión nacional. Como demócratas entendemos que esa institución es la primera asamblea de la Nación; tolerar su decadencia, aceptar su desorden y contemporizar con sus actitudes sumisas frente al Ejecutivo, equivaldría a reconocer que el pueblo ha perdido su instrumento auténtico de representación y esto es lo más grave que puede ocurrirle a la democracia. Los síntomas del escepticismo popular frente a las Cámaras carecen en forma alarmante. No sólo hubo hace dos años una notoria y grave diferencia entre los votos de febrero para elegir congresistas y los de junio para escoger Presidente, sino que algunos sectores ya creen y alegan que los derechos y aspiraciones del pueblo se defienden mejor con un paro cívico que a través del Congreso. Hace pocos días en la reunión de sectores políticos muy diversos en el Concejo de Bogotá, a que me referí hace algunos instantes, me permití expresar mi desacuerdo con la idea del paro cívico. No creo en las vías de hecho para cambiar nuestra sociedad y por eso jamás propondré en el Nuevo Liberalismo que se participe en acciones que crean toda suerte de riesgos para las clases populares y radicalizan los enfrentamientos en beneficio de los sectores reaccionarios; sin embargo, debo admitir honestamente que el desprestigio del Congreso amenaza dejar al pueblo sin personeros por los caminos institucionales. De allí que haremos cuanto esté a nuestro alcance por fortalecer el carácter fiscalizador del Congreso y colaboraremos en la conformación de una comisión del plan capaz de modernizar los instrumentos de la rama legislativa. Más tarde, en las elecciones de 1982 promoveremos el acceso a las corporaciones públicas de gentes nuevas en Santander y en aquellos departamentos donde el Nuevo Liberalismo presentará listas de candidatos a las cámaras, las asambleas y los concejos. Las labores en los próximos 20 meses servirán de experiencia a los futuros congresistas, di-

putados y concejales y permitirán la conformación de equipos políticos aptos para defender con éxitos estas tesis en el escenario electoral y a la vez para realizar una gestión administrativa honesta, dinámica y eficaz en el futuro. Para rescatar al Congreso realizaremos una labor de educación política que consistirá en explicar las atribuciones de las corporaciones públicas y en luchar porque la Nación conozca al Estado que pretende gobernarlo y a la administración que debe servirla.

La tercera cuestión que quiero examinar hoy es la sucesión presidencial. Desde hace varias semanas, con criterios políticos improvisados y controvertibles, resolvieron inventar un abanico; sin embargo, han sido suficientes unos cuantos reportajes y dos o tres comentarios para ver la inconsistencia de la lista que se reduce apresuradamente. Incapaces de afrontar los problemas reales de la Nación, como el desempleo, la inseguridad, la miseria y la inflación, algunos sectores del liberalismo han querido distraer la atención del pueblo con el carrusel de las candidaturas. Ese no es el camino serio y responsable para demostrar el derecho liberal a permanecer en la Presidencia y sólo algunos líderes excepcionales, como los ex presidentes y el doctor Hernando Agudelo Villa, han dado un contenido más substancioso a la controversia política. Sólo quienes afronten los problemas reales del país y el explosivo ambiente social y económico que nos agobia tendrán derecho a que sus nombres sean debidamente considerados. Los demás pueden dedicarse a organizar sindicatos de parlamentarios para conseguir instrumentos de negociación. Pierden su tiempo en esos menesteres y es bueno advertirle a la opinión que no vale la pena dejarse impresionar por todos esos artilugios. Vemos con satisfacción que se multiplican los sectores liberales que no aceptan la regionalización de las candidaturas y en cambio exigen abanderados del liberalismo con carácter nacional, es decir, líderes capaces de llegar a la jefatura del Estado para servir a todos los colombianos y no simplemente para reivindicar sentimientos y anhelos departamentales y zonales. Aun cuando todavía no se perfila la línea política capaz de aglutinar a todo el liberalismo, consideramos ciertamente que en el área liberal hay figuras que pueden y deben acometer esa tarea. Tenemos ante nosotros un proceso que demorará más de un año durante el cual

podremos escuchar las tesis de quienes aspiren a la candidatura liberal. Mientras tanto nos reservamos el derecho de contribuir al debate con la libertad que nos otorga el hecho de no estar comprometidos con ninguna candidatura. Este será un plazo razonable para analizar alternativas y discutir programas. Oportunamente y después de cambiar ideas con todos los sectores del Nuevo Liberalismo fijaremos nuestra posición en apoyo de la opción que satisfaga estas tres necesidades que son para nosotros fundamentales: un partido liberal realmente organizado para ejercer el liderazgo político que el pueblo le confió desde hace varias décadas y que hoy vive una crisis profunda; un congreso comprometido con la Nación y no arrodillado ante el dueño de la burocracia y las gabelas del poder y un candidato presidencial cuya hoja de vida no tenga reparo alguno y cuya capacidad política y administrativa garanticen la iniciación de una nueva época en la política colombiana.

El doctor Alberto Montoya Puyana ha hecho una buena síntesis de los criterios del Nuevo Liberalismo sobre los problemas de Santander y Bucaramanga. El tiene especial autoridad para analizar estos asuntos pues su paso por la gobernación fue digno de la gratitud y el respeto de los santandereanos. Con él y con varios compañeros del Movimiento hemos examinado estos temas y en el curso de los próximos meses continuaremos las labores para redactar la plataforma detallada de acción tanto en la Asamblea y en los Concejos como en los diversos escenarios públicos y cívicos en los cuales es preciso formar conciencia acerca de las necesidades de Santander y Bucaramanga.

Para nosotros Santander no es un territorio sino una cultura, un modo de ser y de pensar. Nos reconocemos en los cien mil santandereanos residentes en Barranquilla, en los treinta mil del Cesar, los de Arauca, la multitud que reside en Bogotá y los millares de coterráneos que están en el Norte de Santander o se fueron a vivir a Venezuela. Todos ellos se han integrado fácilmente en las regiones donde residen porque han obrado con honradez y carácter y han sido trabajadores infatigables. Pero tenemos sobre todo una responsabilidad con quienes habitan en Santander y confían en organizar su vida dentro del marco social y económico de nuestra región. Necesitan en el Magdalena Medio que apoye-

mos los programas de colonización de esa zona estratégica para la modernización de Colombia; en García Rovira que se les rescate de una estructura social primitiva y se les permita superar la angustia del minifundio que los oprime; en Bucaramanga que los respaldemos para ejercer el liderazgo como centro urbano clave en el área; en Socorro, San Gil y Vélez que les colaboremos en la organización de una infraestructura física y social digna del siglo XX y en Bucaramanga y el área metropolitana que tracemos una ruta clara a este gigantesco proceso de urbanización para que nuestra ciudad guíe al oriente de Colombia. Estas no son metas de una campaña electoral sino compromisos para una generación que estamos dispuestos a asumir con todas nuestras energías y esperanzas.

Nos acompaña esta noche el doctor Alejandro Galvis Galvis en cuya vida y obra se ha inspirado la mayor parte de la historia santandereana durante este siglo. Aun cuando a veces hemos tenido ideas diferentes sobre

los diversos problemas públicos y las circunstancias del liberalismo, nunca hemos estado en contradicción con el patricio. El doctor Galvis Galvis, generosamente ha respetado nuestros disentimientos porque siempre hemos compartido sus preocupaciones sobre los asuntos fundamentales. Queremos como él que Santander tenga siempre una voz respetable en el liberalismo colombiano. Queremos como él que el auténtico espíritu liberal prevalezca en la evolución de nuestra sociedad. Ningún testigo mejor que Alejandro Galvis Galvis para asegurarles a los santandereanos y a los liberales que todos los miembros del Nuevo Liberalismo seremos fieles intérpretes del juramento con el cual los comuneros cambiaron la historia del antiguo coloniato y abrieron el horizonte de la futura nación colombiana. Sirva ese juramento para iniciar esta nueva etapa política; en el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad: ¡Siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuere menester sea!

Bucaramanga, junio 10 de 1980.

Llamamiento a la Nación

Palabras del doctor Luis Carlos Galán
en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con motivo
del Primer Encuentro Nacional del
Nuevo Liberalismo
Bogotá, agosto 16 de 1981

Quiero expresar mi profunda gratitud a todas las personas que en esta mañana han venido al Teatro Jorge Eliécer Gaitán para asistir a este acto de instalación del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo. Agradecer a Patricio Samper, Alberto Villamizar y todos los Jefes de Zona de Bogotá, la invitación que hicieron, a nuestros amigos y copartidarios en la capital de la República para que asistieran al acto de hoy. Igualmente saludo a todos los miembros del Nuevo Liberalismo que encabezados por sus coordinadores vinieron desde todos los rincones de la República para dar su testimonio de solidaridad con las tesis proclamadas el 2 de junio en el Senado de la República cuando iniciamos nuestro proceso de organización nacional.

Empezamos a convertirnos en un movimiento con dimensiones verdaderamente nacionales porque en todos los departamentos de Colombia hemos tenido una respuesta clara y rotunda de solidaridad con el llamamiento que hicimos hace dos meses y medio. Ayer, durante más de nueve horas deliberamos con los 22 representantes de las distintas regiones del país sobre la organización del Movimiento,

el plan de trabajo para los próximos meses, las perspectivas de los próximos años y la realidad política inmediata de la Nación y del liberalismo. A partir de este proceso de deliberación y de cuanto hemos conversado a lo largo de innumerables reuniones en el territorio nacional durante el presente año, estamos listos para levantar las banderas y someterlas a la consideración del pueblo colombiano con el objeto de que él nos diga en marzo próximo si respalda cuanto hemos dicho sobre la crisis política, económica y social del país y cuanto proponemos para afrontarla con algunas respuestas inmediatas y otras concebidas en función del proceso nacional de los próximos 10 y 15 años.

¿Por qué existe el Nuevo Liberalismo? Ya lo han explicado los senadores Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Pardo Parra, pero yo creo oportuno reiterar algunas cosas y señalar otras sobre el tipo de reflexiones que nos hacemos para el trabajo político que hemos asumido.

La crisis histórica

Desde hace varios años se empezaron a perfilar en el escenario nacional las características de una crisis compleja, profunda y definitiva para la suerte de la República. Una crisis que tiene múltiples manifestaciones, que se expresa por ejemplo en los graves problemas de orden

público que vive la Nación, en la virtual guerra civil no declarada, o ésta sí, infortunadamente declarada, que azota zonas considerables de la República como el Caquetá el Meta, un pedazo amplio de Santander, Antioquia, Córdoba y Tolima, para no hablar de ese problema en sus manifestaciones urbanas. El país se encuentra al borde de circunstancias definitivas, todos lo sabemos, lo percibimos y en todo el territorio de la Nación se aprecia la preocupación de todos los colombianos por el desarrollo que puedan tener los acontecimientos. Sólo hay una excepción, la clase política no entiende, no quiere entender qué tipo de conflicto vive la República, qué tipo de riesgos amenazan la paz entre los colombianos, qué grado de angustia padece nuestro pueblo. Los parlamentarios, infortunadamente en su inmensa mayoría, le han vuelto la espalda a esas preocupaciones nacionales. Hace un buen rato lo habíamos advertido, pero en la semana anterior quedó la evidencia si acaso había dudas sobre ello. El senador Rodrigo Lara citó al Senado a los Ministros de Gobierno y de Defensa para que respondieran a dos preguntas concretas: la primera, ¿cómo espera el gobierno lograr la paz en la nación?, la segunda, ¿en qué circunstancias murió un hombre humilde de Pitalito, después de ser sometido a torturas y atropellos?

En un año en el cual han muerto más de 500 compatriotas, entre soldados, guerrilleros y campesinos. Cuando la nación vive problemas de esa índole, cuándo se cita a los ministros de Gobierno y de Defensa para que den respuesta a esos interrogantes, al debate en el Senado sólo asisten 26 de los 112 senadores que tiene la República. Y cuando termina el debate apenas 18 senadores permanecemos en el recinto, reclamando explicaciones, proponiendo caminos para que los colombianos logremos la reconciliación fundamental sin la cual será imposible afrontar estos problemas. Ese es el comportamiento de buena parte de los actuales parlamentarios de la República. Veinticuatro horas antes de ese debate tuvo lugar otro, se trataba de establecer cómo se repartían las cuotas burocráticas en el departamento de Córdoba, cuáles eran las parcelas de puestos públicos y de prebendas a que tenía derecho cada uno de los grupos políticos de ese departamento y en ese debate sí había 87 senadores que permanecieron en sesión permanente durante siete horas, porque esos son los temas que hoy preocupan

a la mayor parte de los parlamentarios del país, mientras la nación espera que la interpreten, la organicen y la dirijan en este proceso completo de su historia. Por eso si el general Landazábal dice que el país se acerca al punto de no retorno en el caso de que se extienda el proceso explosivo del orden público, es bueno advertir de una vez al pueblo colombiano que el primer paso de la solución, dentro del marco institucional, está en la renovación total del Congreso Nacional. Renovación indispensable para que allí se exprese realmente la nación porque ese cuerpo en el sistema de instituciones nacionales no tiene otra responsabilidad ni otro sentido que el de expresar las necesidades y los sentimientos del pueblo colombiano.

Esa crisis continúa en otros escenarios, se expresa también en el proceso creciente y casi incontenible, si nuestro pueblo no reacciona, de mayor dependencia nacional frente a la tecnología y el capital extranjeros. Cada día Colombia es menos dueña de su propio destino, cada vez más las decisiones fundamentales sobre la organización económica y social del país están influidas y limitadas por intereses que no dependen de la voluntad de los colombianos.

Por otro lado, las clases medias y populares vienen pagando desde hace varios años el impacto de la inflación. Y todo se les explica con ese argumento. Cuando se reajustan las tarifas de los servicios públicos sin límite alguno, cuando se toman las demás determinaciones que afectan los presupuestos familiares de la inmensa mayoría o de la totalidad de las clases trabajadoras del país, siempre se les dice que la causa es la inflación. Pues es cierto que la economía nacional recibe el impacto de un proceso inflacionario mundial, pero lo que no es cierto ni es justo es que los sacrificios derivados de esas circunstancias inflacionarias no se repartan en proporción a la capacidad de los distintos sectores económicos del país sino que se recarguen sobre los sectores de ingresos fijos de medianas rentas o asalariados de la República como ha ocurrido en los últimos años. Sacrificios para los débiles, sacrificios para las clases medias y populares, pero en dónde están los sacrificios para los otros sectores. Los balances financieros del año pasado presentados en el primer semestre de 1981 indican que, en contraste con la totalidad de los

sectores de la economía, el sector financiero obtuvo rendimientos superiores al 45 y 47 por ciento de utilidades sobre sus capitales. Así no se construye ni mucho menos una sociedad solidaria, así no se pueden manejar las desigualdades y los problemas sociales y económicos que vive la nación. El poder en Colombia no lo tiene el pueblo, lo tienen otros intereses que manipulan la dirección del Estado, condicionan sus determinaciones defienden sus monopolios y aprovechan sus ventajas.

Asistimos a la agonía de una época histórica porque las fórmulas políticas, sociales y económicas aplicadas en nuestra sociedad ya no sirven, no interpretan las características reales de la nación y no se ha hecho el proceso de reflexión colectiva necesario para diseñar las nuevas fórmulas políticas, económicas y sociales, es decir, las fórmulas que organicen este país en los últimos 20 años del presente siglo y lo preparen para afrontar el próximo siglo cuando apenas nos faltan 19 años para llegar a él, tiempo demasiado limitado para conseguir las transformaciones que requiere este país si quiere tener una voz respetable y significativa ante el resto del mundo. Sólo que, como lo hemos dicho también citando la frase de Gramsci, estamos en un momento en el cual "lo que debe morir no ha muerto y lo que debe nacer no ha nacido". Cada colombiano tiene que escoger su camino y su responsabilidad, si se coloca al lado de lo que debe morir en esta sociedad como sistema de instituciones, como mentalidad, como actitud política para organizar los intereses colectivos, o si se ubica, como lo han hecho todas las personas que están en este recinto, al lado de lo que debe hacer para crearle verdaderamente el futuro a la República.

La paz

Lo primero que proponemos es la paz, una paz que demanda en este momento mucha grandeza y generosidad entre todos los protagonistas de la vida nacional. Una paz que hace muchos años busca la República. Que el Frente Nacional les ofreció a los colombianos y que en parte logró, pero la paz obtenida por el Frente Nacional es la paz burocrática y no la paz social que sigue pendiente en nuestra República. Los caminos de la paz no son fáciles, pero es nuestro deber intentarlo con toda

la imaginación y con toda la entereza indispensables para que podamos defender la vida de miles de colombianos que pueden ser sacrificados de nuevo en medio de los conflictos que se están planteando y que de no organizarnos pueden asolar a la República. Creemos en esa paz y proponemos que la haga el Gobierno sin renunciar naturalmente a sus obligaciones institucionales, como no renunció Alberto Lleras en 1958 cuando hizo la amnistía general para conseguir la reconstrucción de este país, como tampoco condujo al caos Gustavo Rojas Pinilla en 1953 cuando ofreció la amnistía a quienes pudieran estar involucrados en los conflictos de mediados de siglo. La paz supone esa amnistía y buscarla es obligación de todos. La obligación es del Gobierno, es también de la nación entera incluidos quienes resolvieron ir a la subversión y ahora han ofrecido retornar para participar en el debate normal político de la República. Debe haber sinceridad y buena fe de parte de todos. Y nosotros nos hemos ofrecido para contribuir al desarrollo de ese proceso, para hallar las vías de esa buena fe recíproca y general que conduzca a la reconciliación.

Necesitamos esfuerzos de todos y serenidad de todos. Como demócratas y como liberales condenamos todo acto terrorista, no estamos de acuerdo de ninguna manera con la violencia. Sabemos que además es contraproducente, genera un fortalecimiento de las fuerzas de derecha, como nos lo enseña la experiencia de los países de América Latina que han vivido conflictos de esta naturaleza. Pero como liberales también creemos que hay que diseñar caminos para que esa paz no se vaya a construir tan sólo después de abrir muchas sepulturas a todo lo largo del territorio nacional como parecen pretenderlo en algunos círculos del gobierno. No puede ser la represión ciega el camino para manejar estos conflictos. Deben ser las fórmulas políticas y en ello insistiremos todo lo que sea indispensable para conseguir la reconciliación en el país. Insistiremos también en medidas concretas sobre las cuales muy poco se habla, pero que es importante tratar con la mayor sinceridad ante los colombianos. Quien haya recorrido pedazos del Caquetá o zonas del Carare en Santander, o pedazos de Urabá en Antioquia sabe que una de las causas de esa violencia rural está en la incertidumbre de los títulos de propiedad sobre las tierras porque miles de colonos que no encuentran una respuesta a sus necesidades en el resto de la organización

económica del país tienen que irse a tratar de abrir nuevos territorios a la agricultura colombiana, a tumbar monte, como ellos dicen, para civilizar tierras y abrir parcelas. Pero cuando lo hacen llega otro tipo de intereses: asesinan a los campesinos que han hecho esa apertura de parcelas y nadie responde por esas vidas ni nadie responde por esas tierras en zonas tan fundamentales del país. Por el contrario, para angustia de todos, y no lo quiero señalar como un cargo general pero sí como un riesgo grave, hay militares en retiro y en servicio activo que compran tierras en zonas de violencia, lo cual pone en peligro la imparcialidad y la delicadeza de sus actos en esos territorios. Eso ocurre en San Vicente en Santander y cerca de Cimitarra en otras zonas de Santander, y eso sucede en otros territorios del país. Se necesita una legislación que prohíba todo tipo de compraventa de bienes raíces por parte de miembros de las fuerzas armadas y de cualquier autoridad política en zonas de violencia. Y se necesita un esfuerzo resuelto del Incora para titular esas tierras y darle estabilidad a la propiedad de esos esfuerzos de los campesinos colonizadores. Buena parte del problema comienza por ahí. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros de las fuerzas armadas comparte estas preocupaciones. Yo creo en la necesidad de defender nuestros ejércitos, de fortalecerlos en todos los sentidos siempre y cuando estén sometidos fielmente a la Constitución y a las leyes que les proporciona la fuerza que ellos ejercen bajo la voluntad de los colombianos. Necesitamos fortalecer a nuestros ejércitos para defender nuestras fronteras y tener la seguridad de que podrán actuar libres de los compromisos y problemas creados por los actuales problemas de orden público.

El gobierno ha dicho que no al diálogo, no a la búsqueda de fórmulas para la paz. El presidente Turbay así lo ha reiterado en cuatro o cinco reuniones de las últimas dos semanas. Mientras no sea el pueblo colombiano el que vaya a decir que no, nosotros perseveraremos en estas tesis y apelaremos al pueblo colombiano en marzo de 1982 para que nos diga si quiere la paz por medio de fórmulas políticas o si quiere la paz como fruto de una represión indiscriminada y ciega como lo piensan en el actual gobierno. Se habla de consultas populares, la primera de ellas debe ser para esto: que el pueblo diga cómo quiere la paz, que el pueblo exprese su consentimiento para la

apertura de nuevos caminos a la reconciliación de los colombianos. Luchemos amigas y amigos del Nuevo Liberalismo con todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir esa paz sin desconocer las responsabilidades del gobierno, pero sin humillar como lo pretende el gobierno a quienes han dicho que están dispuestos a entregar las armas y entrar a la vida normal política de la República. Esa es nuestra primera propuesta, y creemos que toda persona que quiera someterse al juicio popular para definir quién será el próximo Presidente de la República, debe también precisar ante el pueblo colombiano sus criterios sobre este asunto. Cualquier pronunciamiento del Nuevo Liberalismo en materia de candidaturas estará subordinado a una definición clara y rotunda sobre estas materias. No nos pueden pedir que respaldemos opciones políticas que no se definan sobre esta clase de asuntos y que no contribuyan a la reconciliación entre los colombianos. Yo quiero solicitarles a los grupos alzados en armas que suspendan toda actividad violenta a la espera de la voluntad del pueblo colombiano en marzo próximo. Es cierto lo que usted acaba de decir, senador Pardo Parra, obraremos como garantía de esa paz, estamos dispuestos a concentrar todas nuestras energías en ese propósito.

Los recursos naturales: carbón y petróleo

El segundo tema fundamental ya ha sido enunciado por los senadores Pardo Parra y Rodrigo Lara. Queremos llamar la atención de todos los colombianos sobre la importancia del problema de los recursos naturales, especialmente los recursos naturales no renovables que forman parte de nuestra riqueza minera. Hace dos meses anunciamos que el Nuevo Liberalismo se comprometía con el pueblo colombiano a luchar por la revisión de todos los contratos sobre recursos naturales suscritos con empresas transnacionales. Es bueno repetir hoy los motivos de esa proposición. Creemos que en el mundo de hoy es imposible prescindir de la tecnología y el capital internacional. Pero pensamos que toda negociación con ellos debe hacerse sobre la base de la dignidad y la justicia de las relaciones para interpretar cabalmente los intereses del país. Sabemos que ellos tienen derecho a utilidades, no se las vamos a negar porque entendemos que de otro modo no vendrían. Pero ése es un problema diferente del que se está discu-

tiendo ahora cuando proponemos la revisión de los contratos relacionados con los carbones de El Cerrejón y cuando proponemos como lo hacemos, desde ahora, la revisión también de los contratos relacionados con las riquezas petroleras del país. Esta semana el señor ex presidente Alfonso López Michelsen y el señor presidente Julio César Turbay Ayala rompieron un silencio de un año sobre el contrato de El Cerrejón. Hace once meses todos los colombianos buscábamos por una u otra razón, datos, informaciones sobre ese tema y los doctores López y Turbay habían guardado silencio. ¿Ahora han hablado para defender qué? Para defender lo que ellos hicieron, para justificar sus decisiones, bienvenidos al debate, después de once meses de silencio ya era hora de que explicaran lo que habían hecho, que dieran razones sobre los motivos de su determinación. Sólo que esas razones no aparecen todavía. El doctor López y el doctor Turbay han querido aprovechar un libro escrito por el doctor Andrés Restrepo Londoño acerca de los carbones de Colombia para decir que ya todo está aclarado. No hay tal, no todo está aclarado en ese libro. Y la respuesta del presidente Turbay, de sostener que esto tiene razones políticas, la aceptamos por razones distintas a las que él cree. Claro que es político definir si una nación define o no sus recursos naturales. Claro que es político decidir si una nación aprende a negociar o no con empresas transnacionales. Claro que es político establecer si las relaciones entre Carbocol y la Exxon son de igual a igual cuando Colombia ha aportado la mitad de la inversión necesaria para explotar esa mina y va a aportar también la totalidad del carbón que allí será extraído. No nos oponemos a que se explote ese carbón. Obviamente que no. No nos vamos a oponer a que se aproveche esa riqueza. Pero no aceptamos en las condiciones en que esto ha sido pactado y menos con ese comportamiento del gobierno que improvisa sus determinaciones, hasta el punto de que hace menos de dos semanas cambió por cuarta vez al gerente de Carbocol, agravando la inestabilidad en el manejo de la institución. Como el doctor Copete, gerente de Carbocol no se prestó a la manipulación clientelista de los cargos técnicos y administrativos de esa empresa, le pidieron la renuncia y lo hicieron salir después de catorce meses de desempeño en el manejo de una de las empresas a cuyo cargo está buena parte de las principales responsabilidades en la política del carbón de los próximos años. El problema de El Cerrejón no es únicamente el del contra-

to. Lo que está en discusión es el manejo de las empresas del Estado; el comportamiento mismo del Presidente y los Ministros en la dirección de ese organismo que representa a todos los colombianos en ese contrato, el desarrollo de la carboquímica para garantizarle a Colombia que el carbón no sólo servirá para extraerlo y exportarlo sino que también será posible aprovecharlo en el desarrollo eléctrico nacional y en la transformación industrial de la Costa Atlántica del país con su riqueza carbonífera. Todo eso está de por medio en este debate y aún carece de respuestas claras, organizadas y metódicas de parte del actual gobierno nacional.

En el caso del petróleo el problema es mucho más importante de lo que creemos los colombianos. Hemos sido deficitarios en los últimos años, pero el país, según todos los indicios que se multiplican día tras día, tiene una riqueza petrolera extraordinaria que será localizada en el curso de la presente década. Localizada, merced a contratos en los cuales no se ha incluido una cláusula de salvaguardia para los intereses nacionales. Contratos suscritos en condiciones tales, que si el yacimiento es pequeño las condiciones para Colombia son las mismas que si el yacimiento llega a ser de gran magnitud. Corremos el peligro de que aparezcan yacimientos de 30 mil, 50 mil, 100 mil, 120 mil y quizás más barriles diarios, negociados por nuestro país, sin tener en cuenta esas escalas de producción y la regalía proporcional a tales índices de producción que puedan darse. Queremos también llamar la atención del país sobre esto, porque la Exxon va a invertir alrededor de cinco mil millones de dólares en el curso de la presente década en labores de exploración y explotación de petróleo en nuestro país. Necesitamos en parte esas sociedades, eso es cierto, pero los términos de negociación con ellas tienen que cambiar y debe haber garantías expresas para los intereses nacionales. No somos ni mucho menos chauvinistas hostiles al extranjero pero sí somos decididamente nacionalistas en la defensa de este tipo de intereses. Dice el gobierno que no ha habido otro contrato mejor que el de El Cerrejón. Yo quiero que nos muestren otros contratos del resto del mundo. Que nos muestren contratos firmados después de 1977 y contratos sobre volúmenes de producción del orden comparable al de Colombia de 15 millones de toneladas. Porque no nos sirven para hacer comparaciones los contratos

firmados en 1974, 72 ó 70 sobre carbón. En esa época el panorama del carbón en el mundo era muy diferente. Luego es un sofisma decirle al país que no hay contratos mejores. Pues no puede haberlos si se refieren a contratos del 74 ó 73 para atrás y no son comparables si se trata de minas de uno, o programas de explotación de dos o tres millones de toneladas. Porque las minas más grandes del mundo, hoy, producen siete y medio u ocho millones de toneladas y El Cerrejón comenzará con 15 millones de toneladas. No nos podrán mostrar ese contrato. Como tampoco nos podrán mostrar contratos mejores de otros países para las compañías extranjeras en el campo petrolero. He tenido el cuidado de examinar un poco esta legislación y me atrevo a decir lo siguiente: excluidos los países petroleros de la OPEP que obviamente tienen condiciones muy estrictas para las compañías extranjeras al comparar 20 países diferentes de ellos, resulta que tan sólo el Congo le da condiciones más atractivas a las empresas extranjeras que lo que hace el gobierno de Colombia. Y que nos muestren contratos en petróleo ahora, en los últimos años después del cambio en el panorama petrolero mundial, que indiquen que nuestra política es hostil a las compañías petroleras. No lo es, es la más benévola, la más complaciente, la más sumisa, sin necesidad, y eso se deriva en amenaza seria para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales porque todo ese petróleo, ese carbón y los demás minerales nos pertenecen a la totalidad de los colombianos y son condición fundamental de las políticas de desarrollo de los próximos años. La minería y el petróleo van a ejercer el liderazgo en la economía colombiana dentro de muy poco tiempo. Van a sustituir en ese papel hasta cierto punto al café. Antes de 10 ó 12 años Colombia recibirá más divisas por su petróleo y por su carbón de lo que pueda recibir por su café. Todo eso da la medida de lo estratégico de estos sectores, de la importancia de su análisis y de la necesidad de que esos temas también entren en el escenario del debate político y haya pronunciamientos claros de parte de los aspirantes a la dirección del Estado como Presidente de la República o como miembros del Congreso.

Tampoco nos podrán pedir que respaldemos una eventual candidatura liberal mientras no se nos aclaren los criterios de los posibles candidatos acerca de estos temas. Si esos

candidatos dicen que se niegan a modificar el contrato sobre El Cerrejón en una coma siquiera, o se niegan a revisar la política petrolera del país no para desconocer ni mucho menos a las empresas transnacionales, pero sí para fijarles límites precisos a su acción y garantías reales a los colombianos sobre su control. Si no lo hacen los candidatos, no nos pueden pedir que los acompañemos en contra de lo que nos indica nuestra propia conciencia.

El derecho a la información

Desde hace varios años, también, hemos reclamado el derecho a la información en Colombia. Hemos denunciado la manipulación que se hace de la conciencia de los colombianos a través de la televisión y los demás instrumentos modernos de comunicaciones. Noticieros serviles del gobierno que hacen una censura y se aplican autocensura, no pueden ser el medio de comunicación entre más de 12 millones de colombianos todos los días. Hemos solicitado que se revise ese tema y que el partido liberal diga muy claro cómo va a garantizar el derecho a la información de los colombianos o si, por el contrario, dirigentes importantes del partido van a mantener sus ventajas en la televisión nacional para monopolizar los sistemas de comunicación entre los colombianos. La libertad es un valor que se renueva día tras día de la misma manera que se renuevan los instrumentos de opresión y de tiranía en la evolución de los seres humanos. Y la antigua libertad de prensa que fue la causa de tantas luchas de los más importantes conductores del liberalismo en el siglo pasado y en la presente centuria, ya no está amenazada tanto por lo que ocurra en la prensa impresa cuanto por lo que suceda en la televisión estatal que nos pertenece a todos los colombianos pero que hoy se maneja también dentro del marco de los privilegios y prebendas clientelistas derivados de la conquista del poder. Y ahí está la nueva licitación de televisión poniendo en evidencia los riesgos que rodean a la televisión colombiana. Demandamos del posible candidato liberal las mismas explicaciones sobre el problema del derecho a la información, si es que pretenden tener nuestro respaldo.

¿De quién es el Estado?

Todo esto, la paz, los recursos naturales, la información libre y democrática son requi-

sitos de una tarea de fondo que compromete la existencia misma del liberalismo. Y esa tarea es la de construir en serio la democracia política, social y económica en este país. O de lo contrario ese partido podrá conservar su nombre pero habrá traicionado sus ideales y sus responsabilidades con esta nación. Cuanto dijo el senador Pardo Parra sobre las dimensiones de las tareas liberales de hoy, naturalmente lo comparto y lo apoyo con la misma sinceridad de convicciones que él expresa. Definir de quién es el Estado, si el Estado es de los gremios, si el Estado es de los militares, si el Estado es de los grupos de presión, si el Estado es de los grandes conglomerados financieros o si el Estado es de la nación colombiana, sigue siendo el problema básico del examen político nacional.

La crisis liberal

Sabemos en el Nuevo Liberalismo que estas tareas ni son fáciles, ni se desarrollan en muy poco tiempo. Son procesos, son acontecimientos históricos en donde un pueblo demuestra su conciencia y su madurez. Nosotros creemos en la capacidad de nuestro pueblo de responder a esto así haya como hay zonas vulnerables al clientelismo y a la prebenda. Más de seis millones de colombianos no se están expresando hoy políticamente y los cinco millones que lo hacen, en buena parte están condicionados o por el chantaje del poder burocrático o por la permanente alusión al miedo de que se descompone la República si acaso se intenta la creación de nuevos caminos. Buscamos a los hombres y a las mujeres independientes de Colombia. A los que estén dispuestos a hacerle frente a estas tareas históricas de alcanzar la paz en la República, de defender la soberanía en el territorio nacional y en todos los recursos, de conseguir el grado de civilización político indispensable para que nuestro pueblo decida sus conflictos no mediante la fuerza sino por medio del debate político dentro del marco de la Constitución.

El liberalismo afronta una profunda crisis desde hace largo rato. Nosotros empezamos a denunciarla y le advertimos al partido desde 1976 que por donde iba corría el peligro de caer en el abismo. Hace un año los señores ex presidentes propusieron un camino para reconstruir al partido lo cual suponía una

tarea con tres objetivos simultáneos y complementarios. De un lado, las reglas de juego para la elección del candidato a la Presidencia de la República. En segundo término, la definición ideológica del programa que comprometería las energías de ese futuro mandatario en nombre del liberalismo para el próximo gobierno y durante sucesivas administraciones. Y en tercer lugar, la organización indispensable para asegurar el cumplimiento de ese programa y la vida auténticamente democrática dentro del partido liberal. Así nos llamaron los señores ex presidentes al proceso. Y concurrimos a él de buena fe. Deseando la reconstrucción del liberalismo, esperando que todo ello por responsabilidad de los miembros del partido podría tener lugar. ¿Cuál es el balance? En cuanto a la ideología, poco, por no decir nada ha aparecido en los otros escenarios del partido. El documento del doctor López Michelsen, no pasa de ser una explicación de los vacíos y los errores de su administración, pero no es un hito para el partido liberal, no es un hito para el partido liberal por todo lo que allí omite, por todo lo que allí ignora. No compartimos la manera como el presidente López entendió el problema sindical del país. Claro está que creemos que el sindicalismo nacional debe tener un proceso de autocrítica para ser un protagonista más eficaz y más dinámico en el debate entre todos los sectores colombianos, no queremos un sindicalismo egoísta refugiado en privilegios para unos cuantos, sino un sindicalismo que tenga la visión integral del proceso económico y social del país para colocarse al lado real de todos los trabajadores. Pero el presidente López no lo entiende así y prefiere desconcepcionar a los sectores sindicales cuando la responsabilidad liberal, después de haber sido el partido liberal el que generó el proceso de transformación sindical del país, debe ser darle a ese sindicalismo los elementos informativos, las nociones adecuadas para que defiendan las clases trabajadoras del país y tenga un panorama responsable de todas las relaciones económicas entre los colombianos. El doctor López prácticamente ha ignorado el problema energético nacional y lo ha reducido a tres frases en su documento, cuando ahí está uno de los más grandes retos; como ha ignorado el proceso industrial del país y el proceso agropecuario, cuando ahí están las claves de las posibilidades de creación de empleo para los colombianos. Pero miren la paradoja, salvo nosotros que nos tomamos el trabajo de leer ese preámbulo, de analizarlo, de discutirlo, de escribir sobre él, los demás sectores del parti-

do se limitaron a exaltarlo como una síntesis nueva de la verdad revelada para tratar de que el partido no deliberara sobre los grandes problemas y las dificultades que vive la nación.

¿Dónde está el debate liberal sobre la paz?, ¿dónde está el debate liberal sobre los recursos naturales?, ¿dónde está el debate liberal sobre el derecho a la información?, ¿dónde está el debate liberal sobre los nuevos elementos de la democratización de Colombia? Pues aquí está, en medio de las fuerzas populares del Nuevo Liberalismo donde exista conciencia sobre esos problemas y el afán por responderle a la República. La organización liberal no existe. Todo se reduce a la realización de asambleas cautivas sin ninguna deliberación y el comportamiento es anárquico en las corporaciones públicas. Las reuniones de los directorios departamentales prácticamente se acabaron y en donde se reúnen algunas supuestas directivas no han pasado de sesiones esporádicas sin definir criterios, dedicados tan sólo a aprobar mociones de aplauso, pero en ningún caso a examinar lo que le sucede a las grandes regiones de Colombia y lo que le ocurre a la nación entera. No hay organización. Y en cuanto a candidato, lo que estamos viendo es un proceso habilidoso y ambiguo por imponerle al país una candidatura conformista o continuista que no interpretaría los anhelos de cambio que reclama la República y que pondría en peligro a la larga la supervivencia del partido liberal. Hace rato lo hemos advertido serena y respetuosamente. Estamos dispuestos a ayudar en un proceso liberal siempre y cuando lo que de él se desprenda no vaya a ser una solución continuista y conformista. Ayer el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo acordó confiarnos a los senadores Lara Bonilla, Pardo Parra y a mí la definición de estas materias con base en los criterios de análisis que estudiamos durante toda la tarde. No vamos a respaldar fórmulas conformistas ni continuistas, vamos a vigilar responsablemente el proceso liberal. Si encuentra el partido la opción que le resuelva el conflicto entre sus matices en términos respetables para nosotros, sobre la agenda que hemos planteado, estamos dispuestos a respaldar un candidato de unión liberal. Pero si no es así, y lo que surge de la Convención de Medellín o desde antes de la Convención de Medellín, es una solución emanada de la voluntad de una clase política que busca defender apenas sus privilegios e intereses sin interpretar las necesida-

des de la nación colombiana, afrontaremos nuestra responsabilidad para darle al país opciones diferentes y producir replanteamientos oportunos en la política liberal.

El Nuevo Liberalismo no es un movimiento creado para una coyuntura electoral. El Nuevo Liberalismo es una nueva fuerza política que emana de los más profundos sentimientos del pueblo colombiano y especialmente de las grandes masas liberales para encontrar una nueva interpretación de esta sociedad. Ello no nos excluye de las responsabilidades inmediatas, pero entendemos que la tarea a cargo de todos y cada uno de los miembros del Nuevo Liberalismo es una tarea que nos impone deberes desde hoy a lo largo de la presente y de la próxima década. Paso a paso avanzará el Nuevo Liberalismo hacia el poder. Paso a paso preparará sus criterios, preparará sus programas, preparará sus políticas, preparará sus equipos humanos y creará en la conciencia del pueblo colombiano el sentido de las prioridades que tienen los nuevos y futuros problemas de Colombia. Problemas reales, no los que maneja una clase política dedicada a repartirse burocracia a espaldas del pueblo colombiano. Problemas concretos expuestos en nuestro documento nacional y de los cuales depende la verdadera interpretación de lo que le está ocurriendo al país. Nuestra tarea es construir la nueva sociedad. Invoco en este escenario en primer lugar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán, que salido de las entrañas del pueblo colombiano proclamó sus preocupaciones por la gran crisis social del país, propuso unos caminos y fielmente luchó por ellos hasta llegar al holocausto para dar testimonio de su sinceridad y de su fidelidad a lo que le decía el pueblo colombiano. Y doscientos años después invoco también a José Antonio Galán y a los Comuneros que encendieron la antorcha de la justicia social en nuestro país y que en defensa de lo que predicaban con la intuición de un pueblo campesino en aquella época, también marcharon al holocausto para ratificar su fidelidad a lo que decían comprometidos en todo lo que fuera necesario por servir los valores e intereses colectivos. Eran los hombres que intuían la independencia. Fieles a ellos, hoy en nuestra época, dentro de nuestra circunstancias, con los instrumentos a nuestro alcance continuamos esa lucha dispuestos a dar, si es preciso, los mismos testimonios de sinceridad y fidelidad a lo que proclamamos ante el pueblo colombiano.

La candidatura presidencial

**Palabras pronunciadas por Luis Carlos Galán
al aceptar la candidatura presidencial
el 18 de octubre de 1981 en la ciudad de
Rionegro Antioquia**

Colombianos:

En este histórico recinto, donde deliberaron, en 1863, representantes de todas las regiones de Colombia para proclamar su fe en la libertad y los derechos fundamentales del hombre, quiero manifestar a todos mis compatriotas que asumo la responsabilidad que me ha confiado la Asamblea Nacional del Nuevo Liberalismo de someter mi nombre a la consideración del pueblo colombiano, como candidato a la Presidencia de la República para el período de 1982 a 1986.

Después de recorrer durante los últimos años todos los departamentos de Colombia y luego de meditar serenamente sobre la situación nacional y el significado de las demás opciones políticas que se han presentado o se presentarán a la decisión de los colombianos, considero que tengo el deber de aceptar la bandera que me han ofrecido los miembros del Nuevo Liberalismo para que se verifique el apoyo de la nación a los postulados que dieron origen a nuestro movimiento en 1979.

Tales postulados son los siguientes: reorganizar la democracia colombiana; unificar a la

nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros compatriotas; asegurar el papel histórico de nuestro país en la evolución de América: acrecentar los recursos materiales y espirituales del pueblo colombiano y en especial redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos oprimidos por la miseria; conquistar e integrar a la vida nacional la totalidad del territorio; reivindicar el derecho de los colombianos a manejar y controlar los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el carbón y los demás minerales del subsuelo. Devolver al ser humano su valor como eje de la sociedad, por encima de cualquier requerimiento material que lo sacrifique aun más en aras de un teórico progreso; lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria de tal manera que todos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales en lo físico y en lo espiritual.

Entendemos que estos grandes propósitos nacionales sólo serán posibles si recuperamos la dignidad de los poderes del Estado; si modernizamos la organización de las distintas colectividades políticas; si transformamos la vida político-administrativa del país dentro del marco de una nueva ética social y si aseguramos que el poder de intervención del Estado tenga como fin fundamental garantizar a la nación que Colombia nos pertenece a todos y no a unos pocos privilegiados que aprovecharon la debilidad de nuestras institu-

ciones democráticas para conseguir las más grandes concentraciones de poder económico y político que haya registrado nuestra historia.

Asumo la responsabilidad de dirigir esta cruzada renovadora de la sociedad con plena fe en la capacidad de los colombianos para lograr un gran destino histórico. Inicio esta nueva etapa política con inmenso entusiasmo frente al porvenir porque estoy seguro del apoyo leal, abnegado y eficaz de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Sé que nuestra misión nos demandará superar innumerables obstáculos y afrontar toda suerte de retos a nuestra capacidad física, intelectual y moral, pero, esas dificultades serán recompensadas por la inmensa satisfacción de entregarles a nuestros hijos una patria más grande, justa y próspera.

Quiero manifestar a todos ustedes que en la defensa de estas banderas no capitularemos ni haremos transacciones con quienes se oponen a la renovación de Colombia. Tampoco transigiremos con quienes pretendan utilizar en forma egoísta o por oportunismo las fuerzas de opinión pública que nos acompañan y las que se sumarán a nuestro movimiento. No nos detendremos hasta realizar la tarea completa durante todos los años que sean necesarios para construir la nueva Colombia.

A lo largo del proceso histórico que se avicina, ahora y en las circunstancias que puedan surgir en este decenio y en los próximos, advertiremos lealmente a nuestro pueblo sobre los peligros concretos que amenazan su porvenir, pero no apelaremos a la estrategia del miedo para convocar a nuestros compatriotas, como tantas veces se ha hecho en otros episodios de la vida nacional, sino a su capacidad de raciocinio y a su derecho a mirar con esperanza su propio futuro, así como el de sus hijos y sus familias.

Creemos en la disciplina y la autoridad que surgen de la persuasión racional en contraste con quienes todo lo reducen a la represión ciega e indefinida de los inconformes y los rebeldes. A quienes se limitan a predicar la disciplina dentro de los partidos políticos, así ello signifique el atropello de las convicciones más respetables de las gentes, queremos decirles que hay una disciplina más alta que es la disciplina dentro de la nación. Creemos como Benjamín Herrera que el individuo debe colocar a la pa-

tria por encima de sus conveniencias y de los partidos. Pensamos que los gremios, los sindicatos, las ciudades y las regiones ya han comprendido que nadie debe olvidar la suerte colectiva. La ética social que auspiciamos supone la austeridad de los gobernantes y de la ciudadanía y el sentido de la responsabilidad colectiva que no debe tolerar los egoísmos, los peculados y el tráfico de influencias que amenazan destruir el Estado de Derecho.

Como ha dicho Enrique Pardo Parra, esta candidatura surge de las entrañas del pueblo liberal representado por las gentes honradas y sencillas que han asistido a la asamblea del Nuevo Liberalismo provenientes de todas las regiones del país, pero ésta es, sobre todo, una candidatura de la Nueva Colombia, la que no está sometida a las maquinarias clientelistas, la que espera en los claustros estudiantiles, en las fábricas, en los campos y en la propia administración pública que le respeten su derecho a participar en el engrandecimiento de la patria. Es la Nueva Colombia que desean los compatriotas veteranos que nos acompañan con su experiencia y su desprendimiento después de muchos años de luchas y sacrificios por la consolidación de la democracia. La Nueva Colombia que anhelan las mujeres y que deben construir, sobre todo, los jóvenes quienes, sin menospreciar los valores fundamentales de la historia nacional, comprenden que vivimos una época revolucionaria y que a las actuales generaciones les corresponde modernizar a la nación con los poderosos instrumentos que proporciona a los hombres la transformación científica de nuestro siglo.

A las juventudes y a las mujeres quiero hacerlos un llamamiento especial porque su idealismo y su generosidad son indispensables para transformar el país. Los jóvenes no han participado en la definición de las leyes que nos gobiernan y no pueden aceptar que se les imponga un sistema social que niega los derechos fundamentales a grandes sectores de la población. Las mujeres han decidido el rumbo de la sociedad en las horas cruciales y éste es precisamente, un período de reajustes en las instituciones y los valores colectivos que sólo afrontaremos con el concurso de su capacidad de lucha, su trabajo y su apoyo intelectual y emocional.

Partimos del sitio que alcanzaron seis generaciones dedicadas, desde la independencia, a la tarea apasionante de construir la na-

cionalidad colombiana. Continuaremos con nuestros propios criterios y según las circunstancias de nuestro tiempo esa labor que siempre deberá respetar las identidades y valores culturales de las grandes regiones que integran nuestra patria. Para nosotros la nacionalidad es esencialmente una obra del espíritu y por eso esperamos el apoyo de todos los educadores de Colombia y de los trabajadores de la cultura que interpretan y expresan el alma nacional.

El Nuevo Liberalismo existe desde hace dos años, pero ahora tiene organización y promotores en todos los departamentos y en varias intendencias y comisarias. Debemos constituir, lo más rápidamente posible, comités del Nuevo Liberalismo en todos los municipios, barrios y veredas de Colombia para una tarea política permanente, impulsada e inspirada por las bases populares adecuadamente informadas y organizadas.

He solicitado al senador Rodrigo Lara Bonilla que asuma la dirección nacional de la campaña presidencial y, de común acuerdo con él, en los próximos días integraremos los equipos coordinadores y los comités asesores que tendrán a su cargo la movilización nacional, así como las relaciones con las otras organizaciones políticas que decidan apoyar mi candidatura a la Presidencia de la República.

Quiero recordarle al señor Presidente de la República con todo el respeto que merece su investidura, que tiene la obligación constitucional de asegurar elecciones libres y que todo lo que hagan sus subalternos por ayudar al candidato o a los candidatos vinculados a los actos de su gobierno, irá en contra de la democracia colombiana y por lo mismo de la paz y la convivencia nacionales. Deseo manifestar al señor candidato de las actuales mayorías parlamentarias a quien ha dado apoyo el Presidente de la República, que no le disputaremos los votos controlados por las maquinarias regionales porque vamos a la búsqueda de la inmensa mayoría de colombianos que nunca han votado o que rara vez lo han hecho o que hace pocos días al contemplar el fracaso del proceso de reorganización del liberalismo, tenían el propósito de no hacerlo.

Desde Ríonegro llamo a los ciudadanos abstencionistas para que respalden estos postulados de regeneración. Llamo a los liberales que no están de acuerdo con la opción presiden-

cial que pretenden imponer mayorías parlamentarias alejadas de los anhelos y necesidades reales de nuestro pueblo. Llamo también a los demás sectores políticos, a los ciudadanos que no están matriculados en ningún grupo o partido; a los sectores democráticos que luchan por la transformación de Colombia dentro de la Constitución y las leyes. Los invito a cooperar en esta misión histórica sin que nadie pierda su identidad política y sin poner condición distinta de la de luchar sinceramente por la nueva Colombia y los postulados fundamentales que nos guían. Llamo a los colombianos olvidados en la soledad y el abandono de sus campos lejanos; a los compatriotas indígenas atropellados en lo más íntimo de su identidad y de sus demás derechos, a las clases medias, presente y futuro de la nación y a los obreros; llamo a quienes han entrado o entrarán en la tercera edad en los próximos años en medio del desorden del sistema de previsión social; a los escépticos y a los optimistas; a quienes conservan la fe y la esperanza y en especial me dirijo a quienes la realidad actual de la sociedad colombiana ha obligado a marginarse de la vida nacional en forma dolorosa y valiente; los invito una vez más a reconsiderar su actitud y a participar, con todos nosotros en la lucha por la construcción de una Colombia nueva que requiere de su coraje y su voluntad de sacrificio.

Con amor por sus gentes y admiración a la raza más trabajadora y creativa de Colombia, expreso al pueblo antioqueño mi profunda gratitud por la forma generosa como acogió en estos días a los compañeros del Nuevo Liberalismo que han venido desde todos los rincones de la República. Desde Ríonegro, donde se dio una de las más elevadas muestras de idealismo en nuestra historia, como acaba de señalarla Jesús Vallejo en su valeroso discurso pronunciado como antioqueño y como liberal, saludo a toda Colombia desde San Andrés y Providencia hasta Leticia; desde la Guajira hasta Nariño, desde el Putumayo hasta Cúcuta y desde el Chocó hasta Arauca. Saludo con especial aprecio a mi tierra natal, a Santander, con emocionado reconocimiento porque fueron sus gentes quienes me otorgaron por primera vez el derecho a representar al pueblo colombiano. En nombre de la Asamblea Nacional del Nuevo Liberalismo asumo la tarea de conquistar el respaldo de las mayorías de Colombia en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1982. Por Colombia, siempre adelante ni un paso atrás y lo que fuere menester sea.

Hacia un nuevo modelo de Sociedad y Estado

Intervención de Luis Carlos Galán en la
Segunda Convocatoria Nacional del
Nuevo Liberalismo el 2 de diciembre de 1981
en el Hotel Tequendama

Después de recorrer durante cuarenta y cinco días la mayor parte del territorio nacional y de tomar contacto con el pueblo colombiano en todos sus estamentos sociales para llevarle el mensaje del Nuevo Liberalismo, puede afirmarles, sin vanas ilusiones, que avanzamos con paso firme hacia la consecución de las metas que nos hemos propuesto en esta campaña de renovación nacional.

Estamos logrando sacudir a Colombia de la indiferencia en que se hallaba, para que el pueblo tome conciencia de que el poder decisivo de los destinos nacionales está en sus manos y no en los cenáculos de los poderosos y las camarillas de los jefes del clientelismo. El país estaba hastiado de la farsa y engaño de los caciques de turno y de la corrupción reinante. En todas partes he palpado el rechazo a la convención de septiembre que traicionó el espíritu liberal y ultrajó la dignidad del partido. Por doquiera he podido observar el repudio al candidato que frustró las esperanzas del pueblo y desconfía ahora de los valores de su partido para buscar el amparo de organizaciones internacionales extrañas a la vida nacional e indiferentes con la suerte de

nuestro pueblo. Como si el partido liberal no fuera capaz de interpretar la realidad del país y de proponer soluciones eficaces a los graves problemas que afronta Colombia; como si las nuevas generaciones carecieran de capacidad creadora para buscar alternativas eficaces para nuestro desarrollo integral y estuviéramos condenados fatalmente al coloniaje ideológico de las potencias extranjeras.

Pero también he visto en este recorrido por el país que el Partido está despertando y acoge con entusiasmo y fervor, comparable al de sus mejores épocas, las metas que le propone el Nuevo Liberalismo, para hacer de Colombia una patria próspera, libre, digna y dueña de su destino. En todas partes he visto que el partido quiere merecer el derecho a seguir gobernando a Colombia pero no acepta que lo hagan cómplice de las incoherencias y las corruptelas de voceros abusivos y oportunistas. Por eso las grandes masas liberales e independientes nos apoyan. Este respaldo es espontáneo y sincero, porque no obedece a la manipulación de una cadena radial ni a las artimañas televisivas, ni tampoco es el fruto de coacciones o de manejos publicitarios engañosos y falaces. Decimos la verdad sin esguinces. Buscamos el diálogo con todos y queremos que el nuevo estilo de hacer política tenga como base la verdad y la sinceridad, como móvil y fin el interés nacional y como fuerza de credibilidad la lealtad con los prin-

cipios y la coherencia de la acción con los propósitos y metas que hemos propuesto. No queremos hacer promesas ni ofrecer milagros para recabar el apoyo de la nación a nuestros programas. Tampoco pretendemos posar de Mesías ni resolver en un cuatrenio la problemática nacional. Buscamos crear una nueva conciencia política en la nación y sabemos que esa tarea no se realiza en pocos meses ni en pocos años pero es la clase de labor que justifica el compromiso total que hemos adquirido con el pueblo colombiano.

El Nuevo Liberalismo es una empresa de renovación nacional que implica coraje, estoicismo y un empeño perseverante; que no promete gajes ni prebendas sino que pide a todos los colombianos que quieran acompañarnos en este propósito de salvación nacional un esfuerzo solidario y constante que permita transformar el país sobre bases firmes de convivencia pacífica que sólo pueden lograrse si tienen como fundamento la justicia, como instrumento el trabajo honrado y tenaz y como meta la libertad, el progreso, la cultura y la dignificación y bienestar del hombre.

Nuestro ideal es que los colombianos lleguemos a ser una Nación socialmente equilibrada, donde predomine una clase media fuerte y próspera y las clases proletarias tengan posibilidades reales de ascenso; una Nación donde se progrese sólo por medio del trabajo honesto y productivo; una Nación donde no puedan medrar las mafias, ni los inversionistas parásitos y especuladores que viven de intereses usureros; una Nación donde todos nos sintamos responsables por la buena marcha de la comunidad; una Nación respetada por los demás pueblos del mundo. En una Nación así, la libertad y la paz existirán como fruto de un balance adecuado entre los intereses de la sociedad y los del individuo.

Para ello necesitamos poner freno a la inmoralidad reinante; sanear nuestras costumbres y sistemas políticos; rescatar los valores civiles que nos enaltecían y que hacen la grandeza y el progreso de los pueblos; luchar contra el privilegio en todas sus formas por ser el mayor corruptor y destructor de la democracia; poner nuestra autonomía como nación independiente a cubierto de todas las contingencias; afianzar la unidad nacional y la identidad

cultural de Colombia y de sus grandes regiones; propugnar una democracia integral verdaderamente orgánica y participante; comprender las nuevas dimensiones de la independencia nacional que exigen una política de organización interna de la sociedad capaz de rescatar al hombre colombiano de la miseria, la ignorancia y el temor, mediante la búsqueda del crecimiento económico y el desarrollo social, así como una política de lucha por el cambio en los sistemas de relaciones internacionales para corregir las crecientes y ofensivas distancias entre países opulentos y países atrasados.

Todas estas aspiraciones nacionales dependen de numerosos factores. El primero es la preparación de la conciencia de los colombianos para que acometamos una empresa de esta naturaleza con entusiasmo y perseverancia pues el mejor programa de gobierno se frustrará si la Nación no comprende lo que le proponen sus dirigentes o no está convencida sobre la necesidad de un esfuerzo diario, tenaz, disciplinado y honesto para sacar adelante los propósitos colectivos. La renovación nacional es una responsabilidad de todos y la tarea del gobernante no puede ir más allá de lo que quiera y acepte la conciencia del pueblo. A lo largo de la campaña, en las plazas públicas y en actos especiales me propongo presentar en detalle todas las reflexiones del Nuevo Liberalismo sobre la situación de Colombia y nuestras iniciativas para resolver los principales problemas nacionales en buena parte enunciados en el documento que presentamos desde el dos de junio a la consideración del país. Pienso que sólo con la democratización de la información sobre los principales problemas y recursos nacionales podremos asegurar la supervivencia de nuestra democracia política. Tenemos no sólo un programa nuevo sino una actitud nueva. La Concertación que fracasó en el gobierno anterior y en el actual la haremos nosotros. No repetiremos la triste experiencia reciente de un gobierno que sólo intentó la concertación pocos meses antes de entregar el poder y a raíz de la amenaza de un paro nacional. Tampoco creo que la Nación pueda confiar en los propósitos de enmienda de quien prometió la concertación en su campaña y empezó por dictar los decretos de la declaratoria de emergencia económica cuando apenas acababa de conocer la silla presidencial. Esta noche quiero hacer algunos comentarios sobre la actual situación

socioeconómica para precisar nuestros criterios acerca del modelo económico que creemos más conveniente para la Nación.

Modelos desarrollistas

Hace ocho años, durante la respectiva campaña electoral, se enfrentaron dos alternativas: quienes proponían un modelo desarrollista y quienes, en contra de ello, prometían darle prioridad a la búsqueda del equilibrio social sin sacrificar las metas de crecimiento económico. Ganó las elecciones el candidato que defendía el segundo camino, pero se impuso en el gobierno el criterio del primero no sólo porque ese otro candidato indicó la mitad de los ministros de los gabinetes conformados entre 1974 y 1978, sino porque, además, logró que las políticas económicas fueran evidentemente desarrollistas. La distribución de ingresos, sobre todo en el sector urbano, se deterioró a lo largo del decenio pasado. Es cierto que el ritmo de crecimiento de la economía en el conjunto de la década fue razonable, sin embargo, las estrategias de desarrollo acumularon la riqueza en pocas manos en vez de redistribuirla y hace pocos días el propio candidato del gobierno aceptó abiertamente que durante su administración la riqueza se concentró, en otras palabras, reconoció el predominio del desarrollismo y por lo tanto la mayor desigualdad entre los sectores sociales. La bonanza no fue bien aprovechada para el desarrollo económico y sobre todo fue mal distribuida.

Todos los planes de desarrollo de las últimas administraciones han señalado la necesidad de una política social que busque una mayor equidad en las relaciones económicas entre los colombianos, sin embargo, los resultados concretos demuestran que no ha sido posible ir más allá de las buenas intenciones y a veces el balance ha sido contraproducente. Las clases trabajadoras y las capas medias han tenido que asumir los costos reales de las estrategias de desarrollo pues los asalariados han sido los más afectados por la inflación y por las tendencias a la mayor concentración del ingreso. Existe una visión equivocada del problema socioeconómico del país. En los documentos gubernamentales de los últimos años y en las propias declaraciones del

candidato del gobierno se afirma que es preciso organizar el sector informal de la economía para redistribuir el ingreso entre los colombianos y se dice que ese sector agrupa a los más pobres e inclusive en los análisis previos a la formulación de los planes se afirma que allí está una parte importante del 50 por ciento más pobre de la población. Nadie quiso reconocer que el problema fundamental es el bajo nivel de los salarios. Por el contrario, se dijo en 1975 y en 1979 y ahora se insiste, que la política social se debe orientar hacia las personas del sector informal porque son las menos favorecidas, dejando de lado otras capas, supuestamente más favorecidas como los empleados públicos y lo que el antiguo jefe del MRL llamaba la "oligarquía obrera".

A primera vista el argumento es convincente y resulta atractivo oír hablar de la preferencia por los más débiles con quienes siempre ha estado el partido liberal. Sin embargo, estamos ante una falacia, ante una confusión o, lo que es más grave, ante una estrategia calculada para dividir a las clases populares. Quienes así interpretan la pobreza en el país se guían por una concepción bastante individualista, basada en la simple observación de los trabajadores en forma personal, cuando la realidad que comprueba todo el que dialogue con las gentes de los barrios populares de cualquier ciudad de Colombia es que la pobreza o la riqueza no se dan, en nuestra organización social, a nivel de cada individuo sino a nivel de los hogares. Importantes investigadores de nuestra realidad social han encontrado que cuando se parte del hogar como unidad de análisis, no se encuentra, como patrón general, una separación entre los hogares que subsisten exclusivamente con ingresos provenientes del sector informal y los que dependen del sector formal. En gran medida lo que aparece en las investigaciones es que los ingresos de cada hogar se complementan con el aporte de los dos sectores. Por lo tanto, cuando las políticas económicas tienden a concentrar la riqueza y a deteriorar los salarios, en los hogares se ven obligados a buscar la participación de todos sus miembros en la fuerza laboral para conseguir los ingresos necesarios para la reproducción y mantenimiento de la familia. Unos miembros del hogar, los que pueden, se vinculan al sector formal como asalariados y otros, sobre todo las mujeres, los niños, los

ancianos y los jóvenes, apoyan y complementan los ingresos familiares frecuentemente con trabajos propios del sector informal como el servicio doméstico, la venta de lotería, de cigarrillos, etcétera... El drama de la complementación de ingresos familiares no es sólo de las clases populares sino que se ha extendido a las clases medias que hace unos años podían mantenerse con un solo salario y ahora necesitan el trabajo de varios o todos los miembros del hogar.

En síntesis y en contraste con lo que piensan algunos, consideramos válida la tesis de los observadores que sostienen que no se puede ubicar la pobreza exclusivamente en el sector informal ni se puede pretender resolverla tan sólo con políticas asistenciales dirigidas a él, en detrimento o a expensas del sector formal, pues en buena parte su existencia se debe a los bajos salarios de quienes se hallan en el sector formal. El origen de la pobreza no está como se cree habitualmente en el desempleo mal remunerado como problema estructural de nuestra sociedad. Quitarle a los asalariados para darle a los trabajadores informales es un engaño pues se trata de los mismos hogares. Si bien es cierto que a las zonas más débiles es preciso prestarles asistencia, a los demás hay que mejorarles sus ingresos.

Balance de los planes de desarrollo

Antes de analizar los elementos de una nueva estrategia para lograr la igualdad social y el crecimiento es necesario recordar brevemente los motivos por los cuales no funcionaron las políticas sociales de los planes de desarrollo de los últimos gobiernos cuyos beneficios se concentraron hasta cierto punto en el sector de la construcción y fundamentalmente en el sector financiero. Es verdad que el apoyo a la construcción generó empleo y mayor crecimiento en la economía; sin embargo, al empezar la inflación y al disminuir el salario real, todas las esperanzas se vinieron abajo y aquel plan ya no pudo ser aplicado en forma continua. Los planes del DRI y el PAN a cuyo nacimiento asistí como embajador ante la FAO, tenían una orientación correcta pero no eran planes masivos y su efecto sólo podía ser parcial y pequeño. Coincidieron con un momento de

auge de la agricultura comercial que no redistribuyó ingresos y en el sector urbano hubo un evidente desestímulo a la industria que prácticamente tuvo que soportar la hostilidad del propio gobierno. Entre 1974 y 1978 se creyó en el mercado. El gobierno se redujo a la intervención mínima y prefirió redistribuir ingresos con carácter asistencial. Se habló mucho del 50 por ciento más pobre de la población pero nunca se precisó quiénes lo conformaban y cómo se llegaba a ellos. El plan de integración nacional (PIN) siguió el mismo camino y ha insistido en que el problema de la pobreza se resuelva con criterio asistencial sin reconocer la importancia del problema de los bajos salarios. El PIN tampoco ha contribuido a la igualdad social y su filosofía es esencialmente desarrollista.

La concentración del poder

Como consecuencia de todo lo anterior, en los últimos ocho años hemos vivido los colombianos un doble proceso de concentración de poder público y económico. El terreno que ha perdido la democracia se lo han ganado abusivamente los clientelistas en la burocracia y algunos plutócratas en el sector financiero. La producción pequeña y mediana, salvo excepciones coyunturales, no puede lograr rentas suficientes para compensar las tasas de interés que predominan en el mercado financiero. La especulación y la usura han significado transferencias del sector industrial al sector de la intermediación financiera que no pueden prolongarse indefinidamente sin arruinar al primero y cuando menos se piense se presentará el derrumbe del segundo. Por lo que he oído a los industriales de las ocho primeras ciudades del país, ya llegó el momento en que el empresario comprende que no logra producir la renta necesaria para cubrir el costo efectivo de sus créditos y aun cuando necesita el dinero no puede endeudarse más y por lo mismo tampoco puede recibir los recursos que le ofrecen. Hasta hace poco el industrial tuvo que buscar liquidez en el sector financiero al precio que fuera porque a eso lo obligaba el crédito restringido a la industria, como lo dispuso la política monetaria de las últimas administraciones. Ya no puede resistir más la industria y si no hay una producción que respalde la capacidad de ingreso acumulada, es cuestión de tiempo el desplome de ese sistema especulativo.

En todas las regiones del país se pregunta con inquietud sobre las razones de este crecimiento desmesurado del sector financiero. La verdad es que el Estado no ha sabido controlarlo y seguramente no podrá hacerlo con los criterios ideológicos tradicionales porque su transformación ha superado la capacidad de previsión del sistema político. La inflación, las bonanzas legales e ilegales y las necesidades del sector financiero convirtieron a la década del 70 en el período de mayor auge de ese sector, lo cual hubiese sido bueno si no se hubiera dado el desequilibrio sectorial de la economía. El gobierno siempre ha ido a la zaga del sector financiero, y éste se ha aprovechado de la coyuntura sin límite alguno, para utilizar muchas veces el dinero del ahorro privado, sobre todo de los sectores productivos en general e inclusive de los pequeños ahorradores que buscan protegerse de los riesgos que debería prevenir el sistema de seguridad social si estuviese bien organizado. No sólo no ha contribuido el sector financiero a la igualdad social sino que tal como lo ha comprobado la Nación, en los últimos años generó los grupos monopolistas que concentran la riqueza con los procedimientos irregulares denunciados en el importante informe que presentó a la Comisión III del Senado el grupo de trabajo conformado para investigar el conflicto entre la Comisión Nacional de Valores y el Grupo Grancolombiano.

La lucha entre el gobierno y el sector financiero será desigual mientras aquél no logre conocer los poderes que origina éste. Ya no se trata tan sólo de los bancos, las corporaciones financieras, los fondos fiduciarios o los fondos de inversiones sino de la lista de sofisticados manejos que el gobierno sólo asimila y controla cuando es tarde o por lo menos cuando se han desequilibrado profundamente las relaciones entre las principales actividades. Entre las UPAC de finales de 1972, los certificados de depósito a término de 1974, la liberación de las tasas de interés y las políticas monetarias restrictivas del crédito se crearon mecanismos contradictorios que afectaron gravemente al sistema productivo. El desarrollo financiero que hubo en esta década no contribuyó al desarrollo económico del país y se convirtió en un obstáculo para el conjunto de la economía, además acentuó las desigualdades y creó otros privilegios.

En búsqueda de un nuevo modelo

¿Qué se le plantea, entonces, al país para la presente y la próxima década? Algunos sectores políticos, en la derecha y en los núcleos amigos del actual gobierno, quisieran reproducir en el país los modelos de desarrollo económico basados en las industrias livianas que casi siempre sólo pueden ser rentables si el régimen salarial está represado. Como esta clase de estrategia es incompatible con un sistema democrático, esos sectores políticos miran con interés los "milagros económicos" de ciertos regímenes totalitarios de América Latina en donde es evidente que el costo del crecimiento económico lo pagan las clases medias y populares. Tal como lo advertimos en el documento del Nuevo Liberalismo, en junio último, "a los colombianos se nos quiere plantear una estrategia perezosa y pesimista. Ella consiste en mantener en un relativo estancamiento mientras duren en una primera etapa las reservas internacionales, dedicadas a los consumos alegres y exóticos. En una segunda etapa y una vez liquidadas las reservas, se acudirá al endeudamiento externo hasta llegar a la bonanza carbonífera en el año 1990. Esta opción, que es la que ofrecen el actual gobierno y quienes apoyan soluciones continuistas, implica esperar a que Colombia sea para ese año, 1990, la Venezuela de 1970". Naturalmente nosotros no podemos estar de acuerdo con tales criterios y creemos necesario que en la campaña política actual se haga una confrontación entre las diversas alternativas para que la Nación decida conscientemente qué camino elige el año próximo.

En nuestra opinión es necesario estimular la producción y en concreto la industria de una manera eficiente, de tal forma que permita generar no sólo las ganancias de los empresarios sino salarios altos y adecuados para los trabajadores. Creemos —y aquí está la diferencia con los desarrollistas de siempre y los neodesarrollistas que han orientado los últimos gobiernos— que el crecimiento debe ser una tarea de todos y a favor de todos y no a expensas de unos, concretamente a cargo de los asalariados como ha sucedido en las últimas administraciones. En mi opinión, ni es justo ni es realista que siga la idea de que la mano de obra es y será siempre barata en Colombia. El reto que tiene el país es el

definir un nuevo modelo económico que concilie el progreso de la igualdad social con el crecimiento económico.

Sin que vayamos a caer en la tentación de proponerle al país una fórmula mágica, fácil y rápida, es evidente que Colombia tiene la perspectiva de apoyarse en un sector importante a cuyo cargo puede estar el liderazgo de la economía en los próximos años. Me refiero al sector energético, cuyas posibilidades y factores no han sido comprendidos cabalmente por la Nación y cuyo manejo presenta múltiples fallas en los últimos gobiernos. No sobra señalar, por ejemplo, que el ministerio respectivo ha sido dirigido por seis ministros conservadores y dos liberales tan sólo en el curso de los últimos siete años. Desde hace un año largo he dedicado la mayor parte de mi tiempo a crear conciencia en todas las regiones del país sobre la importancia del sector energético y hoy considero oportuno aludir al tema porque la adecuada explotación de los recursos minerales del país, en especial el petróleo, el carbón, el gas natural y los recursos hídricos, podría servir de base para un modelo de desarrollo que logre al mismo tiempo el crecimiento de la economía y la distribución del ingreso; es decir, que nos permita superar los modelos desarrollistas del último decenio.

Para que esto sea posible, es indispensable no sólo extraer y exportar esos recursos minerales como lo han creído los últimos gobiernos sino transformarlos para que se desarrolle una industria que aproveche las ventajas energéticas en una época como la actual cuando la suerte de la economía mundial depende de la transición entre la era de la energía barata a la energía más costosa de hoy y del mañana.

El poderío energético de Colombia

¿Qué sabemos los colombianos de nuestras verdaderas posibilidades energéticas? Poco, muy poco, prácticamente nada y en cambio son los intereses extranjeros los que siguen con mayor atención este factor vital de nuestro porvenir. Baste decir, a título de información general lo siguiente: al terminar el inven-

tario de los recursos hídricos se ha establecido que podemos tener una capacidad instalada en el sector hidroeléctrico treinta veces más grande que la actual y que tan sólo el Brasil tiene un potencial mayor en América Latina. Esto no lo supieron apreciar los últimos gobiernos que han sido los culpables de los actuales racionamientos eléctricos. En más de setenta años de explotación de nuestros recursos petroleros, apenas hemos explorado una modesta parte de las cuencas sedimentarias donde puede haber riqueza en hidrocarburos, la exploración del resto nos reserva recursos muy considerables y su valor tiende a crecer en la medida en que el mundo ha comprendido que el petróleo se agotará en el curso de pocas décadas; somos, además, el país más rico en carbón de América Latina y tenemos en la Guajira una mina gigantesca y excepcional cuya importancia es de alcance mundial; no hemos decidido la suerte de la mitad del gas natural ya localizado en nuestro territorio y todavía está sin explorar buena parte de las zonas donde puede haber gas; como si lo anterior fuera poco, tenemos uranio y hasta energía geotérmica. La inmensa mayoría de todo este patrimonio, salvo algunas excepciones, pertenece a la Nación y su administración, por lo tanto, depende del Estado. Todos los colombianos somos copropietarios de esta riqueza y de ello no tiene conciencia el pueblo colombiano.

Es urgente que el Estado se ocupe de la investigación de las ventajas comparativas que puede tener la economía nacional en el conjunto de América y en los mercados internacionales por razón del patrimonio energético. Las posibilidades son inmensas y algunas cifras dan una idea de lo que se avecina: la infraestructura eléctrica que necesita el país y que debe construir durante próximos 19 años requerirá inversiones superiores a 60.000 millones de dólares; en El Cerejón realizará Colombia la más grande inversión específica del presente siglo y aun cuando allí le prometen de hoy al año 2010 participaciones del orden de 47.000 millones de dólares, sus perspectivas y sobre todo los verdaderos derechos del país son mayores; las exploraciones iniciales en Arauca, Córdoba y los Llanos ya garantizan incrementos en la producción diaria de petróleo superiores a 60.000 barriles y todo indica que Colombia puede poseer yacimientos equiva-

lentes o superiores a la Concesión de Mares, por eso no es extraño que una empresa extranjera ya tenga planes de inversión para exploraciones en hidrocarburos del orden de los 5.000 millones de dólares. Quienes en sus programas de gobierno menosprecian a la industria se han olvidado de las ventajas comparativas que le ofrece al país el sector energético para su desarrollo manufacturero. Parecen más interesados en proporcionarle energía a los demás países para que hagan su propio desarrollo industrial, cuando las perspectivas de nuestro sector transformador van a cambiar fundamentalmente.

Estamos ante un sector económico gigantesco que decidirá la suerte de muchas cosas en la Nación. La riqueza energética puede generar el más grande viraje económico y social de nuestra historia, sin embargo, no tenemos un rumbo estable en la política energética. El gobierno anterior, por ejemplo, tuvo cinco ministros de Minas y Energía y el actual lleva tres. Esta inestabilidad revela las perplejidades y vacilaciones de los últimos gobiernos en un sector vital para la política económica actual y futura. La Nación tiene derecho a exigir claras explicaciones sobre la distribución de la riqueza que generará el sector energético y el destino de las participaciones que obtendrá el Estado como socio de la explotación del subsuelo o como propietario exclusivo de las empresas respectivas. De este sector dependerá en buena parte que Colombia consiga, al fin, un modelo económico capaz de lograr al mismo tiempo el crecimiento y la redistribución del ingreso sin sacrificar el sistema político democrático. Nuestros recursos energéticos y minerales son claves para asegurar la soberanía nacional, la modernización económica y la igualdad social, por eso no habrá tregua alguna en la tarea del Nuevo Liberalismo para informar a los colombianos sobre la importancia del patrimonio energético nacional.

Nuestros criterios en estas materias son suficientemente conocidos por la Nación, pero hoy es oportuno repetirlos. Tenemos que tomar conciencia de lo que somos y de lo que queremos ser como nación y como pueblo, para lo cual es indispensable conocer, apreciar y aprovechar en forma inteligente y sagaz los recursos naturales con que contamos para realizar nuestro destino histórico. Esta-

mos de acuerdo con el gran pensador suramericano que decía que "el hueso de las naciones no está en sus preferencias filosóficas, políticas y sociales, sino en la organización de los recursos económicos que preservan la autonomía". Porque de nada sirven los principios y sistemas si el organismo material sucumbe y se extingue la fuerza vital de los países. Por eso debemos luchar para no caer en ciertas ingenuidades de los países en desarrollo, como la de creer que carecemos de capital y por ello debemos entregar nuestras riquezas naturales para que podamos vender nuestros productos en el mercado internacional u obtener la tecnología que requerimos para modernizar los sistemas de producción. Como si nuestros recursos naturales no fueran también capital y respaldo suficiente para obtener financiamiento en forma adecuada y los minerales y fuentes primarias de energía de nuestro subsuelo no fuesen importantes para la economía mundial y el desarrollo económico y social de los países industrializados.

En vez de valorizar en provecho nuestro esos recursos o de negociar su explotación en forma justa y adecuada, los hemos entregado gradualmente al capital extranjero en condiciones inequitativas para los intereses nacionales, llegando hasta considerar las enajenaciones y el entreguismo como factores de progreso y civilización. Y hasta se ha llegado a decir por el candidato del gobierno que entregar los recursos no renovables, a cualquier precio, es previsión magna, y pagar los que se destinan al consumo interno, a precios superiores a los internacionales y en un alto porcentaje en dólares, es favorecer al consumidor nacional y fortalecer la balanza de pagos. La verdad es bien distinta. Hemos pagado en dólares lo que producimos para complacer las exigencias de las empresas foráneas que explotan nuestras riquezas, y en el caso del petróleo, después de la absurda resolución 50 de 1976, expedida por la Administración López Michelsen, hemos pagado los hidrocarburos de los contratos de asociación a un precio que no aceptaría ningún otro gobierno en el mundo, lo cual parecería absurdo pero es rigurosamente cierto.

Cuando consideramos, en conjunto, el desastre de ese entreguismo nos preguntamos atónitos cómo pudo ser posible que por canales secretos huyera a otros países el patrimo-

nio nacional, para contratar luego préstamos onerosos a los mismos que se llevaron nuestras riquezas y nos las venden luego, transformadas por ellos, a precios elevadísimos que acrecientan la explotación que padecemos y agudizan más nuestra dependencia. Dádivosos y mendigos derrochamos nuestros tesoros para solicitar después empréstitos agobiantes a los mismos que nos sangran; empréstitos que muchas veces se esfuman por la corrupción presente o se canalizan hacia gastos de funcionamiento o a obras faraónicas para halagar la vanidad de los gobernantes de turno, con perjuicio de las prioridades sociales y del desarrollo económico.

Algunas condiciones de modelo

El modelo económico que reconozca el liderazgo del sector energético supone algunas condiciones para que pueda operar, las cuales mencionaré brevemente: en primer lugar, necesitamos un Estado independiente, moderno, eficiente y vigoroso que cree las condiciones de infraestructura para desarrollar los sectores vitales de la producción. Se requiere una reorganización casi total del Estado para erradicar los vicios que lo han venido paralizando y desprestigiando. Se necesita una nueva mística de eficiencia y moralidad para que el Estado sea un servidor de la comunidad y no un arrogante dispensador de favores. En vez de crear empleo parásito dentro del Estado debemos crear empleo productivo dentro y fuera del Estado. Infundir una mentalidad austera a todos los miembros y niveles del gobierno para que la nación ahorre, invierta más y gaste menos.

La reactivación de la producción agrícola, industrial y minera es la herramienta más eficaz contra el alto costo de la vida y debe ser responsabilidad conjunta del Estado y del sector privado. El Estado fijará las pautas, los estímulos, el clima favorable y acometerá incluso la producción en algunas áreas prioritarias como las ya mencionadas en el sector energético y el sector privado, a su turno, operará con el criterio de lograr siempre bajos costos, la mejor calidad a nivel internacional, salarios justos y una utilidad razonable sin espíritus especulativos. Lo que sea bueno para la comunidad debe ser bueno para los empresarios privados.

No hay que crear un falso dilema entre mercado interno o externo. Debemos conseguir el adecuado abastecimiento del mercado interno y acometer la agresiva conquista de los mercados externos. A pesar de la recesión mundial tenemos aún muchas oportunidades de exportación en los sectores industrial, agrícola y minero. Yo no comparto el derrotismo de otro candidato que considera cerradas las posibilidades del mercado externo.

Quiero hacer énfasis en la necesidad de impulsar al sector agrícola para que produzca eficientemente y, por tanto, en forma barata, alimentos, lo cual es indispensable para controlar y reducir la inflación. Pienso que la principal responsabilidad del sector agrícola, en este momento del país, no es la de generar empleo ni la de retener población en el campo como bien pudo ser hace quince años. Ahora la mayor parte de población está en las ciudades y la tendencia no disminuirá en las próximas décadas. La primera labor del sector agropecuario es alimentar a los 28 millones de colombianos de hoy y a los 38 millones que habrá a fines del siglo.

La configuración de este nuevo modelo económico y social no puede entenderse como algo respectivo e inmediatista. Considero que tan sólo si se establecen las condiciones para que haya empleo bien remunerado podremos asegurar las bases para que tengan efecto otras estrategias como la de vivienda barata y masiva que no sólo redistribuye ingreso entre las distintas clases económicas sino que estimula, por muchos caminos, la demanda agregada. Sin embargo, la política de vivienda y las demás suponen una población que tenga poder de compra. Es así como creemos posible construir una sociedad más rica pero también más igualitaria. Esto, naturalmente, no es posible alcanzarlo por la acción de las fuerzas del mercado como quiere la demanda, esto sólo podremos lograrlo con un Estado moderno, dinámico, austero, eficiente, nacionalista y decidido a distribuir el ingreso entre los colombianos.

Quiero agradecer a todos los presentes este espléndido homenaje que no se hace solamente a mi persona sino que busca respaldar los ideales de nuestra campaña y en especial la que ahora hacemos en favor de la renova-

ción moral y política de Colombia. Se ha confiado la misión de interpretar el significado de este acto a la señora Virginia de De Lima y a los doctores Ernesto Suárez Rueda, David Julia y Germán Tabares quienes han hablado esta noche en nombre de las grandes regiones del país y representan a la inmensa mayoría de compatriotas que hasta hace pocos meses no encontraba un camino respetable para expresar sus criterios sobre la modernización de Colombia. Ellos pertenecen a la nueva Colombia y sus palabras y trayectorias demuestran que todos tenemos derecho a participar en el gran proceso político en curso para impedir que la voluntad colectiva sea usurpada por las maquinarias burocrático-electorales que apoyan tanto al candidato del gobierno como al candidato conservador.

La presencia en este recinto del ex presidente Carlos Lleras Restrepo constituye un estímulo generoso del más importante estadista liberal y yo la saludo en nombre de todos, como una prueba de la solidaridad entre los liberales que han hecho la historia del partido en el presente siglo y las nuevas generaciones que buscamos defender la vigencia de las ideas liberales en la Nación actual y futura. El doctor Lleras Restrepo, por sus méritos, por sus virtudes y por su inteligencia, no es únicamente orientador del liberalismo

sino de la Nación entera. A nosotros nos corresponde dar nuestro propio testimonio, en nuestra propia época, con nuestros propios criterios y con nuestros propios instrumentos. Así lo estamos haciendo desde hace dos años cuando fundamos el movimiento por el Nuevo Liberalismo. El hecho de que tengamos una responsabilidad creadora nos mueve con mayor razón a respetar y admirar la vida y la obra de los grandes líderes históricos del liberalismo a partir de las cuales iniciamos nuestra acción política en función de las necesidades de la futura Colombia. La bandera que llevo en mis manos por voluntad de los convencionistas de Rionegro tiene una sola inspiración, un solo objetivo, el bienestar y la grandeza de nuestra Patria. Yo no soy otra cosa que un instrumento de la conciencia democrática del liberalismo progresista y renovador y de los colombianos que nunca han votado o que rara vez lo han hecho. Serenamente he aceptado la inmensa responsabilidad de abrir los caminos de una nueva época en la historia nacional. No tengo el mandato de defender ninguna maquinaria partidista. Tampoco pedí permiso para luchar por la renovación de Colombia. La victoria que se avecina frente al candidato conservador y al candidato del gobierno no será mía sino del pueblo colombiano en cuyo nombre y por cuyos intereses e ideales acepté la candidatura presidencial.

La lección de los Comuneros

Palabras de Luis Carlos Galán en la
Plaza de Bolívar en 10. de febrero de 1982

Con respeto, admiración y gratitud nos acercamos hoy a este lugar que fue escenario hace doscientos años del holocausto de José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcántuz y Manuel Ortiz. Fueron los primeros sacrificados por defender a su pueblo de la arbitrariedad y el despotismo y su martirio constituyó principio y raíz de nuestra historia. De ahí que sean los verdaderos precursores de la independencia nacional y la expresión más auténtica de nuestro pueblo. Como precursores iniciaron la lucha contra la injusticia y la opresión y defendieron con valor la dignidad humana.

Un campesino altivo, un artesano laborioso y dos exponentes de la clase media inconforme y progresista, formaron, desde entonces, el cuadrilátero sobre el cual descansan las bases de nuestro progreso y devenir histórico y las raíces profundas del alma nacional. Verdaderos varones de entereza y coraje, no claudicaron nunca en la defensa de sus ideales de justicia y de cambio.

En esa época la injusticia tenía el nombre de servidumbre, esclavitud, impuestos agobiadores, alcabalas y pechos, discriminación contra los criollos, prepotencia de los peninsulares, explotación de los de arriba y pobreza y miseria de los de abajo.

El despotismo lo representaban el Regente visitador, sus guardas y alcabaleros, junto con los oidores, gobernadores, alcaldes y demás autoridades del Imperio Español.

Se había arrebatado a los indios sus tierras y resguardos para reducirlos a la servidumbre de los encomenderos y terratenientes. Se esquilma el fruto de su trabajo al agricultor, al artesano y al comerciante, con diezmos y exenciones, mientras que el negro esclavo, el mulato y el zambo padecían las cadenas y sufrían la humillación. Sólo el burgués criollo y el chapetón engreído compartían los gajes de la explotación reinante y por eso estaban siempre de acuerdo con el sistema y con el déspota de turno.

Pero un día la cigarrera altiva del Socorro inició la insurgencia y el pueblo oprimido se levantó como un solo hombre, arrollando y abatiendo con la fuerza de su presencia y de su número la soberbia de un imperio que se creía invencible.

El pueblo se desbordó como un río por todos los caminos, veredas y poblados a reclamar sus derechos y a imponer la justicia de su causa. Desafortunadamente no supo escoger a sus voceros y capitanes; confió ingenuamente en éstos y en las promesas de unas autoridades que utilizaron el engaño y apelaron a los ritos sagrados para encubrir su traición.

Sólo un capitán salido de la entraña fecunda del pueblo, José Antonio Galán, se irguió altivo para denunciar el engaño y descubrir la traición. En dos meses de lucha demostró dónde estaban los verdaderos enemigos de sus gentes y cuáles debían ser las estrategias y las metas económicas y sociales para conseguir el

cambio que buscaban.

Por eso, con Galán, el motín y el alzamiento se transforman en revolución y el grito de combate cambia de táctica. ¡Viva Túpac Amaru y muera el mal gobierno! fue la nueva consigna que le sirvió de bandera para levantar a los pueblos oprimidos por el despotismo.

Su iniciativa de libertar a los esclavos; su defensa del mestizo, del mulato, del zambo y el cuarterón; el nombramiento de capitanes de extracción popular en todos los pueblos por donde pasó durante su campaña admirable y el desdén con que trató después de las Capitulaciones a los Capitanes que entregaron el movimiento, más que la rebeldía contra los impuestos y las autoridades españolas, fueron la causa para que se desatara contra él la furia de los poderosos intereses amenazados por su lucha revolucionaria y para que se decretara su prisión y su muerte junto con la de sus compañeros que lo siguieron hasta el cadalso, siete meses antes de que se dictara la inicua y bárbara sentencia y de que se consumara su último suplicio en esta plaza, escenario de nuestros grandes hechos históricos.

Han pasado 200 años de lucha popular desde ese entonces y todavía las metas de cambio capaces de integrar nuestra nacionalidad no se han conseguido. Por eso continúa la injusticia devorando o aniquilando el fruto del trabajo honrado, y su nombre se llama ahora especulación, tráfico de influencias, explotación del hombre, clientelismo, inflación. Los impuestos son ahora más agobiantes y numerosos que en la época colonial y el despotismo y la corrupción de los nuevos alcahaleros más irritantes. Los nuevos déspotas se ponen ahora la máscara democrática y el engaño y la falsía se han vuelto la moneda de los que detentan el poder para usufructuarlo en provecho propio y no para servir a su pueblo.

La corrupción en todas sus formas está destruyendo la moral y la dignidad, y la ineficiencia y el abuso de los funcionarios hacen aún más amarga la miseria del pueblo. Estamos llegando al fondo del oprobio y de la desvergüenza, y por eso los poderosos creen con arrogancia que pueden continuar abusando sin límites de la paciencia y de la dignidad de un pueblo como el nuestro.

Empero, no será así por mucho tiempo. La hora del cambio se acerca y las condiciones sociales y económicas de la coyuntura actual están maduras para la insurgencia y la rebeldía

civil. Por eso, como decía Kennedy y lo advertimos nosotros, "Los que hacen imposible la revolución pacífica, harán inevitable la revolución violenta"...

En este día, el mejor homenaje que podemos rendir a estos protomártires de la Patria es continuar con valor y con fe la obra renovadora que ellos iniciaron, para lograr el cambio social, moral y político que el país requiere con urgencia, si queremos conservar y fortalecer nuestra unidad como nación y realizar un destino histórico de significación y mérito.

La justicia, como la libertad y la vida, hay necesidad de conquistarlas todos los días, para que se afiancen y puedan dar sus frutos de paz y plenitud. La lucha por estos ideales no termina nunca, porque en esencia dichos bienes constituyen la íntima y constante aspiración de nuestro ser.

Hace pocas horas he firmado en la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inscripción de mi candidatura a la Presidencia de la República para el período de 1982-1986. La fecha escogida para hacer este acto tiene inmenso significado en estos momentos porque corresponde a la naturaleza de nuestros ideales y ratifica la trascendencia de mi compromiso ante el pueblo colombiano. No claudicaré en la defensa de esta inmensa responsabilidad, porque me siento guiado y respaldado en mi actitud por el ejemplo de los primeros mártires de la historia nacional.

En la misma plaza del sacrificio de José Antonio Galán y sus compañeros, invoco su memoria para demostrar que su holocausto no fue en vano y que dos siglos más tarde, cuando han pasado ocho generaciones desde la época de la revolución comunera, sus ideales están vigentes y en las circunstancias especiales de nuestro tiempo representan para el pueblo de Colombia la primera y decisiva expresión histórica de la conciencia colectiva.

A pocos metros del lugar donde fue descuartizado José Antonio Galán, en mi condición de candidato a la Presidencia de la República prometo a los colombianos que seré leal a los ideales del pueblo y que lucharé por ellos con devoción y sinceridad todo el tiempo que sea necesario para transformar la vida de los oprimidos, alcanzar la paz y la libertad para mis compatriotas y rescatar la fe colectiva en un destino superior y trascendente para toda la nación.

El liderazgo moderno

**Discurso de Luis Carlos Galán en el
banquete de adhesión de profesionales el 30
de marzo de 1982 en el Hotel Tequendama**

Señoras, Señores:

Es muy significativo que el primer acto público de carácter nacional, después de la Junta de Parlamentarios y directivos del Nuevo Liberalismo que me ratificó la responsabilidad de la candidatura presidencial el 22 de marzo, sea esta reunión multitudinaria en la cual 1.500 profesionales de todas las regiones y especialidades me manifiestan su solidaridad a la candidatura que acepté el año pasado en Río-negro y que más de 600.000 compatriotas respaldaron en las elecciones del 14 de marzo. Los profesionales representan no sólo el cambio más importante que ha tenido lugar en la estructura de las sociedades modernas sino un nuevo elemento de liderazgo democrático que todavía no ha conquistado el puesto que merece en nuestro país y cuya organización adecuada es uno de los puntos claves de la modernización política de Colombia. El profesional surgido de la Universidad tiene a su cargo un tipo original de liderazgo que ya no proviene de una clase social ni de un determinado poder político o económico sino de una legitimidad basada en criterios culturales y científicos. Sus derechos y deberes constituyen recientes realidades sociales y también factores políticos inmediatos que merecen especial atención.

En los últimos veinticinco años, las universidades colombianas han formado cerca de 300.000 profesionales y en el curso del presente decenio saldrán de las aulas otros 300.000. Todos ellos representan la vanguardia intelectual del país. Una vanguardia que representa no a los grupos privilegiados, sino constituida por cerca de medio millón de seres que pertenecen en buena parte a las clases medias y, quienes, por razón de sus conocimientos, reclaman una nueva organización social que asegure sus derechos y aproveche su talento.

La multiplicidad y complejidad de la sociedad moderna exige un número creciente de personas muy calificadas técnica y administrativamente para desempeñar los puestos dirigentes o líderes. Todavía, en Colombia, algunos de esos cargos se consiguen por razones de posición social o por relaciones familiares, pero, la tendencia lógica del país es que la elección de los líderes o su reclutamiento se extienda a todos los estratos de la sociedad para que ello no sólo asegure el acceso de los mejores al gobierno sino también a la industria, a los medios de comunicación, a las Fuerzas Armadas, a las organizaciones gremiales y a los sindicatos obreros. Todo esto podrá ocurrir, si los profesionales se vinculan a la política para asegurar el surgimiento y la consolidación de las nuevas formas de liderazgo, sólo que la politización de los profesionales presenta factores y perspectivas que requieren detenido análisis.

El profesional no es un capitalista ni un trabajador en el sentido que utilizaban los ideólogos del siglo pasado. Tampoco es un administrador gubernamental o un burócrata, ni se le puede confundir con los propietarios rurales o urbanos. La condición de profesional empieza por su formación técnica e intelectual que supone entre nosotros al menos 17 años de estudio y en el caso de los médicos cerca de 20. Como consecuencia de la democratización universitaria del país lograda en los años sesentas y setentas, la inmensa mayoría de nuestros profesionales se ha formado durante los gobiernos que adoptaron o han mantenido las fórmulas políticas de responsabilidad compartida entre liberales y conservadores. Puede afirmarse con seguridad que los profesionales han superado los viejos sectarismos, tienen una nueva mentalidad para entender los asuntos públicos y, en términos generales, consideran que tanto el partido liberal, como el conservador y la propia izquierda tienen serios problemas ideológicos y de organización para facilitarles su derecho a intervenir en la selección de sus gobernantes y, directa o indirectamente, en la elaboración de la política gubernamental.

Los profesionales han tenido problemas para participar en política no tanto por culpa suya como por la penuria intelectual de las opciones existentes en las diversas regiones a escala nacional. Muchos de ellos pertenecen a las franjas abstencionistas, es decir, no votan, ni hacen proselitismo, ni asisten a reuniones, ni dan aportes económicos, ni se comunican con los congresistas. Sin embargo, ello no significa que no busquen información sobre los problemas públicos o dejen de discutir acerca de los temas de interés nacional. En otras palabras, es difícil encontrar un profesional a quien le resulten totalmente indiferentes los asuntos públicos, pero, tampoco es fácil encontrar profesionales dispuestos a participar en política pues no les satisfacen los canales existentes ya que los partidos no se han modernizado y, con frecuencia, los antiguos protagonistas de la política o los nuevos de mentalidad tradicional sienten temor a la presencia activa y entusiasta de ciudadanos más preparados cuya opinión es más independiente.

Por qué participar en política

El profesional, cuando no participa, rara vez se margina por escaso conocimiento de las

cuestiones en discusión sino por razones muy heterogéneas. A veces, porque desprecia la corrupción y el egoísmo que tienden a manipular las actividades políticas. Otras veces por un idealismo utópico, pero lo más frecuente es que se margine por escepticismo o porque piensa que el sistema no ofrece alternativas verosímiles y se siente prisionero de una especie de sentimiento de frustración colectiva.

En el Nuevo Liberalismo, desde las primeras actividades de Bucaramanga y Bogotá, en 1979, hemos tenido especial interés por el aumento de la participación política de todos los colombianos y en particular hemos experimentado con éxito algunos mecanismos para vincular un sector tan fundamental como es el de los profesionales pues creemos que ellos pueden y deben acelerar la modernización de los partidos. Nuestros argumentos para estimular la participación no son totalmente originales, pues el problema ha sido discutido en muchos otros países que tienen tanta o más trayectoria electoral que el nuestro, sin embargo, es oportuno recordar ciertas reflexiones que frecuentemente he propuesto en los centenares de auditorios visitados en la presente campaña, con la esperanza de crear una nueva conciencia política entre nuestros compatriotas y rescatar a quienes, como abstencionistas, se sienten extranjeros en su propia patria.

En primer lugar, es evidente que quienes no participan en política no pueden estar adecuadamente representados en el gobierno del país. Esto debilita al propio gobierno que pierde el concurso de ciudadanos cuya opinión sería útil, pero, al mismo tiempo, le permite a los gobernantes ignorar las necesidades e intereses de quienes no participan en política. Si observamos nuestro propio caso, podemos decir que son los pobres, los jóvenes y las mujeres quienes tienen menor representación en Colombia precisamente porque son ellos quienes menos participan, así se trate, paradójicamente, de quienes más necesitan un gobierno que atienda sus derechos y resuelva sus problemas.

En el caso específico de los profesionales es difícil precisar el grado de participación política logrado. Posiblemente ya es significativo en los principales centros urbanos, pero todavía es muy bajo o casi nulo en las peque-

ñas ciudades y en las zonas rurales, por lo tanto, si bien la influencia de los profesionales ya se percibe en el manejo de los problemas propios de las grandes ciudades aún no trasciende, en debida forma, en los asuntos económicos y sociales del sector agropecuario. El profesional que trabaja con el Estado no se siente satisfecho por las condiciones actuales de la administración pública; sin embargo, ésta sólo se transformará cuando se renueven los partidos y la política gracias a la mayor participación de los sectores modernizantes encabezados por los profesionales.

En segundo lugar, es evidente que la apatía generalizada es causa de violencia política y aumenta las oportunidades para que la administración del país esté en manos de irresponsables o de personas que busquen el gobierno como si se tratara de conquistar un instrumento de privilegios personales y otras gabelas. Yo creo que los obstáculos más grandes que tiene el país para organizar y mantener una oposición política dentro del marco constitucional y legal son la apatía electoral de los colombianos y el anacronismo de nuestro sistema de elecciones. La apatía es causa de violencia, pues, en la medida en que algunos colombianos se sienten impotentes para defender sus ideas en el escenario electoral resuelven hacerlo incorporándose a las filas de la subversión porque creen que sólo así podrán enfrentarse al abuso del poder político. Si hoy es frecuente que entre los grupos subversivos predominen los profesionales o las gentes que alcanzaron a completar tres y cuatro años de estudios universitarios, ello no es tanto el fruto de resentimientos de un proletariado profesional, como señaló hace poco uno de los participantes en el debate presidencial, sino la consecuencia del cierre paulatino de caminos eficaces para la modernización política del país por la vía electoral.

En tercer término, un grupo social que se niegue a participar en política no puede tener plena convicción sobre el fundamento de sus opiniones. En cambio, es posible que el mismo hecho de intervenir en la vida pública le permita comprender factores, obstáculos y posibilidades que antes no había tenido en cuenta al juzgar la realidad nacional. Como se ha dicho tantas veces, la participación no solo estimula el conocimiento político, sino que también aumenta la responsabilidad, hace

más profunda la atención y aumenta el sentido de la propia eficacia política. El profesional, por sus propias posibilidades intelectuales, está más obligado a conocer la realidad política para juzgarla objetivamente sin evadir su responsabilidad acudiendo a los prejuicios y desconceptualizaciones globales.

En el caso de los profesionales vinculados a la Administración pública, como lo señalé en párrafos anteriores, la formación de una conciencia política resulta especialmente interesante y necesaria. Decenas de miles de profesionales, sobre todo los de la salud, los educadores, los ingenieros, los abogados y los agrónomos trabajan para un Estado cuyas instituciones e instrumentos desconocen y cuyos recursos rara vez son objeto de discusiones y análisis completos. El contacto parcial de los profesionales con el aparato estatal engendra mayor escepticismo y frustración cuando en el desempeño de sus labores observan impotentes el papel de una clase política obsoleta que todo lo reduce al tráfico electorero y la manipulación de la administración pública en beneficio de los intereses y apetitos clientelistas, como acaba de recordarlo el doctor José Luis Calume al reconstruir los amargos acontecimientos de 1977.

Pensando en todo esto el Nuevo Liberalismo ha promovido la vinculación de los profesionales a la política y ha creado comités de estudio, tertulias y grupos de apoyo para ofrecerles a los profesionales escenarios de trabajo que correspondan a su nivel de conocimientos y a su capacidad científica para analizar los asuntos públicos. Claro está que esto no significa desconocer u olvidar la importancia de los demás sectores sociales a los cuales también queremos procurarles mecanismos de organización y participación; sin embargo, creemos que los profesionales por su mentalidad universitaria y sus mayores responsabilidades son aliados especialmente entusiastas de nuestra lucha por la renovación democrática de Colombia y personas dispuestas a colaborar con nosotros en el vastísimo escenario de la moderna participación en política, tal como la entendemos, es decir, no limitada al voto y ni siquiera a la discusión esporádica de los problemas públicos sino teniendo en cuenta todos los instrumentos de la democracia permanente que sólo existe con partidos políticos

organizados y dinámicos en los cuales el ciudadano pueda recibir y dar información sobre las realidades colectivas. Por lo menos 150 profesionales participaron, hace menos de un año, en los comités que discutieron los conceptos del documento que sirvió de base a la iniciación de tareas del Nuevo Liberalismo a escala nacional. En los diversos capítulos de los diálogos sobre Bogotá ha intervenido cerca de otro centenar y en este momento, me atrevo a decir que hay más de 3.000 profesionales entre los dirigentes y activistas del Nuevo Liberalismo en todo el país. Nuestra esperanza es la de lograr cinco veces esta cifra en el curso de los próximos años. Confiamos firmemente en lograrlo porque sabemos que los profesionales consideran nuestro movimiento, como lo ha dicho la doctora Cecilia de Caro, una opción que hasta el presente no se les había ofrecido y que modifica completamente la vieja manera de hacer política, gracias a lo cual el Nuevo Liberalismo le está abriendo el camino no sólo a una sino probablemente a dos generaciones cuya participación resulta cada día más importante para la renovación democrática de Colombia.

La campaña presidencial

Nos encontramos los colombianos en pleno debate sobre la sucesión presidencial. La discusión se refiere a varias cosas. ¿Qué significa cada una de las alternativas planteadas? ¿Qué visión tiene de la realidad colombiana cada uno de los candidatos? ¿Qué se propone hacer en la jefatura del Estado? ¿Cuáles son las características y recursos de cada campaña? Ante un auditorio como el de esta noche resulta muy importante responder estas preguntas. Sin embargo, antes de hacerlo me parece oportuno formular algunos comentarios sobre las elecciones del 14 de marzo como antecedente político inmediato.

Aun cuando el doctor López Michelsen, con cierta curiosa vanidad y preocupación por los paralelos históricos, se empeña en comparar las fuerzas del Nuevo Liberalismo con las del MRL, yo no quiero detenerme demasiado en ese cotejo pues se trata de cosas muy diferentes. El MRL existió durante casi ocho años, mientras que el Nuevo Liberalismo escasamente acaba de cumplir dos años de existencia, de los cuales sólo seis meses

corresponden a labores de proselitismo a escala nacional. A pesar de todo, en este lapso hemos logrado una votación, en elecciones parlamentarias, que nunca pudo lograr el MRL ni en cifras absolutas ni en el número de congresistas elegidos. La inmensa mayoría de los dirigentes y miembros del MRL se sienten frustrados por lo que sucedió en ese movimiento y piensan que se les abandonó en su lucha a mitad del camino. El MRL pertenece al pasado. En cambio, en el Nuevo Liberalismo está el futuro; así lo consideramos miles de colombianos que nos estamos organizando para afrontar no simplemente una, dos, tres o cuatro elecciones sino todo el proceso que sea necesario para cambiar la conciencia política de nuestros compatriotas y renovar el sistema de instituciones democráticas que la nación empezó a construir hace varias generaciones. Los juicios y comparaciones históricos sobre el MRL y el Nuevo Liberalismo vendrán después, por ahora, estamos muy satisfechos de la respuesta que nos han dado vastos sectores de opinión. El triunfo arrollador logrado tanto en Bogotá como en Bucaramanga tiene clara significación pues se trata de las únicas capitales en donde me he sometido directamente al juicio de los electores. Si se suman los resultados de los departamentos originales del Nuevo Liberalismo, es decir, Santander, Cundinamarca y Huila, se encuentra que hemos superado ampliamente la votación de los sectores continuistas adictos a la candidatura del doctor López Michelsen. En la Costa Atlántica, a pesar de todos los obstáculos e interferencias que falsifican la expresión de la voluntad del pueblo, las fuerzas renovadoras hemos logrado cerca de 60.000 votos. Es cierto que no alcanzamos la mayoría en las cifras totales, pero también es verdad que nunca fué ésa la meta que nos propusimos, ni la que nos correspondía alcanzar en esta primera etapa. En el examen de la votación acumulada de los principales centros urbanos, es decir, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, superamos la lista del continuismo oficialista y en el conjunto de las capitales de departamento, donde están los sectores de opinión más independientes, la votación ha sido bastante equilibrada entre las dos tendencias liberales. De cada tres votos logrados por el Nuevo Liberalismo, dos los aportaron las provincias y uno Bogotá. En esta oportunidad, por las limitaciones de tiempo no logramos tener organización política en la mitad de los 800 municipios donde existe votación liberal, pero esperamos completar los 400 municipios pendientes en el

curso de los próximos meses, gracias al esfuerzo entusiasta de los comités establecidos en todos los departamentos del país. La ausencia del Nuevo Liberalismo en las Listas de Consejo de esos 400 municipios les permitió, a los sectores continuistas, iniciar las elecciones del 14 de marzo con una ventaja real de algo más de 800.000 votos sin necesidad de hacer prácticamente nada. En los comicios presidenciales, la situación será completamente distinta porque ya no influirán en la misma forma los problemas locales y la organización electoral se facilitará notablemente.

Extendiendo estas observaciones a lo sucedido en otros predios políticos el 14 de marzo, creo que la creciente votación conservadora refleja el retorno de la Anapo a ese partido. Ello explica el progreso del conservatismo en algunas zonas urbanas donde surten efecto las manipulaciones populistas y confirma las movilizaciones logradas por el candidato Betancur en los comicios presidenciales de 1978. De ahí en adelante no puede crecer el conservatismo en el próximo futuro. Tanto Betancur como López ya llegaron al máximo de su votación posible en el presente año. No sólo es imposible que logren incrementar porcentualmente estos guarismos sino que resulta muy dudoso que mantengan los volúmenes alcanzados. Nuestro caso es totalmente distinto. Somos una fuerza política en ascenso que no está integrada por oportunistas ni por pusilánimes. Quienes nos han apoyado sabían que en las elecciones parlamentarias iniciábamos la marcha y que ahora continuará la multiplicación de nuestros electores porque se avecina la decisión de fondo en un país cuyo gobierno es de régimen presidencial y porque, sobre todo, se han creado las bases de una fuerza nueva que transformará la política colombiana durante el presente decenio.

Las elecciones de marzo han puesto en evidencia, una vez más, el anacronismo del sistema electoral y por consiguiente el fracaso de las dos leyes propuestas por el actual gobierno en las últimas legislaturas. Tenemos razones serias para creer que nuestra votación, en Bogotá, habría sido muy superior si el sistema de zonificación hubiera funcionado correctamente sin excluir decenas de millares de cédulas que no llegaron al computador; si el recuento de votos, durante los escrutinios, se hubiese hecho siempre en presencia de los testigos electorales; si la fuerza pública no exagera las medidas preventivas en la calle 19

y en varias zonas de la capital; si no desaparecen las actas de algunas mesas donde tuvimos alta preferencia de los electores y si todos los jurados, en más de un centenar de mesas en las cuales ganamos ampliamente, hubieran cumplido su obligación de firmar las actas respectivas. Me temo que en todo el país hubo problemas semejantes además de otros obstáculos como la compra de votos y las presiones de alcaldes y funcionarios. Espero dirigir en los próximos días una carta al Señor Registrador Nacional del Estado Civil para precisar nuestros motivos de inconformidad por las fallas ocurridas, pues el país creía superado el problema de la pulcritud del sistema electoral; sin embargo, las limitaciones presupuestales y la indiferencia del gobierno sobre todos los recursos de la Registraduría, están creando un peligroso escepticismo ciudadano frente a los mecanismos electorales que sólo se superará cuando se cree la cuarta rama del poder público en forma independiente y con los presupuestos del caso como lo propuso el Nuevo Liberalismo desde hace cerca de un año.

¿Por qué continuamos?

Durante la última semana algunos periodistas me han preguntado cuáles son las razones para mantener la candidatura presidencial, después de las elecciones de marzo. Como representamos una fuerza nueva, es comprensible que muchos observadores no sepan interpretar los hechos políticos que hemos creado y que seguiremos creando. Por tal razón, considero pertinente examinar este punto.

Las elecciones parlamentarias son diferentes de las presidenciales. Esta vez no hubo en el liberalismo ningún mecanismo semejante al del Consenso de San Carlos. Cada sector político se ha presentado a las elecciones con su propia línea en función no sólo de los nombres específicos de los candidatos presidenciales sino de las tesis y actitudes defendidas por las diversas formaciones políticas durante los últimos cuatro años.

El doctor Belisario Betancur fue escogido por una convención conservadora integrada, en su inmensa mayoría, por personalidades, parlamentarios y dirigentes de ese partido que han pertenecido al actual gobierno o han tenido influencia fundamental en el mismo.

Betancur, personalmente, no ha tenido participación en la administración Turbay Ayala pero los parlamentarios que lo respaldan sí. Varios de ellos fueron ministros o gobernadores del actual gobierno. Esta situación es am-

bigua y resulta contradictoria a los ojos de cualquier ciudadano que no puede conciliar las promesas renovadoras de ese candidato con los factores políticos que originaron su candidatura. Betancur es, en realidad, el instrumento que utilizan sectores continuistas para presentar una imagen nueva de un equipo antiguo y unos criterios responsables de las políticas económicas y sociales aplicadas por los dos últimos gobiernos. Sus parlamentarios han sido elegidos gracias a la influencia que tienen en la administración pública tanto a escala nacional como en los niveles departamentales y municipales porque el actual gobierno les entregó el 40 por ciento de toda la administración. No existe pues, en este caso, ninguna opción real de cambio.

El doctor Alfonso López Michelsen fue escogido como candidato presidencial por la Convención de Medellín de septiembre pasado, un certamen en el cual no participó cerca de la tercera parte del liberalismo porque los acuerdos previos realizados entre López, Espinosa y Santofimio desvirtuaron la posibilidad deliberante de tal Convención y la convirtieron en reunión de delegados a quienes se marcó con hierro candente para imponer una candidatura que dividió al partido liberal y cerró caminos a quienes desean la renovación democrática del país. López aceptó ser el candidato de una coalición de líderes regionales. Tales líderes sólo tienen poder electoral en la medida en que el presidente Turbay Ayala les ha entregado la burocracia de los departamentos y cuotas de la Administración Nacional. Sin empleos públicos los famosos líderes regionales están desguarnecidos y no son capaces de librar una batalla electoral limpia y abierta, de igual a igual. En Bogotá, los amigos de López Michelsen tenían también instrumentos burocráticos pero se encontraron con una ciudad que por sus dimensiones físicas y económicas no se deja esclavizar por los mecanismos de opresión clientelista y le demostró al resto del país que sí es posible desmontar a las dos maquinarias oficialistas, es decir, la que presenta como candidato a Betancur y la que respalda a López Michelsen.

López Michelsen se ha declarado partidario del continuismo y proclama su identificación con el actual Presidente. En su gobierno comenzaron las políticas económicas que han llevado a la postración a los industriales, los agricultores y los ganaderos de Colombia. Esas políticas fueron concebidas con la participación de ministros liberales y de miembros

muy representativos del partido conservador. López Michelsen se propone mantener en su administración, si el pueblo lo reelige, los mismos criterios que aplicó entre 1974 y 1978 en relación con asuntos vitales para el país como la política tributaria, el comercio internacional, la política monetaria el sector energético y el régimen industrial. No se le ve ni se le oye propósito de enmienda alguno a pesar del daño que causaron las políticas económicas de su gobierno. Además, se ha declarado dueño del partido liberal y considera que todo lo que esté fuera de la maquinaria burocrática electoral no puede sobrevivir en la política colombiana.

En este momento, agobiado por la falta de argumentos para movilizar a los millones de ciudadanos que no aceptan la disciplina de maquinarias políticas envilecidas, ha resuelto apelar a la intimidación y a la amenaza. Mientras habla farisaicamente de la reconciliación y otros artificios, auspicia sin pudor alguno los agravios que formulan sus subalternos. Los liberales que escuchan sus llamamientos fundados en una supuesta defensa del partido no le pueden creer nada a un hombre que hace cerca de ocho años tuvo el más grande poder político en sus manos para emprender una profunda transformación social y económica de Colombia y a la hora de la verdad entregó las palancas vitales del poder al doctor Alvaro Gómez Hurtado. Además de los claveles y las rosas, colocadas al lado de sus rejuvenecidos retratos, con los cuales quiere presentarse ante los colombianos con una nueva imagen primaveral que no corresponde a sus años ni a su trayectoria, el doctor López Michelsen anda otra vez por las plazas de Colombia disfrazado de Caperucita Roja, sólo que ahora nadie le puede creer sus historias porque los colombianos sabemos que su gobierno fue de estirpe centroderechista en ningún caso de izquierda y ni siquiera de centro porque desencadenó la más grande concentración de poder financiero y económico que haya registrado nuestra historia en un solo gobierno; porque sepultó los restos del proceso de modernización de las estructuras sociales y económicas del campesinado colombiano; porque detuvo el progreso alcanzado en la nacionalización de los recursos naturales y le dio a las empresas extranjeras mayor influjo en el control del gas natural, el uranio y el carbón; porque debilitó la industria nacional y abrió el camino para que la producción extranjera se apoderara de los mercados nacionales; porque permitió que los asalariados perdieran terreno en la distribución del ingreso nacional; porque

impulsó las tesis monetaristas que hoy apasionan a Pinochet y a la señora Thatcher y que tienen hipotecados a los industriales y agricultores de Colombia con altísimas tasas de intereses porque debilitó los procesos de planeación nacional y retrasó inversiones vitales en el sector energético; porque creó el noticiero oficial de la televisión e introdujo la doctrina de los noticieros controlados directamente por líderes políticos nacionales o por sus allegados; porque, en fin, el mandato claro que ahora se disfraza con la supuesta afiliación a la internacional socialista tiene entre sus penosos balances el triste papel de enemigo de las empresas estatales a las que impuso impuestos de renta para descapitalizarlas y conducir las a la ruina en que se encuentran.

El doctor Gerardo Molina habla en nombre de un gran sector de la izquierda colombiana. Su voz es para nosotros respetable porque la respalda una vida ejemplar y un testimonio permanente y coherente sobre las ideas socialistas tal como él las concibe y las ha defendido en la cátedra, en las corporaciones públicas y en los grandes foros nacionales.

Mi candidatura a la presidencia es la respuesta de la nueva Colombia a una clase política agotada que hoy oprime al pueblo colombiano tanto en el partido liberal como en el partido conservador. Es una candidatura que se enfrenta a las dos maquinarias en nombre de nuestra Nación que necesita liberarse de una mentalidad política obsoleta, en buena parte culpable del atraso en que se halla nuestro país y de la posición secundaria que tiene Colombia en el conjunto internacional. Esta candidatura se inspira en los ideales liberales pero tiene el apoyo de colombianos independientes que luchan por la renovación democrática para salvar el país del dilema extremista en que desean encerrarlos los sectores de inspiración totalitaria. No acepté esta candidatura para buscar, como otros aventureros de la política la negociación de cuotas de poder. No me interesan esas cuotas, lo que buscó es el ascenso del pueblo organizado y consciente al poder. No he emprendido esta lucha como si se tratara de algo fácil y cómodo. Millones de compatriotas de clases medias y populares sólo tendrán alguna esperanza de transformación para su existencia y la de sus hijos si mantenemos en alto la bandera y no claudicamos frente a todas las incomprensiones, ofensas y hasta diatribas con las cuales pretenden desvirtuar nuestros esfuerzos. Hace varios años que tomamos la decisión de entregar todas nuestras energías a la formación de

una nueva conciencia política en Colombia. No hemos pedido ni damos cuartel. Los ideales de justicia y de libertad no se negocian. Buscamos construir una patria nueva, más libre, rica, justa y sabia. Nada podrá detenernos porque no somos tan sólo una voz, un nombre o una formación política. Hablamos por una conciencia colectiva. Expresamos lo que sienten millones de colombianos a quienes habían arrinconado con simples rótulos partidistas mientras se explotaba el amor a un nombre o a una divisa para montar roscas privilegiadas y oligarquías políticas.

Estamos enfrentados a la derecha liberal y a la conservadora. Combatimos los dos clientelismos, las dos maquinarias y los dos equipos responsables de las dos últimas administraciones. Proponemos la revisión total de las políticas económicas aplicadas por estos gobiernos para acabar con la mentalidad especuladora que tiene arruinados a los sectores reales de la producción; defendemos la modernización administrativa e institucional del Estado para asegurar su desempeño eficiente en esta época de multiplicación de los factores internacionales que condicionan la vida de los colombianos; luchamos por asegurar la soberanía nacional frente a los nuevos y crecientes riesgos de dependencia extranjera; auspiciamos el ingreso a la política de los sectores tradicionalmente frustrados en la franja abstencionista y de quienes se hallan en la subversión; trabajamos por la restauración moral del Congreso y el rescate de las funciones fiscalizadoras a cargo de la Contraloría y la Procuraduría. Nos oponemos a la concentración de la riqueza en manos de los grandes conglomerados y proponemos una reforma del sistema financiero para revitalizar los sectores productivos y proteger las oportunidades de industrialización de todas las regiones; creemos, en fin, en la democratización educativa como la condición necesaria del desarrollo y la consolidación de una democracia orgánica que integre las dimensiones políticas, económicas y sociales de un Estado realmente consagrado al servicio de todo el pueblo. La defensa de estas responsabilidades no nos concede pausa alguna. Nuestras ideas han triunfado en Bogotá, vamos a trabajar ahora por su victoria en el resto de la nación. El futuro pertenece a nuestros ideales. Colombia espera, impaciente, que extendamos nuestra acción liberadora a todos los rincones de la Patria. Somos el Nuevo Liberalismo que está construyendo la Nueva Colombia. ¡Ni un paso atrás compañeros y compañeras, siempre adelante!

La crisis histórica

**Primera intervención de Luis Carlos Galán
como candidato a la Presidencia de la
República por los canales de Inravisión el
12 de abril de 1982**

Durante las próximas semanas estaré con ustedes en su hogar en cuatro oportunidades, para presentar mis opiniones sobre los problemas más importantes de Colombia y las soluciones que recomiendo a la nación para el manejo de los distintos retos y dificultades que hoy condicionan el destino de nuestro pueblo.

Colombia se encuentra en una de las más graves crisis. Una crisis de trascendencia histórica que se percibe en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo. Es una crisis que se expresa, por ejemplo, en el orden internacional, porque el pueblo colombiano ha perdido influencia en el conjunto de América Latina; tiene dificultades para defender su papel como protagonista importante de la vida americana, en especial en Centroamérica y el Caribe. En esa zona, tan próxima a nosotros, nos amenazan problemas muy graves que pueden influir de manera definitiva en la suerte de la República y en el manejo de los más importantes factores de la vida nacional. La crisis aparece también en todos los sectores económicos. Se percibe en el receso de la industria, en el estancamiento de la agricultura,

en la parálisis de la construcción; se aprecia en los propios recursos del Estado colombiano, en donde existe un déficit cuantioso sobre el cual el país no ha recibido información objetiva pues le ha sido ocultado por el actual gobierno con empréstitos en el exterior que han permitido disimular el impacto de esos problemas.

La crisis y los partidos

Es una crisis también social, que se nota en el deterioro de los ingresos de los colombianos. Se percibe en la extensión de la miseria en las zonas urbanas y rurales, en el empobrecimiento de las clases medias y populares, en la disminución de las oportunidades de ascenso para los sectores populares del país. Una crisis social ocasionada también por los cambios en el liderazgo colectivo; los líderes en Colombia ahora no surgen tanto como consecuencia de su capacidad de interpretación de los problemas del país, sino como resultado de factores artificiales; o porque se hace dinero de la noche a la mañana, por caminos no siempre claros, o porque se manipulan los instrumentos administrativos para obtener abusivamente poder político y electoral. Todo esto influye en la actitud general de los colombianos. Influye en la confianza que le merece a nuestro pueblo su gobierno, el papel de sus dirigentes y el comportamiento de sus líderes. En esencia se podría decir que vivi-

mos una gran crisis moral. Y la crisis moral, cuando afecta a un pueblo, se expresa sobre todo en el momento en que los intereses privados, los intereses particulares, tienden a prevalecer sobre los intereses públicos y los intereses colectivos.

En medio de este complejo panorama de dificultades, los partidos políticos se muestran incapaces de resolver esa crisis. Aparecen inferiores a sus obligaciones y a sus responsabilidades. La crisis nacional amenaza la democracia y la libertad de los colombianos como lo demuestran los acontecimientos de los últimos años. Si esta emergencia en que se halla el país no la sabemos sortear todos los colombianos, corremos el peligro de perder, en muy poco tiempo, lo que varias generaciones han construido en materia de instituciones democráticas y garantías individuales y civiles. No estamos lejos del imperio de un gobierno autocrático o de una aventura anarquista.

Lo más grave es la incapacidad evidente de los partidos para reconocer esa crisis, para comprenderla y por lo mismo para afrontarla. ¿En qué están convertidos nuestros partidos? Pues ya no son aquellos grandes instrumentos de expresión de los anhelos populares, ni esas fuerzas ideológicas —idealistas muchas veces— que obraban con inspiración superior y trascendente como ocurrió en otras épocas. No, los partidos se convirtieron en simples maquinarias electorales y burocráticas que todo lo reducen a conquistar pedazos de Administración Pública para lograr, a través de ellos, la interferencia y el condicionamiento en la opinión de los electores. A otros partidos políticos les ha ocurrido lo mismo en el mundo y por eso desaparecieron. En América Latina tenemos lecciones de partidos similares a los nuestros, tanto en su ideología como en su concepción y su papel histórico, que no fueron capaces de superar la tentación de reducir sus actitudes e intereses al proceso de burocratización. Y por eso, cuando esas sociedades avanzaron, encontraron que sus partidos se quedaron atrás y no supieron defenderles las libertades y derechos fundamentales. Algo parecido amenaza al pueblo colombiano y como consecuencia de ello, la Administración es cada día más ineficiente, menos idónea para resolver los problemas del país y defender los auténticos intereses del pueblo. La Administración, en lo nacional, lo departamental y lo municipal, se convirtió en el objetivo de

unas roscas, unas camarillas políticas que no hacen otra cosa que monopolizar los instrumentos de esa Administración. Todo lo redujeron a luchar por éste o aquel empleo secundario, pues piensan que su acción política consiste en lograr cada 2 ó 4 años, gracias al clientelismo, la fuerza electoral necesaria para sobrevivir.

No es sólo la Administración la que sufre el daño ocasionado por este estilo. La Contraloría o las contralorías —desde la Nacional, las departamentales y en los casos en que hay contralorías municipales— se encuentran también afectadas por esa misma mentalidad y ese mismo criterio político. En esencia, la crisis de los partidos se concreta en que no logran interpretar a la Nación. No pueden servir de cauce a la opinión de los colombianos quienes cada vez se separan más de las dos colectividades tradicionales. Crecientes franjas de la población en nuestras principales ciudades —y no sólo en ellas sino también en poblaciones intermedias e inclusive en zonas rurales— miran con escepticismo a los dos partidos y no reconocen en ellos lo que fueron ni lo que significaron en la dirección del país.

El partido liberal se volvió reaccionario

Desde hace varios años esas dos colectividades —por razones comprensibles, inclusive evidentemente justificadas entre 1958 y 1974— compartieron el poder del gobierno. Pero en 1974 en adelante lo siguieron compartiendo hasta convertirse prácticamente en un solo partido que mantiene dos denominaciones, pero en el fondo tiene rasgos ideológicos, mentalidad, criterios, procedimientos e intereses prácticamente iguales. Cada cierto tiempo, en función de la expectativa electoral, estos partidos le montan al país la farsa de una supuesta rivalidad, como lo hemos visto en los últimos años. El país ya lo percibe así y por lo mismo desconfía de la capacidad de tales colectividades para crear opciones diferentes para nuestro pueblo. Detrás de todo esto hay una nueva forma de opresión del pueblo, más sutil, a veces más difícil de detectar y de comprender, más maquiavélica quizás, pero tan frustrante, injusta y arbitraria en sus efectos sobre la colectividad como pudiera serlo una dictadura.

La crisis de los partidos nos preocupa en forma especial a los liberales. Nos preocupa porque nuestro partido representó durante muchos años la fuerza creadora que operaba en la sociedad colombiana. Era en el liberalismo donde estaba la vanguardia conceptual del país y donde se hallaban los sectores que hacían esfuerzo por interpretar el porvenir de Colombia y por abrirle el camino del futuro. Sin embargo el partido liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se volvió un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió, prácticamente, en otra versión del partido conservador, como partido que no apoya a fondo las reformas sociales, ni reconoce las desigualdades crecientes que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo y la urgencia de ponerse al lado de los más débiles y de quienes más requieren del apoyo político de un partido progresista.

En 1974, hace cerca de ocho años, el partido liberal produjo la más caudalosa votación que haya conocido la historia colombiana. La produjo porque pensaba que al terminar el Frente Nacional podría volver un espíritu de renovación y de creatividad en la dirección del país semejante al que existió entre 1930 y 1946; naturalmente que en función, ahora de las circunstancias y necesidades de nuestro tiempo.

Pero todos hemos visto lo ocurrido en estos ocho años y la dramática frustración que sufrió nuestro pueblo después de haber confiado sus esperanzas y sus anhelos al gobierno que comenzó en 1974. Lo que quedó de todo ese proceso es un partido en crisis, desorientado, en manos de unas camarillas y unas roscas que manejan clientelas políticas en los distintos departamentos del país y que obran con espíritu de solidaridad para defender sus prebendas y gabelas, pero no tiene una identificación precisa con una ideología, unas convicciones y sobre todo una interpretación de las nuevas realidades de una nación que avanza hacia la última parte del siglo XX.

Quienes han dominado al liberalismo, por ejemplo, permitieron en estos ocho años —co-gobernando con el partido conservador y compartiendo muchos de sus criterios sobre el

manejo de los problemas sociales y económicos del país— la aparición de los grandes conglomerados que han monopolizado las empresas del país; centenares de empresas que pertenecían a numerosos propietarios dentro de un proceso de capitalización democrática de varias décadas, quedaron en seis o siete años en manos de unas pocas personas y de unos pocos grupos. Hace algún tiempo se hablaba en Colombia de que el nuestro pudiera ser también un país gobernado apenas por cuarenta familias. ¿Hacia dónde evolucionamos? Hacia lo que es hoy Colombia: un país monopolizado por cinco conglomerados que controlan y determinan las palancas y los resortes vitales del manejo de los más importantes sectores económicos de nuestra sociedad.

Lo más triste de todo esto es que todavía se instrumentaliza el sentimiento del pueblo de simpatía y afecto por el partido liberal y ese sentimiento es perfectamente legítimo por cuanto hizo el partido liberal en sus mejores años por la transformación de este país; pero es un sentimiento que no merece ahora lo que es el partido liberal, reducido a un papel secundario, vacilante, incoherente, cuando le correspondía ejercer un liderazgo que el país esperaba creativo y definitivo para su transformación.

Se necesita una revolución electoral

En estos meses, en virtud de nuestros esfuerzos y como resultado de la convocatoria que le hemos hecho no sólo a los liberales sino a esa inmensa franja independiente de compatriotas que están buscando la posibilidad de expresarse políticamente, para influir en la escogencia de sus gobernantes y participar en la dirección del Estado colombiano y de las líneas fundamentales del gobierno, hemos empuñado todas nuestras fuerzas en la organización del Movimiento que hemos denominado por un Nuevo Liberalismo. Liberalismo, porque nos sentimos orgullosos de lo que hizo el partido liberal por Colombia cuando realmente lo guiaban hombres comprometidos con ideologías renovadoras, avanzadas, progresistas. Pero Nuevo porque queremos distinguirnos de la maquinaria a que redujeron el partido esas camarillas dedicadas a la manipulación de un pueblo indefenso y subordinado como se encuentra el nuestro por razón de sus angustias económicas en la mayor parte de las regiones del país.

Se nos dice, entonces, que puede caer el Partido Liberal como consecuencia de esta batalla ideológica, esta confrontación en la que nos hallamos. Todos sabemos que hoy no hay un pensamiento ni un espíritu liberal en el gobierno del país. Todos sabemos que predomina una mentalidad de derecha y además todos sabemos que no se puede comparar la situación de 1946 con la de hoy. En 1946 Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán se enfrentaron porque ambos querían darle una respuesta —que cada uno propuso en términos diferentes a la crisis que se produjo en el Partido Liberal por los acontecimientos que dieron lugar a la renuncia del doctor Alfonso López Pumarejo. El partido no se cayó por la división de 1946. Se cayó como consecuencia de toda la crisis que determinó primero la renuncia del doctor López Pumarejo y luego el deterioro de la credibilidad y el liderazgo del liberalismo en aquellas circunstancias.

Hoy la situación es otra. Hoy no compartimos, ni mucho menos, con el doctor López Michelsen, la interpretación actual de los problemas del país. Yo creo que hay una crisis muy grave y creo que esa crisis reclama una respuesta no sólo del liberalismo sino de los sectores independientes y progresistas del país para superar la encrucijada en que se halla la nación. El doctor López todo lo reduce a presentarse como el candidato de la Paz. Y es curiosa la coincidencia. El primer candidato de la paz que hubo en Colombia en los últimos años fue el doctor Alvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué? Porque el doctor Gómez Hurtado, en 1974, quería maquillar la imagen negativa que determinaron sobre su nombre y su persona los acontecimientos de 1951 y 1952. Ahora el que parece necesitar maquillaje es el doctor López Michelsen. La paz es una preocupación de todos los colombianos y a ella debemos aplicar todas nuestras energías, sin excepción. Pero la paz no puede ser instrumentalizada electoralmente como lo quiso hacer Alvaro Gómez Hurtado en 1974 y como lo quiere volver a hacer el doctor López Michelsen en 1982.

Lo que se necesita ahora es una renovación electoral para que no haya en Colombia una revolución violenta. Es decir, que la Nación se ponga en pie. Que todo colombiano comprenda la responsabilidad que tiene en este

momento, que la superación de los retos y dificultades que amenazan el destino de la Nación no depende ni de un hombre, ni de un partido, sino de la Nación entera que debe derrotar las maquinarias y camarillas que han perturbado el desempeño del Estado y del Gobierno en el manejo de los distintos problemas nacionales. Que el pueblo logre el poder porque hoy no tiene el pueblo poder. Esa es la evidencia de las orientaciones de los últimos gobiernos, de los últimos mandatos presidenciales. Se necesita la participación de nuestro pueblo. Una participación que no se limite al voto, sino —como lo hemos dicho en la mayor parte de las plazas de la República— una participación consciente y reflexiva; **que nuestro pueblo desarrolle una capacidad analítica y crítica para estudiar sus realidades.** Esa es la mejor protección de un pueblo libre y de una verdadera democracia: no depender siquiera de partidos, ni de protagonistas, siempre transitorios y siempre vinculados a un papel provisional. Lo importante es un pueblo consciente de sus derechos; un pueblo unido; un pueblo organizado. Hacia allá se dirigen también nuestros esfuerzos: a conseguir la formación de los elementos que le den al pueblo esa organización y esa capacidad de respuesta a los retos de hoy y a los que se le van a presentar durante los próximos años a nuestra Nación. Sólo así podremos conseguir la verdadera unidad nacional y sólo así podremos conquistar el poder para el pueblo.

La conquista de la paz es, naturalmente, un reto constante y una esperanza básica para la Nación. Desde hace varias décadas nuestro pueblo lucha por conseguir la paz. Por eso aceptó las instituciones especiales del Frente Nacional a las que se opuso el doctor López Michelsen. Por eso el pueblo superó el sectarismo y comprendió que no era sobre esos odios partidistas, con base en ellos, como se podría construir el destino colectivo.

La paz está vinculada a muchos temas: a las realidades sociales y económicas, a intereses extranjeros que tratan de un modo u otro de influir en la vida nacional por la competencia existente entre las grandes potencias que buscan el dominio del planeta. Hay un factor vital para alcanzar la paz y es que los colombianos podamos creer en nuestras instituciones en la medida en que sean auténticas y reales. Que podamos creer, ante todo, en el sistema

electoral como una vía de expresión de la voluntad colectiva. Para ello no nos sirve un sistema electoral anacrónico, lento, ineficiente como el que tenemos; un sistema en el cual vamos a cumplir un mes de las elecciones de marzo y a estas alturas todavía no se saben en varios departamentos cuáles son los resultados definitivos. Tampoco sirve un sistema electoral en el que se acude a la compra de votos, directa o indirecta para condicionar al elector, pagando en efectivo o pagando en especie como lo hicieron muchos grupos políticos vinculados tanto al doctor López Michelsen como al doctor Belisario Betancur en la última campaña electoral. Si un colombiano cree en unas determinadas ideas y piensa que esas ideas no podrán influir en la vida colectiva por la vía institucional porque las instituciones no funcionan o son artificiales, pues ese colombiano tenderá a creer que sólo por medio de la fuerza conseguirá que sus ideas trasciendan en la vida nacional. El primer obstáculo para conseguir la paz perdurable lo tenemos los colombianos en la ineficacia y el artificio de algunas de nuestras instituciones políticas que todavía no han logrado la pulcritud y la limpieza que requieren.

Por todas estas razones, por el panorama que vemos de la crisis nacional, por nuestro rechazo al comportamiento de los dos partidos y nuestra preocupación porque el partido liberal vaya a desaparecer como fuerza renovadora de esta sociedad limitándose a interpretar los intereses de las camarillas políticas, aceptamos la responsabilidad de construir el Movimiento del Nuevo Liberalismo y acepté la candidatura presidencial de ese Movimiento. Una candidatura con la cual vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, vamos a luchar todo lo que sea indispensable para devolverle a nuestro pueblo la confianza en sus dirigentes, en su sistema de instituciones y en la eficacia de sus partidos políticos. En la defensa de nuestras convicciones no vamos a claudicar ni hemos claudicado.

Yo necesito, colombianos, su respaldo. Este esfuerzo no es, ni mucho menos, una lucha de Luis Carlos Galán. Yo no soy otra cosa que un instrumento de la conciencia colectiva. Yo sé que muchos colombianos están pensando en todo esto, están preocupados por la situación del país, ven con angustia el horizonte nacional y quieren intervenir. Hasta ahora no se les

había ofrecido una oportunidad para hacerlo. Nuestro esfuerzo se dirige a eso, a darle a nuestros compatriotas la opción de influir realmente en esta grave encrucijada nacional.

Bogotá demostró en las elecciones del 14 de marzo que sí es posible derrotar a las maquinarias y a los grandes instrumentos que tienen las camarillas políticas. Aquí en Bogotá ha hecho política durante más de cuarenta años el actual Presidente de la República. Aquí en Bogotá ha hecho política durante más de veinticinco años el doctor López Michelsen. Aquí en Bogotá también ha hecho política el director de la campaña del doctor López Michelsen, que encabezaba una de las listas de Senado. Los acompañaban 17 congresistas, numerosos diputados y concejales; sin embargo a todos los adversarios los derrotamos en franca lid. Yo creo que lo mismo puede ocurrir a escala nacional. Bogotá abrió el camino. Aquí, donde sometí mi nombre a la consideración directa del pueblo, el pueblo me respaldó. Yo sé que ahora, cuando mi nombre será juzgado por la totalidad de la nación, de nuevo me va a respaldar. Y repito: no es a Luis Carlos Galán a quien se apoya. La victoria no va a ser de Luis Carlos Galán, la victoria será de nuestro pueblo. No nos dejemos intimidar por la magnitud de las maquinarias y por los instrumentos que tienen. Cuando hay una causa justa, cuando hay convicciones, cuando hay decisión, se triunfa. Y eso es lo que necesita el pueblo colombiano ahora: decisión, coraje, confianza en sí mismo. Yo estoy dispuesto a cumplir mi deber y espero que todos mis compatriotas, todos ustedes, me apoyen en este empeño definitivo para que Colombia supere la actual encrucijada nacional.

En las próximas intervenciones televisivas presentaré ante ustedes más detalles de nuestra plataforma social y económica y analizaré otros puntos concretos. Hoy quería mostrar el panorama e invitarlos a participar en el manejo del destino nacional. Buenas noches y mil gracias.

Bogotá, abril 12 de 1982.

Las prioridades sociales

**Segunda intervención de Luis Carlos Galán
como candidato a la Presidencia de la
República por los canales de Inravisión el
21 de abril de 1982**

Tal como lo anuncié hace nueve días —cuando por primera vez tuve oportunidad de dirigirme a la nación para presentar mis ideas como candidato a la Presidencia de la República— hoy y en las dos próximas intervenciones, me propongo explicar a los colombianos el contenido del programa de gobierno que pretendo adelantar si la nación me respalda en las elecciones del 30 de mayo para convertirme en el próximo Presidente de la República.

En esencia, lo que nosotros proponemos, es la construcción de una Colombia Nueva, o sea una Colombia en la cual los nuevos protagonistas de la vida nacional, las distintas generaciones que hoy actúan en la vida del país, podamos resolver los problemas fundamentales del país, los que constituyen los obstáculos más grandes para que la nación se desarrolle, se transforme y todos sus habitantes tengan la garantía real de la satisfacción de sus derechos fundamentales.

Proponer una Colombia Nueva no significa desconocer los esfuerzos de las generaciones anteriores. Yo comprendo que toda generación inicia su actividad —su desempeño en

el manejo del Estado y las realidades colectivas—, a partir de los hechos creados por las generaciones anteriores: sus aciertos y equivocaciones. Se hereda un patrimonio material y espiritual, es decir, recursos, instituciones y factores. Pero toda nueva generación está obligada, dentro de sus circunstancias, en su tiempo y con sus elementos, a dar respuestas nuevas a los problemas del país. A veces porque esos problemas cambian; a veces también, porque los viejos problemas no han sido resueltos y exigen estrategias diferentes, manejos innovadores de los recursos al alcance del país para resolver los obstáculos y superar las dificultades que tenga la sociedad.

Dentro de ese criterio, para nosotros hay cuatro grandes escenarios de renovación en los cuales se debe construir la Nueva Colombia. En primer término, la renovación política, a la que me referí hace 9 días; es decir, la importancia que tiene para el país contar con instituciones eficaces, honestas y reales, en donde el pueblo colombiano se sienta expresado tanto en la escogencia de sus gobernantes como en la definición de las líneas políticas que van a aplicarse en las respectivas administraciones. Unas instituciones en donde la oposición que respeta la Constitución y las leyes tenga garantías reales para presentar sus puntos de vista y fiscalizar al gobierno; una organización política en donde haya libertad de información; elecciones libres y honestas;

en fin, la expresión auténtica de las aspiraciones del pueblo dentro de los distintos mecanismos institucionales. Pero a la renovación política hay que agregar la renovación social, la renovación económica y un cuarto punto que pudiéramos llamar la renovación del papel internacional de Colombia. Yo creo que la combinación de esas 4 renovaciones nos permitirá construir lo que llamamos la Nueva Colombia.

La renovación social

En esta oportunidad voy a detenerme en los elementos y los factores de la renovación social. En las dos próximas intervenciones analizaré, naturalmente, los otros dos aspectos de la renovación que planteamos al país.

Para hablar de la renovación social hay que ocuparse de varios temas, temas que tienen diversas prioridades. Es importante en la transformación social del país, tener en cuenta la satisfacción de las necesidades fundamentales que condicionan la supervivencia de nuestro pueblo, de cada ser humano y de cada familia. Es necesario impulsar la educación. Es necesario hablar de los derechos de la mujer y de su promoción. Es preciso hablar, también, de la tercera edad, la recreación y el derecho a participar en las decisiones de la comunidad. Sin embargo, no todos esos temas tienen la misma urgencia. Siendo todos ellos importantes, necesariamente hay que escoger los prioritarios y atribuirles los mayores esfuerzos del gobierno en el manejo de los recursos disponibles.

¿Cuáles son los puntos prioritarios? El derecho al alimento, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Mientras estos cuatro primeros derechos no le sean asegurados a todo habitante del país, tendremos una organización social injusta o atrasada. En un gobierno como el que yo propongo al pueblo colombiano —en el cual la primera preocupación sea el respeto al ser humano es necesario reconocer la importancia de estos cuatro temas que subrayo, por encima de cualquier otro tipo de acción estatal. No se trata de ignorar la importancia de otros asuntos en la acción estatal, si no de escoger lo que está primero. Hablo pues de las necesidades fundamentales de supervivencia.

El derecho al alimento

Del derecho al alimento, en primer término. ¿Por qué? Porque en este momento hay un grave problema en Colombia que afecta altísimos porcentajes de la población nacional. Según las cifras del propio gobierno actual, el 62% de los niños menores de 5 años tienen problemas de desnutrición. Eso significa que en este momento dos millones y medio de niños menores de 5 años sufren el impacto de la desnutrición. Y, dentro de esos dos millones y medio, 500 mil padecen desnutrición grave. O sea, que sus condiciones de subalimentación o de hambre son de tal magnitud, que su crecimiento físico está perturbado seriamente por ese factor y su desarrollo intelectual y cerebral corre peligro de no ser normal como consecuencia de tal deficiencia. El problema de la nutrición nos presenta a Colombia como un país bastante atrasado en América Latina. Los promedios de nutrición por habitante, en el resto de América Latina, son superiores a los nuestros. No ocupamos el puesto que correspondería a nuestras dimensiones y a nuestros recursos, sino que estamos más atrás. Hay fallas en la oferta de alimentos en el país. Hay fallas en la educación nutricional y la cuestión no ha merecido la atención que requiere por parte de los últimos gobiernos. Aunque no voy a desconocer —ni mucho menos— el esfuerzo realizado en el programa PAN, pienso que este tipo de esfuerzos no es suficiente ni permitirá resolver verdaderamente el problema. Se hace necesario reconocerle a este asunto la prioridad que merece en las acciones estatales, para satisfacer la necesidad primaria que esto representa para la población. Yo creo que el país requiere un gran plan nacional de nutrición. No con el propósito de hacer soluciones aisladas o parciales, o programas experimentales, sino de afrontar resueltamente este asunto. Para ello, se necesitan distintas estrategias. En primer lugar se requiere una reorganización institucional de los instrumentos que tiene el Estado para manejar el problema de la nutrición y de la alimentación de los colombianos. Es preciso crear un organismo directamente dependiente del Presidente de la República a cuyo cargo esté dirigir un gran programa para resolver este problema. Un organismo con atribuciones reales de coordinación entre las distintas instituciones estatales que por una u otra razón influyen en la provisión, en la distribución de alimentos o en los demás temas relaciona-

dos con una política de modernización de la nutrición de los colombianos. Pienso que se necesita un plan nacional de suministro lácteo: un programa resuelto, valiente, de incremento de la producción de leche en el país. Que no se maneje más este tema con criterios políticos de pequeña cuantía —a veces demagógicos, otras veces superficiales e improvisados—, sino que se dé el respaldo necesario a quienes se desempeñan en ese sector, para abastecer realmente al país de sus necesidades de leche e inclusive, llegar a tener excedentes de exportación, aprovechando las ventajas de que dispone un desarrollo ganadero colombiano que tenga en cuenta las posibilidades de transformación de la producción general de leche.

Por otra parte, pienso que se deben crear en forma general, masiva, los restaurantes escolares de tal manera que no haya niño que se encuentre en primaria que no tenga la seguridad de un subsidio especial, con el abastecimiento o la ración diaria de leche. No estoy descubriendo nada nuevo.

Estoy simplemente señalando una prioridad y subrayando un procedimiento para afrontar el problema nutricional del país, pero, sobre todo la decisión política de actuar en ese tema y de indicarles a todos los instrumentos del Estado la trascendencia de este asunto.

El derecho a la salud

En segundo lugar, tenemos los colombianos el problema de la salud. Una cuestión con muchos aspectos que varían según las edades, los factores regionales, el tipo de enfermedades y los presupuestos. Todo esto es muy importante, pero dentro del propio panorama de la salud del país hay ciertas prioridades para subrayar. Yo pienso que mientras no resolvamos el problema del agua potable, cualquier esfuerzo que haga Colombia en aplicar más recursos a su sistema nacional de salud —recursos económicos, humanos y materiales— será un esfuerzo perdido o en buena parte perdido; porque la falta de agua potable influye en las enfermedades más frecuentes en el país y es una de las causas de mortalidad más significativas en el conjunto de la población nacional. En este momento, en Colombia tenemos

el problema de un gran atraso en el desarrollo de los acueductos y de los procesos de purificación de las aguas. Ciudades como Sincelejo, como Montería, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Valledupar, Tunja, Villavicencio, Barrancabermeja, Leticia y San Andrés —y cito apenas unos ejemplos— carecen de servicios adecuados de agua potable. Advierto que me he referido a ciudades que son, en su mayoría, capitales de departamento. Pero si uno mira el resto de municipios en Colombia, poblaciones intermedias que oscilan entre 20 mil y 50 mil personas, encuentra que el atraso es crítico y que allí está uno de los grandes problemas de la salud de los colombianos, que reclama también prioridades en la inversión pública. Se han hecho esfuerzos. Sí. Pero siempre sin reconocer la verdadera urgencia del problema y sin darle al gasto público la prelación necesaria para satisfacer las dificultades que tienen estos asuntos. Hay poblaciones en donde la urgencia inclusive es más dramática, como ocurre en la mayor parte de la provincia del Tequendama, aquí en las proximidades de Bogotá. Es decir, en Tocaima y los municipios que se abastecen de un modo u otro del río Bogotá o similares, en donde ya el asunto es de tal gravedad que la carencia de agua potable y el uso de aguas contaminadas ha originado el nacimiento de criaturas deformes y cosas por el estilo. Todo esto lo señalo para indicar la indiferencia que ha existido en el reconocimiento de este problema y el significado que tiene en la estrategia de una verdadera política de salud para los colombianos.

Tenemos, además, que con los esfuerzos en agua potable, los que se hagan en nutrición y los que tengan lugar en vacunación, con todo eso, se produciría un replanteamiento total del problema de salud del pueblo colombiano. Claro que a estos programas hay que agregar un mayor respaldo presupuestal para el sistema nacional de salud; un mayor apoyo a los hospitales del país, un mayor respaldo, no sólo en lo económico, sino en el desarrollo científico de esas instituciones y en las condiciones de trabajo de las personas que allí se ocupan. Pero insisto en que el pueblo colombiano debe reconocer ciertas prioridades; señalarlas e imponerle a sus gobernantes que se ocupen ante todo de asuntos como los que estoy subrayando.

La vivienda popular

Por otra parte, fuera de los problemas de nutrición y salud, tenemos el de la vivienda popular. Evidentemente es uno de los más serios problemas que tiene el país. Tan grave, que cuando comenzó la administración del doctor López Michelsen por ejemplo, en 1974, se requerían alrededor de 30 salarios en promedio para adquirir una vivienda. Hoy se requieren cerca de 60 salarios. ¿Qué ocurrió en las políticas de vivienda en estos ocho años y en los demás factores económicos y sociales para que se hubiera encarecido en esa forma la esperanza o la posibilidad de resolver este problema fundamental? Yo pienso que este problema tampoco ha sido reconocido en su importancia real por los últimos gobiernos. El drama de la vivienda popular adquirió dimensiones inmensas, gigantescas, por la gran migración a las ciudades, el crecimiento demográfico y por la necesidad del pueblo colombiano de mejorar, naturalmente, su vivienda. Pero no hubo respuestas oportunas en el Estado. Los últimos gobiernos cayeron en el error de improvisar medidas —muchas veces para guardar las apariencias, para presentar cifras estadísticas más o menos significativas, a veces comparándolas artificiosamente con períodos muy prolongados que correspondían a otra situación del país —hace 20 ó 30 años— sin acometer planes verdaderos, que guardaran proporción con la nueva magnitud del atraso existente en la cantidad y la calidad de vivienda. En este momento la cuestión no es únicamente de dinero, ni de disponibilidad de materiales de construcción. Hay una gran cantidad de factores que condicionan la solución del problema de la vivienda. Pero hay algunos de ellos, como el de la tierra urbana que es crítico porque determina el mayor encarecimiento de la vivienda y no ha tenido ninguna respuesta porque la valorización de la tierra —por desarrollo de las ciudades, o por factores inflacionarios que ciertamente se han dado en estos años— no tuvo consideración adecuada de estos gobiernos.

La tierra urbana

Pertenezco a un grupo de parlamentarios que en 1978 presentó un proyecto de reforma urbana en el Congreso. No pensábamos, ni mucho menos, ser infalibles en las soluciones

allí planteadas. Pero sí queríamos conseguir una respuesta gubernamental al tema y el gobierno evadió el asunto. Es que afrontar la reforma urbana implica intervenir resueltamente en favor de las clases medias y populares del país. Implica correr riesgos, herir intereses creados, afectar privilegios de capitales y patrimonios formados a partir de la especulación con la tierra urbana. Nosotros hemos propuesto desde entonces y hemos enfatizado en el curso del último año, que se trabaje sobre la idea sugerida por expertos muy respetables, sobre todo en Medellín, de crear Bancos de tierra, es decir, que el Estado intervenga en la tierra urbana para evitar la especulación con el precio de la misma. Porque mientras la tierra urbana siga subiendo de precio en la forma en que ha ocurrido, será todavía más difícil resolver el problema de la vivienda.

Los servicios públicos

En igual forma, es necesario vincular este asunto con las estrategias relacionadas con el desarrollo de los servicios públicos. Es decir, con la conformación de empresas de servicios públicos en nuestros municipios: dinámicas, programadas con seriedad, que no tengan burocracia, no sean objeto de tráfico clientelista ni de errores y abusos que se trasladan naturalmente a los usuarios de servicios públicos; porque quienes pagan los costos excesivos de la burocracia en tales instituciones —empresas de acueducto, de energía de teléfonos— pues son los usuarios, los ciudadanos comunes y corrientes a quienes les aumentan las tarifas en parte para compensar errores, negligencias y vicios administrativos.

Todo esto juega en el problema de la vivienda. Influye de manera significativa y eso hay que afrontarlo y reconocerlo con responsabilidad. Lo que está viendo el pueblo colombiano en estos días es un debate entre dos candidatos presidenciales —oficialistas ambos— en donde el uno plantea soluciones fantásticas, utópicas; y el otro se declara impotente para afrontar el problema o considera que ha desbordado la capacidad de las instituciones oficiales, lo cual es apenas obvio, pero no tuvo, ni en su gobierno ni ahora, respuestas proporcionales a la magnitud del asunto.

La educación básica y los campesinos

Al lado de esto tenemos el tema de la educación, muy amplio, muy extenso y sobre el cual quiero subrayar también los puntos básicos. Nosotros proponemos que el país acometa como verdadero propósito nacional —no lo digo en el curso de un gobierno, pero sí como empeño real del país que se emprenda a partir de la próxima administración; la meta de los nueve años de educación básica gratuita y obligatoria para todos sus habitantes. Esto lo propuse desde 1971 cuando fui Ministro de Educación y sigo convencido de la urgencia de un propósito nacional de esta naturaleza. Porque no se puede organizar una sociedad justa ni con un mínimo de igualdad y equilibrio allí donde se producen ante todo desigualdades acentuadas por un sistema educativo discriminatorio y elitista, en donde unos colombianos pueden lograr diez, quince, veinte años de estudios inclusive, y otros no pueden pasar de dos o de tres. Si hay compatriotas que pueden estudiar quince, veinte, treinta años y con mayor razón dentro de los nuevos conceptos de la educación permanente, donde ya se superan los calendarios tradicionales de escolaridad—, eso está bien. Pero lo urgente, lo prioritario, lo que debe hacer un gobierno progresista que se inspire realmente en la defensa de los derechos de todos los habitantes del país, es concentrar las energías en los nueve años de educación básica gratuita y obligatoria. Hay países del mundo que ya están trabajando sobre la meta de 14 años, de 16 años de escolaridad promedio para sus habitantes y nosotros en este momento —si nos va bien— nos estamos acercando apenas a promedios de escolaridad en zonas urbanas de 5 y 6 años. En las zonas rurales hay un inmenso atraso, una gigantesca injusticia. La denuncié también en la época en que fui Ministro de Educación y propuse soluciones como el proyecto que se llamó entonces de “Concentraciones de Desarrollo Rural”, en donde se buscaba convertir a la escuela rural en el escenario de servicios múltiples de interés para el campesino, en donde al lado de la solución educativa se diera la solución sanitaria, la organización de la comunidad y otros servicios: como los de extensión agrícola, las cooperativas, etc. Ese programa fue abandonado, o dejado a mitad de camino por lo menos. Yo creo en él. En aquella época se trataba de organizar alrededor de 60 concentraciones en todo el país para introducir el sistema y aprovechar

las experiencias de los núcleos escolares rurales. Entiendo que no se llegó a más de 35; pero allí donde hay Concentraciones de Desarrollo Rural cambió el panorama de la educación campesina y se abrió una posibilidad de verdadero equilibrio en las oportunidades de educación para los campesinos de tales corregimientos o veredas, en relación con los habitantes de zonas urbanas.

La meta lógica es diseñar un nuevo sistema de educación rural que reconozca las realidades del agro pero que equilibre las oportunidades de educación entre el campesino y las personas de las zonas urbanas. Hay recursos para eso. Hay instituciones oficiales que tienen recursos importantes pero no están sumando esos recursos con una coordinación adecuada.

La igualdad de oportunidades

Yo pienso que lo importante en todo esto es reconocer las prioridades. Lo fundamental es admitir que la primera meta de una verdadera política social en Colombia es asegurar la igualdad de oportunidades ante la vida para todos los colombianos. Hay una figura muchas veces utilizada para explicar esto y me parece pertinente repetirla esta noche ante ustedes. Si uno compara la vida con una carrera de mil metros, de modo que se dijera que una vida digna y una vida en la cual se satisfagan las necesidades fundamentales de toda persona equivale a recorrer mil metros, lo importante es que todos los colombianos, los 28 millones, podamos partir del mismo sitio en esa carrera. Quienes por sus méritos, su capacidad creativa, su responsabilidad y su esfuerzo, puedan recorrer tres mil, cinco mil metros, bien pueden hacerlo. Pero que todos podamos recorrer mil metros y no como sucede hoy cuando hay colombianos que sólo recorren unos pocos metros, hay algunos que salen 800 metros adelante, hay otros que comienzan la carrera 200 metros atrás y hay una gran cantidad a los cuales nunca se les deja participar en la carrera. ¿En qué consiste la igualdad de oportunidades? En la participación en esa carrera partiendo de un mismo sitio. Y ese sitio igualitario lo aseguran la nutrición, la salud, la vivienda y la educación. Nada serio se puede hablar en política en Colombia mientras no se reconozca la importancia de estos temas. Es

importante, claro está, el ferrocarril de Saboyá que menciona el doctor López Michelsen; es obvio que sí; importante también el Palacio de Convenciones en Cartagena, pues sí; no vamo a decir que sea algo superfluo. Pero la pregunta que tiene que contestar un gobierno progresista es qué está primero. Yo creo que primero está el ser humano. Primero está la supervivencia de cada uno de los habitantes de Colombia. Su derecho a tener una vida digna y justa y a un Estado que se organice con los recursos escasos —si, son escasos— pero que administrados dentro de esa noción de prioridades, deben aplicarse a la solución, primero que todo, de esos problemas vitales.

Ya habrá oportunidad en las próximas intervenciones, de analizar otros temas. Analizar la renovación económica de Colombia, la política internacional del país y precisar los recursos disponibles para dar respuesta a estas expectativas y necesidades. Lo que quiero subrayar muy claramente esta noche al pueblo es que si yo dirijo el Estado colom-

biano a partir del 7 de agosto, tendré en mente esta renovación social como punto prioritario, basado en esos temas que he descrito: luchar por eliminar el hambre en Colombia, por eliminar la desnutrición, por eliminar la insalubridad y los problemas de salud que padece nuestra población, simplemente por la carencia de agua potable en buena parte del territorio de Colombia. Luchar por la vivienda popular, por la extensión de la misma y la organización de recursos y estrategias gubernamentales que den respuesta a ese problema con criterios de justicia social y de igualdad de oportunidades. Y luchar por la democratización de la educación dentro de la idea de buscar nueve años de escolaridad mínima para todo colombiano y de buscar para los campesinos colombianos una transformación real en sus oportunidades de aprendizaje y de capacitación. Tendremos que hablar de más cosas. Claro que sí. Pero esto es lo primero. Mil gracias, buenas noches.

Abril 21 de 1982.

La salud pública

**Plataforma de Salud del Nuevo Liberalismo
presentada por el candidato a la
Presidencia Luis Carlos Galán en el
Paraninfo de la Universidad de Antioquia
el 3 de mayo de 1982.**

Señor Doctor IVAN DUQUE ESCOBAR,
Gobernador de Antioquia y Presidente del
Consejo Superior.

Señor Doctor ANTONIO YEPES PARRA,
Rector de la Universidad de Antioquia.

Señor Doctor HECTOR ZULUAGA TO-
BON, Decano de la Facultad Nacional de Sa-
lud Pública.

Señores Profesores y Estudiantes.

Dirigentes Políticos.

Señoras y Señores.

Como Candidato del NUEVO LIBERALIS-
MO a la Presidencia de la República, me es
muy grato corresponder a la honrosa invita-
ción que me hicieron las Directivas Universita-
rias para dirigirme a ustedes en este Paraninfo,
símbolo de la universalidad de las ideas y de la

democrática libertad de pensamiento que ca-
racterizan a la máxima institución docente de
Antioquia.

EL PUEBLO, Y NO EL ESTADO, ES EL
CENTRO Y EL FIN DE LA VIDA SOCIAL.
Para que el poder cause beneficios reales es
necesario que no se busque como un fin en sí
mismo sino como el único medio para satisfa-
cer las necesidades y deseos del pueblo, y para
promover la cooperación social con miras al
bien de la comunidad, el cual se considera rea-
lizado cuando se obtiene la plena vigencia de
los derechos y deberes de la persona humana.

Quien dé siquiera una mirada desprevenida
a Colombia encontrará que un común denomi-
nador aparece en todas sus regiones: los dere-
chos humanos continúan siendo privilegios y
por doquier pululan el Hambre y la Sed en to-
das sus formas: física, de conocimientos, de
salud, de bienestar, de superación, etc. En su-
ma, somos un país subdesarrollado y entre
nosotros rige un sistema económico, político,
cultural y social claramente definido y mensu-
rable, el cual perpetúa el atraso en el cual nos
hallamos.

Si la democracia es la forma de gobierno
que requiere un mayor cúmulo de conocimien-
tos políticos y sociales, y más virtud y sabidu-
ría, nuestro gobierno no tiene de democrático

sino el nombre, y las buenas intenciones de la Constitución, las leyes y los procedimientos escritos; porque, en realidad, vivimos bajo un régimen oligárquico y demagógico, en el cual frecuentemente quienes ejercen el poder se aprovechan del temor y el atraso de las gentes, y se burlan de los códigos en los cuales pueden estar las formas de gobierno más liberales y sensatas del mundo.

Ante este sistema envejecido y agonizante nace en Colombia el NUEVO LIBERALISMO, heredero legítimo de lo que ha sido el Partido Liberal como vocero del pueblo y de la democracia, e inspirado en una toma de conciencia de los problemas reales y sentidos de nuestra nación, en una nueva manera de hacer política, y en una concepción diferente del Estado. El NUEVO LIBERALISMO, como organización popular y democrática, busca el máximo apoyo de las masas, las cuales deben participar activamente en el proceso político y agruparse alrededor de principios de pensamiento y de acción, y no de camarillas o líderes.

No necesita Colombia ideas excepcionales para trazar su rumbo en los próximos años. Lo que requiere Colombia, ante todo, es honestidad entre quienes se acerquen a interpretar su destino, y que las ideas fundamentales se conviertan en compromiso práctico y sentido de quienes las presentan, para que puedan llegar a ser verdaderos propósitos nacionales.

El NUEVO LIBERALISMO considera la salud como un todo social en el cual la persona es célula vital, y como tal debe enfocarse si realmente se desea lograr las más altas metas de bienestar colectivo. La salud es el producto de una perfecta armonía entre el ser humano y su medio biológico, físico, económico y social.

Según esta concepción ecológica, la salud es el resultado de la combinación de factores biológicos, económicos, políticos, históricos, culturales, educacionales y sociales, que varían de país a país, y aún de región a región y la prevención de la enfermedad requiere de algo más que de la ciencia y de la técnica, demanda un conocimiento y una comprensión de los factores que condicionan los estados de salud y de enfermedad. El ser humano es más el

producto de su ambiente que de su dotación genética. No es la raza lo que determina la salud del pueblo, sino las condiciones de su vida, cada tipo de sociedad o cada grupo económico o cultural se caracteriza por su tipo propio de enfermedades y tiene especiales necesidades de atención.

El trabajo actual en el sector de la salud en Colombia demanda no únicamente el saber cómo diagnosticar y tratar eficientemente las enfermedades en los distintos niveles de atención, y cómo prevenir en lo posible su ocurrencia, sino al mismo tiempo conocer e interpretar correctamente los problemas del medio físico, sicobiológico y social que influyen en la adaptación de nuestros compatriotas a su medio ambiente, y también prescribir las acciones preventivas, correctivas y de rehabilitación necesarias para la conservación de la salud del pueblo en su más alto grado.

Toda sociedad, cualquiera que sea su grado de estructuración y desarrollo, no se queda estabilizada en el curso del tiempo sino que está sujeta a continuos procesos de cambio, que pueden ser lentos, consecuencia y en ocasiones causa obligada del proceso mismo, o bruscos y críticos, como expresión de situaciones de crisis históricas, a veces de aparición cíclica, y que de todas formas afectan la estructura social. En el ciclo vital de los seres humanos los estados de salud y de enfermedad se alternan como consecuencia de las variaciones de los mecanismos de adaptación de la persona a su sociedad.

Nadie puede pretender ignorar la etapa crítica que vivimos en la historia de nuestra nación, y de ella hace parte inseparable la situación de crisis que atraviesan la profesión médica y sus afines, y con ellas las instituciones encargadas de dar salud y asistencia social a los colombianos.

No puede el país continuar ajeno a una realidad social que se agrava día a día y se evidencia, en lo que hace relación con la salud, en situaciones tan vergonzosas como las que denotan la presencia en nuestras calles de numerosos enfermos mentales que deambulan abandonados pregonando nuestra insensibilidad social y nuestra incapacidad para hacer

justicia, o la de madres y niños mendicantes que habitan en las aceras viviendo de la caridad pública y del pillaje, para no referirnos a las estadísticas que demuestran cómo la prostitución, la desnutrición y muy particularmente la que se observa en los menores de edad, y los índices de morbilidad por enfermedades que son francamente previsibles, siguen manteniéndose para escarnio nacional, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para reducirlos.

Cuatro factores importantes han precipitado esta crisis que se agrava día tras día: la socialización mal entendida y peor practicada de la medicina y de la asistencia social; la politización y burocratización de las instituciones de salud; el deterioro de la docencia en el área de la salud y la posición asumida por algunos sectores de tomar el camino del menor esfuerzo en el aprendizaje y el ejercicio de sus funciones. Los colombianos vivimos muchas situaciones contradictorias y paradójicas. No tenemos el desarrollo económico y social que nos permita lograr para todos y ahora una medicina altamente tecnificada; sin embargo, tampoco podemos resolver el problema de salud con tecnologías médicas desueltas o anticuadas.

En el proceso de socialización de la atención a los problemas de salud se han olvidado muchas cosas fundamentales, como el estímulo a la investigación y a la eficiencia en el trabajo, el reconocimiento de los méritos de quienes se esfuerzan por obtener una mejor preparación, y la importancia de una correcta relación entre el personal de salud y el paciente.

Los recursos financieros disponibles permitirían con seguridad aumentar la cobertura en forma ostensible y mejorar los servicios, si fuesen manejados con sano criterio científico y administrativo. Constituye un gravísimo error y un agravio a la comunidad entregar la dirección y administración de las instituciones de salud como cuota de poder a los partidos o grupos políticos que sólo buscan sostener su electorado con base en las posiciones que pueden ofrecer a sus seguidores. El NUE-

VO LIBERALISMO no entiende ni puede aceptar que para proveer un cargo sea requisito indispensable pertenecer a determinados sectores políticos. La situación de la Seguridad Social, de las Cajas de Previsión Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar empeora cada día, ya que estas entidades son manejadas con criterios clientelistas. La reestructuración del Instituto de la Seguridad Social se frustró en su aplicación cuando fue entregado como cuota de poder a un determinado grupo.

Otro aspecto que requiere cuidadoso replanteamiento es el relacionado con la docencia en el área de la salud: ésta tiende a privatizarse y las universidades oficiales no han escapado al morbo de la politización y la burocratización, por lo cual se hace necesaria una revisión a fondo de los programas y políticas del gobierno y de las entidades docentes, ordenadas hacia la formación de personal médico, odontológico y auxiliar, y hacia la reasignación de las funciones que cada quien debe cumplir dentro del sistema de salud. A veces se debe reimplantar la cátedra de ética profesional la cual inexplicablemente dejó de tener importancia durante los últimos gobiernos.

No han escapado tampoco las instituciones para la atención de los enfermos y los desvalidos a la influencia del espíritu mercantilista y por eso los desposeídos de bienes de fortuna carecen del derecho a los servicios asistenciales que les son negados cuando no pueden retribuir económicamente las atenciones que solicitan en las instituciones públicas y en las privadas que se presentan como entidades "sin ánimo de lucro".

En resumen, la salud es una necesidad y un derecho, pero este derecho no lo garantiza el diseño ni aún la puesta en práctica de un perfecto sistema asistencial. La garantía básica del derecho a la salud es la justicia social. Mientras no exista la paz social, ni haya seguridad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes, ni una producción suficiente de toda clase de bienes, inclusive espirituales; y en tanto persista la injusta distribución de los bienes producidos y sea posible la constitución de clases privilegiadas, aún entre los trabajadores, tampoco podrán garantizarse las condiciones objetivas básicas

para la salud del pueblo, es decir, la nutrición, la educación, la vivienda, las vías de comunicación y el acceso a la información.

La salud en Colombia está lejos de ser una conquista para nuestro pueblo. Las enfermedades que la humanidad ha dominado en algunos países desde hace varias décadas, entre nosotros siguen ocupando los primeros puestos de incidencia y conduciendo a la muerte, especialmente a la población infantil. Los esfuerzos hechos por los cuatro últimos gobiernos, principalmente la creación de un Sistema Nacional de Salud y la reestructuración del Instituto de la Seguridad Social, no han sido suficientes para obtener logros substanciales en el mejoramiento de la salud de nuestro pueblo y para cambiar el patrón de morbilidad predominante en el país. Un diagnóstico rápido de la situación nos lleva a concluir que aunque es claro que comienzan a incidir los problemas de salud de áreas desarrolladas como son las enfermedades degenerativas y los accidentes, no cabe duda que la mayor incidencia la tienen las enfermedades relacionadas con el saneamiento básico, es decir, con la dotación de agua potable, la eliminación de excretas y aguas servidas, la disposición de basuras, y el control de plagas y parasitosis. Pero de nuevo y principalmente hay que señalar la estricta asociación del riesgo de enfermar y morir con la situación de pobreza y miseria. Mientras subsista y se acentúe la flagrante desigualdad en la distribución de la riqueza social, este riesgo seguirá escogiendo sus víctimas entre los marginados, la desnutrición seguirá siendo la base de los problemas de la salud, y los programas presentados por los sectores políticos dominantes no pasarán de ser una pantalla demagógica que oculta al pueblo las verdaderas causas de sus enfermedades y en la cual se proyectan las promesas vanas de cambios inmediatos y mágicos de la dura realidad que vivimos.

No pretendo, luego de estas ideas generales que he querido utilizar como una introducción al tema de la salud de nuestras gentes, copar el tiempo y su amable atención con una conferencia académica sobre los múltiples problemas que aquejan a Colombia y a cualquier otro país subdesarrollado. Analizar en detalle todos y cada uno de los campos es labor de los equipos técnicos que pronto me acompañarán en el gobierno, y no siendo función mía

el fatigarlos con índices de textos clásicos sobre el diagnóstico del mal reinante, prefiero no manipular cifras porque ellas no siempre dicen la verdad y en términos de las coberturas logradas hay muchas inexactitudes y datos creados para la conveniencia de los éxitos ministeriales o de gobiernos anteriores, quienes con el diagnóstico del problema en sus manos no siempre atacaron en un orden lógico de prioridades la solución de las angustias de nuestro pueblo.

Esta falta de definición de prioridades ha llevado a la incoordinación, dispersión, duplicación de la capacidad instalada, incomunicación entre los niveles de decisión, deficiente control estatal al empleo de los recursos, y más aún, a repetir por décadas un diagnóstico que de sobra conocemos los colombianos y unas mismas fallas en el sistema operativo, por carencia de un instrumento único pero descentralizado que canalice toda nuestra planificación de la salud, como propondré más adelante.

Reconozco la importancia de la pre y la hipertensión, del control del tránsito, así como de los problemas geriátricos, pero, por ahora, crear cátedras de gerontología, dictar normas de conducción de vehículos o luchar contra la prehipertensión no desplazará la atención de mi gobierno que me propongo concretar en los asuntos prioritarios para la salud de los colombianos.

Como consecuencia de todo lo enunciado, hago un llamamiento a la justicia social dirigido a todas las personas que quieran contribuir a que nuestro pueblo alcance seguridad y dignidad en su vida moral y material. Para que este llamado no sea retórico y genérico, quiero proponer dentro del marco ideológico y programático del NUEVO LIBERALISMO una serie de acciones concretas para mejorar radicalmente el nivel de salud de los colombianos.

Dado que algunas de estas propuestas implican cambios fundamentales en el sistema de salud actual, quiero invitar a los interesados en estos problemas a hacerles un estudio serio y debates amplios y democráticos con el fin de encontrar los caminos más viables para sus realizaciones. Deseo invitar muy especialmente a la Facultad Nacional de Salud Pública,

por cuya iniciativa los Candidatos a la Presidencia de la República tenemos la oportunidad de expresar nuestras ideas, a organizar foros, mesas redondas y otras actividades que contribuyan a su análisis objetivo.

Primera. La nutrición

Mi primera propuesta, dada su fundamental importancia, es la de normalizar el estado nutricional actual de la población y prevenir la desnutrición tal como lo expresé hace pocos días al dirigirme a toda la nación en las conferencias televisadas. Pienso que debemos desarrollar una medicina orientada hacia la prevención primaria, como presupuesto para racionalizar la prevención secundaria y terciaria y para evitar los elevados costos de estas dos últimas.

No se trata de importar alimentos masivamente hacia este país de vocación agrícola, ni de fomentar las siembras en los latifundios. Tampoco se trata de programas de suplementación alimenticia, aunque se deba reconocer que seguirán siendo necesarios mientras se acabe con la injusticia social. La justa distribución de la riqueza debe hacer que todas las personas puedan adquirir los alimentos necesarios para una nutrición adecuada y balanceada, especialmente los ricos en proteínas, y no los que por su menor costo ofrecen demagógicamente como canasta familiar otros candidatos, quizás a sabiendas de su escaso valor nutritivo.

Por otra parte, para lograr producir en nuestra nación los alimentos que se necesitan para el consumo interno, es indispensable hacer dos reformas que harán posible la verdadera transformación de la nutrición y la salud. Me refiero a un nuevo régimen de tenencia de tierras que asegure su adecuada utilización y mejore los ingresos de la población campesina, y al apoyo financiero, técnico y de mercadeo a los pequeños y medianos propietarios quienes a pesar de su secular desprotección son los que actualmente producen la mayor parte de los alimentos.

Por lo vasto del tema, hoy me limitaré a plantearlo. La política agropecuaria del Nue-

vo Liberalismo ha sido ampliamente explicada en muchas ocasiones y los interesados pueden encontrarla en mis exposiciones ante este sector.

Segunda. Acciones sobre el medio ambiente, agua potable, alcantarillados y basuras

El abastecimiento de agua potable y el desecho de excretas, basuras y aguas servidas, bases ambientales fundamentales para la salud, se deben hacer a través del trabajo con la comunidad. Sin descuidar las ciudades mayores e intermedias que necesitan grandes obras de ingeniería, puede afirmarse que es posible lograr este objetivo para todos los colombianos ya que las comunidades, con su trabajo, aportan el 45% del costo de los acueductos y alcantarillados. Un sistema integrado de salud como el que propongo más adelante, planeará, financiará y vigilará la construcción de estas obras, que en muchos lugares pueden ser llevadas a cabo por una Acción Comunal despolitizada la cual inclusive podría administrarlas bajo la supervisión del Sistema, y cobrarán a los usuarios las cuotas de recuperación para su mantenimiento ya que estas obras pueden ser propiedad de la comunidad y no del Estado. Vender y comprar agua potable es rentable para cualquier comunidad, bajo cualquier sistema político y en cualquier lugar del mundo. El sistema enseñaría a los municipios y a las comunidades a hacer rellenos sanitarios en los lotes comunitarios.

Las cuencas hidrográficas que abastezcan los acueductos de cualquier tamaño deben ser objeto de protección especial no sólo en cuanto a reforestación sino en lo relativo a impedir su contaminación, llegando hasta a expropiarlas si sus dueños no se ajustan a la ley.

Tercera. Establecimiento de un único sistema integrado de salud

El fortalecimiento y el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Salud sólo será posible si el país avanza hacia un sistema integrado de salud que coordine el Seguro Social, las Cajas de Previsión, el sistema hospitalario nacional y las instituciones de bienestar familiar.

El hoy llamado Sistema Nacional de Salud adquirió su forma en el mandato del doctor Alfonso López Michelsen no por generación espontánea ni como idea de un Presidente sino como producto de una serie de antecedentes históricos y del esfuerzo de los gobiernos anteriores. Luego de un estudio que sus asesores llamaron "minucioso" y que sólo duró pocos meses, el mandato mencionado estableció, por medio de decretos-leyes, la estructura y organización del Sistema Nacional de Salud conservando la esencia de los contenidos anteriores. La decisión fue correcta pero los antecedentes son innegables.

En 1969, durante el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, la ley 39 estableció el Plan Nacional Hospitalario y plasmó el diseño de un Sistema de Regionalización de servicios. La década del setenta se inició con el Plan Nacional de Salud contenido en el Plan General de Desarrollo 1970-1973 conocido como el Plan de las Cuatro Estrategias y que incluía los programas de salud y educación de las leyes 2 y 9 de 1973 resultó el rediseño del plan de salud y se expidieron varios decretos con el objetivo de crear el perfil de un Sistema Nacional de Salud, el cual quiere presentar como ideado y creado por él su inmediato sucesor.

Como criterio básico el Nuevo Liberalismo propone reunir en un único pero descentralizado Sistema Integrado de Salud las instituciones que hoy, a través de acciones parciales y generalmente incoordinadas, actúan para tratar de resolver el problema de la salud.

Correspondería entonces al Ministerio de Salud el nivel directivo en lo que compete a la conducción, orientación, decisión, normatización y control y el nivel operativo en la ejecución, atención y servicios a toda la comunidad. Continuarían, como hasta ahora, desde el punto de vista directivo los estratos nacional, seccional y regional, y desde el punto de vista operativo la pirámide local, regional y de referencia.

No siendo ésta la oportunidad para exponer más en detalle la organización interna que tendría el Sistema Integrado de Salud, quiero hacer énfasis en que por principio debe ser descentralizado en su estructura. Su finalidad debe ser la coordinación de entidades hasta

ahora inconexas, sin caer en el error de crear un monstruo hipertrofiado e imposible de administrar.

El Sistema Integrado de Salud tendría múltiples ventajas como eliminar la burocracia y la duplicación de los planes, lograr el aprovechamiento pleno de los recursos humanos, de planta física, de dotación, etc.; ello haría autosuficiente al Sistema y no a cada componente como se pretende ahora; y así se armonizarían todas las acciones del Estado para atender a la salud de toda la población.

Los riesgos económicos de invalidez, vejez y muerte serían atendidos por el Ministerio de Trabajo, y a éste aportarían todos los patronos y trabajadores como lo hacen hasta ahora.

Los patronos aportarían al Ministerio de Salud como ahora lo hacen al Instituto de Seguridad Social, pero, para evitar el paternalismo estatal y racionalizar la demanda y el uso de los servicios, los trabajadores no aportarían por los riesgos de enfermedad y maternidad, sino que serían atendidos por las instituciones del Sistema con tarifas únicas vigentes en todo el país y comprarían las drogas al precio de costo.

Los desempleados y los desposeídos y sus familias deben ser atendidos con subsidio del Estado.

Es fundamental exigir a todos los gobernadores que los dineros de las Beneficencias provenientes de las rentas por licores, anotaciones y registros sean escrupulosamente entregados a los Servicios Seccionales de Salud, ya que esto no se cumple en algunos departamentos y al parecer hay Beneficencias que derivan dineros a otros fines como la compra de fincas y la construcción de estadios.

Las llamadas "entidades privadas sin ánimo de lucro" que no se vinculen al Sistema o que no cumplan sus regulaciones no recibirán aportes del Estado. Para ser clasificadas como tales deben atender un mínimo del 75% de los pacientes con cuotas de recuperación inferiores a la mitad del costo de la atención, y un por-

centaje del total de pacientes debe ser de indigentes.

La atención primaria, que como está concebida es ineficaz porque sólo consiste en la atención profesional, debe volverse integral con la provisión de los tratamientos prescritos en ella, pues la gente de escasos recursos no tiene acceso económico a las drogas y no las puede adquirir a los precios del mercado. El Sistema debería buscar un mecanismo de provisión de drogas subsidiadas y con tal propósito debe desarrollarse una industria farmacéutica dependiente del aparato de salud para suministrar los medicamentos básicos.

El Sistema Integrado de Salud llevará a efecto una importante labor de justicia distributiva, pues los que más tienen ayudarían a quienes menos poseen. Poder trabajar, tener empleo estable y educación adecuada constituyen hoy privilegios que implican obligaciones morales para con toda la población del país.

Cuarta. Política de recursos humanos

Mi cuarta propuesta de reforma está dirigida a los recursos humanos en el campo de la salud.

Comprende el currículum médico, odontológico, paramédico y auxiliar con miras a evitar la concentración de las Facultades y Escuelas en una misma área y facilitar la planeación de tales instituciones según las distintas necesidades de las regiones.

Las Escuelas e Institutos técnicos y las Universidades públicas y privadas estarán obligadas a desarrollar programas de educación que tengan el visto bueno del Ministerio de Salud para que éstos se ajusten estrictamente a las políticas oficiales. Las instituciones universitarias del sector público necesitan urgentemente del estímulo y apoyo del Estado, el cual se les dará con generosidad. Actualmente la tendencia es a la proliferación casi incontrolada de instituciones privadas de enseñanza de las ciencias de la salud.

El Nuevo Liberalismo propone reorganizar el currículum de las Facultades de Medicina y Odontología con un sistema de crédito, y dar una formación inicial básica en un número menor de años que los exigidos actualmente. Las personas que hayan recibido esta formación se distribuirán a nivel regional en las áreas rurales y unidades de atención primaria y tendrán todos los conocimientos sobre la patología básica y estadísticamente más frecuente en el nivel operativo inicial.

De acuerdo con las necesidades, y por superación y méritos personales las Universidades brindarán a quienes así lo deseen mayores créditos con duración delimitada según el nivel que se quiera alcanzar, hasta lograr un nivel de profesionales de la salud que tendrán su campo de acción en las ciudades o unidades intermedias de atención.

Las distintas especialidades quedarán bajo el control del Ministerio de Salud y se evitará el poco número en algunas y la masificación de otras, adecuando las diferentes especialidades a los programas de salud del Ministerio quien definirá las prioridades de acuerdo con sus planes integrados de formación y de atención. La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y de Odontología colaborará con el Ministerio en la investigación y planificación de estos aspectos.

Se impulsará la formación de personal paramédico para fortalecer los programas de atención delegada que a nivel de las unidades de cobertura se harán con los promotores de salud y en los puestos de salud se realizarán con las auxiliares de enfermería y de odontología. En la unidad de atención primaria u hospital local se contará además con un médico y un odontólogo del nivel básico de créditos quienes dirigirán sus esfuerzos primordialmente a la vacunación masiva hecha con personal auxiliar en programas similares al Programa Aéreo de Vacunación en Antioquia P.A.V.A., la prevención de las diarreas, el programa materno-infantil, la salud oral básica, etc., con delegación a las enfermeras profesionales quienes estarán capacitadas para planificar, orientar y ejecutar estos programas y los de detección y control masivo de la tuberculosis, diabetes e hipertensión arterial.

En cuanto a la Salud Oral, se dará impulso a la formación de técnicos y auxiliares de odontología, quienes en brigadas dirigidas por un odontólogo multiplicarán el trabajo manual de éste, quien ejecutará los procedimientos más complicados.

De esta forma, la población marginada que hoy carece de toda atención porque el personal formado con los criterios tradicionales a pesar de la tendencia a su sobreproducción no quiere irse a trabajar a estas comunidades, será atendida por personas extraídas en lo posible de ellas mismas y que les solucionarán al menos el 70% de las enfermedades comunes. Con el sistema enunciado se hará posible la verdadera cobertura universal de la atención primaria.

Quinta. Otros programas específicos

Como mi exposición se alarga, sólo los describiré someramente.

La familia

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, integrado al Ministerio de Salud, planeará y ejecutará estrategias que hagan frente al grave y acelerado proceso de desintegración de la familia, célula primordial del orden social, y no sólo para la debida protección jurídica de la madre y del niño, sino para lograr que el ambiente favorezca el pleno desarrollo físico, intelectual y moral de los niños y adolescentes.

Rehabilitación

Se fortalecerán los programas de rehabilitación física, social y emocional fomentando la creación de Comités Regionales de Rehabilitación.

Se darán oportunidades preferenciales de trabajo a los minusválidos en los campos específicos en los cuales puedan desempeñarse. Es preciso estudiar los problemas de los ciegos, los sordos, los parapléjicos, los dementes, los retardados mentales, los ancianos, los mendi-

gos y los demás inválidos para hacer el inventario de la situación y darles soluciones concretas.

Tuberculosis en los indígenas

A más de los programas generales de detección ya mencionados, se harán otros específicos dirigidos a la población indígena, cuya falta genética de defensas contra esta enfermedad los está exterminando, y es una demostración más de la indiferencia estatal hacia estos grupos.

Código de ética médica

Este Código, puesto en vigencia a pesar de la reserva de numerosos y distinguidos grupos de la profesión, será revisado no sólo para salvaguardar a los médicos de las injusticias, sino para prevenir el alza de los costos de la atención que causarán los seguros contra las demandas que el actual código podría propiciar.

Salud ocupacional

Es increíble que no existan en Colombia estudios masivos serios sobre el ruido, la contaminación y otros aspectos del ambiente de las fábricas y talleres. Se harán por lo tanto las investigaciones necesarias y se expedirán las leyes adecuadas que garanticen la salud de los trabajadores.

Contaminación ambiental

A este respecto, alguna parte de nuestras leyes es obsoleto, y menor aún es su cumplimiento, por lo cual se harán los estudios necesarios y se reformarán las leyes siguiendo criterios técnicos y ecológicos.

Dotación hospitalaria

Es justo reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el país a este respecto; el déficit actual es más de dotación básica que de equipos sofisticados. Con respecto a éstos últimos, su

elevado costo hace que en muchos casos sea más lógico desde el punto de vista financiero contratar los servicios con las entidades que ya los poseen, aún con las privadas, que su adquisición para el Sistema.

Historia clínica única

Se unificarán las existentes en una Historia Clínica Única, identificada con el número de registro de nacimiento o con el de la cédula de ciudadanía para los ya adultos. Tal información estará a la disposición de todos los organismos del Sistema Integrado de Salud.

* * *

Considero que he demostrado con argumentos irrefutables cómo la salud es un todo social, producto de la perfecta armonía entre el medio ambiente físico, sicobiológico, económico, político y social, y que no se alcanza con el diseño y puesta en práctica de un mero

sistema asistencial, sino que está basada y tiene su garantía en la justicia social. La responsabilidad es de todos y en especial de las grandes estrategias y acciones. Hasta el presente se ha intentado demagógicamente responsabilizar al médico por la salud, burocratizándolo y luego impidiéndole actuar.

No podemos aceptar que muchos compatriotas vivan en Colombia con la mentalidad de siervos sino con el orgullo de pertenecer a ésta, nuestra patria, para servirla y honrarla, y con la determinación de hacer que se la reconozca y respete por sus esfuerzos y logros.

A todas las personas que quieran contribuir a que nuestro pueblo logre la salud a través de la seguridad y dignidad de su vida material y moral, reitero mi llamamiento a la justicia social y las invito a comprometerse con los principios de pensamiento y de acción que he expuesto.

LUIS CARLOS GALAN

Las prioridades económicas

**Tercera intervención de Luis Carlos Galán
como candidato a la Presidencia de la
República por los canales de Inravisión el
6 de mayo de 1982**

Buenas noches:

Hace dos semanas anuncié que hoy hablaría sobre temas económicos. Voy a hacerlo, pero antes quiero dar algunas buenas noticias a los distintos sectores que respaldan mi candidatura presidencial, a los amigos y compañeros que en todo el país trabajan por la conformación de la alternativa renovadora que estamos adelantando. El 30 de abril hicimos un balance sobre los municipios en los cuales existe una organización del Nuevo Liberalismo y encontramos que mientras el 14 de marzo sólo llegamos a 400 municipios ahora hemos pasado de 700 y creemos que antes del 15 de mayo estaremos prácticamente, en la totalidad del país. Con este propósito deseo invitar a las personas que vivan en municipios, veredas o barrios en donde no exista todavía una organización formal del Nuevo Liberalismo a cooperar en la instalación del comité respectivo y a comunicarse con las coordinaciones y los organizadores que existen en los distintos departamentos en las capitales.

López y Betancur los continuistas

Igualmente deseo referirme a las alternativas políticas concretas que se han perfilado para

el país a lo largo de estos debates de televisión y durante el proceso político reciente. El país va a decidir entre dos caminos: o continúa por donde va o sencillamente toma un nuevo rumbo. Lo primero lo representan los doctores López Michelsen y Belisario Betancur. Son los candidatos provenientes de las maquinarias de los dos partidos tradicionales. El doctor López Michelsen ha expresado abiertamente su solidaridad con el actual gobierno y su identificación con las políticas económicas y sociales que adelanta este gobierno. El otro, el doctor Betancur, ha manifestado en estas mismas pantallas que él no comparte las orientaciones de estos gobiernos y que propone alternativas de cambio. Sin embargo, su posición es contradictoria porque él fue escogido por fuerzas totalmente comprometidas con estas dos administraciones. Al doctor Belisario Betancur lo respalda, por ejemplo, el doctor Alvaro Gómez Hurtado. Durante los últimos ocho años, los presidentes de Colombia no han podido tomar determinaciones fundamentales en ninguna materia social, económica o política sin tener en cuenta la opinión del doctor Alvaro Gómez Hurtado, quien ha tenido representación en los respectivos gabinetes ministeriales.

¿Vamos hacia un tercer gobierno subordinado a las opiniones de Gómez Hurtado en el país? ¿O cuál es el tipo de relación que hay entre el doctor Belisario Betancur y el doctor Alvaro Gómez Hurtado? No me refiero a la relación personal sino a la opinión del doctor

Betancur acerca de las tesis defendidas por el doctor Gómez en materia de desarrollo económico, organización del Estado y manejo de los más importantes problemas públicos durante estos ocho años.

Por otra parte, el doctor Betancur, es el candidato de las maquinarias conservadoras que son tan clientelistas o peores que las propias maquinarias del oficialismo liberal. Clientelismo existe en los dos partidos. Yo los he combatido por igual y tengo el derecho a hacerlo porque no he formado parte de los últimos gobiernos ni he tenido injerencia en sus gabinetes o en sus decisiones fundamentales.

Pero, bueno, yo quiero hablar, de acuerdo con lo prometido, sobre la realidad económica del país. Para poder analizar la situación y los factores que condicionan el manejo de los más importantes problemas sociales de Colombia, es necesario detenerse en dos grandes temas: por una parte, ¿cómo va el empleo en el país?, por la otra, ¿cómo están las finanzas del gobierno? Dé un modo u otro, todo, en la economía, se reduce a esos dos puntos. Si hay empleo bien remunerado, estable y productivo, ello significa que las diversas políticas económicas están logrando sus objetivos centrales. Si no lo hay, pues, evidentemente tales políticas han fallado.

Del mismo modo, si el gobierno logra un buen manejo de los recursos estatales, es solvente, sano en las inversiones y logra administrar de manera eficiente los servicios públicos, pues se puede esperar un buen rumbo para el conjunto de los factores económicos.

El desempleo: los años ochenta y la mujer

¿Qué pasa en el empleo en el país? Basta ir a cualquier ciudad de Colombia, ciudad intermedia o capital de departamento, para ver las proporciones del subempleo y el desempleo urbano. La manera como se están multiplicando los vendedores ambulantes; la proliferación de otras manifestaciones de subempleo, y el caso de centenares de miles de personas que tienen que refugiarse en cualquier oficio mal pagado sencillamente para poder sobrevivir. El país ha visto los hechos de los últimos años:

cómo se ha extendido el trabajo de los niños de ocho a catorce años y el de los ancianos debido a las carencias y a la debilidad del ingreso familiar, el precario salario de la persona que normalmente tiene la responsabilidad de los ingresos en el hogar bien sea el varón o inclusive la pareja. Todo esto refleja la gravedad del problema. Por otra parte, el tema del empleo, es la preocupación más importante que debe tener cualquier gobierno pues se va a agravar en los próximos años por una razón: a raíz del crecimiento de la población del país, iniciado en forma acelerada hacia los años cincuenta y sesenta, en este momento la población activa del país, la que tiene entre 16 y 59 años de edad, registra un incremento muy acelerado y mucha gente va a pedir más empleo sin que exista una estrategia y un marco económico adecuado para proporcionarlo. A eso se agrega que las mujeres van a solicitar más empleo que en el pasado, en la medida en que ahora el promedio de hijos es menor y porque la mujer va a estar más preparada y tiene la aspiración lógica a desempeñarse en el mercado laboral para mejorar el ingreso familiar y para realizarse, sencillamente, en su formación profesional o en el tipo de preparación que posea. Por todos estos motivos, el próximo gobierno tendrá una demanda inmensa de empleo, superior a la que se ha registrado en las últimas administraciones.

El déficit fiscal y el próximo gobierno

Si miramos hacia el Estado, hacia las finanzas públicas, encontramos otro panorama igualmente complejo y difícil. El gobierno está montado en este momento sobre una gran ficción fiscal. El gobierno está afrontando un déficit que pasa de 60 mil millones de pesos en las propias cifras oficiales y que puede ser del orden de los cien mil millones de pesos, según han señalado analistas muy respetables al examinar las verdaderas características del problema fiscal del gobierno. Para evitar el problema, o no para evitarlo sino para disimularlo, se ha acudido al endeudamiento externo, se han contratado empréstitos en el exterior que no están dirigidos a hacer inversión pública, a lograr desarrollo en el país, sino a pagar burocracia, o atender gastos relacionados con el funcionamiento de los servicios ordinarios del gobierno.

Se han hecho emisiones y ahí está uno de los puntos críticos que tiene la economía co-

lombiana y una de las explicaciones de los desórdenes de los últimos años. Las tasas de interés, tantas veces mencionadas, por ejemplo, son, en cierta forma, consecuencia de ese desorden en el gasto público y de las emisiones realizadas por un camino o por otro por el gobierno para poder atender a los costos de funcionamiento de la administración. Hay un marco de burocracia excesiva y de corrupción en el gasto público. Y hay un déficit que amenaza la estabilidad de la administración y que implica el problema más grave que encontrará en su escritorio el próximo presidente de la República el 7 de agosto, cualquiera que sea.

Los servicios públicos y las clases medias

Por otra parte, desde el punto de vista de dineros del Estado, hay problemas muy graves de servicios públicos y tarifas. El Estado tiene a su cargo, de manera creciente, los servicios de agua, luz, teléfono, etc. Pero cuando esos servicios no están bien programados, cuando las instituciones que los administran están llenas de burocracia por presión de las clientelas liberales y conservadoras que influyen en el manejo de estas instituciones, pues tales empresas se arruinan o se endeudan y tienen que trasladar a los usuarios el mayor costo de su funcionamiento. En este gobierno se ha llegado a extremos muy graves en materia de encarecimiento de servicios públicos. Estamos ya contemplando el drama de unas clases medias que dedican entre un mes y medio y dos meses de sus ingresos anuales al pago de agua, luz y teléfono. O sea que la incidencia de los servicios públicos está resultando supremamente grave y costosa para las familias de clases medias y populares.

Orden en la casa

Si son esos dos los grandes temas, el empleo y el funcionamiento de los recursos del Estado, la situación financiera del Gobierno, veamos qué es lo que se debe hacer para reorganizar la economía en el país. Cuáles son los puntos claves sobre los cuales se debe proceder.

En primer lugar, ponerle orden a la casa. Ponerle orden a los dineros y recursos del Estado. Mientras el Estado mismo no sea capaz

de organizar sus dineros, menos podrá dirigir en forma responsable la economía en aquellos puntos en los cuales tiene facultades de intervención y dirección definitivos para los sectores productivos. Se necesita para ese orden en la casa, dos cosas: por una parte, justicia en los impuestos y, por la otra, reorganización del gasto público.

Por la justicia en los impuestos

Justicia en los impuestos porque definitivamente la Reforma Tributaria de 1974 y toda la colcha de retazos acumulada desde entonces con proyectos de alivio tributario que fueron votados en el Congreso por parlamentarios liberales y conservadores y defendidos por ministros liberales y conservadores, todo ese sistema tributario, ha fracasado. No funciona, hay una gigantesca evasión y ésta es mayor, sobre todo, en los sectores del capital, porque los asalariados de Colombia, las personas con ingresos fijos o los empleados no pueden evadir porque tienen que someterse al sistema de retención en la fuente y a los demás controles existentes para garantizar su participación en el Sistema Tributario. Hay una gran injusticia en el Sistema Tributario Nacional. La injusticia no se reduce a que se castigue más al trabajo respecto del capital. Dentro del propio capital hay injusticia. Al empresario honrado, a la empresa seria y bien administrada, no le es posible evadir. En cambio, el capital especulativo, el capital financiero y el capital clandestino están evadiendo sus obligaciones fiscales en una forma dramática en perjuicio del Estado y de los servicios a cargo del Gobierno.

Ejemplos de despilfarro

En cuanto al gasto público, pues, evidentemente hay un problema de austeridad, de falta de orientación del gasto, que debe estar relacionado con, inclusive, ejemplos que deben surgir de las actitudes del alto gobierno; ejemplos del Presidente de la República, ejemplos de los congresistas que no han sido ni mucho menos responsables en su comportamiento. No me parece que pueda considerarse responsable lo que hizo, por ejemplo, el presidente Turbay, cuando se fue más de un mes a Europa, en un viaje con una gigantesca comitiva que implicó gastos considerables para el era-

rio. Eso creó un espíritu en la administración, en los gobernadores, en los gerentes de institutos descentralizados, quienes al observar ese comportamiento en el propio jefe del Estado se sintieron autorizados, en la dimensión de ellos, en su escala, a proceder en la misma forma.

Los congresistas de Colombia, con sus continuos viajes al exterior, más de 200 parlamentarios al año, casi todos pertenecientes a las maquinarias dominantes en los partidos, realizan viajes al exterior que implican viáticos de 15 mil pesos diarios. Estas cosas se denuncian muchas veces pero no han tenido una rectificación verdadera y resuelta de parte de los gobernantes del país y de los líderes que han tenido influencia en el Congreso durante los últimos años.

Recuperar el mercado nacional

Fuera de este primer punto dirigido a lograr el orden en la casa, orden en las finanzas del Estado, tenemos como segundo punto la recuperación del mercado. ¿A qué me refiero? A que hoy, el mercado nacional de compra y venta de alimentos, vestuario y productos manufacturados se encuentra en manos de la producción extranjera. Todos sabemos que las importaciones agropecuarias han crecido, no siempre por carencia del sistema nacional sino muchas veces por improvisaciones en las medidas del gobierno, por intereses creados que afectan esas importaciones que influyen en ellas para manipular precios y para aprovecharse del desorden existente en el conjunto de la economía.

De otro lado, el contrabando ha alcanzado proporciones escandalosas en el país, en perjuicio de la producción nacional y de la industria. No me refiero al contrabando tradicional, llamémoslo así, que se da en ciertas zonas de Colombia por realidades comerciales de ubicación geográfica, sino el contrabando masivo, en gran escala, vinculado o consecuencias de los errores de las políticas económicas aplicadas por los últimos gobiernos.

La industria y el empleo

La industria colombiana tiene en sus manos la clave de la creación de empleo en el país.

En la medida en que la industria esté fuerte habrá empleo en las ciudades, o bien porque la industria genera directamente ese empleo o bien porque la existencia misma de las fábricas implique creación de empleo en los distintos sectores terciarios, sectores de servicios, bancos y los demás factores que rodean la actividad industrial y económica.

Pues bien, nuestra industria ha estado totalmente abandonada durante los últimos ocho años. Ha sido prácticamente perseguida por las políticas económicas de los últimos gobiernos. Y esas políticas las definieron ministros liberales y conservadores. Aun cuando el doctor Belisario Betancur trate de olvidarlo, hubo un ministro de hacienda conservador que influyó en esas políticas, hubo un director de Planeación Nacional y varios ministros de desarrollo, quienes también opinaron sobre la liberación de importaciones y adoptaron todas estas medidas que llevaron a la postración porque así es como se encuentra, la industria colombiana.

¿Cómo recuperar esa industria? Pues no hay otro camino que el de protegerla, respaldarla con los instrumentos económicos que tiene el gobierno para ello como las herramientas tributarias, el comercio internacional y los demás mecanismos. Pero una industria desprotegida, en las condiciones en que se encuentra hoy la industria colombiana no puede responder por las necesidades de empleo de nuestra población, sobre todo del empleo productivo, el empleo real. El respaldo significa también otras cosas: significa que el Estado organice sus compras teniendo en cuenta las posibilidades de producción interna de bienes de equipo, como ocurre en el caso del desarrollo eléctrico, como puede ocurrir en otros gastos del Estado que no tiene por qué importar determinados productos que deben ser fabricados por la industria nacional.

Pequeños cafeteros

Al lado de eso está la agricultura con ciertos sectores claves que reclaman especial atención. Sobre el café ya hay ciertas ideas básicas, suficientemente conocidas. Sólo quiero subrayar la importancia que tiene la protección del pequeño caficultor, quien ha sido la

víctima de las equivocaciones de la política cafetera de los últimos ocho años y del proceso de la concentración de la propiedad que se ha dado en las zonas cafeteras. El cafetero que no tuvo buen respaldo para asimilar los nuevos sistemas de producción del caturra y para los costos que esto implica, desde el punto de vista de abonos, jornales y demás servicios, necesita que se le apoye, que se le refinance en caso de necesidad, que se le proteja o de lo contrario van a continuar los fenómenos que se observan en las notarías de Armenia, Pereira, Manizales, donde se multiplican las operaciones de venta de las pequeñas propiedades cafeteras, de muchas personas que se ven obligadas a entregar su patrimonio para pagar obligaciones en los bancos o simplemente poder sobrevivir.

Una nueva etapa de la Reforma Agraria

En el campo agrícola hay muchos temas básicos pero el punto de partida es el de la reforma en los sistemas de tenencia de tierras. Necesitamos una modernización de la distribución de la tierra en el país sobre la base de criterios actualizados que correspondan a las realidades de hoy, que tomen en cuenta, claro está las experiencias de la década de los años 60 en materia de modernización de la Reforma Agraria. Necesitamos proteger a las empresas agrícolas existentes y al mediano propietario. Pero el gran latifundio, aquél que pasa de mil, mil quinientas hectáreas, debe ser objeto de una intervención estatal dirigida a proteger al campesino para darle tierra y permitirle la seguridad de supervivencia y de su trabajo.

Preparar la futura economía

Un tercer punto es el de la previsión de la economía futura para el país. Una consideración oportuna sobre lo que va a ocurrir en esta década y en la próxima en Colombia. Cosas que no se pueden improvisar y que estarán vinculadas a decisiones del próximo gobierno e influirán notablemente durante por lo menos 10 ó 20 años. El buen desarrollo energético del país, el desarrollo eléctrico y el desarrollo petrolero son temas vitales que reclaman decisiones del gobierno próximo en función de las necesidades del país durante los años siguientes. Son cuestiones que demandan políti-

cas nacionalistas, políticas de firme respaldo al patrimonio nacional; defensa de los intereses nacionales en el caso del petróleo, el carbón y el uranio en donde se negocie con el capital extranjero, cuando sea necesario, en términos dignos para el país, que implique la protección de sus recursos naturales y el buen aprovechamiento de las oportunidades proporcionadas por esa riqueza del subsuelo. Así mismo, tenemos que prever los colombianos un gran desarrollo de la minería para esta década y la próxima. Ese desarrollo no se puede improvisar y supone estudios sobre lo que existe en nuestro subsuelo. Los colombianos ignoramos qué hay en el subsuelo del país. Lo saben más las empresas extranjeras y en virtud de ello son las multinacionales quienes proponen al gobierno los términos de referencia de los contratos en condiciones que muchas veces no son las mejores para el país. En estas operaciones el país no tienen capacidad negociadora, porque es el gobierno el primero que ignora en qué consiste el patrimonio sobre el cual se está negociando.

Hay ciertos sectores para el futuro de Colombia, vitales también, en los que deberá intervenir el próximo gobierno. Uno de ellos es el de la modernización del sistema nacional del transporte, es decir, el sistema portuario, la red vial, completando esfuerzos importantes hechos en los últimos años pero que deben incrementarse; el desarrollo aeroportuario, desarrollo de la navegación fluvial, la recuperación de los ferrocarriles, son temas que van a requerir decisiones muy claras del próximo gobierno si es que realmente vamos a hacer un cambio económico de fondo para modernizar el país.

Producción en vez de especulación

Un cuarto punto básico en el cambio que propongo, es el de superar el ambiente especulativo en que se encuentra la economía colombiana. Aquí hay dos materias muy concretas sobre las cuales el país necesita definiciones: en primer lugar, una reforma financiera dirigida a controlar el ahorro privado y público que ha sido abusivamente utilizado por los grandes grupos financieros para los procesos de concentración de riqueza registrados en los últimos años. Es necesario establecer incompatibilidades para los bancos y determinadas institucio-

nes financieras para impedir que hagan inversiones en actividades en las cuales comprometan los sectores productivos o impliquen acumulación de poder en contra de los intereses de la mayoría de los colombianos. Necesitamos igualmente, una transformación substancial de la sociedad anónima con el objeto de recuperar la posibilidad de ahorro democrático que permitía ese tipo de sociedad. La Sociedad Anónima está condicionada por problemas graves como la situación de los pequeños accionistas en manos de quienes han dominado tales sociedades y está también afectada por los problemas relacionados con los dividendos, la doble tributación que desalentó la inversión en la Sociedad Anónima y por lo mismo fue otro componente en el proceso de postración en que se encuentra la industria colombiana.

Refinanciaciones y reservas para prestaciones sociales

Hay ciertos puntos en los cuales vale la pena hacer también énfasis esta noche. He encontrado en todo el país una grave situación de endeudamiento de pequeños propietarios, pequeños y medianos agricultores que requieren refinanciamiento en sus obligaciones, los deudores del Incora y de la Caja Agraria sobre todo, porque el atraso en el pago de sus obligaciones es consecuencia de errores en las políticas agropecuarias de los últimos gobiernos que dieron lugar a caídas en los precios y a pérdidas considerables para pequeños y medianos propietarios. También considero fundamental para el país que haya una vigilancia severa sobre las reservas para prestaciones sociales de las industrias colombianas. No podemos seguir en el proceso de quiebra de numerosas empresas en donde se acude inclusive a los recursos legales finales para burlar los derechos de los trabajadores que se quedan sin cesantías y sin pensiones de jubilación. Tenemos casos dramáticos como el de Aerocóndor y el de numerosas empresas de confecciones y algunas de textiles que no tenían las reservas adecuadas y que en el momento de quiebra pueden generar graves problemas sociales por descuidos de los organismos estatales a cuyo cargo debe estar la vigilancia de ese tipo de reservas y balances.

¿Quién tiene el poder económico?

En esencia, el cambio económico supone la intervención resuelta del Estado para reorganizar sus propios recursos y para controlar los grandes grupos financieros del país. La verdad es que si hoy nos preguntamos en dónde está el poder económico en Colombia, encontramos que lo tienen, de un lado, el gobierno en el manejo de sus propios dineros, y, de otro lado, los grandes grupos que concentraron riquezas en el proceso de estos años. La inmensa mayoría de colombianos se encuentra al margen de ese poder económico y todo lo que se prometa en materia social y en materia política será un espejismo mientras no se democratice la posibilidad de acceso a los recursos económicos y a los sistemas de producción. Se necesita crear una mentalidad de superación, de creatividad en la economía colombiana. Es preciso que el empresario, el obrero y el campesino, tengan la sensación de que pueden trabajar el uno porque tiene empleo y el otro porque, si inicia empresas o emprende tareas de modernización en un sector económico u otro, no van a una aventura ciega sino que cuentan con el respaldo de políticas gubernamentales definidas con relación a los grandes sectores productivos del país.

Yo le propongo al país que conciba al próximo gobierno, y así será en el caso de que yo sea elegido Presidente de la República, como un gobierno coordinador de los esfuerzos de los colombianos. No como un gobierno que en forma arrogante y prepotente impondrá soluciones o como gobierno promesero y fantástico que ofrecerá milagros de la noche a la mañana al país, sino como un gobierno basado en realidades que coordinará recursos de los colombianos y articulará la acción de toda la nación en función de los intereses colectivos.

En la próxima semana me referiré a los problemas de política internacional para completar el panorama que en mi opinión condiciona la conformación de la Nueva Colombia a partir de las modificaciones políticas, sociales, económicas y de política exterior que requiere el país.

Buenas noches y mil gracias por su atención.

La política internacional

**Cuarta intervención de Luis Carlos Galán
como candidato a la Presidencia de la
República por los canales de Inravisión el
20 de mayo de 1982**

Buenas noches:

Si fuera necesario resumir en una sola palabra lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos 25 años, habría que decir que el gran rasgo de este pedazo de la historia colombiana ha sido el proceso de urbanización, la manera acelerada como han surgido grandes ciudades en el país y el desplazamiento de sectores considerables de la población desde las zonas rurales hacia los centros urbanos. Vale la pena preguntarnos: ¿ahora, qué viene?, ¿cuál puede ser el rasgo fundamental de la vida de Colombia durante los próximos 20 años?

Yo creo que ese rasgo ya es, o va a ser en poco tiempo, la internacionalización de la vida de los colombianos. Es decir, la forma como factores internacionales —tanto en lo político como en lo económico— condicionarán nuestra existencia. Los últimos acontecimientos en Centroamérica, en el sur de América, en las Malvinas y otros episodios relacionados con las circunstancias del Caribe nos demuestran cómo factores internacionales de orden político influyen notablemente en la vida nacional. En el campo económico, tenemos rea-

lidades como las que ha creado el proceso de reforma del sistema económico mundial a partir de 1971, cuando se produjo la devaluación del dólar. O las que surgieron desde 1973, cuando cambiaron los precios del petróleo y la humanidad inició lo que se ha llamado la transición entre el petróleo como principal fuente de energía y las fuentes renovadoras como el carbón, el uranio, o las no convencionales que pueden surgir en el futuro. Eso afectó los precios de todos los productos de la economía mundial y, naturalmente, afectó nuestras propias realidades.

Si éste es el marco —el de la internacionalización—, es fundamental que en un examen responsable de los factores reales de la vida colombiana que manejará el próximo gobierno, se haga también un examen de la política exterior del país, la orientación de la misma y la administración de todos los instrumentos de tal política internacional.

Colombia y América Latina

Para poder hablar de la política exterior de Colombia y de la perspectiva internacional de nuestro país, debemos empezar por la ubicación de nuestro país respecto del resto del mundo. ¿Cuál es nuestro papel ante el mundo? ¿Qué significamos? ¿Qué opinión puede tener el resto de la humanidad sobre noso-

tros? ¿Qué influencia podemos ejercer?

Ese papel, a los ojos de la mayoría de los observadores del mundo, es secundario en este momento, porque el nuestro no es un país importante desde el punto de vista económico, excepto en el caso del café. Y en el orden político, las carencias y las equivocaciones de la política exterior —sobre todo en los últimos años y ya habrá ocasión de analizarlas—, nos han colocado en esa posición subalterna.

El papel de Colombia en el mundo, necesariamente pasa por América Latina. Lo primero, entonces, es establecer qué somos dentro de América Latina. Ocupamos el tercer puesto en cuanto al número de habitantes después de Brasil y México, entre los 21 países latinoamericanos. Sin embargo, si miramos nuestro poderío económico, se encuentra que desde el punto de vista del producto nacional bruto por habitante apenas ocupamos el puesto 15 entre los 21 países; que en el mismo índice estadístico, relacionado con las importaciones y las exportaciones, ocupamos puestos muy secundarios. Nuestra tasa de crecimiento, para resumir un poco las cosas, ha sido tan modesta en términos relativos frente a las características de la economía latinoamericana, que se requerirán 20 años —según un estudio del Banco Mundial— para que Colombia, a las tasas registradas durante la última década, logre un nivel de ingreso por habitante igual al que hoy tienen, por ejemplo México y Chile. Esto da la medida de nuestras realidades dentro del marco latinoamericano y de la urgencia de una revisión fundamental de muchos elementos de la vida colombiana en función del papel que debemos cumplir en América Latina y en el resto del mundo.

Cinco objetivos de política exterior

¿Cuáles son los objetivos de una política exterior? Yo quiero proponer cinco puntos básicos: el primero, naturalmente, la defensa de la integridad territorial; el segundo, la recuperación del liderazgo regional del país; es decir, el liderazgo que en el escenario regional de América Latina ha ejercido Colombia; en tercer lugar, las relaciones que tiene Colombia con los grandes poderes mundiales; en cuarto

lugar, la política económica internacional del país y finalmente la defensa de los derechos de los colombianos que se encuentran en el exterior.

La integridad territorial

Veamos cada uno de esos cinco puntos como elementos fundamentales de la política exterior del país. En cuanto a la integridad territorial, ésta es obviamente, la prioridad fundamental. ¿Por qué razón? Porque hay serios peligros en los litigios que tiene hoy Colombia frente a Venezuela y el que ha planteado últimamente Nicaragua con su absurda pretensión de dominio sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Frente a ese tema, Colombia tiene una posición seria, fundada en argumentos jurídicos y en sus derechos legítimos. Naturalmente existen unos procedimientos políticos que están en curso para afrontar, especialmente, el conflicto con Venezuela. Yo pienso que este tema está muy relacionado con la urgencia de la paz interior en el país, porque al lado de los argumentos jurídicos necesitamos que el ejército y las demás armas también estén en condiciones de garantizar nuestra soberanía en las zonas de eventuales litigios. Y para que el ejército lo pueda hacer, es preciso que no gaste la mayor parte de sus recursos en problemas de política interna, como el enfrentamiento con grupos subversivos, sino que pueda modernizar equipos y dotación en función de eventuales conflictos de tipo internacional.

Al lado de esto, es indispensable adelantar una política de fronteras. Yo creo, y así lo haré si soy Presidente de la República, que se debe emprender un programa especial de desarrollo urbano y regional en los grandes centros colombianos vinculados a los territorios fronterizos. Concretamente, un programa para Ipiales, Leticia, el Putumayo, Cúcuta, Puerto Inírida, Arauca, Saravena, Tibú, Maicao, y naturalmente para San Andrés y Providencia e inclusive, las zonas de Urabá y Chocó que están próximas a la frontera con Panamá. Todas estas ciudades y regiones deben tener prelación en determinados proyectos de inversión pública. Deben gozar de buenos servicios públicos, algunas de ellas tienen problemas de agua, energía eléctrica, y afrontan un atraso en su organización urbana. Carecen, sobre to-

do, de políticas claras sobre las realidades que allí se dan como consecuencia de la proximidad a otras economías. Igualmente, en una defensa de nuestra integridad territorial, es fundamental que desarrollemos una verdadera política frente al mar; o sea, que organicemos el aprovechamiento de los recursos marítimos que tiene el país, la pesca y la exploración del subsuelo en la plataforma para ver qué patrimonios minerales existen allí. Todos estos temas determinan una verdadera política de defensa de la integridad territorial.

Recuperar liderazgo regional

En segundo lugar, necesitamos la recuperación del liderazgo regional. Es evidente que Colombia ha perdido la influencia que tuvo en otras épocas de la vida latinoamericana. Nacimos como República, encabezando el proceso de independencia de cinco naciones y hace quince años teníamos un liderazgo de tal naturaleza que nuestro país promovió el Grupo Andino, una de las realidades más importantes en la política latinoamericana del presente siglo. Hoy, en cambio, a Colombia ni siquiera se le consulta cuando se examinan problemas relacionados con el Caribe o con Centroamérica. Hemos visto los numerosos desaires que ha sufrido nuestra diplomacia en los últimos años y ello es consecuencia del vacío existente en la conformación de una política exterior que preserve el liderazgo de nuestro país en las zonas regionales.

Un foro político latinoamericano

El tercer tema sobre política exterior es el de las relaciones que debe tener Colombia con los poderes mundiales más significativos. Primero, dentro de la misma realidad latinoamericana. Sin duda alguna, nuestro país debe desarrollar una política exterior basada en la aproximación y unidad de los países latinoamericanos. América Latina carece de un instrumento de deliberación propio. Yo creo que se debe promover un Foro Político Latinoamericano de carácter permanente, distinto de la OEA y sin renunciar a la existencia de éste que tiene otras razones de ser, como el contacto con los Estados Unidos y Norteamérica. Pero América Latina como tal —en función de la defensa de su identidad regional y

política y teniendo en cuenta las realidades específicas del hemisferio— debe tener un Foro propio y ese Foro debe promoverse para examinar el papel de la región frente al resto del mundo. De otro lado, Colombia debe darle una importancia natural a las relaciones con Estados Unidos, con la Unión Soviética, con China, con la Comunidad Económica Europea y yo propongo que en esta lista se incluya resueltamente el Japón: es otro centro de poder económico e inclusive político en el mundo, que está adquiriendo cada vez más influencia.

Diez meses sin embajador en Moscú

La situación actual, con relación a estos temas, es muy grave. El abandono de nuestra política exterior es tan serio que, por ejemplo, desde hace nueve o diez meses Colombia no tiene embajador ante la Unión Soviética. En este gobierno hubo un embajador improvisado de seis meses, un embajador fugaz en Washington; lo que da una idea de la inestabilidad y la falta de seriedad en el manejo de una representación diplomática tan delicada y significativa. En el caso del Japón, cuando todo el mundo mira hacia esa potencia industrial que está causando una revolución en los mercados del planeta, Colombia resuelve cerrar la oficina de Proexpo en Tokio, como ocurrió hace algún tiempo, sin establecer mecanismos permanentes de aproximación con un país que —por razones de tecnología, extensión de sus mercados y sus instrumentos de desarrollo económico— es un país clave hoy en el mundo, comparable a las dos más grandes potencias.

Política económica internacional

El cuarto punto de la política exterior es la política económica internacional de Colombia. Está relacionada con varios temas, pero se deben subrayar los siguientes: primero, el café, en el cual Colombia sí ejerce un liderazgo por razones bien conocidas y donde todo lo que afecte el precio del grano, su comercialización y las relaciones con los demás países productores y consumidores tiene importancia fundamental para el país. En esa política económica internacional, Colombia tendrá que concebir, en este decenio y en el próximo, cómo desarrolla una estrategia interna de

producción que le permita aprovechar las ventajas comparativas que tiene, tanto en la energía como en el sector agropecuario. Gozamos de ventajas concretas frente a otros países en esos dos grandes campos que son vitales en este momento en la economía mundial. De otro lado, es indispensable que reconozcamos la importancia de las negociaciones con empresas transnacionales. Cada vez más, el Estado negocia con empresas transnacionales. Lo hace para definir la política energética en petróleo, carbón y uranio; lo hace para definir políticas de comunicaciones cuando resuelve adoptar la televisión en colores, por ejemplo, o cuando resuelve establecer un satélite con inversiones muy considerables y arriesgadas; o cuando define la política automotriz al establecer el ensamble de automóviles en el país. A todas horas el Estado moderno tiene que entenderse con empresas transnacionales y sólo puede hacerlo en la medida en que cuente con una buena información del mercado, de los derechos de Colombia en el campo respectivo, y de los factores que están operando a escala internacional en el empeño de esas empresas transnacionales.

Colombianos en el exterior

Finalmente, la política exterior del país debe considerar como otro de sus puntos vitales la protección de los derechos de los colombianos en el exterior. Hoy bien puede haber en el resto del mundo alrededor de tres millones de compatriotas, si se suman los colombianos que viven en Venezuela, los Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Centroamérica y Europa. En sólo Venezuela se habla de dos millones y en Estados Unidos la cifra no es inferior a 200 ó 300 mil. Todos estos compatriotas deben tener la posibilidad de un vínculo real con el país y una protección eficaz en su trabajo como lo han hecho otras naciones del mundo que tienen criterios y mecanismos permanentes para manejar sus migraciones hacia otros continentes. Del mismo modo, Colombia debe buscar acuerdos de tipo laboral o, en fin, mecanismos que le permitan a nuestros compatriotas residentes en el exterior saber que están respaldados por su patria y que pueden acudir a ella en defensa de sus derechos cuando eventualmente les sean desconocidos.

La cancillería burocratizada

¿Cuáles son los instrumentos para esta política exterior? El primero de todos es la Cancillería. Sin embargo, nuestra Cancillería se encuentra en una condición deplorable. Es una Cancillería interferida por el clientelismo. Con frecuencia los diplomáticos son nombrados tan sólo por razones de política interna, como cónsules, como ministros consejeros o como embajadores. No tiene el país mecanismos técnicos ni profesionales específicos, adecuados para el desempeño de una Cancillería que debe manejar información, organizarla, evaluarla, analizarla y, a partir de todo eso, elaborar proposiciones de política exterior al Jefe del Estado, al Presidente de la República.

En los últimos años ha habido un crecimiento escandaloso de la burocracia en nuestra diplomacia. Hay embajadas de Colombia en donde abundan en tal forma los funcionarios, que tiene que turnarse para ir a la oficina porque no caben en ella; misiones donde hay menos escritorios que funcionarios. Van por la mañana unos y por la tarde otros. Hay embajadas improvisadas en donde se incluyen cinco, seis y hasta diez funcionarios sin necesidad. Todo eso causa despilfarro y no sólo es grave el despilfarro, sino además genera ineficiencia en el manejo de los intereses del país a través de sus funciones diplomáticas.

Un centro de estudios latinoamericanos

Pienso que al lado de esto Colombia debe organizar un Centro Especial de Estudios sobre América Latina, en donde recojamos información completa y detallada sobre todas las realidades de los países latinoamericanos, realidades que generalmente no son conocidas por nuestro país ni por el gobierno. Un Centro dedicado a analizar las realidades políticas, sociales, económicas, culturales e históricas de Venezuela, del Brasil, de Ecuador, Perú y Panamá, y del Caribe, es indispensable para entender nuestras relaciones con tales países. No podemos seguir improvisando funcionarios diplomáticos sin contar con herramientas adecuadas para el desempeño de la política exterior contemporánea.

Hace poco, hemos vivido un episodio cuyas consecuencias naturalmente sólo podremos evaluar con el paso del tiempo: el relacionado con el tema de las Malvinas; Colombia ha defendido allí una posición respetable y con fundamento, pero ha quedado aislada y eso es supremamente grave. En buena parte, es consecuencia de una Cancillería que no ha tenido instrumentos adecuados para desempeñarse en sus relaciones con los demás países latinoamericanos; que improvisa en sus planteamientos, que improvisa sus estrategias de comunicación con otros gobiernos, todo lo cual ha conducido a ese alarmante aislamiento en que se halla nuestro país. No es suficiente que la Cancillería colombiana se modernice. También otros organismos tienen que ver con las relaciones internacionales del país, y deben transformar sus procedimientos y sus métodos de trabajo.

Pero al lado de los organismos estatales, es preciso que otros sectores de la comunidad tengan otra mentalidad, una perspectiva internacional, para analizar las cosas. Las universidades nuestras deben tener instrumentos de comunicación a escala internacional. Igualmente, nuestros gremios y los sindicatos. Sólo así podremos crear en el país la opinión pública y la mentalidad adecuadas para un buen desempeño de Colombia en una época de creciente internacionalización de sus realidades.

Resumen de las intervenciones

Pues bien, amigos, llegamos a la última etapa de estas intervenciones televisadas, en donde he querido hacer un resumen de los grandes temas que definen el perfil político de mi candidatura presidencial.

Hablé en la primera oportunidad sobre la corrupción, al hacer el análisis de la realidad política de Colombia. En la segunda ocasión me referí a la miseria que representa el problema más delicado del sector social; e igualmente hice el análisis de los problemas económicos, del empleo y del funcionamiento del Estado, en la tercera oportunidad. Ahora he hablado de la política internacional que pone en evidencia la mediocridad del papel de Colombia ante el resto del mundo. En eso se resumen nuestros tres mensajes fundamenta-

les. Primero, luchar contra la corrupción en la medida en que queramos modernizar la política colombiana; recuperar la existencia de unos partidos que tengan vigencia frente a los problemas reales de nuestro tiempo; conseguir un Congreso respetable para la nación, auténticamente representativo; lograr una contraloría o un aparato de fiscalización que corresponda verdaderamente a los intereses y derechos de los colombianos; purificar el sistema electoral y, naturalmente, rescatar a la justicia colombiana del grado de postración y de impotencia en que se halla; en esto se traduce la lucha contra la corrupción. La lucha contra la miseria está dirigida a garantizar las necesidades fundamentales de todos nuestros compatriotas en alimentación, salud, educación, vivienda y empleo. Y la lucha contra la mediocridad podríamos decir que se resume en la búsqueda de un nuevo papel de Colombia ante el resto del mundo, merced a su política exterior y gracias a la organización de los recursos internos que le permitan ese desempeño ante el resto de la humanidad.

Continuismo, populismo o cambio

Todo esto contrasta con lo que plantean los demás candidatos.

La verdad es que Colombia se encuentra ante la posibilidad de tres opciones reales: el continuismo que representa el doctor López Michelsen; el populismo que abanderó el doctor Belisario Betancur, o el cambio, la renovación a fondo que yo propongo a nombre de una gran cantidad de compatriotas alarmados por la magnitud de la crisis nacional, la gravedad de la encrucijada en que se halla Colombia y la urgencia de un comportamiento renovador de parte de todos los protagonistas de la política colombiana y de quienes tenemos a nuestro cargo la interpretación de los intereses fundamentales del país.

Belisario Betancur

El doctor Belisario Betancur que es un candidato continuista y populista, también forma parte de un partido: el partido conservador, que ha gobernado a Colombia y es igualmente responsable de lo que ha sucedido en los últi-

mos ocho años en el país. Un partido conservador clientelista, que tiene montada una maquinaria tan censurable, tan abusiva, como la que posee el oficialismo liberal en numerosos departamentos del país. El doctor Betancur propone el cambio; sin embargo, en la primera oportunidad, en la cual ha debido demostrar su interés en lograr el cambio para el país y en luchar por él, tal como fue la elección de congresistas, no hubo el más mínimo gesto, ni la más modesta influencia del doctor Betancur en procura de una renovación del Congreso dentro de sus propias filas políticas. Si él no ha trabajado por la renovación del partido conservador, menos podrá trabajar por la renovación del país. Lo que no se puede procurar o defender en el propio partido, menos se puede conseguir a escala nacional.

López Michelsen

En cuanto al doctor López, fracasó en el gobierno. Tuvo el más grande poder político que se le haya dado a gobernante alguno en la vida de Colombia: tres millones de votos, y tuvo las grandes oportunidades de la bonanza cafetera y del superávit de divisas que se produjo a lo largo de su administración, por factores distintos a los actos del mismo gobierno. Y sin embargo, todo esto se desperdició y las políticas económicas que él defendió y aplicó durante su administración se tradujeron en el actual receso y la actual encrucijada y crisis en que se hallan las finanzas públicas y el conjunto de la economía. El doctor López, ahora, en los acontecimientos del último año, ha tratado de frustrar la renovación del partido liberal. El y el doctor Julio César Turbay tienen una alianza que ya lleva ocho años. Una alianza que en mi opinión ha sido nefasta para el liberalismo, porque no se originó en ningún tipo de convicciones ni de propuestas claras y serias sobre la realidad del país, sino en un simple acuerdo de intereses particulares. Se puede decir que los doctores López y Turbay conjugaron o están conjugando el verbo elegir en la forma más curiosa. Yo te elegí, tú me elegiste, yo te reelegiré, tú me reelegirás. Vamos a ver si la nación acepta que ése sea el proceso político de la presente década, como consecuencia del predominio de la alianza que han tenido los doctores López y Turbay; alianza que ha sido regresiva, reaccionaria en sus efectos sociales y económicos para el país, y que, además, destruyó en buena parte la identidad del

liberalismo y le generó la crisis en que nos hallamos y que nos obligó a intervenir.

No se definirá sólo un gobierno sino una época

Vamos los colombianos hacia una decisión supremamente importante, definitiva no sólo para un gobierno, sino probablemente para toda una época histórica. Se va a definir si la nación se renueva o no. Si le tiene miedo al cambio o por el contrario, es un anhelo colectivo que haya una interpretación renovadora de sus realidades, sus perspectivas y sus posibilidades. Quienes le tienen miedo a ese cambio amenazan a Colombia con otra época de violencia. Se les olvida que ya vivimos, que estamos viviendo una nueva violencia cuyas causas son diferentes a las que obraron hace treinta años. La violencia de hoy es social y económica. No la pueden disfrazar de nuevo como una violencia vinculada a los partidos políticos. Los partidos han gobernado durante 25 años y eso ha significado una mentalidad nueva en la política colombiana. Por ejemplo, no pueden desconocer los dirigentes de hoy que ahora la mujer es protagonista fundamental de la vida política en el país. Hace 35 años, la mujer no tenía derecho al voto, no influía en las realidades del liberalismo y del conservatismo; ahora ella es definitiva en el proceso y lo está demostrando con su voluntad de participación y su propósito de ser protagonista fundamental en las decisiones inmediatas. En cuanto a la juventud, pues hay toda una nueva generación formada en estos 25 años, despojada de sectarismo, dispuesta a trabajar con otro espíritu, con una mentalidad solidaria y renovadora. Me encuentro en toda Colombia jóvenes que se identifican con las tesis políticas que estoy planteando.

¿Demasiado tarde?

Algunos dicen que mi edad es un obstáculo, un riesgo para el país, porque no tienen más argumentos contra el movimiento que nosotros representamos. Yo quiero recordar aquí lo que me ocurrió con un obrero en Barranquilla hace algunos meses, quien me manifestó: "Doctor Galán, dicen que usted va a llegar demasiado pronto a la Presidencia de la República; pues yo creo que es todo lo contrario: la crisis del país es tan grave, tan pro-

funda, que de pronto usted llega demasiado tarde, apúrele doctor Galán”, me manifestó ese obrero hace algunos meses en Barrancabermeja. Yo lo entendí así cuando acepte la responsabilidad de esta candidatura: que es urgente actuar y movilizarse; que necesitamos la intervención de todos los colombianos en todas las grandes decisiones; necesitamos, como lo dije en la primera oportunidad, la revolución electoral que nos salve a los colombianos de la revolución violenta. Todos los síntomas indican que está en curso esa revolución electoral. En este momento, el país está en las vísperas de la elección presidencial en la cual va a participar la mayor cantidad de compatriotas. Es posible que pasemos de 7 millones de votos; es decir, 2 millones más que las últimas elecciones parlamentarias.

Gratitud a los colaboradores

Yo quiero agradecer a todos los colombianos que me han dado su apoyo, su consejo y su solidaridad en este proceso, y que han confiado en los criterios e interpretación que utilizo en función de los intereses nacionales. A todos los que han participado en comités, en organismos de promoción del Nuevo Liberalismo en todo el territorio nacional y en especial, quiero expresar mi gratitud a quienes han dado un testimonio público al colocar afiches

en sus casas, al colocar calcomanías en sus automóviles. Me he sentido conmovido en numerosas ciudades de Colombia al observar ese gesto en el cual el ciudadano común y corriente, el colombiano que entiende la naturaleza de esa crisis, tiene el gesto resuelto de respaldo y solidaridad con el esfuerzo renovador que adelantamos. Es preciso entender que el voto por una fuerza renovadora no se va a perder de ninguna manera. Todo lo contrario. Se pierde el voto cuando se respalda al continuismo, al clientelismo, a todo lo que ha frustrado la nación y la tiene al borde de una crisis dramática. Porque nosotros estamos defendiéndole el destino al país, estamos seguros de que vamos a ganar.

Multiplicarse por cinco

La consigna, compatriotas, es la de multiplicar por cinco nuestra votación de marzo. Eso no es difícil: comenzamos 600 personas en Ríonegro en octubre; nos multiplicamos por mil y nos convertimos en 600 mil en marzo. Es mucho más fácil ahora multiplicarnos por cinco. Esta es la nueva consigna. Necesitamos el concurso de todos nuestros compatriotas para cambiar el destino del país el 30 de mayo e iniciar ese día una nueva época histórica.

Mil gracias y buenas noches.

Crisis económica y orden público

**Intervención de Luis Carlos Galán en la
Tercera Convocatoria Nacional del
Nuevo Liberalismo el 30 de noviembre de
1982 en el Hotel Tequendama**

He considerado oportuno convocar a los miembros del Nuevo Liberalismo a esta reunión para realizar un análisis de la política nacional y presentar los principales criterios de trabajo que orientarán nuestro Movimiento durante los próximos quince meses mientras tenemos ocasión de verificar nuevamente la opinión del pueblo sobre nuestras actividades. Con el comité organizador de este acto acordamos llamarlo III Convocatoria Nacional porque existen los antecedentes del 30 de noviembre de 1979 y el 29 de abril de 1980, cuando se cumplieron actos similares, primero para crear el Movimiento por el Nuevo Liberalismo y luego para iniciar labores a escala nacional.

Balance de tres años

En tres años el Nuevo Liberalismo ha creado una posibilidad auténtica de renovación de la democracia colombiana; ha promovido un intenso debate sobre el funcionamiento del Estado, la vida de los partidos políticos y las prioridades en el manejo de los recursos públicos; ha señalado la importancia del patrimonio energético y minero de la Nación y la

urgencia de vigilar su administración y usufructo; ha movilizado centenares de miles de colombianos para que participen en el proceso político y sus tesis sobre la modernización social y económica fueron respaldadas por cerca de ochocientas mil personas en una campaña electoral realizada en condiciones adversas por la parcialidad del gobierno.

El Nuevo Liberalismo está presente en el Senado y la Cámara, catorce asambleas departamentales y más de doscientos cincuenta cabildos. Merced a este esfuerzo el sistema democrático ha consolidado su legitimidad. Además se pudieron expresar personalidades políticas afines que no pertenecen al Nuevo Liberalismo por su propia voluntad, pero han vuelto a ser oídas en el Congreso gracias a nuestro apoyo. El Movimiento ha dado oportunidad a centenares de líderes, en distintos niveles, de iniciar una carrera pública y millares de profesionales, educadores y universitarios que estaban al margen de las decisiones sociales han encontrado el camino para intervenir en política. Nuestra presencia en las elecciones de 1982 obligó a los sectores tradicionales del liberalismo y del conservatismo a revisar estrategias y conceptos. Hemos deliberado intensamente con el pueblo y casi medio millón de colombianos nos acompañaron en las plazas públicas, en cabildos abiertos realizados en cerca de 300 municipios y centenares de barrios de las capitales de departamento, donde se hizo el escrutinio de los pro-

blemas nacionales y se recogió información sobre las aspiraciones y necesidades de las distintas regiones. Se han creado vínculos con partidos políticos de ocho países de América Latina y con varios dirigentes que se hallan en el exilio por su lucha contra las diversas dictaduras del Continente.

Hemos contribuido a la creación de un nuevo clima en el Congreso Nacional con nuestras tesis sobre el presupuesto del Senado y la Cámara. Ayudamos en forma significativa a reducir la burocracia del Congreso. Hemos promovido debates de fondo sobre el orden público, la televisión, el presupuesto nacional, la crisis del sector bancario y financiero, la educación a distancia, los servicios públicos, la carrera administrativa, la seguridad ciudadana y el funcionamiento de la policía. El Nuevo Liberalismo ha promovido la transformación de la vida municipal en foros nacionales y cabildos. Algunos miembros del movimiento se han incorporado a las administraciones regionales y locales. Somos la principal fuerza renovadora presente en el Congreso. Acabamos de nacer y a pesar de las limitaciones de tiempo y recursos nuestra lucha ha sido útil para sacar a Colombia del régimen autoritario en que se hallaba.

Nuestra misión

No tenemos la vanidad de decir que estamos libres de problemas y riesgos. La resistencia al cambio es más profunda de lo que pueda imaginar un observador desprevenido de la política nacional. En el pasado próximo y remoto se frustraron otros esfuerzos de gentes que de buena fe intentaron abrir caminos y no faltan los escépticos que confunden al Nuevo Liberalismo con otros movimientos electorales que se agotaron al conseguir unas cuantas curules o unos pocos cargos burocráticos. También existen ilusos que se imaginaban posible el cambio total e inmediato de la sociedad merced a nuestra acción. El oportunismo y el inmediateísmo son enemigos habituales de toda labor política transformadora. Además, algunos medios de comunicación son avaros y superficiales al describir nuestras labores y no faltan las tergiversaciones de quienes buscan prefabricar hechos políticos con titulares especulativos o imaginarios. Tenemos problemas de comunicación y nuestra organización re-

quiere una nueva estructura y mayores recursos. Todos estos obstáculos y otros mucho más difíciles son previsibles y se multiplicarán en el camino. Los ideales que nos guían no son fáciles ni cómodos: queremos renovar la mentalidad política de la Nación y buscamos generar cambios cualitativos en el manejo de los asuntos públicos para construir un país moderno. Tenemos, por tanto, objetivos que hieren intereses, rompen privilegios y exigen responsabilidades. Ningún derecho, ninguna libertad, ningún progreso humano ha dejado de pagar su precio en sacrificios, en renunciamentos y en sangre. Quien no lo entienda así no debe vincularse a la lucha renovadora en que nos hallamos. Esta misión requiere fe, lealtad, carácter, disciplina y sinceridad. Yo estoy seguro que tales cualidades abundan en vastos sectores del pueblo colombiano y por eso asumí la responsabilidad de dirigir el Movimiento por el Nuevo Liberalismo.

Deseo referirme esta noche a las relaciones entre el Nuevo Liberalismo y el gobierno; a nuestro punto de vista sobre la transformación del área liberal y a los criterios y procedimientos de reorganización de nuestro sector político.

Apoyo externo al gobierno

En el debate que tuvo lugar en el Senado sobre el proyecto de ley de amnistía hace cuatro semanas, así como en múltiples declaraciones a los medios de comunicación y el propio día en que felicité al doctor Belisario Betancur por su victoria, he fijado la posición del Nuevo Liberalismo ante este Gobierno. La he resumido como apoyo externo y hoy considero oportuno analizar las dos palabras que integran este concepto. Es necesario apoyar a este gobierno porque los problemas de la economía nacional y del orden público son de tales dimensiones que se requiere el esfuerzo concorde y prolongado de todos los grandes sectores políticos para solucionarlos. Hay problemas gravísimos pendientes de solución, tensiones antiguas y recientes, desigualdades para corregir y un cuadro democrático que en cualquier momento se puede volver muy frágil. En la situación actual, el país no está en grado de soportar que una fuerza política importante se coloque en la oposición. Nunca como hoy la situación general del país ha sido tan

grave, pero pienso que esa gravedad no ha sido comprendida por muchos sectores. Insisto en lo que expresé hace tres semanas en una entrevista publicada por "El Espectador". La Nación debe ser convocada a una tarea de reconstrucción económica y moral y para ello es indispensable promover un acuerdo nacional sobre algunas de las decisiones fundamentales del gobierno. Colombia necesita grandes transformaciones sociales, económicas y políticas. Una renovación profunda de las estructuras, la organización social y la moral pública. Es imposible iniciar y conducir adelante estas transformaciones sin el acuerdo de las grandes fuerzas sociales (obreros, campesinos, masas juveniles y femeninas, sectores productivos, Iglesia y demás credos religiosos) y políticas (liberales, conservadores, socialistas e independientes). Esto no significa que todos estén obligados a participar directamente en el gobierno o que el acuerdo sólo sea posible con el ingreso al gabinete ministerial. Son posibles diversas fórmulas políticas siempre que permanezcan la responsabilidad común, la solidaridad nacional, un esfuerzo de comprensión recíproca y el empeño unánime de transformar el país.

Nuestro apoyo es externo porque así como no queremos caer en la tentación del maximalismo tampoco vamos a precipitarnos en la del ministerialismo para cumplir con las apariencias de un acuerdo nacional. Ninguno de los pocos miembros del Nuevo Liberalismo que han sido llamados por el gobierno a trabajar en alguno de los frentes de la administración, ha sido presionado por mí para que acepte o no la posición respectiva. He respetado el fuero presidencial y he manifestado sin reservas la opinión favorable que tengo sobre el equipo principal de gobierno. Desde su elección como Presidente considero que el doctor Betancur puede ser el primer hombre de una nueva época o el último de una época que agoniza. El señor Presidente sabe que puede contar con nosotros para toda acción seria. Estamos listos a participar en las citas que signifiquen renovación y no simple gestión de un orden política y social caduco. El sentido de la renovación debe estar presente en nosotros y en quien trata con nosotros.

Si bien es verdad que varios sectores políticos se declaran partidarios de apoyar al gobierno, existen diferencias sobre el grado de

compromiso y la naturaleza del apoyo. Yo no creo que sea indispensable estar directamente representados en el gobierno para que se pueda hablar de apoyo. Es más desinteresado y eficaz quien respalda sin pensar en contraprestaciones de poder personal. Además, creo que las mismas circunstancias en que nos hallamos, cuando carece de sentido hacer oposición, vuelve más necesaria la tarea de quienes podemos vigilar con mayor independencia los actos de la administración. El sistema democrático se agota si desaparecen las alternativas. No todos los sectores conservadores piensan igual que el señor Presidente de la República sobre los cambios estructurales que le convienen al país ni sobre el sentido verdadero de la carrera administrativa por encima de cuotas de partidos o grupos. Más de un congresista liberal se reservó su opinión el día en que fue elegido el Designado a la Presidencia y si yo pude expresarla con entera libertad cuando anuncié mi voto en blanco, es porque no entiendo las responsabilidades del Nuevo Liberalismo tan sólo en función de los asuntos inmediatos. Además me resulta difícil creer que las tesis desarrollistas del Designado sean compatibles con la emergencia económica y social que vive el pueblo colombiano.

El Presidente Betancur ha eliminado la arrogancia del poder y ha recuperado el liderazgo civil en la República. En su gobierno, las circunstancias han permitido que se modifiquen las políticas conformistas y complacientes con los sectores financieros. Hay un lenguaje distinto en el Palacio de Nariño y ahora empieza desde el despacho presidencial el ejemplo de austeridad que necesita la República. El presidente Betancur probablemente no logre resolver todos los problemas que se han acumulado por mil razones, pero todavía puede lograr una participación de base a un nivel democrático más amplio pues quien desee comprender a la nueva Colombia no puede gobernar sin o contra las clases obreras y campesinas.

La crisis económica y el orden público

Los dos grandes retos del gobierno son la crisis económica y los problemas de orden público. El primero es más grave que el segundo pues el orden público está estrechamente vinculado con la marcha de la economía, de la

cual depende la paz social. La paz social se basa sobre el consenso político y sin aquélla ni éste puede haber proyecto de orden público que sea mínimamente posible. La inflación crónica, superior al 25% anual, es un estímulo al terrorismo, al hurto y al secuestro. La concentración de la riqueza, la evasión de impuestos por los ricos, las rentas parásitas, el despilfarro y el lujo de los pudientes, así como los capitales refugiados en Panamá, Florida y las Antillas son manifestaciones del egoísmo de clase que usufructuó las bonanzas de los últimos años y hoy contempla impotente el desplome de un sistema financiero inspirado en la especulación. El panorama económico es sombrío a pesar de las medidas iniciales del gobierno que reflejan una recta intención, y en medio de las dificultades han surgido oportunidades de cambios profundos, paradójicamente gracias a la crisis. Desde hace varios meses todos sabemos que el mundo vive la peor crisis económica desde la época de la gran depresión y esto sólo significa un nuevo tormento para un país dependiente como el nuestro. La cosecha cafetera ha sido muy mala. La inversión está paralizada por el temor a nuevos asaltos del sector financiero contra los ahorradores. Ya nadie pone en duda la profundidad de la crisis fiscal creada por el derrumbe del sistema tributario y el dinero público malgastado en operaciones demagógicas y suntuarias. El país parece resignado a la emisión masiva para manejar la crisis fiscal y darle paliativos a la crisis financiera. El deterioro de los mercados internos y externos agudizó la postración de los sectores productivos industriales y agropecuarios que ya no soportaban más la inflación de costos. Nos encontramos en el limbo cambiario por la sobrevaluación del peso mientras vemos que el deterioro de las reservas internacionales es inexorable. El número de empresas en Concordato ya se aproxima al centenar y todo indica que se avecinan peores noticias en sectores industriales estratégicos. Lo urgente no es conseguir empleo para los desocupados sino evitar que continúen los despidos en las fábricas paralizadas.

La distribución de los sacrificios

En esta hora difícil todos hablamos de sacrificios pero todos pensamos en los ajenos y no en los propios. La austeridad del Presidente, ojalá imitada por sus subalternos, permite esperar que esta vez los sacrificios de la crisis

no van a recaer exclusivamente sobre los salarios de los trabajadores. Se debe abrir paso una política de austeridad general del Estado y de todos los sectores sociales. Cuando se discute el salario mínimo resulta impresionante pensar que hoy, muchos colombianos deben sostener su familia con menos de \$7.500 mensuales. Cualquier teoría económica sobre moderación en las políticas salariales no tiene sentido para quienes viven en esas terribles circunstancias. El gobierno no puede ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes porque tarde o temprano lo que no logren los pobres en las negociaciones directas por el egoísmo de los privilegiados, lo buscarán algunos por las vías delictivas en términos más costosos y explosivos.

Los líderes sindicales del país tienen la madurez necesaria para comprender que el salario no es una variable independiente de la economía porque al fin y al cabo todo —dividendos, impuestos, salarios, empleo, inversión, ahorro y consumo— está relacionado y es interdependiente. No cabe pensar, entonces, en reajustes generales e indiscriminados de salarios ni en promedios mínimos comunes a todas las categorías. En el Distrito Especial hemos propuesto buscar promedios ponderados razonables y prudentes en el conjunto que permitan ayudar a los sectores bajos y medianos de la administración con mayores reajustes salariales. Ese es el camino para probar la solidaridad colectiva y esos son los argumentos que utilizamos para insistir en el Congreso Nacional sobre la revisión del proyecto de dietas que al menos es hoy inferior en un 25% al original, pero todavía debe ser complementado con la congelación por tres años de la suma fijada.

Es preciso, además, que los voceros de los trabajadores comprendan que el salario no es la única fuente de ingresos pues el mal funcionamiento de los servicios públicos, su costo exagerado, así como el desgreño y el atraso en los servicios sociales de salud y educación también afectan el ingreso real de las familias. Esto sólo se entenderá cuando el pueblo adquiera conciencia de sus derechos frente al Estado y a la administración pública; cuando los colombianos adquiramos sentido del Estado y no lo confundamos con la simple fuente de privilegios y utilidades de quienes logran conquistar su control.

Las condiciones para salir de la crisis

Si se quiere afrontar en serio la crisis y no sólo manipularla para que todos los privilegios sigan iguales se necesita cumplir tres condiciones: una nueva distribución del trabajo merced a la reorganización de los factores de producción; la nivelación drástica de los ingresos y la revisión rigurosa del modo de producir y del modo de consumir renunciando al lujo y al despilfarro. El gobierno tiene que dar respuestas inmediatas a la coyuntura pero debe comprender que se le presenta la oportunidad de lograr soluciones de fondo. Los cambios sustantivos rara vez son posibles en contextos normales. Así como hoy está planteada la posibilidad de reformar el poder bancario y financiero, uno de los puntos claves del sistema de poder existente en el país, también se ha dado la oportunidad de transformar la estructura de la propiedad agraria y urbana, la sociedad anónima y el sistema industrial. La acumulación de capital es indispensable, pero debe ser programada por el Estado dentro del sistema mixto de propiedad, a fin de aumentar el empleo y castigar las rentas parásitas.

Más de dos millones de personas están desempleadas o subempleadas en Colombia. Cuanto se prometa en materia de vivienda o educación es un espejismo mientras no se convierta la política de empleo en una de las columnas vitales de la estrategia económica y social. La estabilidad de la democracia en Colombia dependerá en buena parte de la creación de empleo para los jóvenes. Hace mucho tiempo que se dice que una sociedad que deja a los jóvenes sin salida está condenada; ésta es la encrucijada colombiana y no podemos seguirla ocultando con el simple incremento de la burocracia o los otros esquinces para disimular las desigualdades e injusticias existentes.

Una hora de concertación

Nadie puede esperar ni pedir resultados fundamentales en el corto plazo. En los medios internacionales se estima que antes de 1985 no habrá esperanzas de una recuperación de la economía y los colombianos no podemos caer en la ilusión de creer que esta-

mos libres de ese contexto. La revitalización de la economía, la creación de empleo en zonas urbanas y, por consiguiente, las esperanzas de incremento de la demanda de productos agropecuarios dependen de la transformación de las empresas que hoy están endeudadas por el derrumbe de la sociedad anónima. Las ideas que el gobierno acaba de divulgar sobre un convenio de fortalecimiento de la industria textil parecen bien orientadas y deberían extenderse a otros sectores. Lo justo sería que las empresas en dificultades presentaran planes de recuperación que pudieran ser examinados por las autoridades para juzgar su viabilidad. Si pasan tal examen se debe pensar en fórmulas que permitan participaciones accionarias y/o colocación sobre el mercado de aumentos de capital que democratizen la propiedad de esas empresas con estímulos tributarios para tales acciones. Es urgente recapitalizar las empresas porque la crisis de la inversión industrial ha tocado fondo y se ha llegado ya a lo que algunos llaman el aumento patológico del endeudamiento. Este proceso —y así lo sugiero al gobierno— no debe adelantarse tan sólo entre las autoridades y los textiles sino entre el gobierno, los administradores de las empresas, los sindicatos y los bancos. Ninguna emergencia se presta tanto como ésta para apreciar las ventajas de la concertación que no sólo es indispensable en el empeño de conciliar los intereses de todos, sino para conducir un proceso de transformación industrial que permita establecer cuáles son las industrias que han dejado de ser y no volverán a ser competitivas. Si los trabajadores no tienen acceso a esta información resultará muy difícil adelantar políticas salariales responsables. Ningún sindicato serio puede obligar a las empresas a mantener en su nómina un número de trabajadores que exceda sus posibilidades productivas. En esta crisis todos tenemos una tarea y yo estoy seguro que los sindicatos, si se les respeta y se les informa, cumplirán la suya. Todos los objetivos que pueda tener el sindicalismo van después de la lucha para resolver el problema del desempleo. Imponer a las empresas cuotas de mano de obra excesivas, es una política suicida. Naturalmente, no se trata de dejar a los trabajadores licenciados a la deriva. Deben ser inscritos en listas especiales para que tengan prioridad absoluta en el retorno al trabajo y las industrias interesadas deberían crear un fondo especial para subsidiar este sistema que asegure la movilidad de la mano de obra en época de dificultades. No propon-

go con esto ninguna fórmula excepcional, tan solo quiero contribuir a que no se vuelvan dramáticos y explosivos los efectos de la crisis industrial que tenemos ad portas.

En los demás sectores económicos, como es el caso de los cafeteros, los agricultores, los comerciantes y los pequeños industriales, se avecina el momento de pensar en moratorias y refinanciamientos ya no sólo como medidas aisladas sino como problemas generalizados. Por donde van las cosas en la industria de la construcción, debido al efecto no calculado de las últimas medidas sobre las Upacs, tampoco sería extraño que en el año próximo, o antes si se estudia el asunto con toda serenidad, haya que rectificar rumbos y estrategias que a pesar de su buena intención no serán eficaces y pueden ser contraproducentes.

La amnistía y la paz

No es el momento de calificar los resultados sobre la ley de amnistía ni de contribuir al pesimismo reinante sobre una medida que merece mejor suerte y que se volverá crucial en la historia de los problemas de orden público del país. Es preciso perseverar. La amnistía no fue aprobada porque la democracia se sintiera débil sino, al contrario, porque la presencia del pueblo en las elecciones le dio mayor legitimidad a la evolución democrática del país y creó posibilidades de reconciliación dignas para todos los protagonistas. Es necesario decirle no a los extremismos porque la nación quiere hallar soluciones por vías institucionales y no por medio de los actos de barbarie. Frente a los crímenes atroces, como el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, no cabe explicación ni motivo político alguno. Los asesinos no pueden buscar un cambio por esos caminos salvajes y si lo que pretenden es hacer aparecer al Estado impotente, cometen un grave error porque la Nación entera condena la cobardía de estos procedimientos. También se equivocan si esperan que el Estado se vuelva feroz y bárbaro en la réplica. Ya hubo el riesgo de que esto sucediera y la Nación reaccionó a tiempo para condenar los abusos e impedir que se respondiera en forma ciega. Se equivocan, igualmente, si buscan crear contrastes entre las fuerzas políticas porque ésta clase de crímenes lo único que logra es mayores reflexiones sobre la necesidad de

defender los principios de la civilización y los derechos humanos por encima de toda suerte de confrontaciones políticas.

Los grupos subversivos —y yo espero y deseo que ninguno de los movimientos guerrilleros tenga vínculo alguno con el holocausto de la señora Gloria Lara— no pueden cometer el error de encerrarse en sí mismos y olvidar las necesidades sentidas e inmediatas del pueblo. Aún es tiempo de meditar lo que se dice y lo que se hace en una coyuntura tan delicada y cuando Colombia confía en la honesta intención del Presidente por lograr la paz. Hay necesidad de seguridad, una demanda colectiva de seguridad que surge de la opinión pública y nosotros debemos corresponder a esa necesidad, sin ceder ninguno de los derechos constitucionales y legales, sin plegarnos a ninguna sugestión represiva, pero dándonos cuenta de los problemas del orden democrático. También existe una demanda perentoria de justicia y aun cuando la tarea es descomunal, la Nación debe confiar en sus jueces y tribunales, respaldarlos y esperar que ellos también cumplan su deber en la presente encrucijada.

Hacia la democracia plena

Estamos, ciertamente, en una encrucijada. Con todos sus defectos el sistema electoral permitió una posibilidad política interesante con el pluralismo que se ha creado en el Congreso y el millón de votos que Belisario Betancur le agregó al partido conservador para lograr la Presidencia. Sin embargo, falta mucho para llegar a la democracia popular en la que los sectores obreros y campesinos ejercen un control auténtico del poder del Estado. Estamos tratando de dejar atrás la democracia restringida para lograr al menos la democracia intermedia. El progreso ha sido importante pero inestable y todavía podemos perder lo que se ha recorrido. El pueblo está oprimido porque depende económicamente de quienes tienen la riqueza social, poseen la tierra, los instrumentos de trabajo, la información y el capital; intelectualmente porque la mayoría permanece en la ignorancia; moralmente porque se le halaga con las soluciones populistas y políticamente porque se le ha manipulado con los instrumentos clientelistas para asegurar su dependencia y sumisión.

La lucha por la democracia plena es y sigue siendo lo realmente revolucionario del presente siglo. Los colombianos tenemos la ilusión de poseer una democracia, pero todavía nos falta mucho camino para alcanzarla. Aunque es indispensable, no basta la democracia formal porque ella sola reproducirá siempre la condición subalterna de las clases medias y populares, mientras los partidos políticos no se ocupen realmente de la organización del pueblo. La función clásica y distintiva de los partidos políticos es la de transmitir la demanda política. Los partidos nacen, se consolidan y encuentran su razón de ser en el hecho de que existen conflictos económicos, sociales y políticos. En Colombia los partidos no han evolucionado pero la naturaleza de la política sí, por lo tanto las características del electorado y su accesibilidad a los partidos son hoy diferentes. Están surgiendo nuevas formas de política y ésta cambia más rápido que los partidos. Existe una realidad política extraparlamentaria que los partidos no han logrado expresar.

El poder del Estado ha crecido, pero ese poder no ha estado al servicio del pueblo sino de quienes están mejor organizados para usufructuarlo. Mientras el pueblo no se organice para controlar el poder del Estado, de poco le servirá que ese poder aumente. Sin la renovación de los partidos no puede haber una real renovación del sistema. Tal renovación, en parte puede ser inducida por reformas como las que auspicia el Ministerio de Gobierno en los diálogos que realiza con los distintos sectores para dar garantías a la oposición, transformar el sistema electoral, asegurar el derecho de información y consolidar la carrera administrativa. Sin embargo, dentro de los partidos o merced a la formación de nuevos partidos, se debe cumplir el verdadero y decisivo esfuerzo de organización popular.

La renovación de los partidos y la paz

Si las guerrillas son sinceras cuando proponen una tregua, a los sectores políticos progresistas nos corresponde ayudar a crear las condiciones para que se decidan a ingresar en la política institucional. Un factor fundamental para la paz es conseguir que la extrema izquierda encuentre cabida suficiente para la acción democrática en el sistema electoral,

partidista, parlamentario y laboral; que pueda desempeñar un papel público y eficaz en el estímulo, asignación y usos sociales de la riqueza producida. Esto sólo será posible cuando haya verdaderas elecciones libres, sin ventajas ni manipulaciones; cuando los derechos de la oposición sean garantizados en tal forma que las elecciones sean realmente competitivas y el volumen de participación asegure la representación de todos los sectores sociales. Hasta el presente las elecciones en Colombia han sido formalmente competitivas y se realizan en contextos semiautoritarios y clientelistas. Lo que quiso demostrar el Nuevo Liberalismo, especialmente a las nuevas generaciones, es que sí es posible crear hechos por la vía electoral a pesar de innumerables obstáculos y que si se persevera en la organización y la movilización de las clases medias y populares, inexorablemente se modificará la estructura de poder en el sistema político colombiano. No hemos tenido en nuestras manos todos los instrumentos para realizar esa organización popular, pero en poco tiempo hemos demostrado que sí existe un espacio todavía no explorado en forma debida por los sectores progresistas del país.

Hoy las elecciones en Colombia se realizan para buscar legitimación interna y externa; expresan hasta cierto punto la voluntad popular, pero debido a los atrasos culturales de nuestra democracia son un medio de reflejar la distribución del poder, e influir en ella, tan sólo entre los grupos que controlan el gobierno. Salvo nuestro grupo parlamentario y las pocas curules obtenidas por la izquierda y el movimiento cívico, todo lo demás gira dentro del ámbito de los monopolios tradicionales de los partidos. El obstáculo es político y es todavía difícilísimo de superar. El vértice de los dos partidos no quiere perder sus privilegios, sus instrumentos operativos, de complicidad. La degeneración política que hemos visto y que produjo la crisis del partido liberal es consecuencia de la falta de alternativas del sistema. El problema es de los dos partidos y uno de los motivos para tener una posición prudente ante el gobierno es la influencia de sectores del partido conservador tan clientelistas y manipuladores como los núcleos más reaccionarios y viciosos del oficialismo. Esta situación influye en los problemas de orden público, porque los sectores extremistas no creen en la posibilidad de presentar y defender eficazmente sus puntos de vista a través de institu-

ciones que consideran parcializadas y por lo mismo ficticias. Las dictaduras más difíciles de combatir son las que no ejercen el mando por medio de instituciones propias y despiadadas sino que consiguen esos fines penetrando y apropiando las estructuras existentes. Algo de esto padecemos los colombianos y aún cuando las elecciones de 1982 rompieron estructuras viciosas, hay poderes abusivos que permanecen intactos e inclusive buscan consolidarse al amparo de un Presidente que lucha sinceramente contra el clientelismo pero no tiene respaldo parlamentario sólido en su propio partido.

La crisis liberal

Estas reflexiones sobre el panorama político general, los factores reales de poder en nuestra sociedad, el tipo de democracia que tenemos y las características de los partidos, deberían ser suficientes para explicar por qué el Nuevo Liberalismo prosigue su camino sin detenerse en el embeleco de la unión liberal planteada en términos mecánicos, como si de repente se hubieran esfumado todos los problemas que asfixiaron al liberalismo y convirtieron sus jerarquías en testigos o cómplices del deterioro democrático de los últimos años. Sin embargo, algunas gentes de buena fe que no han comprendido la profundidad de nuestro compromiso de renovación política, todavía desean más explicaciones para entender nuestra lucha y yo estoy dispuesto a darlas cuantas veces sea necesario. Hablemos pues de la situación del liberalismo.

Empecemos por decir que una crisis nacional tan grave como la que he descrito no la puede afrontar el país con base en las acciones de un solo partido y mal puede un solo sector crear la ilusión de que controla todas las situaciones. Somos una fuerza nueva y creciente pero no desconocemos la importancia y la existencia de otros sectores, así discrepamos sustancialmente de sus opiniones y a veces de su comportamiento. La crisis nacional hace aconsejable un compás de espera en las confrontaciones directas entre los diversos sectores políticos. El oficialismo está en su derecho de reorganizarse y ojalá pueda hacerlo porque la política irá mejor si hay interlocutores definidos y no si se anarquizan los sectores. En todo caso el pueblo debe decidir en los comi-

ciones de 1984 y 1986 en dónde encuentra mejor interpretadas las ideas liberales en función de los problemas de nuestro tiempo y así, como lo hemos dicho, se necesita una renovación estructural y estratégica del liberalismo, en algunos casos de tipo generacional. A la unión sólo se puede llegar cuando tenga lugar la transformación del liberalismo. Esto no consiste apenas en operaciones de maquiage, para hacer reemplazos dentro de un restringido grupo de dirigentes. La transformación esencial consiste en abrir caminos a los obreros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los educadores y las clases medias para que lleguen a las corporaciones públicas y participen permanentemente en política. La transformación consiste en dar respuestas colectivas a partir de la creación y distribución de bienes colectivos en vez de satisfacer intereses personales o de pequeños grupos. La transformación depende de que se resuelvan los problemas de identificación, organización, participación y reclutamiento de miembros activos del liberalismo que tengan capacidad de influir en las decisiones. La transformación se logrará cuando construyamos un verdadero partido de integración social y superemos la situación actual de partidos de representación individual. Cuando el policlasismo no sea un pretexto para manipular a los sectores más débiles de la población sino el instrumento eficaz de una auténtica solidaridad social.

El oficialismo tiene contradicciones internas que son el resultado del afán de cubrir con un manto de olvido vicios y fallas que perjudicaban la coherencia de los liberales con las responsabilidades democráticas de la colectividad. Tales errores crearon una defensa corporativa de intereses de casta, hubo miedo entre los dirigentes de conceder espacio a las instituciones y a los sectores sociales que no estaban políticamente representados, se hicieron intentos para reforzar la superación de los intereses y criterios de la casta política respecto del resto de la comunidad y no hubo disponibilidad para afrontar una competencia política libre y justa. La sorpresa más grande de las maquinarias fue haber descubierto que el electorado cautivo de marzo se liberó en mayo porque sabe que el centro del poder en nuestro sistema político está en la Presidencia. Se equivocan, por lo tanto, quienes en el oficialismo o en otros sectores imaginan que todo se reduce a hacerse más presentable para aplazar el problema estructural de relevo de

protagonistas, y se equivocan los que desconocen el derecho del pueblo a reconstruir las jerarquías en el liberalismo al insistir en la manipulación de convenciones de tipo tradicional, pues tales jerarquías sólo serán legítimas cuando así lo señale inequívocamente el pueblo. Se equivocan asimismo los que tratan de desconceptualizar este debate como si fuese una lucha maniquea porque buscan la oportunidad de llegar como paracaidistas a directivas mecánicas, y se equivocan finalmente los que piden no hablar más de clientelismo para halagar a los antiguos líderes feudales, como si no estuviésemos ante la amenaza creciente del clientelismo conservador. Ningún grupo político está exento de los riesgos de orden moral, de costumbres, de indisciplina y de oportunismo. Lo grave es creer que todo se justifica en aras de sumar y sumar para que sigan sobreviviendo los mercenarios políticos.

El Nuevo Liberalismo nació dos años antes de que se conviniera en presentar mi candidatura a la Presidencia de la República. No es, entonces, un movimiento concebido para sustentar esta candidatura, sino, a la inversa, acepté la responsabilidad de ser candidato como una manera de consolidar al Nuevo Liberalismo y extender a todo el país nuestra lucha por la renovación democrática.

En esta etapa que comienza hoy el Nuevo Liberalismo necesita lograr democracia interna y flexibilidad organizativa. Si queremos conservar el apoyo de vastos sectores de la opinión pública y si nos espera el reto de conquistar la mayoría en centenares de municipios ello sólo será posible con la persuasión y la organización de las masas. El éxito de la democracia por fuera y dentro de los partidos depende de las condiciones culturales previas. Considero que llegó el momento de poner a prueba la madurez del movimiento y verificar cuánto hemos logrado en educación política. Ese ha sido nuestro propósito fundamental pues compartimos la frase de Tocqueville cuando decía: "Es difícil asociar a un pueblo en la labor de gobierno; pero es aún más difícil proporcionarle experiencia e inspirarle los sentimientos que requiere para gobernar bien". Las experiencias que vamos a vivir en el primer trimestre de 1983 cuando realizaremos asambleas en todos los Departamentos, en el Distrito Especial y en los Territorios Nacionales indicarán nuevamente la sin-

ceridad de nuestra lucha y la lealtad de los miembros del movimiento. Según como un grupo político concibe y vive el propio partido, del mismo modo proporciona una imagen de cómo concibe la sociedad cuando ese partido sea la mayoría de la sociedad. No podemos ofrecer a la nación lo que no seamos capaces de vivir dentro de nuestra propia organización.

Las actividades clásicas del Nuevo Liberalismo deben ser la movilización electoral, la canalización del consenso y la educación política. Para lograrlas es necesario distribuir el poder al interior del Nuevo Liberalismo; precisar los fines del movimiento en el corto, mediano y largo plazo; reclutar, seleccionar y formar los equipos dirigentes y organizar los canales para que los diversos sectores sociales se expresen a través del Nuevo Liberalismo.

Labor en las corporaciones públicas

Nuestra primera responsabilidad está en las corporaciones públicas y dentro de ellas en el Congreso por el cual prometimos luchar para recuperar su liderazgo político y moral. El Congreso es la institución que puede guiar el pluralismo político y que puede dar el máximo de transparencia a las decisiones por ser el organismo más expuesto a la sanción directa del voto popular. El Congreso necesita un poder efectivo de conocimiento de determinados datos esenciales para la política económica (flujos financieros, empresas estatales, situación fiscal, etc.). Es necesario programar las labores de las Cámaras para obrar en plazos razonables de modo que se logre la conexión entre los temas de las legislaturas. Debe mejorar la comunicación entre las Cámaras y entre las comisiones e inclusive deberían realizarse diálogos periódicos entre las directivas políticas sobre temas parlamentarios. Dentro del Nuevo Liberalismo hemos buscado la organización del grupo parlamentario para manejar el reto de dos Cámaras donde actúan 313 congresistas y laboran 16 comisiones ordinarias. Necesitamos mejorar los servicios de apoyo de nuestro grupo parlamentario, programar el trabajo y respaldar la labor de los congresistas, quienes en forma aislada no pueden trabajar seriamente. Al fin y al cabo cada legislatura estudiará más de un centenar de proyectos de ley, algunos los aprueba y otros los niega, y en cada legislación tienen lugar por lo menos 40 debates significativos en las comisiones

o en las plenarias. Hemos progresado en la conformación del grupo parlamentario pero todavía tenemos muchas limitaciones y fallas.

Congreso sobre régimen territorial

En el primer semestre de 1983 realizaremos un congreso del Nuevo Liberalismo destinado al examen del régimen territorial del país, la democracia municipal y regional, la descentralización administrativa y la reforma del sistema fiscal de las distintas entidades territoriales. Los departamentos prepararán ponencias y proyectos de ley dirigidos a convertir estos temas en los puntos centrales de las elecciones de 1984.

Elección de nuevas directivas

En el primer trimestre de 1983 serán elegidas las directivas departamentales y las que orientarán el movimiento en las capitales. Somos una tendencia nacional dentro del área liberal que busca la reorganización del liberalismo. Nuestra organización ha operado en forma federal, con unidad de políticas nacionales pero con respeto total de los sistemas de elección de directivos y representantes escogidos libremente en todas las regiones. La Dirección Nacional sólo ha obrado como instancia final cuando así lo han requerido las organizaciones seccionales.

Tribunal de garantías

Habrá un tribunal de garantías que en lo nacional supervigilará la legitimidad y equidad de todo proceso de elección y toma de decisiones y en lo departamental habrá también tribunales que asegurarán la confianza de los miembros del movimiento en los actos de ese nivel territorial.

Planeación del movimiento

Tanto la organización nacional, como las departamentales y municipales, así como las zonas de Bogotá y las capitales elaborarán, en el primer trimestre del año próximo, un plan de labores para el trienio siguiente y un programa detallado de actividades hasta abril de 1984.

Centro de estudio y organizaciones sectoriales

Todos los niveles de organización establecerán centros y círculos de estudio sobre la cuestión ideológica y la fiscalización de los distintos sectores del gobierno. En todos los departamentos y capitales, habrá organizaciones especiales femeninas y juveniles y gru-

pos destinados a la movilización y atención de los sectores laborales y gremiales, como los sindicatos, los jubilados, los industriales pequeños, medianos y grandes, los educadores, los profesionales, los comerciantes. Cada departamento, de acuerdo con sus realidades económicas y sociales, escogerá los sectores que requieran organización específica.

La educación política

La consigna es multiplicar los cursos de capacitación sobre ideología y metodología política para formar dirigentes, enriquecer el pensamiento del Nuevo Liberalismo y aplicar sistemas modernos para promover una mentalidad analítica y crítica en todos los miembros del movimiento.

Relaciones internacionales y derechos humanos

A nivel nacional funcionarán las comisiones y las secretarías indispensables para respaldar estas tareas en el resto del país. Además, se creará una oficina de relaciones internacionales para coordinar los núcleos del Nuevo Liberalismo en el exterior donde cerca de 20 mil compatriotas respaldaron nuestras tesis, y se constituirá una oficina especial para defender los derechos humanos y realizar una labor pedagógica sobre este tema vital que contemple no sólo las denuncias indispensables por cualquier violación sino la necesidad de cumplir una misión preventiva. Se promoverá, asimismo, todo lo necesario para mejorar los factores financieros del movimiento, la elaboración de presupuestos de gastos e ingresos, los servicios de comunicación interna y externa, el funcionamiento y la coordinación de las sedes.

Con todas estas ideas que provienen de las labores de varias comisiones que se han ocupado de la reorganización del Nuevo Liberalismo en Bogotá y en los departamentos, he recorrido en los dos últimos meses nueve departamentos y espero llegar a ocho más antes de terminar el año. Encuentro en todas partes millares de personas identificadas con nuestra causa. Todos saben que tenemos inmensas responsabilidades y que esta tarea apasionante de renovar la democracia nos exigirá varios años. En nuestras manos está una misión de responsabilidad histórica. Prosigamos la labor sin pausa alguna. Buena parte del futuro de Colombia depende de nuestra presencia, nuestra fe y nuestra laboriosidad. Siempre adelante ni un paso atrás y lo que fuere menester sea.

Las Fuerzas Armadas

**Intervención de Luis Carlos Galán en la
Cuarta Convocatoria Nacional del
Nuevo Liberalismo el 20 de junio de 1983
en el Hotel Tequendama.**

En la última Convocatoria Nacional del Nuevo Liberalismo, cumplida el 30 de noviembre del año pasado en este mismo sitio, al examinar los asuntos nacionales que tendrían mayor trascendencia en 1983 señalé dos problemas centrales: el orden público y la crisis económica. No se necesitaba tener el don de la profecía para decirlo desde entonces, pero sí era preciso advertir al país y al Nuevo Liberalismo que la política colombiana iba a girar en torno de esas dos cuestiones claves. Transcurrida la primera mitad del año, el pronóstico ha sido confirmado por numerosos y complejos acontecimientos. Esta noche, por consiguiente, cualquier análisis de la situación política nacional debe empezar por un balance de lo que ha sucedido y una proyección sobre lo que puede ocurrir tanto en la evolución del orden público como en el manejo de la situación económica.

Balance de la amnistía

Aun cuando no se ha logrado la paz y en algunas regiones existe el riesgo de graves

conflagraciones en el curso de los próximos meses, cabe señalar que el país ha cumplido ya un año desde el levantamiento de estado de sitio. Centenares de antiguos guerrilleros se acogieron de buena fe a la ley de amnistía. Otros no quisieron hacerlo y algunos aprovecharon el momento para salir de las cárceles y retornar a la lucha clandestina. Gracias a las elecciones del año pasado y a la ley por la cual se olvidaron los delitos políticos y los conexos con ellos, cometidos antes del 19 de noviembre de 1982, lo que los colombianos hemos tenido en nuestras manos es esencialmente una oportunidad de alcanzar la paz. La amnistía, sin embargo, no significaba lograr automáticamente el restablecimiento total del orden; era un factor indispensable para intentar la reconciliación con quienes resolvieron rebelarse contra el Estado de derecho con el fin de imponer sus ideas políticas por medio de la fuerza. La amnistía no buscaba la rendición de nadie y el hecho de otorgarla tampoco se produjo porque el Congreso pensara que el sistema de instituciones se hallaba débil sino precisamente como consecuencia del fortalecimiento logrado por la decisiva participación del pueblo en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Gracias a la amnistía, la opinión tiene hoy un concepto diferente del que existía antes del actual gobierno sobre los problemas de orden público y el tipo de conflictos nacionales e internacionales que amenaza la paz.

La comisión de paz

No conoce el Nuevo Liberalismo las labores de la comisión de paz porque no ha sido informado sobre las mismas; sin embargo, comparte el respeto que tiene la nación por sus integrantes y deplora que su segundo Presidente se hubiera retirado de ella, entre otros motivos, según sus propias palabras, porque "la paz tiene enemigos dentro y fuera del gobierno", frase explosiva y peligrosa que merecería mayores explicaciones por parte de su autor. El Gobierno ha hecho bien al insistir en su apoyo a la comisión y quienes forman parte de la misma saben que la nación les respalda y confía en que puedan hallar caminos eficaces para evitar una nueva e irreversible confrontación entre los grupos subversivos y la fuerza pública.

Las Fuerzas Armadas

En medio de la perplejidad e incertidumbres de esta situación de orden público, es necesario hacer algunas reflexiones. Después de varias décadas de lucha ininterrumpida, prácticamente 35 años desde 1948, las Fuerzas Armadas han perdido millares de oficiales, suboficiales y soldados muertos o gravemente heridos en innumerables episodios. Dos generaciones completas del ejército colombiano se han ocupado de defender el orden en una crisis histórica prolongada y sangrienta. Los sacrificios de los militares merecen la gratitud del pueblo porque sin su labor, Colombia habría sufrido daños mayores en su organización política y social e inclusive la soberanía nacional habría sido gravemente lesionada si estos conflictos se hubieran desbordado hasta tener consecuencias y protagonistas definitivamente vinculados a intereses internacionales, peligro siempre latente y que hasta la fecha no hemos superado.

En tanto tiempo, sin embargo, en las Fuerzas Armadas, se han presentado errores y abusos de diversa naturaleza. En la medida en que la institución ha tenido madurez para controlar y prevenir los riesgos de descomposición en una lucha tan prolongada, tales equivocaciones han sido corregidas. Las experiencias del gobierno militar, por ejemplo,

le demostraron al ejército que nunca debe desconocer la legitimidad democrática porque ello causa la división y la ruina del pueblo y a la larga debilita la institución armada como ha sucedido en Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Durante el Frente Nacional y los gobiernos posteriores, las Fuerzas Armadas colombianas se han separado de los criterios y procedimientos de otros países latinoamericanos y por eso hoy su situación es distinta. Durante la última década, numerosos miembros de las Fuerzas Armadas han sido retirados del ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía, dentro de los procesos de autocontrol institucional. Los retiros se han producido sin escándalo alguno, pero la verdad es que sí se han realizado. Esto significa que los hombres de armas en Colombia no son ni serán cómplices de quienes en el ejército o las demás fuerzas incurran en cualquier clase de delitos.

En el caso de las investigaciones sobre el MAS, ningún sector serio de la política colombiana ha creído que estos hechos comprometan a la institución militar como tal. Por lo tanto, esas investigaciones y los juicios respectivos deben adelantarse sin preconcepción alguno de manera que no haya impunidad para los militares que resulten comprometidos, pero tampoco haya acusaciones globales contra la institución armada que es respetable y debe ser defendida por los demócratas como institución creada dentro del Estado de derecho para defenderlo y consolidarlo.

Las Fuerzas Armadas no son ni pueden ser un poder independiente en un Estado democrático. Forman parte fundamental del sistema de instituciones y por lo mismo del conjunto de controles propios de la democracia. Es de la esencia de un verdadero ejército profesional tener una ética profesional. El nuestro la tiene y debe defenderla permanentemente de múltiples tentaciones y peligros surgidos dentro y fuera de la institución. Para garantizar su condición profesional las Fuerzas Armadas exigen requisitos educativos a quienes desean ingresar en los cuerpos oficiales y existe un sistema de acensos basado en la experiencia, la capacidad y los méritos contraídos. El ejército, la marina y la fuerza aérea son instituciones modernas porque sólo así pueden ser eficaces. Por lo tanto, sus miembros deben estar en capacidad de

comprender y apoyar los ideales de modernización que guían a los sectores progresistas en la medida en que la voluntad libre del pueblo les otorgue en las urnas la dirección del Estado.

El Nuevo Liberalismo reconoce que las Fuerzas Armadas han tenido a su cargo una difícil responsabilidad y que por la prolongación de los conflictos de orden público, así como la asignación de tareas que se salen de sus responsabilidades profesionales al estilo de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, los secuestros, los problemas de policía y la extensión de la competencia de la Justicia Penal Militar, han estado más expuestos que ninguna otra institución a extralimitarse en sus funciones. El riesgo de otra escalada de la violencia les confiere a las Fuerzas Armadas crecientes deberes porque las pondrá a prueba nuevamente. En la medida en que obren dentro del marco de las leyes y sin poner en duda los derechos humanos, podrán cumplir su difícil misión y contarán con el apoyo de los sectores democráticos. Si llegan a extralimitarse la Nación no lo permitirá y el Nuevo Liberalismo luchará contra todo abuso o injusticia que se produzca por parte de quienes lleguen a creer que la fuerza es el árbitro de la política.

La izquierda extremista

Desde hace muchos años, en la izquierda internacional se ha discutido entre la vía armada y la vía democrática para transformar la sociedad. En Colombia, la vía armada ha fracasado y todo indica que fracasará siempre porque la Nación no acepta ni el extremismo ni el sectarismo. En la guerrilla se han sacrificado centenares de jóvenes a quienes movía el idealismo cuando resolvieron irse a la lucha revolucionaria. Su holocausto merece respeto pues ha sido el de buena parte de los mejores miembros de las dos últimas generaciones. Pero esa inmolación no puede continuar porque se ha vuelto contraproducente. A la juventud que se pregunta sobre el sentido de la lucha armada es preciso decirle que no debe participar en más aventuras y que su generosidad, desinterés personal y creatividad los necesita el pueblo en los escenarios institucionales. El cambio no llegará por la

vía armada porque las condiciones geográficas, económicas, sociales y políticas de nuestro país no permiten que sea así como se transforme esta sociedad. Quienes luchan por el cambio violento creen que habrá un proceso mágico al término de la violencia en virtud del cual lograremos una sociedad diferente. Esto no es posible. El cambio es el resultado de un proceso de carácter histórico y político. Para que el pueblo logre conquistar verdaderamente el poder, es necesario entender y organizar la compleja estratificación social existente en nuestra nación. Lo único que logran quienes promueven las guerrillas es desencadenar la violencia reaccionaria y dividir verticalmente al país. Con ello, sin quererlo, le abren el camino a los protagonistas internacionales.

El papel de las clases medias

El Nuevo Liberalismo considera que no se puede ignorar a las clases medias en este proceso de democratización y de lucha por la paz. Quien busque renovar la sociedad tiene que entender que según donde se coloquen las mujeres, los jóvenes, los científicos, los artistas, los pequeños y medianos industriales, los profesionales independientes y los educadores podrá avanzar la democracia. Estos sectores son la clave de las fuerzas de centro y se unirán en forma irreversible a la derecha por el temor y la repugnancia que les producen los secuestros, las extorsiones y los actos de terrorismo. Aun es tiempo de impedirlo. El punto clave de la política colombiana, en esta década, será evitar que se produzca la alianza estable y organizada entre el centro y la derecha porque eso significa condenar a Colombia al fascismo. El porvenir democrático del país depende de la identificación del centro con las posiciones conscientemente democráticas. Si el centro es democrático, habrá paz y libertad. Si el centro acepta la represión y se asusta por los desafueros de los extremistas, el país caerá en procesos de totalitarismo. Elegir el camino democrático no significa afirmar que de manera fácil o inexorable la sociedad se transformará. Nuestras instituciones políticas todavía tienen muchas fallas y limitaciones. Aun cuando no lo crean los extremistas, la lucha legal también es sacrificada y difícil y plantea retos distintos todos los días y en los más diversos escenarios. Por ejemplo, en el Congreso es preciso

trabajar sin pausa para influir en la legislación y en las orientaciones políticas nacionales, en los medios de comunicación sucede algo semejante en el proceso cotidiano de orientar la opinión pública y lo propio ocurre en la Universidad y en los ambientes intelectuales, en las asociaciones profesionales, gremiales, sindicales y campesinas.

Los sectores privilegiados y reaccionarios de nuestra sociedad no controlan a Colombia con los mecanismos simplistas de la represión, como creen algunos, sino que emplean armas mucho más sutiles y eficaces para generar un consenso que les favorezca merced a la manipulación de los múltiples intereses existentes en el Estado contemporáneo. Se requiere saber obrar en este sistema de alianzas sociales y políticas para inducir transformaciones democráticas, identificar prioridades y crear conciencia en el pueblo sobre sus derechos y deberes. Esto es lo que infortunadamente no han comprendido los que acuden a la violencia revolucionaria y con ello hacen más difícil el avance de la democracia. Las experiencias que han vivido los socialistas españoles y los sectores de izquierda en Italia, Portugal y Francia, para limitarnos a los ejemplos latinos que nos resultan más afines, demuestran que los caminos institucionales, a pesar de sus fallas, son eficaces siempre que se haga verdadera política, es decir, creativa pero a la vez con los pies sobre la tierra, sin perder de vista los factores reales de poder y con el lenguaje adecuado para interpretar a los sectores que desean vivir en una auténtica democracia. El Nuevo Liberalismo invita a los grupos alzados en armas a no precipitar una nueva escalada de la violencia y a comprender los esfuerzos que realiza el gobierno para hallar una solución política al conflicto centroamericano y para construir una verdadera democracia política en Colombia. Promover nuevos problemas de orden público significa multiplicar los riesgos para que Colombia se precipite en procesos similares a los de Centroamérica en donde se sacrificarían centenares de miles de vidas y se destruiría el derecho del pueblo colombiano a construir su propio porvenir.

Empieza el influjo de las nuevas generaciones

Los colombianos insisto, tenemos que aprender a hacer política, a utilizar la polí-

tica como la verdadera alternativa al enfrentamiento armado que es un sistema primitivo e irracional para manejar los asuntos públicos. Quien se tome el trabajo de observar el Congreso Nacional encontrará que es un error creer que los sectores progresistas están en un solo lado o que los grupos reaccionarios monopolizan las cámaras. En el oficialismo también hay núcleos dispuestos a impulsar cambios sociales y los hay sin duda en el conservatismo. Si bien no son dominantes en su propia área, su influjo puede crecer frente a proyectos concretos. Otros protagonistas extraparlamentarios de la política colombiana también pueden contribuir al proceso. Dentro de los partidos políticos conviven sectores conservadores, moderados, democráticos y progresistas. En todos se refleja, de alguna manera, el espíritu de la Nueva Colombia porque en todos está creciendo la influencia de las generaciones que formó el Frente Nacional. En el caso del partido liberal está en curso el efecto de una dialéctica interna desencadenada por los acontecimientos electorales de 1982. En cuanto al partido conservador, allí no existe una voz única, ni una concepción invariable de la política.

El criterio del Presidente Betancur de no dejarse encerrar en un gobierno de partido ni en un partido de gobierno, le ha infundido a varios sectores conservadores un espíritu distinto que sería equivocado subestimar.

Apoyo a Contadora

Para terminar estos comentarios sobre los problemas de orden público quiero referirme a dos elementos importantes de la estrategia de la paz: los factores políticos internacionales y la necesidad de la reforma política. A lo primero, el gobierno le ha dado una consideración acertada y realista con la promoción del Grupo de Contadora que corresponde a lo que Colombia debe defender y a lo que responsablemente puede intentar en un contexto político donde ya están involucrados los intereses de las grandes potencias. Esta importante iniciativa de política exterior tiene la plena solidaridad de todos los sectores representados en el Congreso; como es obvio, cuenta también con nuestro apoyo. Los frutos de Contadora han sido limitados pero su esfuerzo

es indispensable y ha creado una posibilidad para evitar el desencadenamiento de la guerra total muy cerca de nuestras fronteras.

La reforma política y la paz

En cuanto a los factores políticos nacionales que condicionan la paz, el próximo semestre será decisivo porque en él deberá definirse la suerte de los proyectos de apertura democrática, es decir, las reformas necesarias para que la democracia política avance cualitativa y cuantitativamente. Tales reformas tienen directa relación con la paz porque no se puede invitar a los grupos que buscan el cambio a que lo intenten dentro de un sistema electoral que no es completamente libre cuando está interferido por la compra de votos, por oscuras fuentes de financiación, por monopolios de toda índole en los medios de comunicación y por manipulaciones del electorado ejercidas a través de los empleos públicos y los recursos del presupuesto. Ofrecer la amnistía pero no hacer la reforma política, sería llevar a los grupos democráticos a una trampa y dejar el programa de la paz a mitad de camino. Equivale a invitarlos a participar en un juego cuyo ganador está preestablecido.

Entre los objetivos iniciales del Nuevo Liberalismo siempre ha estado poder probar que, a pesar de todos los obstáculos y desigualdades de la competencia electoral, sí es posible romper la hegemonía de los grupos tradicionales y conseguir la movilización de franjas abstencionistas. Así quedó demostrado en las elecciones de 1982 y se confirmará en el año próximo. Con ello esperamos contribuir a que se motiven los sectores políticos marginados para luchar por el voto popular y tener confianza en el apoyo del pueblo. Lo mismo hemos buscado con la intensa gestión cumplida en las Cámaras para conseguir el renacimiento y la renovación del Congreso. Creemos, sin vanagloria, que si hoy califica la Nación las labores del Senado y la Cámara en forma distinta de como lo hacía hace un año, ello es fruto, en buena parte, de la presencia del Nuevo Liberalismo y de lo que propusimos en los acuerdos del Club de Ejecutivos, así como de las tareas realizadas en las sesiones especiales y en las extraordinarias de 1983. El pueblo nos eligió el año pa-

sado entre otros motivos, para devolverle la credibilidad al Congreso. Si el Senado y la Cámara cumplen sus funciones habrá menos colombianos tentados a cambiar la sociedad por medio de la violencia y habrá más sectores de opinión interesados en participar en las labores y decisiones del Congreso. En otras palabras, si las Cámaras funcionan bien, habrá mayores oportunidades para la paz.

Los cuatro escenarios de la crisis económica

¿Cuál es el panorama de la economía nacional y qué ha sucedido en este campo donde se define la parte más sustantiva del porvenir de los colombianos? La crisis económica —como se dijo desde noviembre— es el problema más difícil y peligroso que tiene la Nación. Lo grave en este semestre no ha sido tan solo el retraso en la aplicación de la política económica, por haber utilizado el gobierno, en forma equivocada, el artículo 122, sino la explosiva acumulación de cuatro problemas igualmente serios: la profunda crisis fiscal, el receso de los sectores productivos, la inflación estimulada en este semestre por la escasez de alimentos y el vuelco que se ha presentado en el sector externo por culpa de la crisis económica mundial. Como si fuera poco, en febrero y marzo se agregaron a estos problemas el terremoto del Cauca y la devaluación masiva de las monedas fronterizas, lo cual da una idea de las dificultades del primer semestre, sin duda alguna las peores que ha vivido el país en muchos años.

El cuadro de las crisis no puede ser más amenazante. Estamos ante la más delicada situación fiscal que recuerden las últimas generaciones por el doble efecto del déficit de tesorería y el déficit de apropiaciones. Las reservas internacionales tienen ahora una perspectiva diferente de la que hubo en la última década y para defenderlas se ha vuelto indispensable aplicar una nueva política de comercio exterior. El sistema económico no logra absorber la creciente demanda de trabajo y el desempleo registra niveles agudos en las principales ciudades. Lo peor no es la declinación del producto interno bruto sino la agudización de antiguos desequilibrios entre el sector financiero y los sectores productivos. No se puede decir que toda la cuestión

económica se reduzca a superar la inflación y la recesión según lo que ocurra en cada ciclo. Esto de suyo es gravísimo y difícil, pero lo más preocupante es ver que la crisis afecta también las zonas y los sectores que presentaban hace poco tiempo mayor desarrollo.

El Nuevo Liberalismo considera que se necesita una política económica distinta de la tradicional, como lo expresé en el debate respectivo hace pocas semanas en el Senado. No nos referimos simplemente a la política económica que está diseñando el actual gobierno, sino a los conceptos que prevalecieron durante la última década. Una política económica que se ocupe no sólo de la cantidad del desarrollo sino de la calidad y las finalidades del mismo y que, por lo tanto, busque una justa distribución del ingreso y también tenga objetivos definidos sobre la forma y la calidad de los consumos y por lo tanto sobre el proceso de acumulación de capital.

Durante estos años el país ha conocido muchos documentos interesantes de los analistas económicos y de los funcionarios sobre índices abstractos, pero muy poco, o casi nada, sobre el problema de los valores, de los fines, de los objetivos de la acumulación o del esfuerzo estatal para impulsar una estructura económica hacia esos objetivos. Necesitamos definir cuál es la Colombia que vamos a construir: ¿una nación irremediablemente desequilibrada entre las diversas regiones? ¿Un país en donde la propiedad de los factores productivos y por lo tanto del ingreso estarán indefinidamente concentrados? ¿Un país condenado al monocultivo y a la monoexportación? ¿Un país que improvisa todos los años su desarrollo industrial y que se resigna a conformar una industria débil y dispersa? ¿Un país que vive a la espera de ganancias especulativas por las distintas bonanzas? ¿Un país sin política agropecuaria y por lo mismo sin soberanía alimentaria? ¿O tomamos la decisión de generar un proceso de crecimiento civil y de transformación económica y social, dirigido democráticamente?

Austeridad y nueva política económica

Si queremos salir de la crisis y poner a salvo las instituciones políticas, es necesari-

rio que todos los sectores públicos y privados nos comprometamos a realizar una política de austeridad que condene, sin contemplaciones, los privilegios, los lujos y el despilfarro. Por eso hemos insistido desde el año pasado y durante este complejo semestre de emergencia económica, en la necesidad de definir un verdadero plan de desarrollo que señale las prioridades en la aplicación de los recursos disponibles y le dé rumbo austero a la economía. Lo esencial, ahora, es la austeridad del Estado en todos los niveles y la austeridad del sector privado. Austeridad, sobre todo, en las clases más pudientes. Admitir que nadie debe vivir por encima de sus posibilidades y reconocer que en una economía enferma, donde se agudizan las contradicciones sociales, es indispensable aceptar sacrificios y restricciones para superar las dificultades colectivas. Por eso señalamos desde fines del año pasado, en la antesala de la emergencia económica que la crisis no se puede superar si no hay una nueva distribución del trabajo para buscar conscientemente el pleno empleo, un equilibrio real y drástico del ingreso para compartir las limitaciones del subdesarrollo entre las distintas clases sociales y una revisión también drástica del modo de producir y de consumir para trazarnos un camino de modernización de la economía que transforme a Colombia en lo que resta del siglo.

La crisis económica no la puede manejar sólo el actual gobierno ni siquiera con la evidente popularidad que rodea hoy al señor Presidente Betancur. Se necesita buscar un clima de acuerdos, en el cual, el Jefe del Estado mantenga los derechos propios de su fuero para dirigir la administración, pero el gobierno sepa integrar al diálogo a los sectores que quieran participar en un plan de reformas políticas, sociales y económicas elaborado, discutido y aprobado con métodos y criterios semejantes a los que han utilizado el Senado y la Cámara en las sesiones del presente año. Los diálogos realizados por el Presidente Betancur con algunas directivas políticas durante las últimas semanas constituyen un paso positivo para llegar al tipo de acuerdos que requiere el país. Desde el punto de vista del Nuevo Liberalismo consideramos que han sido muy útiles para nosotros y creemos que también lo han sido para el Jefe del Estado.

En los próximos días terminarán las sesiones extraordinarias del Congreso convocadas para salvar la legislación de emergencia económica declarada inexecutable por la Corte Suprema de Justicia y para darle herramientas legales al gobierno con el fin de reconstruir a Popayán y manejar los problemas de las regiones fronterizas. En todos estos temas, así como en el de la reforma de la justicia, el Nuevo Liberalismo ha hecho aportes fundamentales para mejorar los proyectos del gobierno y ha demostrado cómo se puede trabajar en forma constructiva y eficaz. Gracias a ello el régimen tributario ha ganado cobertura y equidad por las tarifas y el sistema de presunciones. Se ha fortalecido el sistema catastral, sin caer en los reajustes automáticos indefinidos y los fiscos departamentales y municipales han enriquecido sus instrumentos para inversiones locales y regionales merced a las reformas en los impuestos de industria y comercio, cigarrillos, vinos y licores. En el problema de endeudamiento interno, el Nuevo Liberalismo, con la proposición que presentó el doctor Gabriel Rosas en la comisión tercera de las dos cámaras, logró la definición de criterios responsables para permitir el manejo de la más difícil situación fiscal que haya vivido el país dentro de límites razonables y sin desconocer las opiniones de los demás sectores políticos.

El peligro de un incremento de la inflación es evidente y por eso el Nuevo Liberalismo espera que el gobierno presente en las próximas sesiones ordinarias del Congreso las iniciativas indispensables para racionalizar el gasto público a través del plan de desarrollo y del presupuesto de 1984. El país está en emergencia y ello implica responsabilidades políticas para el Gobierno y para todos los sectores presentes en el Congreso.

Cómo manejar la emergencia

En las actuales condiciones de emergencia económica y social, agravadas por una incierta situación de orden público, es impracticable una relación dialéctica normal entre gobierno y oposición. Como lo expresamos desde noviembre, se requiere el máximo de solidaridad nacional. Por ese motivo el Nuevo Liberalismo le ha dado apoyo al actual gobierno desde su iniciación, aun cuando en

el primer año hemos preferido no estar representados en el gabinete porque hemos querido respetar las iniciativas del nuevo gobierno y a la vez hemos buscado la independencia necesaria para precisar si existen o no identidades o puntos de convergencia que permitan pasar del apoyo externo a la solidaridad con la administración que preside Belisario Betancur.

La emergencia es real pero no debe causar temor. Como dijera Edmund Leach no hay nada peor que seguir atemorizados por el porvenir. Si queremos que el pueblo tenga derecho de construir en plena libertad su propio futuro, es necesario que nos hagamos cargo de nuestro propio destino. No espere-mos a que el cambio se presente. Lo lógico, en esta hora de crisis, es convertir el cambio en algo que decidimos promover y realizar desde ahora y con los instrumentos a nuestro alcance.

Vivimos una época de transición

Estamos en una época de transición. ¿De qué cosa hacia qué cosa? De una democracia limitada a una democracia sin restricciones; de la política concebida por líderes notables que han ejercido una inteligente pero aristocrática dirección, a la política surgida de la participación y la movilización de amplios estratos sociales promovidos por la revolución urbana; de la concepción aislada de los asuntos nacionales a la interpretación del destino de Colombia dentro del contexto internacional; de varias décadas de estado de sitio a una sociedad que quiere ser gobernable sin acudir periódicamente al artículo 121.

El gobierno actual ha obrado hasta el momento consciente de ser el intérprete de esa época de transición. Lo ha hecho con valor y creatividad, lo que no significa que sus afirmaciones sean infalibles o que se halle totalmente libre de vicios propios del tipo de política que la Nación ha querido superar. En el Palacio de Nariño no hay criterios clientelistas, pero muchos subalternos del Jefe del Estado todavía no comprenden que la Nación quiere una nueva manera de hacer política y que la paz también depende de nuestra capacidad para interpretar ese anhelo nacional.

El hecho de analizar la emergencia, de reconocerla y proponer caminos para superarla, no debe hacernos perder de vista cuanto ha conseguido la Nación después de las elecciones del 30 de mayo. Tiene Colombia ahora un nuevo espacio político internacional. Lo ha logrado en poco tiempo y debe consolidarlo sin dejarse tentar por el afán o la impaciencia. Existe un clima nuevo en el sistema de instituciones. El Congreso delibera sobre los problemas públicos y cuestiona al gobierno sin caer en el enfrentamiento ciego o destructivo. El Presidente dirige la administración, sin entender los puestos públicos como simples instrumentos de manipulación electoral y respecta las actuaciones de las demás ramas del poder público. La Procuraduría investiga y denuncia sin dejarse intimidar por factores reales de poder. La Corte Suprema dicta fallos independientes. La Registraduría se ocupa con diligencia de modernizar sus equipos y procedimientos y el gobierno le facilita recursos adecuados para hacerlo. Es verdad que todavía hay deficiencias graves en el sistema de instituciones pero sería injusto negar el progreso obtenido. Todo esto es el fruto del proceso electoral del año pasado, del espíritu democrático que ha inspirado al gobierno, de los acuerdos del Club de Ejecutivos y del respeto existente entre los grupos políticos. Ahora debe empezar un nuevo capítulo para que se consolide el clima de transformación democrática y avance el desarrollo político nacional.

El Nuevo Liberalismo ha propuesto la elaboración de un plan legislativo que defina las prioridades en el examen de los problemas públicos para darle una nueva dimensión a los acuerdos del Club de Ejecutivos. En el primer año tales acuerdos buscaron superar los problemas administrativos que generaron corrupción y despilfarro en las Cámaras. Se redujo drásticamente la burocracia en el Senado y en la Cámara; volvió a tener el Congreso una ejecución presupuestal seria y sana.

Ahora los acuerdos entre los tres sectores presentes en el Congreso deben orientarse hacia la organización de los procedimientos legislativos para asegurar el mejor resultado de las sesiones ordinarias de 1983 y ojalá de 1984. Un plan legislativo que garantice la discusión y aprobación del plan de desarro-

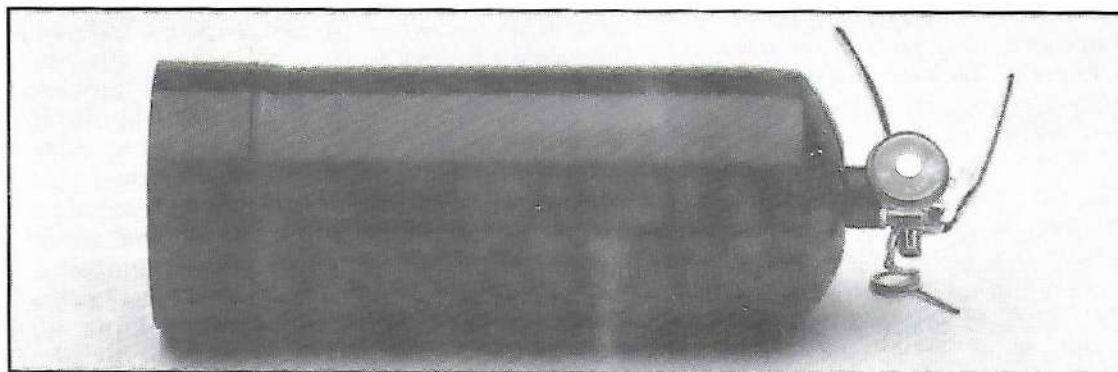
llo; la reforma financiera para consolidar la tarea difícil pero eficaz que ha cumplido Germán Botero de los Ríos al frente de la Superintendencia Bancaria; el examen detallado y consciente del presupuesto nacional; la carrera administrativa; la reforma electoral; el derecho de información; el financiamiento transparente de los partidos políticos; la transformación del régimen municipal y departamental; la supervisión y modernización de los servicios públicos; el estatuto de la televisión; la organización administrativa del sector educativo; la intervención del Estado para garantizar el buen uso de la tierra urbana y rural; la reorganización del sistema de seguridad social; la revitalización del IFI; la reforma del régimen de comercio exterior, en fin, todos los temas decisivos para el país acerca de los cuales la Nación espera definiciones por parte del gobierno y el Congreso.

En el campo liberal continúa el proceso de asimilación de lo sucedido en 1981 y 1982. Ya nadie niega que el partido vivía una crisis muy profunda y que para superarla no había otro camino que hacerle frente sin rodeos a cuanto estaba causando el degeneramiento de la principal fuerza democrática colombiana. Los miembros del Nuevo Liberalismo hemos demostrado en el último semestre que no tiene sentido hacer más profunda la división liberal pero que tampoco sería lógico abandonar un esfuerzo renovador que ha sido ampliamente apoyado por el pueblo. Avanzamos hacia la unión transformadora del liberalismo, es decir, la que a nosotros interesa. Esa transformación no se produce en pocos meses. Está en curso y suscita reflexiones y cambios de estilo en todas partes. Ya no se reúnen los líderes políticos tan solo para hacer cuentas sobre las proporciones burocráticas que controlan. Están dispuestos a discutir los problemas nacionales e internacionales y a participar en una batalla de opinión sin la cual carecería de justificación la existencia misma del partido liberal. Después de 16 asambleas departamentales y de numerosos foros en diversas provincias, he podido palpar en todas partes el fortalecimiento del Nuevo Liberalismo. Hemos mejorado substancialmente nuestra organización. Las bases del movimiento han participado en el relevo o la consolidación de las directivas regionales. Cerca de 80 concejales elegidos en otros sectores se han sumado a nuestra causa y las puertas están abiertas para quienes vengan de buena fe a

respaldar la fuerza política que está construyendo el futuro de la democracia colombiana. Dentro de dos meses terminará el proceso de reorganización interna y estaremos listos para someter al pueblo nuestras tesis sobre la democracia local y regional en las elecciones de 1984.

Gracias a los parlamentarios, a los diputados, a los concejales y a decenas de miles de activistas, el Nuevo Liberalismo es una verdadera fuerza política nacional. Acabamos de

cumplir apenas dos años desde el día en que fue presentado el documento número 1: "Un Nuevo Liberalismo para una Colombia nueva" cuando empezamos a trabajar en todo el territorio nacional. Tenemos en tan corto plazo muchos motivos de satisfacción porque nuestras ideas han influido en la transformación política que vive el país. Prosigue la lucha. Sabemos que nos esperan múltiples retos y sacrificios pero con ustedes, con su lealtad y su confianza y con las personas que ustedes representan en todo el país, estamos listos para una y mil batallas.



**EN CASO DE INCENDIO
NO APAGAMOS. PAGAMOS.
QUE ES CASI LO MISMO.**

Para evitar un riesgo, nada mejor que prevenirlo. Hoy, debido a las nuevas medidas de apertura, la empresa privada también puede empezar a contratar sus seguros con La Previsora. Hoy La Previsora está prera-
da para responder a este nuevo momento, con un alto nivel de competitividad en cada una de



sus actividades y servicios. Si usted o su empresa tienen un interés concreto en materia de seguros, consulte con su corredor de seguros o agencia de seguros. Pregunte por nuestros planes y nuestros productos. Durante 36 años La Previsora ha venido asegurando debidamente los bienes del Estado.



LA PREVISORA S.A.
UNA DE LAS MEJORES COMPAÑIAS DE SEGUROS

La democracia local

**Intervención de Luis Carlos Galán en la
Quinta Convocatoria Nacional del Nuevo
Liberalismo el 2 de diciembre de
1983 en el Hotel Tequendama.**

Vive Colombia una de las más complejas crisis de su historia. La Nación respeta al Jefe del Estado y confía en que obra con honestidad y patriotismo, todos los sectores le expresan solidaridad frente a las pruebas a que ha sido sometido su gobierno y nadie pone en duda su consagración y sus rectas intenciones, sin embargo, en muy corto tiempo los problemas nacionales se multiplican, el Estado parece impotente para resolverlos; los partidos no logran comunicarse con la sociedad que deben interpretar y en el mundo aumenta la incertidumbre ante el porvenir. Reaparecen las tentaciones terroristas entre los sectores más radicales y mientras la política exterior genera un nuevo panorama internacional para intentar la paz, el número de compatriotas muertos se duplica en las zonas más afectadas por la violencia. Todos estos hechos confirman el diagnóstico que dio origen a nuestra lucha política. Vivimos la crisis propia de la agonía de una época histórica cuyas causas no son recientes sino que se remontan varios años atrás. Esta es una hora importante para la nación y su análisis sólo puede hacerse con la mayor objetividad y el ánimo de interpretar y servir los más altos intereses del pueblo colombiano.

¿Cuáles pueden ser las prioridades de una acción política que permita abrir caminos y crear alternativas frente a esta encrucijada colectiva? Nadie puede esperar razonablemente la solución de los principales problemas nacionales y la iniciación de una nueva época en la vida de la República mientras el partido liberal no supere su propia crisis en la cual se halla desde hace cerca de diez años. Al señalar la importancia de esta cuestión no se trata de reducir los problemas del pueblo colombiano a las dificultades del partido liberal sino de comprender que la desorganización de la fuerza política mayoritaria de un país, impide obrar al sistema democrático y crea situaciones artificiales y por lo mismo inestables.

La crisis de un partido minoritario es un sistema bipartidista tiene implicaciones diferentes a las que se presentan cuando la crisis afecta a la fuerza política más numerosa de la sociedad. En el primer caso puede haber perturbaciones pero siempre está abierto el camino del relevo de líderes y el cambio de orientaciones como lo demostró el partido conservador con su experiencia de 1982. En el segundo caso, cuando las mayorías se desintegran, no hay tan sólo perturbaciones sino que la política se paraliza y los relevos, si son parciales, resultan más difíciles de realizar porque los antiguos protagonistas conservan en su poder instrumentos para demorar los procesos

de cambio y condicionar su retiro a que se le imparta plena absolución por sus acciones y omisiones.

Antecedentes de la crisis liberal

Diez años de crisis liberal determinaron no sólo que el liberalismo perdiera la dirección del Estado sino que resultara amenazada la supervivencia del propio partido. La crisis liberal comenzó el día en que dos jefes minoritarios, cuyas trayectorias políticas eran diferentes tanto en ideales como en procedimientos, realizaron un pacto para controlar el partido y alternarse en la Presidencia de la República. Su alianza como se demostró con el paso de los años, no se inspiró en filosofía alguna, ni en un proyecto político que implicara darle al partido liberal el rumbo que necesitaba después de 16 años de Frente Nacional. Fue una simple operación comercial que contrastaba con el tipo de controversias que el liberalismo vivió en las elecciones de 1972 cuando se enfrentaron sectores motivados por criterios ideológicos con una zona del partido desde entonces encerrada en el usufructo del poder mecánico y las gratificaciones burocráticas. El liberalismo creyó en 1974 que podía recuperar el hilo de las grandes reformas y votó caudalosamente por esa esperanza. Cuatro años después tan sólo se mantuvo en la Presidencia por el recuerdo de la noche amarga de la violencia, pero su victoria fue precaria. A pesar de ese penoso resultado y la derrota en Bogotá en 1978 no hubo la conciencia necesaria para cambiar el rumbo del partido. En 1982 la propuesta oficial del liberalismo fue prolongar protagonistas y criterios porque se creía que la maquinaria era omnipotente y se llegó a tales extremos que el Ministro de Gobierno de la época anunció desde los canales de televisión que el Presidente en ejercicio se presentaría como candidato oficialista en 1986.

El acuerdo de 1973 les permitió a los aliados satisfacer sus aspiraciones en 1974 y 1978 pero tuvo un costo muy alto para el partido liberal porque lo convirtió en una maquinaria cuya fuerza no residía en su capacidad de interpretación de las aspiraciones y las necesidades sociales sino en el control del aparato burocrático del Estado. No hubo en la clase política capacidad de reflexión sobre las consecuencias de ese pacto que cambió la historia

de un partido acostumbrado a obrar en función de los más altos ideales democráticos. Algunos creyeron que el talento de uno de los socios de la alianza prevalecería sobre la capacidad de maniobra del otro. Fue una ingenua ilusión porque el balance de diez años indica que se anularon recíprocamente y ambos perdieron su oportunidad histórica así se hayan reunidos esta mañana en un Congreso Ideológico donde las ponencias de sus propios allegados les demostrarán que el catálogo de aspiraciones liberales es también una lista de las cosas que dejaron de hacer en sus respectivos mandatos presidenciales. En 1976 y en 1978 se intentó recuperar el camino con la democratización liberal pero la lucha fue desigual y no se dieron las circunstancias para rescatar el partido del proceso que lo conducía hacia el abismo. Hubo dos gobiernos en los cuales careció de toda significación la mayoría liberal en las cámaras y el supuesto liderazgo presidencial no se tradujo en obras que fortalecieron el patrimonio histórico del liberalismo con reformas sociales importantes. El partido liberal obró en el gobierno durante los últimos años como si fuese impotente para abrirle caminos a la democracia. Al identificarse con los sectores más reaccionarios del conservatismo que compartieron la administración abandonó a los campesinos que quieren tierra y que piden una oportunidad para transformar su existencia. A cambio de esto no consiguió siquiera que los grandes propietarios invirtieran en el sector agropecuario y a los que lo hicieron los abandonó también como lo saben los algodoneros. No tuvo decisión para modernizar el régimen laboral ni para asegurar verdadera protección a miles de trabajadores para los cuales no existe código alguno. Se olvidó de la carrera administrativa. Permitió que continuara la especulación con la tierra urbana y toleró el desquiciamiento del sistema tributario con los ojos abiertos sobre la crisis fiscal que se avecinaba y cuyo desencadenamiento apenas ha comenzado. Entregó la educación a los criterios menos dispuestos a facilitar la modernización y la democratización del sistema educativo. Aplicó políticas económicas improvisadas y en las que el Estado renunció a su derecho a intervenir mientras permitía el festín de los especuladores del sector financiero y el aumento inmoderado del costo del dinero. Renegó del compromiso adquirido con las reformas constitucionales de 1936 y de 1968 para construir un Estado moderno que se dedicara a transformar la organización social. Es verdad que la Constitu-

ción le impuso al liberalismo gobernar dentro del marco del compromiso con el partido conservador, sin embargo en ningún momento hubo la menor contradicción y todo indica que las obligaciones del parágrafo del artículo 120 sirvieron de disculpa para seguir una línea conformista, complaciente con los grupos más poderosos sin ánimo alguno de utilizar el poder de intervención estatal en defensa de los sectores sociales que confiaron en la voluntad transformadora del partido liberal.

Mientras ocurrían todas estas cosas, las generaciones formadas durante el Frente Nacional empezamos a preguntarnos cuál era nuestra responsabilidad y si podíamos comprometer la vida con partidos burocratizados, improvisadores y clientelistas cuando varios de nuestros contemporáneos no temían entregar la suya por el ideal de una sociedad justa así lo hicieran en una lucha utópica y suicida. Izamos la bandera de la renovación en las elecciones de 1980 con apoyo sincero de Santander y Bogotá y con la simpatía de amigos del Valle y Huila. En el proceso escuchamos con respeto a los ex presidentes liberales, apoyamos su elección como directores del partido en la Convención Nacional de diciembre de 1980, la última que reunió a todos los sectores del liberalismo y luego, cuando vimos que los dos ex presidentes más importantes se marginaban porque querían condenar la prolongación de los pactos simoníacos y veían frustrada la misión renovadora que el partido les encomendó resolvimos asumir plenamente nuestra responsabilidad.

El nuevo partido liberal

¿Cuál es esta responsabilidad? Hemos resuelto construir el Nuevo Liberalismo, es decir, el nuevo partido liberal. Entendemos que esta tarea es la condición indispensable para realizar nuestra meta final que consiste en renovar la democracia. Nunca hemos limitado nuestra labor a plantear una candidatura presidencial ni a formar un grupo que negocie fracciones de poder. La candidatura fue necesaria para romper radicalmente con la estructura política que consideramos agotada, pero nuestra misión es más trascendental. Queremos cambiar la sociedad colombiana para llegar a una verdadera democracia. Este objetivo no lo pueden alcanzar los partidos políticos en las condiciones actuales. Tampoco

figura entre sus preocupaciones fundamentales porque lo que predomina es el afán de conservar el establecimiento que favorece a los grupos políticos tradicionales. No se ha querido reconocer el clamor de las clases populares y sobre todo no se ha comprendido que la clase media se multiplicó y se transformó en tal forma durante los últimos 25 años que buena parte de los grupos que pertenecen a la compleja estratificación urbana no aceptan ya una democracia aparente en la cual el poder del Estado sigue sometido a las conveniencias de los sectores privilegiados.

Para llegar a la democracia le espera a la Nación un camino prolongado y difícil. Todavía no tenemos un sistema de instituciones que garantice la democracia y proteja la libertad política de los colombianos. El actual gobierno que prometió en sus primeros meses revisar las instituciones para conseguir una competencia política imparcial entre los distintos sectores y ofrecerles a los grupos subversivos una oportunidad de desarrollo y crecimiento, dentro de la Constitución, cambió el rumbo en el segundo año y limitó sus esfuerzos a proyectos secundarios y poco significativos. No está claro aún si se sintió sin respaldo político para perseverar en sus esfuerzos o si se trataba tan sólo de promesas efímeras.

Las instituciones democráticas no son tanto las normas que formalmente definen competencias y equilibrios de poder sino el reflejo de convicciones colectivas, el trasunto de una conciencia social. La democracia restringida no es democracia. La democracia que tolera la compraventa de votos es una farsa. La democracia que acepta privilegios informativos en los canales del Estado es mentirosa. Ni la mayor parte del conservatismo ni algunos sectores oficialistas del liberalismo están dispuestos a una competencia libre y abierta entre todas las corrientes de opinión. Tienen poder para impedirlo y para dilatar cualquier cambio. Su actitud genera violencia. Su egoísmo impide el acceso a la política de sectores que necesitan defender sus intereses y derechos en contradicción con los grupos privilegiados porque la concentración del poder político es la otra cara de la concentración del poder económico y social.

Los protagonistas del cambio

El partido liberal necesita el examen franco y claro de lo que se hizo y lo que no se hizo en su nombre en el gobierno. Esa reflexión es indispensable para que el pueblo pueda atenerse a lo que ocurrirá cuando el liberalismo torne a la dirección del Estado. Quienes no pudieron ejercer el poder en función de los ideales democráticos del liberalismo, así hubieran sido elegidos en su nombre no pueden pretender dirigir la vida futura del partido liberal y menos la etapa de transformación que ya empezó a vivir el liberalismo. Tampoco cabe esperar que se retiren voluntariamente. No lo harán mientras puedan influir en forma directa o indirecta en la vida del partido y mientras la dirección del liberalismo no tenga responsables plenamente definidos. Quienes a pesar de tener el control de la radio y la televisión, dinero, monopolios burocráticos y todo el influjo del poder presidencial dejaron precipitar al partido liberal en una de sus más difíciles crisis, no son, no pueden ser los mismos que ahora sin futuro, sin prestigio, sin energías y sin ideales, logren realizar la misión de llevarlo nuevamente a la jefatura del Estado. Sólo el pueblo puede decidir la futura autoridad en el liberalismo, pero se necesita una decisión libre para que su pronunciamiento despeje toda incertidumbre. No es libre esa decisión si tiene lugar como simple reflejo de instrumentos burocráticos manipulados todavía a pesar de la prometida imparcialidad gubernamental.

Las elecciones de 1984

Las elecciones del año próximo serán en cualquier caso muy significativas en la política liberal y pueden ser decisivas si así lo quiere el pueblo. En principio su propósito fundamental de renovar asambleas y concejos les determina un marco específico, pero, de todas maneras permitirán establecer cuánto ha progresado nuestra labor renovadora y qué reflexiones se ha hecho el liberalismo sobre las causas, las características y la solución de sus crisis.

Lo que sigue ahora en el liberalismo es su reorganización, quienes la hemos proclamado desde hace varios años y quienes asumimos la misión de sacudir al partido para rescatarlo

de la pereza, el oportunismo, la cobardía, las ambigüedades y el espíritu palaciego no vamos a frustrar la esperanza que se ha creado el pueblo de volver a tener un partido liberal a su servicio que hable en su nombre y le asegure un camino de ascenso hacia la democratización real de la sociedad. Ya hemos demostrado que no somos una fuerza transitoria organizada para una coyuntura sino los promotores de un proceso histórico. Nuestra decisión es perseverar e insistir hasta alcanzar la meta con dignidad y honradez. Una directiva liberal surgida en medio de transacciones sobre mezquinos intereses y problemas de simple supervivencia no puede rescatar al liberalismo. En una dirección de esta clase no estaremos quienes creemos en los ideales que todos los asistentes a esta reunión compartimos. Sólo una dirección emanada de la voluntad del pueblo, sin intermediarios y sin condicionamientos puede reconstruir el camino del liberalismo y darle unidad verdadera. Lo demás no será otra cosa que espejismos o declaraciones convencionales para halagar a todos los sectores cuando se necesita iniciar otra época y esto no se hace sin rupturas así sean difíciles o dolorosas. Ante los problemas actuales de Colombia no hay transacción posible. O el liberalismo lucha abierta y sinceramente por la democratización de la sociedad o perece porque carecerá de sentido su existencia. El nuevo partido liberal que reemplazará al de estos diez años de crisis sólo puede concebirse con ese criterio, de lo contrario, otras fuerzas interpretarán esta necesidad histórica de nuestro tiempo.

Desde hace muchos años la literatura política colombiana recoge documentos en los cuales se dice que se necesita reorganizar al liberalismo para modernizar sus estructuras y dotarlo de instituciones amplias y funcionales que permitan la participación ciudadana. Todos los sectores y jefes liberales han escrito esos documentos en el último cuarto de siglo y seguramente mañana el Congreso Ideológico expedirá la centésima declaración con el mismo párrafo que proclama lo que se debe hacer en este sentido y lo que siempre se ha quedado escrito. Es posible que la crisis actual y el tipo de reflexiones que se hacen los parlamentarios liberales sobre la necesidad de iniciar una nueva época le otorguen mayor sinceridad a esos párrafos; sin embargo, ya no cabe hacer más declaraciones sino proceder a la reorganización. El Nuevo Liberalismo anunció hace un año que viviría su propia reorganiza-

ción. Durante 1983 se han dado pasos fundamentales en ese sentido, todavía no hemos completado nuestra labor ni podemos declararnos satisfechos. Todos los departamentos y territorios nacionales han realizado asambleas para elegir directivas y en Bogotá el proceso de democratización no tiene antecedente comparable pues se hicieron 300 asambleas en los distintos sectores de la ciudad para escoger los delegados a la gran Asamblea Distrital de junio. Después de las elecciones de 1984 realizaremos la Asamblea Nacional del Nuevo Liberalismo con delegados escogidos por los departamentos y territorios en proporción a la fuerza electoral de cada una de las entidades territoriales. En esa forma, todas las regiones habrán contado por lo menos con treinta meses de acción proselitista desde cuando el Nuevo Liberalismo inició actividades a escala nacional.

La democracia comienza en los municipios

Nuestra responsabilidad inmediata es ofrecerles a todos los municipios y departamentos de Colombia la posibilidad de renovar los concejos y las asambleas. En esas corporaciones está el primer nivel de la vida democrática y si han perdido prestigio y poder, ello no es otra cosa que una consecuencia del debilitamiento mismo de la democracia y de la vida municipal por culpa de la concentración de recursos y atribuciones en los poderes centrales. Durante todo el año hemos trabajado en forma atenta por hacer un diagnóstico de la democracia local sin la cual no existirá democracia nacional. En Manizales, gracias a la hospitalidad y la colaboración de nuestros compañeros del Nuevo Liberalismo de Caldas, se hizo un fecundo congreso nacional que definió los criterios de nuestro sector político en cuanto a la necesidad de rescatar a los municipios de su atraso y dependencia. Buena parte de estas ideas fueron recogidas en la ponencia que presenté a la Comisión III del Senado esta semana sobre la reforma del régimen de participación de los municipios en el impuesto nacional a las ventas. Se trata de un programa completo de redistribución de funciones y recursos entre la nación y los municipios para asegurar inversiones estatales en zonas campesinas, mejorar la infraestructura física y social de los municipios, estimular las asociaciones de municipios, proteger a los jubilados en los departamentos y territorios na-

cionales, capacitar a los funcionarios y modernizar las administraciones locales. El proyecto se inspira en la filosofía que trazó la reforma constitucional de 1968 y cuyo desarrollo legal ha sido aplazado durante los últimos tres lustros. Se trata del más concreto proyecto de descentralización administrativa que haya examinado el Congreso. La Comisión III del Senado lo aprobó por unanimidad y debo señalar con toda justicia la valiosa colaboración de los Senadores miembros de esa comisión y en especial de los doctores Ignacio Vélez Escobar, en nombre del partido conservador, y de los liberales Jaime Castro y Víctor Renán Barco quienes aportaron observaciones que enriquecieron los alcances del proyecto y de la ponencia.

El Nuevo Liberalismo debe ingresar masivamente a los concejos del país. Hace un año nuestra organización presentó listas en 220 municipios con buen resultado en 175. En 1984, presentaremos al pueblo la opción de cambiar sus concejos por lo menos en 600 municipios y vamos a multiplicar nuestra fuerza allí donde logramos colocar cabezas de puente el año pasado. En todas las regiones de Colombia es preciso crear conciencia sobre la importancia futura de los cabildos porque es en estas corporaciones públicas donde se definirán los planes de inversión redentores de casi un millar de pueblos y aldeas. Si la nación transferirá mayores recursos, las comunidades deben estar advertidas para asegurar el uso más eficiente de esos dineros.

La educación política tiene en este caso contenidos concretos: darle al ciudadano la información adecuada para que reclame transparencia en las actividades de los cabildos; explicar a las gentes que el presupuesto local empezó a crecer en forma sustantiva y que es su derecho y su deber intervenir en el manejo de los problemas públicos que afectan en forma más directa su vida cotidiana; analizar en las aldeas y en las veredas los presupuestos locales; ayudar a la comunidad a realizar el inventario de sus necesidades y programar el desarrollo de los municipios; poner a cada colombiano frente a la realidad que vive y demostrarle que el cambio es responsabilidad de todos y que hasta el más humilde labriego en la montaña o en la selva puede participar en la lucha por transformar la sociedad. Considero, en síntesis, que crear una conciencia

analítica y crítica en todo habitante de nuestro país es la máxima tarea de un verdadero partido democrático porque sólo así el pueblo será verdaderamente libre y su participación en la gestión de los asuntos colectivos se convertirá en realidad palpable.

El liberalismo y América Latina

El nuevo partido liberal tendrá que afrontar innumerables tareas internacionales precisamente porque hemos ingresado a la época en la cual nada de lo que suceda en el mundo nos será ajeno. Lo primero, naturalmente, no es lo que se presenta en las ideologías de Europa como ha sido la tradición sino lo que ocurra en América Latina. Así como la renovación del partido liberal es condición necesaria de la renovación de la democracia, la integración de América Latina y su adecuada interpretación política es el requisito indispensable para que nuestra nación sea protagonista de la historia. Continuaremos nuestra labor para multiplicar la comunicación con los partidos democráticos de Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, Nicaragua, Argentina, Uruguay y, en fin, todos los partidos con los cuales hemos tenido contacto en los últimos dos años y buscaremos además especiales relaciones con quienes han protagonizado la fecunda e inteligente transición de España hacia la democracia. Si se necesita reconstruir el sistema interamericano como ya lo señalan sectores liberales y conservadores, el primer paso debe ser examinar el nuevo papel de América Latina en ese sistema sin aislarnos ni depender de los Estados Unidos pero conscientes de la presencia del Canadá y de los nuevos países del Caribe en el escenario americano. En la búsqueda de nuevos horizontes internacionales considero oportuno insistir en lo que señalé hace un año y medio al llamar la atención sobre el Pacífico y las relaciones con el Japón y los países del Lejano Oriente donde ya se están preparando las condiciones para un papel sobresaliente en el siglo XXI. La dinámica mundial continuará cambiando los equilibrios internacionales y en ese proceso América Latina no puede seguir perdiendo terreno.

El reto de saber administrar

Un punto fundamental en la construcción del nuevo partido liberal es la definición de sistemas de acceso a la dirigencia que permitan la formación de líderes, la división del trabajo político y la preparación de equipos calificados para el manejo de la administración pública que es el sitio donde está la verdad

del Estado. Si bien se necesita y se apoya la intervención del Estado moderno para dirigir la economía y dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales como lo señala la Constitución, es preciso advertir que un Estado omnipotente con un aparato administrativo centralizado, ineficiente, clientelista e improvisador se puede convertir en factor opresivo para la libertad de los individuos y en lastre para la modernización de la economía y la sociedad. Un partido democrático que cumpla la función de mandatario de la sociedad respecto de las instituciones tiene que ser celoso en la vigilancia del aparato administrativo estatal para evitar abusos, despilfarros y corruptelas como los que proliferaron en los últimos años y ello depende en buena parte de un completo inventario de los recursos humanos del partido que permita llevar al sitio correcto a la persona correcta.

La financiación de las campañas

Sería incompleta cualquier reorganización del partido liberal mientras no se definan y respeten los criterios de la financiación de las campañas políticas para que los recursos invertidos en ellas tengan origen y destino transparente. Desde su nacimiento, el Nuevo Liberalismo ha consignado sus recursos económicos en una Fundación que presentó declaración de renta sobre los años gravables de 1980, 1981 y 1982, de conformidad con las normas vigentes sobre instituciones sin ánimo de lucro. Ninguna donación implicó para nuestro movimiento compromiso distinto de la defensa de las banderas y los ideales que sometimos a la consideración del pueblo. Fuimos la única organización política que desautorizó en 1982 listas que pudieran incluir personas que no estaban en capacidad de explicar el origen de sus cuantiosas fortunas. Dentro de la información a nuestro alcance sobre la conducta de los donantes, adoptamos como norma no recibir aportes de nadie que tuviera problemas con la justicia o comportamiento indebido. Se respetó también el principio de no aceptar donaciones que representarían más del cinco por ciento de los gastos totales previstos para defender en cualquier caso el pluralismo de las fuentes financieras y el origen democrático de nuestros recursos. Hemos condenado y condenaremos la compra de votos y el uso de dineros públicos y recursos oficiales en las campañas políticas. Sin presumir de moralistas ni caer en mojigaterías pensamos que esta cuestión del financiamiento de las campañas electorales es otro de los puntos esenciales de la renovación del libera-

lismo y de la democracia.

La posición frente al gobierno

A medida que pasan los meses la nación ha comprendido mejor las virtudes, los defectos, las posibilidades y las limitaciones del movimiento nacional que alcanzó la Presidencia en el año anterior. Si bien el Presidente Betancur no se ha dejado aprisionar dentro de su partido, el Movimiento Nacional se tradujo en un gobierno de inspiración conservadora que preside un gobernante con sensibilidad social, despojado de todo sectarismo y en cuya administración las diversas tendencias liberales están presentes sin canales definidos de diálogo sobre las determinaciones del gobierno y el manejo de los problemas fundamentales. Hubo unas mayorías coyunturales para elegir al Presidente, pero no hubo la coherencia política de proponer desde las elecciones parlamentarias un movimiento nacional que sustentara en el Congreso las iniciativas presidenciales. Esto ha perjudicado la colaboración armónica entre las ramas del poder público porque el Gobierno no ha construido una base sólida en el Congreso. El si Gobierno anterior gozaba de omnipotencia política en las Cámaras y carecía de imagen ante la opinión pública, el actual posee buena imagen pero no cuenta con un apoyo político y consistente en el Congreso. Es el precio de la estrategia del Movimiento Nacional y el costo de haberle prometido al país un cambio el 30 de mayo sin haber intentado renovación alguna en las Cámaras en las elecciones del 14 de marzo.

A pesar del ambiguo balance de estos meses y de la venia inútil y contraproducente que el presidente Betancur le hizo al oficialismo sin conquistar su gratitud, seguimos en la línea trazada desde hace un año: la situación nacional no permite malgastar energías en hacerle oposición al gobierno. No nos debe nada el señor Presidente por el respaldo que le dimos a los proyectos del Gobierno en las sesiones extraordinarias y nada nos deberá cuando apoyemos iniciativas que consideremos convenientes para la Nación. Compartimos su interés en que nuestro sector político examine los actos gubernamentales sin sentirse obligado a ser solidario con decisiones que casi siempre conocemos cuando ya han sido adoptadas y aparecen en los medios de comunicación. Pensamos que tenemos derecho a que compañeros nuestros actúen en la administración en cargos de distinto nivel. En aquéllos que implican responsabilidades políticas nuestros compañeros tienen nuestro respaldo y con-

fianza. Estoy seguro que en cualquier hipótesis ellos cumplirán sus deberes con la organización política que ayudaron a construir y en cuyo nombre están en el gobierno.

Esta Convocatoria Nacional ha coincidido con un hecho político de especial significado. Me refiero a la decisión del Senador Jorge Valencia Jaramillo de adherir a la causa del Nuevo Liberalismo. El Senador Valencia Jaramillo es uno de los más sobresalientes miembros del Congreso y como Ministro y alto funcionario realizó gestiones nacionales e internacionales de indudable trascendencia, así como su Alcaldía de Medellín dejó una huella positiva en los sectores populares por la importancia de sus obras e iniciativas. Tiene una hoja de vida limpia que puede ser sometida al escrutinio de quienes ahora se han convertido en sus detractores para tratar de descalificarlo innoblemente. Su ingreso al Nuevo Liberalismo ha sido una decisión libre y ha tenido lugar después de un diálogo franco, objetivo y directo con los directivos de nuestra organización en Antioquia, de manera que hubiese absoluta claridad sobre la naturaleza de los objetivos y responsabilidades de quienes nos hemos comprometido con el Nuevo Liberalismo. Quiero saludar esta noche su ingreso a nuestra organización donde su concurso será de inmensa importancia y deseo, al mismo tiempo, señalar su caso como un ejemplo para otros miembros del Congreso y otros dirigentes liberales que nos merecen respeto y consideración así no hayamos coincidido en los procesos anteriores. Los invito a vincularse a nuestra lucha para transformar la democracia en Colombia e interpretar los anhelos de la mayoría del pueblo. Sé que en todas las regiones, el liberalismo vive un proceso de reflexión sobre el camino que debe seguirse ahora. Los invito a participar en esta noble batalla por el porvenir de Colombia. Aquí está el nuevo partido liberal. Surge con la confianza de dirigentes que han servido a la Nación con ideales liberales durante muchas décadas. Vamos a triunfar, somos el futuro y la posibilidad concreta de la renovación de la sociedad colombiana. Nos inspiramos en la trayectoria histórica del liberalismo pero comprendemos que las circunstancias nos han impuesto la responsabilidad de dar un testimonio creativo en nuestra propia época. A partir de la renovación del partido liberal estamos dispuestos a coordinar nuestros esfuerzos con quienes, en otros sectores y en los núcleos independientes, crean en la posibilidad y la necesidad de construir la Nueva Colombia.

No más privilegios

**Intervención de Luis Carlos Galán en la
Sexta Convocatoria Nacional del
Nuevo Liberalismo el 28 de noviembre de
1984 en el Hotel Tequendama.**

En el curso de la presente semana habrán transcurrido cinco años desde el día en que nos reunimos por primera vez en Bogotá para anunciar el propósito de abrir una casa dedicada a promover los ideales de la democracia y la libertad. Tres meses antes, el 10. de septiembre de 1979, habíamos inaugurado en Bucaramanga, con un puñado de compañeros, una casa semejante.

Durante estos cinco años, profundas y graves novedades se han presentado en la vida nacional; han sido tan numerosas que no ha resultado fácil interpretarlas ni superar el dolor, la sorpresa y las expectativas ocasionadas por los múltiples hechos de este intenso y difícil lustro de la historia colombiana. Vivimos en una sociedad estremecida por los desequilibrios entre el sistema de instituciones, el mal funcionamiento de los partidos políticos y la multiplicación de las necesidades y aspiraciones de millones de seres. Pertenecemos a una nación que todavía no se ha formado plenamente y en la que se acumuló en forma explosiva el efecto de profundos cambios sociales y económicos debidos a la urbanización, las transfor-

maciones demográficas, la modernización tecnológica y el influjo de complejas crisis internacionales. Evolucionamos hacia un código de valores culturales comunes pero aún no lo hemos consolidado ni existe un lenguaje común para identificar los intereses de las regiones, los grupos sociales y las distintas generaciones que convivimos en Colombia. Esta encrucijada ha coincidido con el narcotráfico multimillonario y el viejo pero alarmante y creciente problema del desempleo. La sucesión atropellada de estos factores de descomposición social ha creado un clima de delincuencia que se expresa en el soborno, el chantaje, la falsedad, la extorsión y el secuestro en extensas zonas del territorio.

Las instituciones políticas en Colombia no reflejan la sociedad y se muestran cada día más lentas e impotentes para organizarlas y transformarla. En los partidos predominan el cinismo y la inmovilidad, mientras se palpa la decadencia en los liderazgos y resulta evidente el retardo político nacional. Veintisiete años después del plebiscito de 1957, los colombianos tenemos fundados motivos de gratitud hacia quienes elaboraron las fórmulas políticas del Frente Nacional para buscar la paz nacional, el orden, las libertades públicas, el sistema democrático y la posibilidad de adelantar una labor constructiva en beneficio del pueblo. Sin embargo, las dos promesas funda-

mentales del Frente Nacional todavía no se han cumplido. Ni se ha restaurado la democracia sin restricciones ni se ha conseguido la radical transformación en la existencia de nuestros compatriotas más pobres y desamparados. En el proceso de este largo cuarto siglo en la vida del país poco significó que llegara a la dirección del Estado, con formidable apoyo electoral, uno de los más notorios críticos del Frente Nacional y menos ha servido la prolongación de su influencia política para trazar caminos distintos o introducir alternativas democráticas.

No se ha hecho el cambio y ante la acumulación de problemas políticos, sociales y económicos aparecen diversos síntomas de polarización de la derecha y la izquierda porque se radicalizan en un lado los defensores de los privilegios y en el otro quienes buscan la transformación violenta de la sociedad. Nosotros no podemos aceptar tales extremos. Estamos en desacuerdo con quienes le tienen miedo al cambio y con los que quieren imponer el cambio por el miedo.

Los dos temas claves para la Nación

En medio de este cuadro histórico global dos temas fundamentales han ocupado el interés de los colombianos durante el año que está a punto de terminar y serán los factores decisivos de 1985 porque en torno de los dos gira la incertidumbre nacional: el proceso de los acuerdos firmados por el Gobierno con los grupos guerrilleros y el desarrollo de la crisis económica determinada por el problema fiscal, el deterioro de las reservas internacionales y las dificultades del sistema bancario y financiero. Ni el uno ni el otro corresponden a circunstancias coyunturales. Cada uno afecta el futuro sistema de instituciones, los dos condicionan profundamente la vida de la Nación. El manejo de los dos problemas se halla bajo la responsabilidad del Presidente de la República quien tiene a su cargo tomar directamente las decisiones más importantes en relación con los dos grandes aspectos de la situación nacional o proponer al Congreso las medidas que el Jefe del Estado y sus ministros consideran necesarias para afrontar el complejo proceso en que se encuentra Colombia.

Belisario Betancur es un Presidente amable, bien intencionado y tiene su propio estilo como gobernante. Por las circunstancias de su elección como Primer Mandatario obra con mínima comunicación con los grupos políticos que no influyeron en ella pero a los cuales reconoce la representación ordenada por el parágrafo del artículo 120 de la Constitución. Para conducir la política internacional prefiere reunir una sola vez al año la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En su propio partido no existe un criterio claro de identificación con su gobierno y los sectores liberales que siguen las orientaciones de la Comisión Política Central han adoptado el papel de Caballo de Troya para actuar en su administración sin sentirse obligados a ningún tipo de solidaridad.

Nuestra presencia en el Gobierno

El Nuevo Liberalismo participa en el Gobierno con responsabilidades nacionales que sólo pueden representarle sacrificios y riesgos. Las han asumido nuestros compañeros por lealtad a los más altos intereses de la República y tienen todo nuestro apoyo. El Ministerio de Justicia, donde Rodrigo Lara Bonilla ofreció su vida para demostrar su honestidad y llamar a la Nación para hacerle frente al consumo y el tráfico de drogas, uno de los más graves flagelos de la humanidad. Con entereza y pulcritud a toda prueba, para continuar esa labor heroica y dar testimonio de sus convicciones como jurista y demócrata, Enrique Parejo González mantiene esas nobles banderas en alto, rodeado del respeto y la gratitud de todos los colombianos que comprendemos la magnitud de sus responsabilidades. En la Superintendencia Bancaria otros dos compañeros, Germán Botero y Germán Tabares han tenido a su cargo la difícil tarea de devolverle su respetabilidad al sistema bancario y financiero después del desastre causado por varios años de especulación empresarial y tolerancia cómplice del Gobierno. En el Instituto Colombiano de Comercio Exterior Nora Rey de Marulanda, después de cumplir una brillante labor en Planeación Nacional, ahora aceptó la tremenda responsabilidad de defenderle a la Nación el empleo más austero y honesto posible de las escasas divisas disponibles, consciente como nadie de los problemas que esto representa para la super-

vivencia de la industria y otros sectores vitales de la economía nacional. Nunca hemos sabido si en el alto gobierno existe conciencia sobre la forma leal y eficiente como el Nuevo Liberalismo atiende estos deberes que no le significan privilegio alguno sino el cumplimiento de responsabilidades patrióticas que nuestros compañeros atenderán siempre con fidelidad a sus principios e ideales políticos. Somos conscientes de los problemas y las fallas del Gobierno en el panorama general pero entendemos nuestra presencia en la administración como un acto de servicio a Colombia en la difícil encrucijada presente.

De la tregua a la paz

Belisario Betancur ha dedicado la mayor parte de sus energías a conseguir que los colombianos alzados en armas acepten reintegrarse a la lucha política dentro del marco de la Constitución y las leyes. Ese propósito es loable y necesario para transformar las condiciones de vida de catorce departamentos, dos intendencias y una comisaría afectados por problemas de orden público desde hace varios años. Desde 1979 propusimos buscar soluciones políticas para alcanzar la paz y a pesar de los recelos y los riesgos que este proceso implica consideramos indispensable el esfuerzo del presidente Betancur. Hemos vivido una guerra civil y en el Caquetá, el Magdalena Medio, en Arauca, en Córdoba y en el Cauca, entre otras regiones del país, hubo episodios iguales o peores a los que hoy agobian a varios países centroamericanos. Este año ha sido crucial para conseguir la disminución de los enfrentamientos armados pero ello ha hecho contraste con la proliferación de secuestros y extorsiones lo cual ha creado una situación ambigua que no permite obtener conclusiones definitivas sobre el éxito del proceso de la paz. En el Caquetá y el Putumayo las gentes agradecen lo que ha logrado el gobierno y confían en su consolidación. En el Magdalena Medio existe una nueva esperanza de paz. En Santander, el Meta, el Huila y Arauca cunde el escepticismo ante el incremento de la extorsión y el secuestro. En el norte de Nariño hay indicios sobre la aparición de un nuevo foco de problemas. El Cauca es sacudido por profundos conflictos y lo que allí suceda tendrá significado inmediato para el Valle.

La posición de Colombia en la crisis centroamericana ha influido hasta hoy en forma positiva en el proceso de orden público interno. La evolución de aquel conflicto afectará nuestra propia situación. No estamos en paz y lo que vivimos es un cese del fuego a punto de convertirse en tregua. Tenemos una oportunidad para lograr la paz y si la perdemos puede venir una terrible conflagración. Cerrar los ojos a toda posibilidad de entendimiento o desacreditar a todas horas la acción del gobierno es condenar al país a una guerra civil. Aceptar igualmente que el proceso puede evolucionar sin riesgos y trampas es facilitar otros caminos para llegar a la guerra civil. En este complejo itinerario el camino está señalado por la Constitución y por el deber de todos los sectores de construir en nuestro pueblo una conciencia clara y responsable de sus derechos y obligaciones. Los miembros del Nuevo Liberalismo somos fieles a la Constitución y estamos dedicados a la segunda tarea como única garantía real de la democracia y la libertad.

Dos años después de la ley de amnistía y de las facultades extraordinarias para realizar un plan de rehabilitación en las zonas afectadas por la violencia, el balance no es aún satisfactorio. Los recursos adicionales representan una proporción modesta del total de inversiones anunciadas para los 153 municipios del plan de rehabilitación y los tres millones de colombianos residentes en las zonas más afectadas. Hay proyectos específicos para atender viejas y numerosas necesidades fundamentales en regiones aisladas que tienen rudimentarios servicios sociales pero no existe todavía un concepto claro del desarrollo de tales regiones. El plan está concebido dentro del calendario estrecho del actual gobierno y no se ha reconocido la necesidad de prolongar acciones y proyectos con la perspectiva del decenio entero. No se puede reducir la rehabilitación a lo que se requiere para solucionar apenas los problemas de quienes se acogieron a la amnistía mientras siguen sin solución los problemas estructurales. La reforma agraria no es una simple cuestión de compraventa de predios. El plan de rehabilitación no puede quedar en manos de funcionarios de segundo nivel ni de varios institutos que actúan en forma dispersa con modestos presupuestos. Sobre todo es preciso entender que la rehabilitación no es tan sólo

una obra física sino fundamentalmente espiritual, consiste en crear una nueva actitud hacia la organización social e infundir esperanza y solidaridad en los centenares de miles de campesinos y ciudadanos que se rebelaron por la ausencia del Estado en sus regiones y la mediocridad de los servicios oficiales.

Por un cambio en las estructuras políticas

Entre las múltiples causas de la violencia la más importante es el atraso de las instituciones políticas. Los pueblos no se rebelan porque haya pobreza y dificultades sino cuando comprenden que las instituciones y el acceso al control de las mismas no sólo no permiten afrontar los problemas fundamentales de supervivencia sino que favorecen la consolidación de los privilegios. Mientras las estructuras políticas no cambien no habrá paz auténtica. Mientras las elecciones no sean verdaderamente libres y competitivas habrá sectores sociales marginados que pondrán en duda la legitimidad de las autoridades. Mientras el poder político, económico y social siga siendo un triple monopolio controlado por determinados sectores en Colombia continuarán los enfrentamientos armados, el estado de sitio inveterado y las crisis institucionales. El gobierno actual ha demostrado valor para buscar la reconciliación. El presidente Betancur ha hecho importante discursos e intervenciones públicas sobre la paz pero su administración ha perdido mucho tiempo en la concepción y el trámite de la reforma política para garantizar la democracia sin restricciones, prometida desde los primeros días del Frente Nacional. Como lo expresé hace casi dos meses en una reunión con el Jefe del Estado y los líderes del Congreso, es indispensable pensar en sesiones extraordinarias de las Cámaras para decidir la suerte de los puntos fundamentales de la reforma política de modo que en 1986 se viva la experiencia de una nueva etapa en la evolución de la democracia colombiana. Al término de la tregua se espera que las zonas afectadas por la violencia se encuentren desmilitarizadas y los grupos guerrilleros hayan abandonado las armas porque nada se habría logrado para la democracia y todo se habría perdido si se acepta la existencia de grupos políticos con derecho a portar armas y a realizar sus acciones proselitistas con la posibilidad intimidatoria de los fusiles y las ametralladoras.

La crisis económica

En el próximo año Colombia vivirá una difícil situación económica por los factores advertidos y acumulados desde hace varios años que ahora han llegado al límite para desencadenar problemas mayores. Los riesgos de inflación amenazan elevar el costo de vida en proporciones superiores a cualquier otro año en las últimas décadas y por primera vez en más de tres cuartos de siglo la Nación corre peligro de caer en la hiperinflación que ha causado tanto daño a los países del Cono Sur y hoy agobia a Israel. Las fábricas afrontan serias dificultades para sobrevivir por la reducción drástica de las importaciones. El desempleo tiende a crecer en forma explosiva. Si bien nuestro país ha sorteado la crisis económica internacional en condiciones relativamente superiores a las del resto de América Latina, la hora más difícil no nos había llegado y ahora se aproxima según lo indican el déficit fiscal y el problema cambiario. Los dos problemas no se originaron en acontecimientos recientes de la política mundial sino en manejos internos anteriores. Hubo gasto público desordenado como fruto del estilo político clientelista que reinó en el país; se disimuló el problema fiscal con empréstitos externos para atender gastos de funcionamiento y manipular las utilidades de la cuenta especial de cambios; se toleró el rezago cambiario que redujo la competitividad en los mercados internacionales de los productos colombianos. En múltiples documentos y escenarios el Nuevo Liberalismo ha denunciado estas situaciones y ha formulado recomendaciones concebidas en su oportunidad y para las circunstancias específicas de la crisis económica. Nuestro punto de vista no ha sido considerado. Este gobierno heredó una situación difícil pero se ha demorado en actuar y ha concebido soluciones incompletas porque no le ha dicho la verdad al país para evitar los debates retrospectivos en la primera etapa de la administración y, luego, para enmascarar con juicios optimistas una situación que se agrava. Al examinar los criterios del gasto público en el actual gobierno se encuentra confusión en las prioridades pues no se ha respetado el ordenamiento que el propio gobierno propuso en el plan de desarrollo. Se ha dado manejo privilegiado a sectores que no eran prioritarios según el plan y se han descuidado otros que sí eran fundamentales. Estas incoherencias le han quitado credibilidad a

la política económica y han incrementado la desconfianza de los sectores productivos sobre lo que quiere hacer el gobierno y la manera de lograrlo.

Los nuevos peligros externos

La crisis económica mundial continúa. En los Estados Unidos lograron disminuir la inflación, redujeron impuestos, disminuyeron el desempleo y bajaron la tasa de interés. Apparently estos hechos sorprendentes corresponden a una política eficaz y completa de reactivación pero ya en los últimos meses de 1984 los indicadores económicos se han vuelto modestos y detrás de todo se halla la bomba de tiempo del déficit presupuestal y la deuda nacional. El dólar se ha revaluado frente a las monedas europeas en casi un sesenta por ciento, como tenemos a nuestro turno sobrevaluado el peso frente al dólar, los dos factores acumulados —uno de ellos independiente de nuestras propias decisiones— nos marginan de cualquier posibilidad de incrementar aceleradamente nuestras exportaciones.

Las perspectivas de 1985 y 1986

Dentro del marco que establecen estos complejos y explosivos acontecimientos que he descrito, la política está cambiando y cambiará profundamente en el curso del próximo año. 1985 será un año agitado y lleno de novedades porque tanto el proceso de los acuerdos de paz como el manejo de la crisis económica plantearán episodios cruciales y se agudizarán las contradicciones.

Los problemas viejos se agravan, los nuevos surgen cargados de peligros. Los retos se multiplican para la Nación y quienes hemos recibido mandatos de representación popular tenemos el deber de consagrarnos a la búsqueda de soluciones, a poner a los colombianos en frente de las realidades y en frente de las responsabilidades que todos debemos asumir. En 1986 por lo menos ocho millones de ciudadanos participarán en el gran proceso de definiciones políticas y es preciso que no solo intervengan en las elecciones sino que antes de éstas reciban la mayor información sobre los factores del proceso nacional, la naturaleza de

los problemas, el alcance de los programas, la sinceridad de los protagonistas y las consecuencias de sus determinaciones. En este momento ocho millones de ciudadanos tienen menos de treinta años de edad y la inmensa mayoría de ellos no han cumplido los veinticinco. Su movilización es decisiva porque ellos son los que sufrirán con mayor intensidad los efectos de las determinaciones políticas de 1985 y 1986. Ha surgido en Colombia una nueva dimensión de la política. Millones de ciudadanos participaron por primera vez en los procesos electorales de 1982 y 1984 y una cifra igual o superior lo hará en 1986. Amplios sectores abstencionistas comprendieron que no es posible estar al margen del proceso político ni asumir la posición ingenua y aparentemente cómoda de quien obra como extranjero en su propia patria. Ya no es motivo de orgullo manifestar desprecio hacia la política. Se comprende día tras día que no se trata simplemente de establecer quién tiene el poder sino cómo se maneja el destino común de los seres humanos afectados por los errores, los aciertos, las acciones y las omisiones de quienes administran los intereses públicos.

Lo que quieran o no algunos líderes del pasado, los partidos tienen que evolucionar si desean sobrevivir. Lo quieran o no los extremistas, nuevas fuerzas se hallan en proceso de maduración y en el proceso político se abre un espacio impresionante para quienes contemplan el futuro de la Nación con espíritu creativo, libres de prejuicios, resentimientos o egoísmos.

Nadie puede obrar aislado

Lo que se avecina para quien gobierne a Colombia como persona o como partido no es un placentero usufructo del poder sino un enorme y agotador esfuerzo para interpretar las necesidades y anhelos nacionales y conducir con alto sentido de responsabilidad las energías colectivas. Ninguna fuerza política puede afrontar esta compleja situación aisladamente. Toda fuerza política que se encierra en sí misma y piense que su pasado o las maquinarias burocrático-electorales le asegurarán la mayoría de la voluntad popular, corre el peligro de perder su arraigo en la conciencia de las masas. El pueblo tiene derecho a la mayor claridad sobre sus perspectivas y realida-

des. Las coaliciones son necesarias pero sólo tienen sentido si se conciben con precisión, respetabilidad y coherencia de modo que cada fuerza aliada tenga su propia identidad, pero al propio tiempo exista el compromiso de defender lealmente determinadas tesis básicas comunes. La última versión del Movimiento Nacional no fue una coalición sincera sino una estratagema. Si hubiese sido lo primero todos sus integrantes habrían tenido posibilidad de expresarse en el Congreso y no en posiciones subalternas en el gobierno. Como fue lo segundo —una estratagema— no tuvo posibilidad de prolongar sus efectos. Por una Colombia nueva estamos dispuestos a dialogar con liberales de otras vertientes, conservadores y sectores independientes. Colombia ha dejado atrás en cierta forma el espíritu hegemónico pero no ha construido aún los valores del pluralismo. Ya no se enfrentan los partidos entre sí en búsqueda del monopolio del poder estatal, pero el ánimo hegemónico se trasladó a los sectores dentro de los partidos que hasta el presente han sido incapaces de organizar sus propias coaliciones internas.

La precaria voluntad política de los partidos

¿Cuál es la capacidad y la voluntad de los partidos para introducir cambios reales a la luz de la experiencia? En mi opinión es mínima y está reducida a las más modestas proporciones. Los dos partidos prometieron la carrera administrativa nacional, regional y local hace 27 años y se han negado sistemáticamente a tecnificar la administración pública y a liberarla de las intrigas políticas porque ambos se encuentran burocratizados. Los dos partidos prometieron la modernización económica y social del sector campesino pero de una y otra colectividad han surgido intereses en contra de la reforma agraria que aprisionaron la junta directiva del Incora desde su nacimiento, luego destruyeron la organización campesina, archivaron el tema por distintos cálculos electorales en las campañas del decenio pasado y sólo lo mencionan coyunturalmente para halagar a los campesinos y engañarlos. Los dos partidos han prometido la descentralización administrativa para rescatar las entidades territoriales; sin embargo, centenares de municipios están muertos y los demás, salvo unos pocos centros urbanos, están en agonía sin recursos para lograr la más elemental dotación. Los dos partidos prometieron un régimen de seguri-

dad social y han dejado a la deriva las Cajas de Previsión Social que se hallan en crítica situación tanto en el nivel nacional como en los departamentales y municipales. Los dos partidos prometieron un impulso especial a la educación pública y aun cuando el presupuesto del sector ha crecido substancialmente, la educación no es reconocida como el instrumento esencial para la construcción de una nueva organización social y las reformas encaminadas a modernizar el sistema educativo fueron olvidadas mientras los partidos manipularon con intrigas y presiones burocráticas los servicios docentes e improvisaban irresponsablemente los criterios de administración de los planteles y la profesionalización de los educadores. Los dos partidos se proclaman defensores de la democracia pero no tratan de vivirla en su organización interna, interfieren las actividades de la Registraduría y hacen fraude en numerosos municipios y veredas hegemónicos gracias a un sistema electoral paupérrimo y poco tecnificado que ambos se resisten a modernizar.

Las coaliciones electorales que organizan los partidos para buscar la Presidencia de la República son demasiado heterogéneas y contradictorias, por lo cual, los gobiernos que constituyen tienen poca capacidad creativa y gastan más energías en asegurar su propia supervivencia que en realizar lo prometido en el proceso electoral. Han confundido el espíritu del consenso con el derecho de veto. El liberalismo no se atreve a ejercer sus mayorías y basta la reserva o el rechazo conservador para que todo tema se aplase u olvide. Así se ha configurado un partido único y ha perdido el liberalismo su identidad.

En estas circunstancias, ¿cómo se puede crear una posibilidad de cambios fundamentales? Se necesita pensar con la perspectiva de varios años y de varios gobiernos que surjan de grandes coaliciones a las que sean incorporados en elecciones libres y competitivas los sectores independientes, nuevos y abstencionistas. Es preciso cumplir todos los días, sin pausa alguna, tareas de educación política y deliberación democrática. Trabajar en la formación de cuadros político administrativos y cambiar la mentalidad de la Nación para desarrollar en el pueblo una mayor capacidad analítica y crítica sobre los asuntos públicos. Al Frente Nacional le debe nuestro pueblo la superación

del sectarismo político y el surgimiento de una actitud más propicia a buscar el compromiso por mandato institucional. Este balance fundamental del sistema acordado en el plebiscito no sólo lo justificó históricamente sino que lo convierte en uno de los períodos más importantes del proceso político nacional. Ahora la prioridad es otra y existe un considerable retraso en atenderla. Es la hora de construir instituciones que no sólo permitan el entendimiento en el vértice político sino que abran el camino para influir en las decisiones del Estado a todos los sectores sociales y económicos. La consigna de hace 27 años era ¡no más sectarismo! La de hoy tiene que ser ¡no más privilegios! Acelerar el ascenso del pueblo. Buscar las condiciones fundamentales de igualdad entre todos los colombianos y entender al Estado como el bien común que a todos interesa consolidar y fortalecer para que realice la solidaridad colectiva. La democracia es falsa si no se fundamenta en la participación y el apoyo popular consciente. Ello sólo es posible si el pueblo asume responsabilidades y si puede influir directamente en las decisiones que afectan su propia vida; si el pueblo deja de ser testigo impotente y se convierte en protagonista activo. En otros términos, si se transforma la manera de hacer y entender la política. La mejor manera de defender la democracia es vivirla. Si no hay bases sociales para la democracia deliberadamente cultivadas por el Estado y los partidos, la democracia no pasa de ser un formulismo institucional que disimula estructuras autoritarias. La verdadera democracia política supone que los grupos sociales carentes de poder económico, es decir, las clases medias y populares, participen en las definiciones sobre el desarrollo de la sociedad y tengan capacidad política para poder escoger y controlar las determinaciones del Estado. Ningún demócrata debe olvidar que sólo la organización del pueblo y el aumento de su participación en el debate y en las decisiones políticas pueden equilibrar de algún modo la concentración de poder que se presenta en las sociedades modernas y en los procesos de industrialización.

¿Dónde está el partido del pueblo?

Nada de esto constituye preocupación fundamental en los demás sectores liberales. El partido del pueblo no existe hoy, no lo representa ninguna fuerza política específica. Es

indispensable reconstruirlo en los términos de nuestra época y con los objetivos adecuados para esta etapa del proceso nacional. Las dos últimas generaciones han vivido estrechamente vinculadas al partido liberal y a través de él expresaron sus necesidades e ideales. Hoy no es claro si las dos próximas generaciones sentirán la misma identificación. Por esa razón si la democracia debe iniciar una nueva etapa en Colombia, el liberalismo también. Para que lo primero sea posible es indispensable sacar al partido liberal de su crisis y su perplejidad. Por eso hemos propuesto un nuevo liberalismo para una Colombia nueva. Por eso le hemos defendido al liberalismo su futuro y le abrimos un horizonte sin el cual se hubiera derrumbado sin esperanza alguna de recuperación. Por eso rompimos con una estructura política agotada y no sólo nos marginamos de la convención de Medellín como lo hicieron otros sino que nos fuimos en búsqueda del pueblo para invitarlo a una lucha auténtica que no consistía ni puede consistir en la estrategia de una candidatura, sino en la defensa del papel histórico del liberalismo.

La hipótesis que contemplara Carlos Lleras Restrepo en 1958 y que acaba de recordarnos Emilio Urrea se ha cumplido en los últimos diez años. El partido del pueblo fue tomado por asalto, se apoderaron de él grandes grupos financieros que lograron aprovechar gobiernos pusilánimes y complacientes; penetraron en sus filas narcotraficantes y voceros de la delincuencia organizada; la clase política se apoltronó en la burocracia y las viejas y nobles banderas las utilizaron para explotar la nómina oficial. Hemos adquirido el compromiso de rescatar al liberalismo para que siga siendo la primera fuerza popular de Colombia. En ese compromiso no transigimos. O el partido se transforma realmente en su concepción ideológica de la sociedad, se organiza dentro de principios y controles verdaderamente democráticos y se impone normas de comportamiento político entre sus representantes y voceros o no tiene sentido unirlos a través de coaliciones ficticias que no responden a los deberes del liberalismo en estos complejos momentos de la vida nacional y que sólo significarían nuevas y definitivas frustraciones.

La coalición de matices de izquierda es un hermoso recuerdo pero hoy no existe porque en el liberalismo ejerce influjo innegable una

zona de derecha cuyas características e intereses son suficientemente conocidos. La única condición para ser admitido en el oficialismo liberal es no pertenecer al Nuevo Liberalismo, lo cual indica la precaria identificación de línea política. No desconozco la respetabilidad y los méritos de amplios sectores liberales que tienen una perspectiva distinta de la nuestra sobre lo que sucede en la Nación y en el partido; sin embargo, veo con preocupación que en el ambiente general tratan de imponer un concepto aritmético y superficial del futuro del liberalismo como si todo se redujera a buscar un candidato presidencial por los caminos tradicionales, con los intereses tradicionales y los compromisos tradicionales.

El pueblo debe decidir

¿Cómo puede recuperar su identidad el liberalismo? No existe otra posibilidad que la de respetar el derecho del pueblo a decidir sin suplantarlo con convenciones y otras fórmulas agotadas. Desde el punto de vista liberal es inconcebible que se le tenga miedo a que el pueblo participe. Quien no confíe en el pueblo no tiene derecho a gobernarlo. La decisión debe ser de la base del liberalismo. Arriba sólo hay intereses, abajo predominan las ideas y los derechos. Por eso hemos propuesto la mayoría absoluta para la elección de Presidente de la República y confiamos en que este principio, el primero que compartimos todos los sectores liberales, sea lealmente difundido en el Congreso en ésta y la próxima legislatura hasta conseguir su inclusión en la Carta Fundamental de la República.

Los criterios previos

En el proceso de formación de coaliciones capaces de afrontar la difícil situación nacional estamos dispuestos a conversar en el momento oportuno con todos los sectores que busquen realmente el desarrollo y la renovación de la democracia entre los cuales reconocemos a otros grupos liberales. Sin embargo, ningún diálogo puede avanzar sin precisar, entre otros, algunos criterios previos. No puede existir ambigüedad ni tolerancia de los líderes liberales oficialistas con la delincuencia organizada que se ha atrevido a buscar poder

político a través del liberalismo y del conservatismo al financiarles campañas o promover diálogos insólitos en altos niveles para conseguir impunidad. Los noticieros de televisión que pertenecen a familiares de jefes políticos o que fueron adjudicados teniendo en cuenta la filiación de sus propietarios deben estar sometidos a una Comisión de Honor que asegure su imparcialidad en cualquier proceso electoral. Es necesario asegurar la transparencia de la tesorería de las campañas políticas nacionales, regionales y locales, así como los límites que deben respetar los donantes en la cuantía de sus aportes. La Contraloría General de la República no puede ser el centro de manipulación de ninguna de las alternativas que surjan en el proceso de definiciones. Se debe respetar la absoluta independencia de la Registraduría Nacional para que las elecciones sean perfectamente imparciales y los escrutinios estén libres de toda interferencia. Es indispensable establecer criterios de organización político-administrativa para sacar a las fuerzas políticas de la anarquía, la improvisación y el inmediateismo.

No nos interesan los programas simplemente electorales sin garantías de realización ni verdaderos compromisos políticos. Queremos auténticos programas políticos y conocer los instrumentos ciertos de su realización. En el pasado reciente el Consenso de San Carlos dejó muchas lecciones sobre cómo no deben concebirse los procesos de arbitramento popular. Aquella fue una definición hegemónica del conflicto entre los sectores liberales. En esa oportunidad el gobierno no fue imparcial y la confrontación se hizo sin reconocer y asegurar un programa mínimo común que justificara el arbitraje. Al pueblo no se le explicó claramente el mecanismo adoptado y se enredó la definición nacional con los factores locales y regionales. Todo se redujo a una contienda parlamentaria que sustituyó la verdadera definición presidencial.

En el Nuevo Liberalismo

Mientras surgen los interlocutores para un diálogo serio y eficaz en la perspectiva política de 1985 y 1986 el Nuevo Liberalismo debe completar el programa de reorganización interna y las tareas de desarrollo ideológico para definir la plataforma de esta nueva etapa polí-

tica. El trabajo en corporaciones públicas ha sido importante y después de 25 juntas parlamentarias, en el presente año, el Nuevo Liberalismo ha ganado precisión en sus posiciones políticas y experiencia en los sistemas de formación del consenso interno. Desde agosto hasta hoy, doce departamentos y dos intendencias han realizado sus asambleas para reorganizar directivas, deliberar sobre el proceso político y preparar las estrategias regionales y nacionales de los dos próximos años. Antes del quince de febrero deberá terminar el ciclo de asambleas y estarán listas las bases de la Asamblea Nacional que se reunirá pocas semanas después. La tarea inmediata es mejorar nuestra organización. Llegar ya no sólo a todos los municipios sino a las veredas y los barrios. Profundizar la presencia obtenida en los últimos años. Multiplicar los sistemas de comunicación interna. No todos los medios de comunicación son ni serán imparciales. Es preciso estar preparados para hacerle frente a titulares, noticias y versiones que buscarán minimizar nuestras acciones y exagerarán las de nuestros antagonistas. Esto forma parte de los factores de poder predominantes y serán utilizados por quienes insisten en imponer los intereses y elementos tradicionales en la política colombiana.

¿Qué somos los miembros del Nuevo Liberalismo? Colombianos que inspirados en los ideales de la democracia y la libertad queremos introducir una nueva manera de hacer política para acabar con los privilegios, modernizar nuestra nación dentro del marco de la solidaridad latinoamericana y rescatar la misión del liberalismo como partido del pueblo. Sabemos que en la Argentina, en Chile, Uruguay y Brasil renace el espíritu liberal después del conflicto de las últimas décadas entre las fuerzas extremistas que condujeron a esos pueblos a la dictadura y al terror. Colombia no debe perder el patrimonio político por el que se sacrificaron varias generaciones. Es indispensable demostrar la eficacia del pensamiento liberal para que no sea después, en medio de una nueva noche de violencia y dolor, cuando se despierte la nostalgia por va-

lores y principios que en el partido liberal pasaron a segundo plano en horas de desvío y confusión.

¿Hacia dónde vamos? En lo inmediato a constituir la mayoría de la voluntad popular para organizar un Estado capaz de asegurar a los colombianos mayor control de su propio destino dentro de una democracia orgánica.

¿Cuáles son nuestros métodos? La educación política, la organización popular, el trabajo coordinado y permanente en las corporaciones públicas, la formación de equipos político-administrativos.

En las elecciones de 1984 consolidamos nuestra fuerza electoral e incrementamos nuestra representación política. Pertenecen al Nuevo Liberalismo en total 41 congresistas, 50 diputados, 6 consejeros intendenciales y 1.230 concejales, incluidos los suplentes. Somos una fuerza política organizada a escala nacional y cada día se incorporan al Nuevo Liberalismo jóvenes, mujeres, profesionales, campesinos, líderes populares. Vamos a triunfar y nuestros ideales serán decisivos en el futuro de Colombia.

Hoy como ayer y como siempre nos inspiran las palabras de José Antonio Galán. Las que pronunciara hace un poco más de 200 años en la noche que preparaba el golpe sobre San Gil, cuando ya habían pasado las capitulaciones y él había comprendido que todo lo prometido en ellas era una burla y era indispensable dar un testimonio definitivo de la sinceridad de su lucha, Galán y sus compañeros, según relato del cronista Camilo Forero Reyes que interrogó a una mujer presente en aquel episodio de Mogotes prestaron juramento de fidelidad a su compromiso con las siguientes palabras: "¡En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuere menester sea".